

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Modos de producción y políticas económicas en la sociedad moderna

Populismo
Economía HOMBRE
MODERNIZACIÓN
NEOLIBERALISMO
ESTADO
DEMOCRACIA
DESARROLLO
CAPITALISMO
Liberalismo

SOCIEDAD

POLÍTICA ECONÓMICA PRODUCCIÓN
Guerra Dictadura Estado de bienestar
REVOLUCIÓN **CRISIS** Industria **ARGENTINA**

Historia Económica y Social

Modos de producción y políticas económicas en la sociedad moderna

Compiladora:
Andrea Ariza

Ariza, Andrea

Modos de producción y políticas económicas en la sociedad moderna / Andrea Ariza. -

1a ed. - Adrogué : Universidad Nacional Guillermo Brown, 2023.

220 p. ; 24 x 17 cm.

ISBN 978-631-90004-2-9

1. Historia Contemporánea. 2. Historia Moderna. 3. Historia Económica Argentina. I. Título.

CDD 330.904

Los textos que se reproducen en el presente volumen y que corresponden a diversos autores se utilizan con fines meramente pedagógicos. La UNaB agradece el aporte de los autores que, en forma desinteresada, cedieron los derechos de sus obras.

AUTORIDADES DE LA UNAB

RECTORADO

Rector

Lic. Pablo Matías Domenichini

Vicerrector

Lic. Facundo Nejamkis

SECRETARÍAS

Secretaría Académica

Andrés Gilio

Secretaría General

Stella Salamone

Secretaría Económico Administrativa

Diego Otero

Secretaría de Extensión y Bienestar

Ignacio Jawtuschenko

Índice

	Pág.
Ariza, Andrea. Introducción. Itinerario para transitar la materia Historia Económica y Social.....	5
Kneeteman, Gastón. Algunos apuntes sobre “nuestros racismos”. Herramientas conceptuales para interpretar la construcción política de la historia.....	13
Unidad 1: Modernización y revolución.	
Ariza, A. De la Gran Guerra a los regímenes totalitarios: un análisis de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y sus repercusiones en la economía de posguerra.....	31
Unidad 2: Crisis y Populismos (1929-1955)	
Ariza, A. Los años dorados del capitalismo.....	57
Kneeteman, Gastón. El surgimiento del peronismo y sus dos primeros gobiernos. Un análisis de las transformaciones económicas y políticas.....	69
Unidad 3: Resistencias, dictaduras, economía y sociedad (1966-1983)	
Zarrilli, A. G., & Balsa, J. J. Estado, economía y sociedad en la Argentina entre 1966 y 1983: balances y alternativas.....	95
Rovelli, Horacio. La dictadura cívico-militar y su legado económico y social...	135
Rapoport, Mario. La herencia de la dictadura militar.....	143
Mizrahi, Franco y Aranguren, Gerardo. Documentos revelan rol clave de civiles en leyes económicas de la dictadura.....	146
Unidad 4: Neoliberalismo y desigualdad	
López Marsano, Rosario. La transición democrática en Argentina (1983-1999).	149
Sidicaro, Ricardo. El neoliberalismo menemista y la profundización de la crisis estatal.....	175
Unidad 5: Argentina pos crisis 2001. El período de la posconvertibilidad	
Varesi, Gastón. La Argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación.....	187

Introducción

Itinerario para transitar la materia Historia Económica y Social

Andrea Ariza

Bienvenidos y bienvenidas al libro de cátedra de Historia Económica y Social. En este libro proponemos un recorrido por algunos hechos históricos que atravesaron el mundo y la Argentina en particular a partir de un criterio temático. Creemos que es importante aprehender la disciplina histórica de acuerdo con ciertos principios y métodos en detrimento de la enunciación enciclopédica y cronológica de hechos históricos.

Por esto mismo, proponemos el desarrollo de un hábito intelectual en el que buscaremos reconstruir, comprender y adoptar un posicionamiento crítico ante las diversas interpretaciones que existen sobre los hechos históricos observados. Para llevar a cabo esta tarea es necesario contraponer las obras, identificar las hipótesis y los presupuestos sobre los que ha sido construido el texto, la metodología utilizada y las conclusiones a las que arriban los autores sobre ciertos sucesos.

En el siguiente apartado presentaremos algunas herramientas para la lectura de textos historiográficos, y luego expondremos el criterio problemático sobre el que se asienta la antología.

1. Herramientas para la lectura de la historia

El aprendizaje de la historia se construye sobre una herramienta fundamental: la lectura. Ésta se convierte en una de las acciones más importantes para comprender los hechos históricos, ya que aprendemos historia leyendo. De esta manera, leer y aprender historia son dos procesos que se funden.

Sin embargo, Beatriz Aisemberg (2010) sostiene que existen dificultades para la conjunción entre lectura y aprendizaje en el ámbito escolar debido a que, tradicionalmente en la escuela, la lectura de la historia queda asociada a la pasividad de los alumnos y al estudio memorístico. Esto genera dificultades para asociar la lectura con la construcción del conocimiento histórico.

A partir de estas dificultades, Aisemberg (2010) nos propone una serie de herramientas para llevar a cabo un proceso de lectura que implique la

reconstrucción del mundo histórico desplegado en los textos.

En primer lugar, nos señala que el lector tiene un rol activo en la lectura, ya que las interpretaciones de los textos pueden variar de acuerdo con quien lo lea. Goldman (1982) sostiene que aquello que los lectores pueden reconstruir de cada texto depende de los conocimientos previos que poseemos sobre el asunto. Es decir, los significados que construimos mientras leemos son el resultado de la relación entre el mundo que nos propone el texto y nuestro mundo como lectores. Por lo tanto, lo que comprendemos al leer un texto de historia depende, en gran medida, de lo que ya sabemos de historia y del mundo social en general.

De aquí deriva la primera herramienta que podemos utilizar al momento de leer un texto de historia. Ésta consiste en preguntarse “¿qué sabemos sobre el tema que vamos a leer?”. Usamos la asimilación y los conocimientos previos sobre el mundo social para reconstruir en nuestras mentes una representación de las situaciones, de las experiencias, motivaciones, causas y consecuencias a las cuales se refiere el texto (Audigier, 2003).

En segundo lugar, debemos determinar un objetivo de lectura. Goldman (1966) señala que al leer comprendemos una lectura de acuerdo con los objetivos que perseguimos y es por ello que un mismo lector, en diferentes situaciones de lectura, puede realizar distintas interpretaciones sobre un mismo texto. Por otro lado, Solé (1994) señala que los objetivos que fijamos delimitan las estrategias que llevamos adelante para entender un texto y son estas estrategias las responsables de la comprensión del texto.

En tercer lugar, y de acuerdo con los objetivos de lectura que hayamos establecido, vamos a empezar por observar los títulos y subtítulos presentes en los textos. Esto nos permitirá, por un lado, comprender en términos globales el camino, la estructura que propone el autor sobre el tema del texto y, por el otro, nos ofrece un panorama general sobre la obra.

Asimismo, a medida que avanzamos en la lectura de acuerdo con los objetivos que determinamos, y a partir de la reconstrucción de lo expuesto por el autor, podemos ir realizando notas de ayuda necesarias para situar el tiempo y el espacio del que se nos habla en el texto. Suele suceder que los textos de historia detallan diversos hechos históricos acontecidos en diferentes épocas y escenarios geográficos, lo que conlleva un cúmulo de información que deriva en la pérdida del hilo conductor de la lectura. Por esto mismo, les proponemos que una vez que el texto haya sido leído, y de acuerdo con los propósitos de lectura, realicemos la reconstrucción de los hechos históricos mencionados a partir de la elaboración de líneas de tiempo. ¿Qué nos dice el autor sobre estos hechos históricos? ¿Ofrece

alguna interpretación?

Por último, les proponemos que, una vez llevada a cabo la lectura de forma individual, realicemos ejercicios de lectura compartida a partir de propósitos grupales. Es decir, volver a leer el texto con tus compañerxs y desarrollar un intercambio de ideas sobre los argumentos ofrecidos por lxs autores sobre los temas. Aisemberg (2010) afirma que las situaciones de lectura compartida son especialmente propicias para que las y los estudiantes puedan reconstruir las problemáticas y los mundos sociales e históricos desplegados en los textos.

Entonces, para recapitular y finalizar esta sección les proponemos que, al momento de leer historia, pongamos en práctica las siguientes herramientas:

- Al iniciar el proceso de lectura, reflexionar y recuperar los conocimientos previos que tenemos sobre el tema.
- Definir objetivos de lectura para establecer estrategias de abordaje del texto.
- Visualizar los elementos auxiliares del texto como los títulos, subtítulos e índices, entre otros.
- Realizar notas de resumen sobre los argumentos principales del autor y construir líneas de tiempo.
- Desarrollar actividades de lectura compartida e intercambios de ideas con sus compañerxs.

Con este conjunto de herramientas vamos a avanzar en la presentación del criterio temático que articula los textos de esta antología.

2. Los roles del Estado y del Mercado a lo largo de la historia

Este libro promueve aprendizajes sobre los principales acontecimientos económicos, religiosos, políticos y culturales de la modernidad. A partir de una perspectiva que considera a la historia como proceso, propone un abordaje centrado tanto en los actores sociales, las tensiones y conflictos como en los factores estructurales que explican los procesos históricos. En relación con la multiplicidad de puntos de vista que caracterizan el análisis historiográfico, los textos puestos a debate abordarán enfoques metodológicos y posiciones político-económicas diversas. Se dará cuenta así de las diferentes interpretaciones construidas desde distintos enfoques, a los que se sumarán textos que coadyuven a problematizar la historia de

esta etapa desde múltiples tradiciones y disciplinas, como la economía, la filosofía y la sociología.

En las unidades en las que se desarrolla la materia observamos el proceso de expansión y consolidación del Mercado y las distintas formas en las que concibió el rol que debía tener el Estado en cuanto al modelo económico. Esta tensión entre Mercado y Estado es muy bien expuesta por Polanyi (1947). El autor afirma que:

“La sociedad moderna se ha visto gobernada por un doble movimiento: el mercado se expandió de modo continuo, pero este movimiento coexistió con un contra-movimiento que controló esta expansión y la orientó hacia determinadas direcciones” (Polanyi, 1947: p. 1).

Ante el avance de la doctrina de libre mercado, el Estado lideró este contra-movimiento y llevó adelante acciones que resultaron de vital importancia para la protección de la sociedad. Sin embargo, Polanyi (1947) también menciona que el desarrollo del Estado fue compatible, en última instancia, con el sistema de mercado, ya que llevó adelante una serie de acciones e inversiones que le permitieron al mercado continuar con su proceso de expansión. De esta manera, el autor sostiene que el Estado fue un actor fundamental en la consolidación de la economía capitalista. A lo largo de las unidades observaremos cómo y de qué manera surgió la doctrina del libre mercado y el proceso de consolidación estatal.

En los inicios de la materia estudiaremos el proceso de consolidación de la economía capitalista, en donde se examinarán los comienzos de la actividad industrial, el sistema comercial y financiero. Este proceso da origen a la doctrina del libre mercado, lo que nos invita a reflexionar sobre los cambios generados por el desarrollo industrial a nivel político, económico y cultural. Veremos los años triunfales del ascenso del capitalismo industrial y de la cultura burguesa que van de 1848 a 1875, cuando, pasado el período de revolución, se inicia un tiempo de nuevos valores y nuevas perspectivas, de transformaciones sociales, que ve la formación de grandes fortunas y la migración de masas de individuos, mientras una Europa sometida al nuevo ritmo de los auges y las crisis extiende sus empresas económicas y su cultura al resto del planeta.

En la segunda unidad, los invitamos a examinar los elementos y sucesos que caracterizaron el agitado inicio del siglo XX en Europa. Allí, nos enfocaremos en grandes sucesos tales como la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917, el auge del fascismo

y la Segunda Guerra Mundial, entre otros. En este capítulo indagaremos sobre la historia de la Gran Guerra y los acontecimientos que sacudieron a Rusia desde 1905 hasta 1917 para dedicar después la atención al período del llamado “comunismo de guerra” y, finalmente, la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En esta parte también analizaremos cómo se desplegó la oleada revolucionaria que se extendió por diversos países, contagiados por el entusiasmo que despertó la Revolución Rusa e impulsados por la creación de la Internacional Comunista. El período de entreguerras muestra los cambios acontecidos en los países centrales y en el mundo colonial, y precisa cómo se deteriora la economía global, con la culminación en la Gran Depresión de 1929 y sus secuelas políticas en Europa, con el auge del fascismo y del nazismo.

La Gran Depresión provocó la crisis del liberalismo como doctrina y dio origen a los estados de bienestar. Por esto, en el capítulo “Los años dorados del capitalismo” los invitamos a reflexionar sobre la época de gran crecimiento del sistema económico a partir de la exploración de las condiciones que condujeron a una explotación de la demanda y a una reestructuración del capitalismo, y también a indagar sobre los factores que dieron fin a este período de crecimiento. Por otro lado, el texto de Gastón Kneeteman sobre el surgimiento del peronismo nos convoca a pensar cómo esta fase del capitalismo a nivel global tendrá sus efectos en el ámbito nacional y cómo se desarrolló el gobierno peronista a nivel económico, político y social. En este período observamos una reorganización de la economía capitalista y un papel más activo de los Estados en la economía. La crisis del petróleo, a comienzos de la década de 1970, dio por finalizada esta etapa y abrió una nueva fase del capitalismo, en la que nuevamente se defendió la idea de Estado mínimo y la autorregulación del mercado.

En los textos de la unidad 3 observaremos este cambio de paradigma y estudiaremos los efectos de esa modificación en la economía argentina, que dio lugar a una restauración conservadora liberal. Zarrilli y Balsa (2001) reflexionan en profundidad sobre el período iniciado en 1955 en la Argentina y analizan el proceso de transformación de nuestra economía y los cambios de orientación que tuvo el Estado nacional a partir del proceso de disgregación del Estado democrático. Por otro lado, los textos de Rovelli (2021), Rapoport (2014) y Mizrahi y Aranguren (2014) analizan los efectos económicos que tuvo el último gobierno militar (1976-1983) en nuestro país y sostienen que éste tenía como objetivo a largo plazo producir una transformación completa en el funcionamiento de la sociedad argentina a nivel económico y político, de modo tal que fuera imposible

la repetición de gobiernos populistas como el peronista. Además, con los textos presentes en la unidad 4 observaremos la profundización del modelo económico neoliberal, que exhibe un proceso de transnacionalización de la economía, un nuevo modelo de acumulación y concentración en el que se produce una hegemonía del sector financiero. Aquí López Marsano (2011) nos convoca a reflexionar sobre las consecuencias que tuvo el gobierno de facto en lo político y lo económico, y los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. También, a partir de Sidicaro (2001) indagaremos el proceso de crisis que sacudió el Estado en los años noventa y los cambios en los patrones de relación con la sociedad civil.

Este modelo económico neoliberal tuvo su agotamiento en los últimos años del siglo XX y se vio expresado en la crisis económica, política y social que sufrió la Argentina en 2001. La consumación de la crisis implicó un punto de inflexión, dio lugar a nuevos patrones de acumulación y a un nuevo modelo económico. Varesi (2010) estudia las principales características del modelo de acumulación posconvertibilidad en la Argentina y reflexiona acerca del papel del Estado en la gestación de un sistema de transferencias de ingresos y de políticas públicas anticrisis para los distintos actores sociales.

A partir de este recorrido teórico propuesto, invitamos a debatir sobre el papel que deberían cumplir el Estado y el Mercado para desarrollar una relación que contribuya a impulsar la actividad productiva y derive en una mejora de la calidad de vida de la población.

Nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este espacio.

Andrea Ariza

Referencias bibliográficas

- Aisenberg, B. (2010). Enseñar Historia en la lectura compartida. Relaciones entre consignas, contenidos y aprendizaje. Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza, 63-98.
- Audigier, F. (2003): Histoire et didactique d'histoire. Documento de trabajo. Cátedra de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Universidad de Ginebra (Mimeo).
- Goodman, K. (1982) "El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo", en Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio (comps.) Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. México D.F. Siglo XXI.
- Goodman, K. (1996) "La lectura, la escritura y los textos escritos: una perspectiva transaccional socio-psicolingüística", Textos en Contexto, Los procesos de lectura y escritura, núm. 2. Lectura y Vida.
- Solé, I. (1994): Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.

Algunos apuntes sobre “nuestros racismos”. Herramientas conceptuales para interpretar la construcción política de la historia¹

Por Gastón Kneeteman

A modo de introducción:
la construcción de lo nacional y la clase media

Pensar la historia, pensar la invención de las categorías históricas y la forma en que nos permiten entender de forma “indubitable” los hechos es una posibilidad sobre la cual en pocas oportunidades nos detenemos a reflexionar. Las posiciones predominantes en los relatos históricos, sean éstos producidos por protagonistas consagrados y consagradas de la disciplina o por plumas consideradas outsiders, contienen innumerables tensiones propias de las disputas económicas y sus correlatos políticos (plasmados en leyes, fallos y decretos) que conforman miradas específicas sobre “lo que una sociedad es” y, en todo caso, cómo “llegó a serlo”.

Entiendo importante resaltar, por otro lado, que este no es un texto “histórico”: es más bien un recorrido por categorías construidas por aportes disciplinares muy dispares, si nos centramos específicamente en los recorridos de las y los autores que, con sus trabajos, inspiraron las reflexiones que aquí comparto.

Siguiendo con esta serie de párrafos introductorios y de contexto, debemos entender que, de manera predominante, los discursos públicos que atendemos aquí se legitiman a través de los mecanismos de la educación formal. Sin embargo, al mismo tiempo la construcción de reflexiones críticas han permitido análisis desacralizadores surgidos dentro de las propias instituciones que, entre los siglos XIX y XX, posibilitaron y fomentaron la imagen de una Argentina “blanca, europea y civilizada” como proyección deseable, y contrapuesta a la Argentina “morocha, indígena y atrasada”. Resulta pertinente destacar que la posición dual que menciono se encuentra descrita en la obra de Arturo Jauretche que inaugura, al presentar la idea de “Civilización y Barbarie” como una zoncera fundante de la argentinidad, la sistematización de los estudios que tratan de explicar las formas particulares adquiridas por el discurso dominante en nuestro país,

1. Quiero agradecer a Lautaro Borsetti, profesor de Historia Argentina y Latinoamericana de la carrera de Ciencia Política de UNaB, ya que su colaboración fue central para la concreción del presente texto. Cualquier error, omisión o desacuerdo debe considerarse por fuera de sus aportes.

su dimensión “racista” que deviene en la creación del imaginario de una Argentina “blanca” que se autopercebe europea (en un proceso de homogeneización donde lo que se entiende por “europeo” excluía, por ejemplo, España y la Italia “africana y musulmana”).

Esa proyección, que sobre los deseos de Sarmiento se derramó en la escolarización formal, con el transcurso del tiempo encontró una dinámica que la potenció: la creación de la “clase media”². Ezequiel Adamovsky (2014) menciona varias formas de definir y medir la clase media, que varían según el enfoque y los criterios utilizados³. Algunas de estas formas son:

- Enfoque económico: cuando definimos la pertenencia a la clase media en función del nivel de ingresos o la capacidad de consumo. En este caso, se utilizan indicadores como el ingreso per cápita, la posesión de bienes y servicios o el gasto en consumo.
- Enfoque sociocultural: la clase media se define en función de su estilo de vida, su nivel educativo y cultural, sus valores y prácticas culturales, y su identidad social. Aquí se usan indicadores como la educación, la cultura, la identidad política y los patrones de consumo.
- Enfoque ocupacional: se pone en juego cuando una clase se define en función de su ocupación o profesión. Se usan indicadores como el tipo de trabajo, la posición en la estructura ocupacional y la estabilidad laboral.
- Enfoque relacional: cuando utilizamos la categoría clase en relación con otras clases sociales, especialmente con la clase alta y la trabajadora. Se usan indicadores como la distancia social, la movilidad social y la identidad de grupo.

Entiendo, entonces, que los sectores medios de los grandes centros urbanos elaboraron su distinción en relación con los sectores “atrasados”, adoptando instrumentos de prestigio que no les eran propios pero que habían sido imaginados por los protagonistas de la construcción del Estado argentino como una forma válida de un “ser” que se originaría a

² En lo relativo a este trabajo me resulta pertinente destacar dos cuestiones centrales: comparto con Ezequiel Adamovsky (2012) que las formas de definir a las clases medias no pueden regirse por una de las dimensiones mencionadas; en tal sentido, pueden considerarse como “tipo ideal”; poniéndose en juego alternadamente o de forma conjunta en la construcción de discursos que sustentan la pertenencia a la clase media. Por otro lado, cuando hablamos de clase media argentina, en términos generales adjudicamos una serie de elementos propios de los grandes centros urbanos, en particular la Ciudad de Buenos Aires, al resto del país. Esta situación nos hace perder la dimensión de las singularidades culturales de la forma en que distribuye la jerarquización en las diferentes regiones del país.

³ Es importante destacar que cada enfoque tiene ventajas y limitaciones, y que no existe una forma única y universalmente aceptada de definir y medir la clase media. Su definición y medición dependen del contexto social, político y económico de cada país y época histórica.

través de la promoción de los estímulos migratorios. ¿Por qué es importante mencionar la categoría “clase media”? Sustancialmente, porque las resignificaciones de la categoría son válidas para los grupos sociales que se perciben como “clase media”; más allá de que su definición sea ambigua y, en ocasiones, contradictoria; de las dificultades de asociarla a niveles de ingreso, de educación formal, de inserción laboral y ubicación geográfica, entre muchas otras posibilidades, que contemplan la ponderación de uno o más de estos indicadores. Esas resignificaciones, aludidas recientemente, contemplan como sustento de los sentidos que se ponen en juego la “herencia civilizatoria” como un elemento incorporado, y este elemento es causa de las virtudes asociadas a estos grupos.

Ahora bien, abordamos la demarcación en la percepción de la clase media. Los valores que aducen como propios quienes allí se imaginan son subsidiarios de las formas establecidas por las élites que organizaron el Estado. Las maneras correctas de relacionarse con los mecanismos formales de educación, de propiedad, la percepción del mundo laboral y las jerarquías construidas en los diferentes oficios y profesiones, los espacios habitables (con sus modificaciones incluidas), las reconstrucciones aceptadas de la ascendencia familiar. Requisitos válidos y simbólicamente poderosos en todas las fracciones de la disputa social, política y económica desde el siglo XIX conformaron una representación para entender la argentinidad y, con ello, el devenir político económico de los hechos.

Adamovsky (2009) sostiene que la expresión “clase media”, como contraposición a los “extremos” de la riqueza y la pobreza, tiene su origen en nuestro país a partir de la acción político-partidaria de sectores aristocráticos de los grandes centros urbanos. De manera primordial señala a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que enmarcan las categorizaciones y nomenclaturas, valoraciones étnicas, religiosas y laborales, en sentido positivo o peyorativo, en un contexto de transformaciones sociales, políticas y económicas. La modernización y el desarrollo económico trajeron consigo una creciente urbanización y una diversificación de la estructura productiva, que se relaciona directamente con la creciente inmigración europea, que aportó nuevos valores y prácticas culturales al país y, rápidamente, procuró que esas señas funcionaran como elemento distintivo. Un conjunto de valores y aspiraciones, como señalamos arriba, que incluían la educación, la cultura, la propiedad de la vivienda y el acceso al consumo de bienes y servicios. Elementos asociados a un grupo social que puede definirse “con mayor precisión” en los sobreentendidos de la práctica política, que ha disputado, como ya se dijo, la definición de clase media en

diferentes momentos de la historia.

Para recapitular, la importancia de introducir la categoría “clase media” en un análisis sobre la disputa política en la construcción de la historia se debe, sustancialmente, a la persistencia en el debate público de los valores asumidos por los grupos percibidos o señalados como “clase media”, a la inserción de sus aspiraciones como objetivos deseables para toda la sociedad, en particular para los sectores populares.

Definir lo nacional, reconocer los elementos centrales que posibilitan la pertenencia y rastrear los sentidos de comunión puestos en juego es reposicionar la fortaleza con que los grupos sociales construyeron y difundieron las certezas sobre la argentinidad en los diferentes mecanismos culturales. Los lineamientos que posibilitaron la edificación artificial de la identidad nacional (Balibar, 1988)⁴, asociados con los postulados positivistas que cimentaron la modernidad, resignifican de forma permanente la existencia de los símbolos fortalecidos en el sentido común de lo nacional, que abordan las disputas y resignificaciones permanentes de los valores de ascenso social económicos y culturales asociados a los sectores medios.

Me interesa, en este punto, centrar el análisis en algunos aspectos particulares de los valores de clase media que, a partir de las pautas culturales, se constituyeron en ideas distintivas de la argentinidad. Estos valores fueron sostenidos por la permanencia de una lógica de movilidad social ascendente que se encontraba en determinados niveles de ingreso y de consumos culturales, así como de acercamientos a los servicios brindados por el Estado para concretar los pasos asociados al progreso.

Las construcciones culturales de los valores asociados a la argentinidad se entretajan, entonces, con los valores imaginados para los sectores medios, ascenso mediante la significación del esfuerzo laboral, el acceso a la educación y la cimentación de estímulos socioculturales que confluyeron en mejores ingresos como parte del ascenso mencionado. Estos ejes fueron coaligados por las diferentes formas artísticas y políticas con el brío puesto por los migrantes para prosperar, en imaginarios que robustecieron un nacionalismo que asoció a un grupo social como vertebrador de la

4 Como señala el autor, la “identidad nacional” es el resultado nunca logrado y siempre inestable de un proceso histórico de identificación que tiende a reducir la multiplicidad y la heterogeneidad de las identidades a una sola, imposible, precisamente por la coexistencia, en el seno de una formación social, de varios “nosotros” diversos y desiguales. Balibar (2018:149) denomina a estas formas de identidades como “etnicidad ficticia”, por su carácter de ilusión retrospectiva que apela a supuestas similitudes compartidas. Excede al debate pautado en este texto el hecho de discutir los términos de “verdad” cuando existen categorías en disputa. No obstante, considero necesario resaltar que no hay constitución identitaria fuera del conflicto; en tal sentido, tal como lo señaló Leach (1976), las categorías en disputa se convierten en símbolos asimilados, los cuales son resignificados más allá de sus definiciones preexistentes.

construcción de la nación (Hoyo de los Ríos, 2000).

En el marco de diferentes conflictos, las cosmovisiones que primaron lograron masificar algunos de los estereotipos más frecuentes asociados a “lo argentino”. A partir de esos estereotipos y de su incidencia en el sentido común, se constituyeron explicaciones directas sin noción de rigurosidad sobre los distintos sucesos históricos, económicos y políticos de la Argentina y los grupos sociales que integran el territorio. Estas categorizaciones –o sentido común– permitió desplegar mecanismos culturales a partir de los cuales lo europeo se asoció a lo civilizado. Desde mediados del siglo XX, con el ascenso social posibilitado por la intervención del Estado y el Estado de bienestar, los grupos de origen popular adoptaron las formas más significativas del prestigio desarrolladas a lo largo de las décadas, objetivadas por las diferentes instituciones que definieron lo deseable o, dicho de otro modo, el horizonte sociocultural de “la sociedad”.

Obradovich (2016), al construir una explicación de la desvinculación electoral de los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires con la Unión Cívica Radical, pondera significativamente los cambios socioeconómicos de los años 90. En el desarrollo de su tesis, el autor entiende que la modificación en el plano de acceso a los servicios y la resolución individual creciente en temas como salud o educación, entre otros, potenciaron un ciudadano desvinculado de los factores aglutinantes de la modernidad. Este hecho impactó en algunos aspectos centrales de la solidaridad de clase media, y su reconocimiento e igualdad. Es importante considerar los ejes que señala Obradovich para comprender la complejidad de imaginar a los sectores medios como algo homogéneo a lo largo del tiempo y, si bien hay algunas variables que pueden observarse con relativa constancia, es imprescindible traer nuevamente la idea de resignificación de la que hablábamos antes. Esto es así porque, como sostuve, los valores asociados a los grupos sociales no permanecen pétreos. Los rasgos adjudicados a las clases medias conformaron en gran medida la idea enseñada de la argentinidad, las diferentes definiciones que “lo argentino” puede tener son parte de las disputas e interpretaciones supuestamente contradictorias, pero que en términos efectivos corresponden a adhesiones morales y elementos instrumentales al mismo tiempo. La resignificación de la que hablábamos unas líneas antes es la que le permite, a las y los integrantes de los grupos, construir explicaciones que satisfagan la necesidad de “justificar” ideas y acciones en determinados momentos; por lo tanto, desde esta perspectiva no es posible señalar incoherencias en las posiciones adoptadas en cada contexto histórico.

Por lo dicho, puede entenderse también que la preponderancia del proceso de movilidad social ascendente –central en la producción de la identidad de la clase media argentina, que se ha visto a sí misma como una clase que se esforzó por progresar y mejorar su estatus social–, se ha modificado en relación con la importancia asociada a los sentidos y las prácticas de, por ejemplo, la racionalidad, la eficiencia, el individualismo y la valoración del consumo como forma de distinción social. Estos elementos nunca fueron ajenos a las características imaginadas de la clase media, pero sí han cobrado creciente importancia en la estima que los actores le adjudican, desplazando a los instrumentos estatales que les permitieron el ascenso a consideraciones más alejadas. A casi cincuenta años del gobierno de facto (cívico-militar) que inauguró el neoliberalismo en la Argentina, la educación (al menos primaria y secundaria) y la salud son problemáticas de resolución individual que los integrantes de los sectores medios, en términos generales, entienden en términos de status y de resolución como propios de la esfera individual. Esta situación aleja a la clase media de percepciones que les resultaron muy apreciadas en el siglo XX, donde se vio a sí misma como portadora de un proyecto modernizador y progresista.

Justificaciones racistas y sentido común

Cuando hablamos de los elementos que nos permiten registrar las conductas discriminatorias de los sectores medios, por lo general de los sectores medios urbanos (ejes centrales del presente texto), podemos encontrar fácilmente rasgos discriminatorios y antipopulares en su identidad y en sus prácticas. En este punto nos resulta imprescindible señalar que estos rasgos no son exclusivos de la clase media y pueden encontrarse también en otros sectores sociales. En tal sentido, ciertas insistencias propias de la presentación del problema son, de manera central, consecuencias de nuestro recorte.

La modernización y el espíritu progresista fueron, como se dijo, elementos insignes para formar la percepción de los sectores medios urbanos de la Argentina. A partir de allí, los actores sociales asociados a estos grupos en cualquiera de sus dimensiones posibles (económica, educativa, geográfica, etc.) desarrollaron complejas formas de discriminación, particularmente aquellas en las cuales se presentaban en contraposición a los sectores populares. En este punto, los sectores medios imaginan, desde el siglo XX, que la libertad ontológicamente definida es una posibilidad vedada a los sectores populares por condiciones de socialización, puesto que esas condiciones en general los llevan a “rechazar” los bienes princi-

palmente culturales y simbólicos que los sectores medios ponderan como atributos culturales necesariamente asociados a la “buena educación”. La forma en que las clases medias interpretan los atributos que valoran socialmente es la que posibilita (o justifica) la creación y permanencia de diferentes formas de distinción. Es así como los rasgos discriminatorios y antipopulares en la identidad y práctica de la clase media argentina permiten destacar que, históricamente, ha tendido a marginar y excluir a sectores sociales más vulnerables, como los trabajadores informales, los inmigrantes y los sectores populares en general. Esta exclusión se ha manifestado en prácticas discriminatorias como la segregación espacial, la estigmatización de ciertos grupos sociales y la defensa de políticas públicas que privilegian a la clase media en detrimento de otros sectores. Puesto de otra forma, la identificación de la clase media con valores y prácticas asociadas a la modernidad impulsó efectos antipopulares, en la medida en que fomenta la individualización y el consumismo como formas de distinción social en detrimento de valores como la solidaridad y la cooperación⁵. En este sentido, la clase media argentina ha sido históricamente crítica de los sectores populares, a los que ha estigmatizado como atrasados o retrógrados, en función de una supuesta superioridad cultural y educativa.

La construcción de un sentido común que supone cierta superioridad se puede reseñar históricamente. Las conductas discriminatorias de la clase media argentina se pueden encontrar en un conjunto de factores históricos, económicos y culturales que han marcado su formación y consolidación como clase social en el país. Como expresamos, siguiendo a Adamovsky (2009), la formación de la clase media argentina estuvo vinculada a un proceso de modernización económica y social que se inició a fines del siglo XIX y que implicó la incorporación de sectores sociales de origen popular a la economía formal y al sistema educativo. Este proceso de movilidad social ascendente, si bien generó la consolidación de una clase media en la Argentina, también implicó la exclusión de otros sectores que quedaron marginados. Como destacamos, la identificación de la clase media argentina con valores y prácticas asociadas a la modernidad –la racionalidad, la eficiencia, el individualismo– puede encontrarse en el recorrido de los efectos discriminatorios y antipopulares.

⁵ Como señalamos anteriormente, en la década iniciada en 1990 se potenciaron estas características. Sobre la base de modificaciones político-económicas que incrementaron la relación entre los sujetos y el mercado en servicios, al menos en términos simbólicos, asociados fuertemente al desarrollo del Estado de Bienestar. Así, por ejemplo, salud y educación, resueltas a través de empresas privadas, comenzó a significar un efecto de distinción, al tiempo que se resentía el sistema público por diferentes factores de política pública; esto retroalimentó los efectos en la relación de los diferentes grupos sociales con el mercado y con el Estado, redefiniendo los parámetros de lo deseable y lo prestigioso.

Ahora bien. la influencia de corrientes de pensamiento racista y xenó-fobo, de fuerte presencia en la Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX, puede significarse en expresiones que contienen una serie de sentidos sustancialmente propios para la simplificación y el ocultamiento de las disputas sociales, culturales y económicas que confluyen en la superioridad que se imagina en las aspiraciones europeístas y “civilizadas”. Estas formas discriminatorias, además, encadenan una serie de imaginarios que se extienden a la construcción de la “prosapia nacional” y sostienen la suposición del origen náutico del “argentino”, las adjetivaciones con tono peyorativo sobre lo “indígena, lo afro y lo gaucho”, algo que en la actualidad ha adquirido diferentes formatos

Si repasamos algunos elementos icónicos de las formas discriminatorias de los sectores medios argentinos, Alejandro Grimson (2013: 91) reconstruye, a partir de ciertas frases enmarcadas en el sentido común nacional, la figuración de las formas racistas de la argentinidad, o al menos de sus grandes centros urbanos. La frase “en la Argentina no hay racismo” suele acompañarse por “acá no hay negros”. Esto se da en un país “sin negros” donde la mitad es “cabecita negra”; al tiempo que se establece que no ha quedado registro de la población traída de África con fines esclavistas. Luego, Grimson señala “(...) ‘negro’ no se asocia necesariamente en la Argentina a ciertos rasgos fenotípicos africanos, sino que, a la vez que se afirma que ‘es un país sin negros’ en ese sentido, también tiene a considerarse en el lenguaje ordinarios a los ‘pobres’ como a ‘negros’ o ‘cabecitas negras’ (...)”. Es importante señalar que el término “cabecita negra” se registra como señalamiento discriminatorio de las clases medias urbanas a partir de 1930, con los procesos de migración interna que “amenazaban” a inmigrantes europeos y sus hijos, íconos de la argentinidad formados por el etnocentrismo y el centralismo demográfico. Entonces, la Argentina es un país donde “no hay negros”; pero al momento de establecer distinciones que jerarquizan y significan una posición en determinados conflictos sociales, una persona es (o un grupo está lleno de) negro/a(s)⁶.

La inexistencia de “negros”, el exotismo alojado en los pueblos originarios y la extrañeza de la zona centro del país al reconocer la migración limítrofe, imaginando una reconfiguración en la inmigración que no reconoce el intercambio frecuente en las zonas de frontera, por ejemplo; operación donde Salta o Jujuy, Formosa o Chaco quedan por fuera de la

⁶ Como señala Grimson, “cerca de la mitad de la población recibe esa denominación por ser morena, mestiza, simplemente pobre o por ser dirigentes sociales o sindicales (...) el 4% de la población argentina tiene ascendencia afro. Esto es casi 1 de cada 20 (...) el tema está en poder ver sin blanquear (...) los “negros” no son los que venden mazamorra en los actos escolares, son parte de este país, junto a otros invisibilizados”.

contención “Argentina”, al suponer que los movimientos migratorios de la zona no son parte de lo sucedido en el país. Esta forma de entender la migración limítrofe se anudó a los cambios socioeconómicos ocurridos en la década del 90 y simplemente modificó los núcleos de residencia base de la migración, sin alterar la incidencia de la población limítrofe en los totales registrados por los censos (Kneeteman, 2009). Las descripciones, entonces, sobre “negros” o “indios” y sus lugares de residencia y origen son parte de una construcción fundada en el “centro” económico y cultural de Argentina, con mayor incidencia de los grupos sociales que poblaron la ciudad de Buenos Aires, aunque no fueron los únicos actores que dieron su “fisonomía” a las clases medias. También fueron importantes las sociedades de otras geografías como Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, donde inicialmente se asentó el grueso de la población llegada de distintas regiones de Europa.

Los imaginarios y el deseo náutico

Hay determinados nombres en los que se puede figurar la intención de “blanquear” la Argentina a través de las corrientes migratorias. Estas acciones fueron propiciadas con posterioridad a la batalla de Pavón y en el marco de las formas específicas en que se desarrolló el Estado nacional. En la construcción de la pertenencia, en el proceso de significación de lo nacional las corrientes migratorias se apropiaron rápidamente del rol que les asignaba el Estado, a partir de las élites que lo administraban. En este sentido, esfuerzo, progreso y ascenso fueron categorías que, entre otras, se asociaron como inmanentes a una población en específico y que, al mismo tiempo, se plasmaron en la edificación de la nación y la génesis de los grupos sociales. Es importante, en el sentido de lo dicho, tener en cuenta que la formación de los rasgos discriminatorios en la clase media argentina no se debió exclusivamente a la influencia de figuras individuales, sino que fue el resultado de procesos sociales, políticos e históricos complejos. Sin embargo, como decíamos al comienzo del párrafo, es posible identificar algunas figuras que promovieron las corrientes de pensamiento y que influyeron en la construcción de formas definidas de discriminación en la clase media argentina.

Entre las figuras más destacadas se pueden mencionar a Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Pellegrini, Julio Argentino Roca o José Ingenieros, entre otros. Todos ellos, en tanto promotores del positivismo en la Argentina, elaboraron o adhirieron a posiciones denigrantes respecto de formas culturales alejadas de los cánones europeístas de desarrollo. En sus

posiciones, el fomento a ciertas corrientes de migración se relacionaba con una concepción de los sectores populares de la época, sustancialmente pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones rurales mestizas. Las representaciones que imprimieron el positivismo o ciertos nacionalismos promovían que el país deseable demandaba producir las características que permitiera espejar las formas de progreso de las grandes capitales europeas, o bien, en el caso de Sarmiento, imaginar formas de organización asimilables a los EE.UU.⁷

La construcción de un imaginario social resultó imprescindible para aunar la diversidad de la nueva composición social. Inmigrantes que ocupaban distintas zonas en las principales ciudades y los núcleos agrícola-ganaderos del centro del territorio necesitaban un mito para satisfacer la necesidad de pertenencia y vehiculizaciones que permitieran ponerlos en práctica. Las instituciones y los diferentes elementos artísticos (como la literatura) posibilitaron el surgimiento de simplificaciones eficientes: por ejemplo, “Argentina es un crisol de razas” (Adamovsky, 2012: 1-2). El mito en cuestión no excluyó en términos formales a “negros” e “indios” de la pertenencia de la nación, de sus instituciones civiles. La exclusión recorrió caminos ciertos y tuvo efectos palpables, aunque “encontró una solución” en el proceso de blanqueamiento antes mencionado.

La resignificación de los orígenes, la potencia de las formas simbólicas de violencia marcaron cierta necesidad de desconocer u “olvidar” la ascendencia, acción relacionada con la obediencia a los símbolos hegemónicos (con claras implicaciones efectivas) de los sectores dominantes a partir de la organización del Estado nacional. La concreción del mundo europeizado en el que se fundían “las razas” se sustentaba “en un patrullaje cultural que permitiese borrar cualquier presencia plausible de refutar o amenazar la consistencia de la Argentina blanca y europea”⁸, que posibilitó el ascenso social sobre la base de una igualdad social artificial y negacionista (operación nada original en la construcción de la historia, la nacionalidad y sus símbolos).

En su trabajo de 1994, Claudia Briones reseña que, desde comienzos de la década de 1980, la literatura especializada centró sus esfuerzos en demostrar el carácter artificial de las tradiciones, las nacionalidades y, en tal sentido, el relato histórico que, sobre la base de sus interpretaciones,

7 No desconozco que los señalamientos realizados carecen de los aportes promovidos por muchas de las figuras mencionadas: educación pública, desarrollo de un Estado laico, etc. Sin embargo, cabe destacar que las formas de apropiación facilitadas por estos derechos se relacionan fuertemente, al menos en instancias iniciáticas, con la posibilidad de aunar las diferentes oleadas inmigratorias.

8 Adamovsky *ibíd.*

subrayados y ocultamientos performaba la historia y la percepción de las sociedades. El texto en cuestión se basa en la construcción de argumentos a partir de dos categorías centrales: primero, la ya mencionada “invención de la tradición”; en segundo lugar, “usos del pasado”⁹.

Tal y como mencionamos en el título del apartado, entender las categorías centrales con las que se describe y autoperceben los sectores que pueblan los grandes centros urbanos, y reduciéndolos a “la sociedad argentina”, sólo es posible a través de los relatos y los discursos que, bajo la formas de sentido común, producen y reproducen las formaciones míticas de la identidad¹⁰.

En relación con lo explicitado en el párrafo anterior, debemos recordar que la clase media argentina se ha inventado como una identidad social sobre el supuesto de que esta clase es la “mejor” y la más “cultivada”. Este sentido de superioridad ha construido, a lo largo de los años, la formación de indicadores de jerarquización, de distinción, respecto de otros sectores sociales, procurando “fundamentar” la discriminación hacia los sectores populares y los inmigrantes. Ahora bien, ¿cómo pensar históricamente, más allá de la propia categoría “clase media”, el devenir del ímpetu positivista y civilizatorio que se asoció y promovió en nuestro país? En tal sentido, y siguiendo a Briones, cabe reflexionar que la visión de la historia argentina construida por Bartolomé Mitre y la línea historiográfica por él iniciada, se basa en la idea de que la nación argentina es el resultado de la lucha heroica de los hombres blancos y cultos de Buenos Aires contra los indios, los negros y los caudillos del interior del país. Esta visión contribuyó a la formación de una identidad nacional que se basa en la exclusión y la discriminación de aquellos que no se ajustan a los modelos hegemónicos de cultura y de identidad.

En los aparatos de difusión formales e informales por los que discurrió el ideal “mitrista” se pone de relieve la importancia de la elaboración de imaginarios sociales y de la creación de mitos fundacionales en la formación de la identidad de la sociedad argentina. Es allí, entonces, donde las edificaciones simbólicas posibilitan entender las formas en que se han construido las identidades sociales y nacionales que han vehiculado las relaciones de poder entre diferentes sectores sociales. Dicho de otra forma, aspectos sobresalientes de la identidad colectiva que caracteriza a las clases medias se constituyeron a lo largo de la historia del Estado nacional,

9 Ver Briones, Claudia (1994), pp. 99-103.

10 El singular se refiere a la suposición de que existe una sola identidad argentina, generalmente contenedora de las formas de “centrismos” que se pueden describir.

produciendo y también reproduciendo modelos hegemónicos de cultura y de identidad.

Los efectos artificiales, la pretensión de superioridad y la percepción de una “mayoría de edad cultural” son elementos signados por los parámetros estructurales objetivados por una élite intelectual que direccionó la organización de las instituciones y orientó sus objetivos para asegurar las posiciones obtenidas. En este proceso configuró solidaridades suscitadas a partir de mecanismos operacionalizados desde instituciones artísticas, educativas, pero sin dejar de lado conductas estigmatizantes que condicionan negativamente ciertas herencias, lo que derivó en la “necesidad” de ocultar algo¹¹, que con el paso de las décadas pasó a “estar” olvidado. La “creación” de la clase media concitó el advenimiento de un grupo que observaba las conductas y consumos de los sectores dominantes, deseando un ascenso “imposible”, al tiempo que esta situación fortalecía el rechazo a los sectores populares. Para ello fue necesario imponer una visión de la historia como si fuera la única válida.

A partir de lo expuesto en párrafos anteriores, podemos advertir que esa superioridad asignada a la migración europea la hizo depositaria de las nociones correctas de progreso; ese capital fue legado, inicialmente, a sus hijos e hijas, que formaron (en los grandes centros urbanos) los primeros esbozos de clase media. Este hecho fue central para formar cierta “identidad argentina” definida por la exclusión y la marginación de aquellos que no se ajustaban a un modelo hegemónico de cultura y de identidad. Al constituir los modos “correctos” de ser y de estar en la sociedad civilizada, estas pautas fueron adoptadas por los sectores populares como parámetro aspiracional del ascenso social.

Construir imaginarios, construir hegemonía¹²

En el recorrido planteado hasta aquí he seguido la obra de Gramsci (2014) de sentido común¹³, la cual, como se vio, no refiere simplemente a

11 Ese “algo” estaba ligado a pautas culturales de diferente orden: lengua; música, relatos míticos, etnia y fenotipos.

12 La “hegemonía” en el pensamiento de Gramsci se refiere al dominio o liderazgo que un grupo social o clase ejerce sobre otros grupos, no sólo a través de la fuerza o la coerción, sino también a través del consenso y la aceptación voluntaria de ideas y valores de la clase dominante por parte de los subordinados. Esta dominación cultural y política se logra a través del control de las instituciones educativas, los medios de comunicación, las normas culturales y otros aspectos de la vida cotidiana.

13 Es importante destacar que, en la obra del pensador italiano, la definición de “sentido común” no está desarrollada de forma específica. Es una idea que trabajó a lo largo de varios pasajes de “Cuadernos de la cárcel”, durante su período tras las rejas en la década de 1920. En esas reflexiones, Gramsci explora ampliamente el concepto de sentido común en relación con la cultura, la hegemonía y la lucha de clases, aunque lo define particularmente, al uso y costumbre de las prácticas profesionales en ciencias sociales.

la sabiduría popular o a lo que la mayoría de las personas piensa de manera general. A partir de esta interpretación, propuse un recorrido para comentar las alternativas en la cimentación de una identidad argentina, las ideas y protagonistas desde el siglo XIX, los sectores sociales que adscribieron y fortalecieron los estereotipos, dotándolos de una apreciación que abrió el abanico de lo que es y no respetable y deseable.

Al pensar en la clase media, puedo plantear recorrer algunas de las perspectivas de la conflictividad, de las disputas que, a lo largo del siglo XX y hasta el presente, se reflejan en las interpretaciones historiográficas, construyendo interpretaciones que son, al mismo tiempo, origen de conflictos por definir el presente y proyectar lo socialmente anhelado. Para ello mostré, desde una perspectiva *gramsciana*, al sentido común como un conjunto de creencias, valores y formas de ver el mundo que son aceptados y compartidos por la sociedad “en su conjunto”; que no son necesariamente producto de un razonamiento crítico y profundo, sino que a menudo son formuladas y moldeadas por las clases dominantes. De esta forma, como lo presenté, el sentido común opera de manera implícita y a menudo se acepta sin cuestionar, lo que permite a las élites mantener su control sin recurrir a la coerción constante. Así entendido, el sentido común representa una forma de hegemonía, donde las ideas y valores de las clases dominantes se internalizan en la forma de comprender la sociedad de los grupos subordinados, llevándolos a actuar y pensar en consonancia con los intereses de los grupos dominantes¹⁴.

Como efecto de la construcción hegemónica se observa la objetivación de los grupos sociales, apreciable en acciones y discursos que posibilitan la reificación jerárquica de la distribución del poder. Reconocer dichas objetivaciones es, al mismo tiempo, un ejercicio imprescindible para distinguir los elementos de resistencia contra las narrativas dominantes que han influido en las posiciones de los diferentes actores sociales en distintos momentos históricos. Desde esta acción podemos analizar cómo las creencias y valores aceptados en una sociedad están influidos por las relaciones de poder, y cómo estas ideas contribuyen a mantener o desafiar la hegemonía de determinados grupos en la sociedad.

14 De la misma forma, vale destacar que en el trabajo de Gramsci la hegemonía no se expresa como forma de dominación sin que se puedan reconocer grupos o comunidades que ofrezcan resistencias de distintos grados y órdenes; a estas acciones, el pensador italiano las llama “contrahegemonía”, y se refiere a los esfuerzos y luchas de los grupos subordinados para desafiar y resistir las formas establecidas. Es el intento de presentar alternativas a las ideas y valores dominantes, buscan crear un nuevo consenso y transformar la estructura de poder existente, lo que implica la creación y promoción de una narrativa que desafíe la forma en que la sociedad está organizada.

Ahora bien, lo expuesto en párrafos anteriores demanda una serie de instrumentos para ser vehiculizado: el discurrir de la construcción hegemónica en el contexto de las interacciones frecuentes en la comunidad, en los diferentes grupos sociales, se potencia a partir de instituciones legislativas que se articulan con las diversas formas de comunidad, de vecindad, familiar, laboral, etc. donde se afianza cotidianamente. Esas instituciones, a las que recientemente llamé “legisladas”, son el marco de las operaciones más complejas de acentuación de cómo he presentado la idea de sentido común, y en particular de los elementos que, bajo esta lógica, constituyeron la pertenencia a los valores y a la clase media. Las instituciones culturales, estatales o no, son la principal fuente de generación y difusión de los supuestos a partir de los cuales se propagó una interpretación del ideal civilizatorio, de su relación con la migración europea y de la principal ligazón de esta última con los orígenes de la clase media. Desarrollo historiográfico, educación formal, nomenclatura urbana, entre otras dimensiones del Estado pergeñado por el liberalismo de fines del siglo XIX, se conjugaron con expresiones literarias, del teatro, el cine o la música. A lo dicho debemos sumarles herramientas de construcción narrativa de presentación diaria que potenciaron la acción de los periódicos y la publicidad en la comunicación y, por lo tanto, como transmisores del “sentido común”. Me refiero al rol desplegado por los medios de comunicación “tradicionales” del siglo XX¹⁵.

Es central, entonces, comprender que los discursos ligados al “esfuerzo”, a los consumos relacionados específicamente al arte “culto”, a las conductas sujetas a la materialidad, aspiraciones que representan la llegada a la clase media, al ascenso social, estimula y constituye sentidos y significaciones que simplifican con sus representaciones lo que es y no es deseable. Jorge Huergo (2007) llamó a esto *equivalencias discursivas*¹⁶. Con ello se refiere a la edificación de relaciones de sentido entre términos que, en principio, pueden parecer no estar relacionados. Estas equivalencias permiten la creación de significados políticos y culturales a través de la conexión de elementos discursivos aparentemente heterogéneos. En otras palabras: los discursos públicos, construidos, por ejemplo, desde las insti-

15 Excede a este trabajo el desarrollo de la potencialidad que tienen la tecnología digital y las redes sociales como difusoras de los discursos públicos.

16 Si bien el trabajo de Ernesto Laclau (2005) tuvo una gran influencia en el desarrollo de las ideas de Huergo, no se debe confundir la “cadena equivalencial” del primero con la idea de “equivalencias discursivas” que es extraída de los aportes del segundo. La cadena equivalencial es una serie de demandas políticas heterogéneas que se agrupan bajo un significante vacío compartido. Laclau argumenta que, en la política, las demandas y las identidades no se construyen simplemente en torno a una única idea o demanda, sino que se forman a través de la articulación de diferencias.

tuciones de la educación formal o de la práctica política profesional, entre otras tantas posibilidades, pueden establecer vínculos y asociaciones entre términos que no están intrínsecamente relacionados para crear nuevas significaciones y comprensiones. Es por ello que cabe señalar la condición contextual de los discursos, en una interpretación que excede largamente la idea de temporalidad. En los términos que lo manifiesto, la idea de contextual es de grupo o sector social: se refiere a las formas en que se puede estructurar una sociedad y es, por tanto, aspiracional. Promueve, por decirlo de alguna manera, la concreción de un “ideal de ciudadano”. Dicho de otro modo, ser un buen ciudadano encierra todas las cualidades imaginadas para (y autopercebida por) la clase media.

A modo de conclusión

Como ya se dijo, los mitos fundacionales de la Argentina de ascendencia europea y “blanca” acarreada en barcos coaligó entre la creación de las instituciones estatales y la concreción de los diferentes dispositivos culturales que le dieron su forma a la “argentinidad” a partir de la concreción de la “clase media”: desde allí se pueden tejer toda una serie de sentidos para los conflictos y las alianzas, de diversos órdenes y grados, que atravesaron nuestra historia (y lo harán en el futuro). Los términos o palabras adquieren significado a través de las relaciones sociales y de las prácticas discursivas. En términos de Laclau (2005), éstos son significantes y son utilizados para crear identidades colectivas y para articular demandas políticas y sociales en un determinado contexto histórico y social¹⁷. Pero esta operación no se da a partir de la nada: hay recorridos anteriores que posibilitan distintas formas de interpretación; que exista una variedad de significantes no implica que no exista un condicionamiento en las interpretaciones e intereses reflejados en los discursos públicos de los diferentes grupos sociales. En este sentido, Briones (1994) sostiene que la construcción mitrista de la historia ha sido fundamental en la creación de un imaginario social que ha dado lugar a la formación de una identidad nacional. Esta visión de la historia ha sido utilizada para crear una identidad colectiva que se basa en la exclusión y la discriminación de aquellos que no se ajustan a los modelos hegemónicos de cultura y de identidad.

17 Un significante vacío, en la teoría política de Laclau, es un término que no tiene un significado fijo y definido en sí mismo, pero que puede adquirir significado a través de sus relaciones con otros significantes y a través de su asociación con demandas políticas y sociales específicas. Laclau utiliza la noción de significantes y significantes vacíos para analizar cómo los términos políticos y las demandas se articulan en discursos políticos y cómo se forman identidades políticas y coaliciones.

De forma explícita, he asociado la idea de identidad nacional a determinados elementos entendidos como propios de la identidad de clase media en la Argentina, bajo la comprensión de que son esencialmente los sustentos y el vehículo del sentido común, o de los sentidos comunes de los grandes centros urbanos. Entiendo que la identidad de la clase media argentina, a lo largo de la historia, ha sido moldeada por una serie de factores: elementos culturales, económicos y políticos. Desde allí, y con el oriente marcado por el positivismo “nacional”, construyó su identidad en relación con su posición en la sociedad, sus aspiraciones y sus interacciones con otros grupos sociales.

Comprender los sucesos históricos es, entonces y en gran medida, dar cuenta de los condicionantes que permiten visibilizar las motivaciones de los grupos y de cómo los diferentes sistemas de valores y creencias se ponen en juego al momento de la interacción. En este sentido, los mitos fundacionales de la identidad argentina pueden ser considerados como significantes que se utilizaron para producir identidades colectivas y para articular demandas políticas y sociales que, como capas tectónicas y con las dinámicas contextuales, configuraron un sistema de creencias que se ha puesto (y se pone) en juego para actuar sobre (y en) la realidad. Así, los mitos fundacionales de la identidad argentina, a través de los relatos, de la construcción de los discursos públicos y de los institucionales, entendieron las tensiones sociales, los conflictos distributivos y los reclamos simbólicos (y materiales) como expresiones “conservadoras”, cuya existencia se debía a la mera intención de retardar el progreso. Arturo Jauretche opuso a esta idea la categoría de “incorporación”: encontraba allí una forma de revalorizar la diversidad cultural y étnica de la Argentina. La operación implicaba la valoración de las distintas culturas presentes en el país, donde lo europeo representaba un modelo más, pero lejos de su condición dominante.

Bibliografía:

-Leach, Edmund (1976) *Sistemas Políticos de Alta Birmania*. Estudio sobre la estructura social Kachin, Barcelona, Anagrama.

-Obradovich, Gabriel (2016) *La conversión de los fieles*, Buenos Aires, Teseo. URL: <https://www.teseopress.com/laconversiondelosfieles>

-Adamovsky, Ezequiel (2009) *Historia de la clase media argentina. Apología y decadencia de una ilusión*, Buenos Aires, Planeta.

-Adamovsky, Ezequiel (2014); “‘Clase media’: problemas de aplicabilidad historiográfica de una categoría” en Adamovsky, E.; Visakovsky, S. y Vargas, P.: *Clases medias. Nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la antropología*, Buenos Aires, Ariel.

-Adamovsky, Ezequiel y Arza, Valeria (2012) “Para una historia del concepto de ‘clase media’: un modelo cuantitativo aplicado a la revista *Caras y Caretas*, 1898-1939 (y algunas consideraciones para el debate)”, en *Desarrollo Económico*, vol. 51, N° 204 (enero-marzo 2012).

-Adamovsky, Ezequiel (2012); “El color de la nación argentina. conflictos y negociaciones por la definición de un ethos nacional, de la crisis al Bicentenario”, *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*.

-Grimson, Alejandro (2013) *Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos*, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Balibar, Étienne (2018) “Racismo y nacionalismo” en Balibar, Étienne e Immanuel Wallerstein, *Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas*, Barcelona, Ed. Dirección única.

-Kneeteman, Gastón (2009) “Perspectivas sobre los tiempos de crisis. Algunas consecuencias de la crisis de 2001 sobre las poblaciones boliviana y paraguaya en la Argentina”, en *Buenos Aires Boliviana, Migración, construcciones identitarias y memoria*, Buenos Aires, C.P.P.H.C.

-Grimson; Alejandro (2019) *¿Qué es el peronismo? De Perón a Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Semán, Ernesto (2021) *Breve historia del antipopulismo. Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri*, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Gramsci, Antonio (2014) *Antología* (vol. 2), Buenos Aires, Siglo XXI.

-Huergo, Jorge (2007) “Hegemonía: un concepto clave para comprender la comunicación”, visto en *Comunicación y Educación*, www.comeduc.blogspot.com.

-Hoyos de los Ríos, Olga Lucía (2000) “La identidad nacional: algunas

consideraciones de los aspectos implicados en su construcción psicológica”, *Psicología desde el Caribe*, n°5, enero-julio, pp. 56-95, Universidad del Norte Barranquilla, Colombia.

-Briones, Claudia (1994) “Con la tradición de todas las generaciones pasadas gravitando sobre la mente de los vivos: usos del pasado e invención de la tradición”, en *Runa XXI*, pp. 99-129.

-Laclau, Ernesto (2005) *La razón populista*. Buenos Aires, FCE.

De la Gran Guerra a los regímenes totalitarios: un análisis de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y sus repercusiones en la economía de posguerra

Andrea Ariza

Eric Hobsbawm (1998) sostiene que el siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra ya que la crónica histórica del siglo y, más concretamente, de sus momentos iniciales de derrumbamiento y catástrofe, debe comenzar con el relato de los 31 años de guerra mundial. El asesinato del heredero del trono Austro-húngaro, el 28 de junio de 1914, por parte de un joven estudiante serbio vinculado a una organización nacionalista clandestina dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió porque, debido al asesinato, el imperio de los Habsburgo presentó un ultimátum a Serbia, que no fue respondido como esperaban y ante la insuficiente respuesta le declaró la guerra. Este conflicto puso en marcha un complejo sistema de alianzas y el enfrentamiento devino en una guerra, la más importante hasta entonces ya que los avances tecnológicos se pusieron al servicio del conflicto bélico.

La primera guerra fue el conflicto bélico de mayor conflagración que se había conocido hasta entonces y generó un reordenamiento político y territorial de toda Europa. Las consecuencias políticas, sociales y económicas de la Guerra se sintieron por largo tiempo en todo el mundo. Además, durante el desarrollo de la guerra se produjo la Revolución Rusa, la gran revolución del siglo XX que implicó la caída del régimen zarista. Según Béjar (2011) el derrumbe del bloque soviético y la experiencia revolucionaria rusa puede leerse como el enorme y trágico esfuerzo de una sociedad atrasada y largamente explotada que, bajo el férreo control del Estado, en poco tiempo, y en condiciones adversas, pasó del arado de la tierra a ser la segunda potencia mundial.

En el siguiente apartado observaremos las causas y fuerzas históricas profundas que generaron que un conflicto local deviniera en una guerra, la primera gran guerra.

1. Primera Guerra Mundial

1.1 Configuración política y territorial previa a la guerra

Como resultado de un largo proceso que se inició en el siglo XVII y se afianzó con la derrota de Napoleón (junio de 1815), cada uno de los pri-

nipales Estados europeos reconoció la autonomía jurídica y la integridad territorial de los otros Estados. Este mecanismo fue conocido como el *Concierto europeo* y consistió en la constitución de un “orden internacional basado en el reconocimiento de la soberanía estatal” (Béjar, 2011: 58) y en la aceptación de que el poder de cada estado no debía avasallar el de las otras potencias. Este consenso se aplicó únicamente a Europa, que se transformó en un territorio de amistad y comportamiento “civilizado”. Sin embargo, esto no supuso la finalización de los conflictos bélicos por la dominación europea sobre otros territorios donde los imperios buscaban expandirse, por ejemplo África. Es decir, al interior del continente europeo los países aceptaron los límites nacionales y establecieron diálogos diplomáticos que tuvieron como objetivo la paz en sus naciones. Pero, fuera del continente, los países continuaron las disputas armamentistas por el control de nuevos territorios en el mundo.

El *concierto europeo* entró en crisis en el último cuarto del siglo XIX cuando cambió la relación de fuerzas entre los Estados debido a diversas razones, entre las que podemos nombrar las siguientes:

- El ascenso político y económico de Alemania.
- El declive industrial de Gran Bretaña.
- La complejización del sistema mundial y el creciente protagonismo de Japón y Estados Unidos como potencias.
- La crisis del régimen zarista y dos de los imperios más antiguos, el chino y el otomano.

En este proceso de cambios, las principales potencias construyeron dos grandes grupos de alianzas, por un lado, la Triple Entente conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia y, por otro lado, Alemania y Austria-Hungría.

La conformación de las alianzas responden a objetivos políticos y económicos y estuvieron marcadas por los bagajes históricos entre las naciones. Esto es observable en la conformación de la Triple Entente, ya que Francia y el imperio zarista, es decir Rusia, compartían su enemistad hacia los imperios centrales (Béjar, 2011). Francia había sido derrotada por Alemania en 1870 y había logrado apropiarse de Alsacia y Lorena. Rusia tenía aversión por el afán expansionista de los Habsburgo, también llamada la Casa de Austria, sobre los Balcanes. Esta rivalidad con Alemania y Austria-Hungría los llevó a unirse en su disputa con dichas potencias.

Gran Bretaña tuvo dudas en sumarse a la alianza y por eso mismo fue la última en unirse por los desacuerdos que había tenido con Francia y Rusia en el norte de la India. Sin embargo, el veloz desarrollo que tuvo

Alemania generó que Gran Bretaña modifique su posición ya que veía en Alemania un potencial rival. Además, Gran Bretaña observaba que Rusia había perdido protagonismo por su derrota con Tokio y por eso mismo decide sumarse a la alianza con Rusia. Su incorporación a la alianza llevó a que Gran Bretaña y Francia delimiten sus áreas en África. Béjar afirma que en 1907 la triple entente ya se encontraba en movimiento.

La carrera armamentista empezó mucho antes de que comenzara la guerra, ya que las sucesivas crisis en el norte de África y los Balcanes alentarón a los Estados a armarse y confirmaron el nuevo sistema de alianzas. En 1905 y 1911, Alemania cuestionó el avance de Francia sobre Marruecos, pero el sólido vínculo entre Gran Bretaña y Francia obstaculizó la revisión del *statu quo* que proponía Alemania.

El escenario balcánico era extremadamente complejo y fueron los conflictos que se desarrollaron en este escenario lo que resultarían decisivos en el devenir de la guerra. Según Béjar (2011) la explosiva fragilidad de la situación balcánica ocupó el centro de la escena a principios del siglo XX. Uno de los elementos fundamentales del conflicto fue el hecho de que Viena decidio en 1908 anexionar el territorio de Bosnia-Herzegovina, territorio sobre el cual ya ejercía un protectorado, con el objetivo de consolidar su posición en los Balcanes. Este accionar causó molestia en Serbia ya que un sector nacionalista duro sostenía que Bosnia era parte de su territorio. En el año 1912, se dio la primera guerra balcánica en la que los otomanos fueron expulsados de la región y el territorio de Macedonia fue distribuida entre Serbia, Bulgaria y Francia. A partir del retiro de los otomanos, el conflicto balcánico se centró en la persistencia de la dominación de los Habsburgo y en el establecimiento de límites de los nuevos Estados que emergieron en la región. En la definición de los límites, los países europeos concentraron su atención ya que tenían sus propios objetivos, por ejemplo, Italia y Austria no deseaban que Serbia posea salida al mar y por eso mismo avalaron el surgimiento de Albania. Este nuevo país estuvo en constante tensión con los serbios ya que Albania reclamaba la anexión de Kosovo, que estaba habitada mayoritariamente por Albaneses, pero los Serbios se negaban a esto. También sucedieron conflictos sobre la distribución de Macedonia, en la que Serbia y Grecia fueron beneficiadas.

Estos conflictos en la zona de los Balcanes fortalecieron la posición de Viena con Serbia. Viena veía con recelo el poder que habían obtenido los serbios ya que podía afectar el control de los Habsburgo sobre los territorios. Por esto mismo, cuando el joven nacionalista serbio asesinó al heredero al trono del Imperio Austríaco, la corona de ese país fue inflexible.

Austria le dio un ultimátum a Serbia, Rusia movilizó sus tropas y Alemania le declaró la guerra a Rusia. La guerra terminó de confirmarse entre el 6 y el 12 de agosto, cuando “Austria-Hungría le declaró la guerra a Rusia, y Gran Bretaña y Francia aprobaron el enfrentamiento con el imperio Habsburgo” (Béjar, 2011:60). El conflicto se desarrolló de forma tan acelerada por el sistema de alianzas.

1.2 El desarrollo del conflicto bélico

La primera guerra comenzó como una guerra esencialmente europea constituida por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las llamadas «potencias centrales» (Alemania y Austria-Hungría). En la primera guerra mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados europeos excepto España, los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza. Además, diversos países de ultramar enviaron tropas, en muchos casos por primera vez, a luchar fuera de su región (Hobsbawm, 1998). Serbia y Bélgica se incorporaron inmediatamente al conflicto como consecuencia del ataque austriaco contra la primera (que, de hecho, desencadenó el inicio de las hostilidades) y del ataque alemán contra la segunda (que era parte de la estrategia de guerra alemana). Turquía y Bulgaria se alinearon poco después junto a las potencias centrales, mientras que en el otro bando la Triple Alianza dejó paso gradualmente a una gran coalición. Se compró la participación de Italia y también tomaron parte en el conflicto Grecia, Rumania y, en menor medida, Portugal. Como cabía esperar, Japón intervino casi de forma inmediata para ocupar posiciones alemanas en el Extremo Oriente y el Pacífico occidental, pero limitó sus actividades a esa región. Los Estados Unidos entraron en la guerra en 1917 y su intervención iba a resultar decisiva (Hobsbawm, 1998). La primera guerra mundial tuvo un saldo de veinte millones de personas muertas. En este conflicto se acentuaron los efectos mortíferos de nuevos armamentos, como las ametralladoras, las granadas, los cañones.

La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento de carácter global que afectó al conjunto de los países involucrados. Por un lado, el desarrollo bélico produjo un exaltado patriotismo en cada país, donde las distintas fuerzas políticas proclamaban la unión del país y postergaron los conflictos internos. Sin embargo, esta unión no tuvo el mismo impacto en los diversos sectores. Béjar (2011) afirma que entre 1917 y 1918, la ola de movilizaciones de obreros y soldados provocó la caída de los tres imperios europeos: los Romanov en Rusia, los Hohenzollern en Alemania y los

Habsburgo en Austria-Hungría.

Por otro lado, la economía fue puesta al servicio de la guerra y el Estado tuvo un papel protagónico en lo que fue la empresa bélica. Por ejemplo, en Gran Bretaña se creó un gabinete de Guerra y nacionalizó, temporalmente, los ferrocarriles, las minas de carbón y la marina mercante. También racionó el consumo de algunos alimentos tales como la carne, azúcar, manteca y huevos. Alemania tomó decisiones parecidas en términos de racionamiento de alimentos y también creó un nuevo departamento que integró todas las minas y fábricas y se llamó Departamento de Materias Primas.

La Revolución Rusa y el ingreso de Estados Unidos al conflicto bélico en 1917 impactaron en el desarrollo de la guerra. En Rusia se produjo la caída del régimen zarista y los bolcheviques tomaron el poder. Una vez en el poder, Lenin abandonó la lucha y pidió la paz inmediata con el objeto de salvar la integridad de los rusos ante el avance de Alemania. En marzo de 1918, se firmó la paz de Brest-Litovsk con Alemania.

Estados Unidos, por otro lado, había declarado su neutralidad cuando se inició el conflicto bélico. Sin embargo, el país había adquirido gran importancia en las relaciones internacionales y su neutralidad no pudo ser sostenida. Además, Estados Unidos mantenía relaciones comerciales con los aliados occidentales que se habían multiplicado durante el desarrollo de la guerra. También, Béjar (2011) sostiene que la guerra submarina provocó hundimientos de barcos estadounidenses y muertes de ciudadanos norteamericanos lo que generó gran conmoción en la opinión pública y predispuso al gobierno a ir en contra de Alemania.

Alemania, luego de firmado el tratado de Brest-Litovsk, concentró sus acciones bélicas en el frente occidental. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos que implicó la llegada de nuevos recursos, favoreció el desempeño de la Triple Entente y se produjo el desmoronamiento de los imperios centrales. En 1919 los países se reunieron en Versalles para establecer el tratado de paz con los países derrotados.

2. Tratado de Versalles

El 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles fue firmado el tratado que dio por finalizada la primera guerra mundial. Este tratado marcó el futuro de las sociedades luego de la Gran Guerra. Béjar (2011) sostiene que el tratado¹ no representó una paz negociada ya que los vencidos -Alemania y Austria-Hungría- fueron declarados culpables del conflicto bélico y tuvieron que someterse a las condiciones impuestas por los vencedores que incluyó la pérdida de territorios, pagos de indemnización por la guerra y restricciones a las fuerzas armadas de los países vencidos. Lo firmado en este tratado afectó no solo a los países europeos sino también a países de la periferia colonial ya que se produjo un trazado de las fronteras de Europa oriental que persiguió como objetivos: el debilitamiento de Alemania y “la creación de un cordón sanitario en torno a Rusia integrado por los países que habían sido sojuzgados por el imperio zarista (Béjar, 2011: 69). Además, se reconocieron nuevos Estados: Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia (con anterioridad habían formado parte del imperio zarista); Austria, Checoslovaquia y Hungría (que habían integrado el régimen de los Habsburgo), “Polonia que hasta entonces estaba dividida entre Prusia, Austria y Rusia recupera su unidad. También, se fundó el reino de los Serbios Croatas y Eslovenos (Yugoslavia a partir de 1929) con zonas y poblaciones que habían estado bajo la dominación de los turcos (Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Macedonia) y los Habsburgo (Croacia, Eslovenia, Eslavonia, parte de Dalmacia y Voivodina)” (Béjar, 2011: 69).

3. Revolución Rusa

La Revolución Rusa fue, en palabras de Hobsbawm (1998), la gran revolución del siglo XX. El régimen soviético produjo disputas de opiniones a su exterior e interior. Para algunos que lo observaban desde afuera, la llegada de los bolcheviques al poder suponía la existencia de una alternativa a la economía capitalista. Al interior del campo socialista había opiniones

1 En esta misma línea, Béjar (2011) sostiene que el comité de los cuatro -Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia- no podían establecer acuerdos en cuanto a los fines propuestos en el acuerdo. Estados Unidos buscaba restaurar el orden económico liberal y reformular el mapa europeo considerando la autodeterminación de los pueblos. Mientras que, Francia buscaba que la economía alemana contribuyera a la recuperación francesa y que se le impusiera a Alemania controles militares con el objeto de evitar nuevas invasiones. Inglaterra, mientras tanto, tenía una posición conciliadora ya que no observó que la ruina de Alemania fuera conveniente al continente. Por último, Italia quería anexar territorios que habían pertenecido al imperio Austríaco. Rusia quedó excluida del tratado y los países vencedores anularon el tratado de Brest-Litovsk aunque no recuperaron los territorios perdidos ante Alemania.

encontradas sobre la acción de los bolcheviques y el Palacio de Invierno. Para algunos era un ejemplo a seguir mientras que otros consideraban que esto era una oportunidad desperdiciada.

3.1 El momento previo a la revolución: el régimen zarista

La economía de la Rusia Zarista había estado en consonancia con los principales centros europeos a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XIX, el feudalismo seguía vigente y pervivían técnicas de explotación rudimentarias y condiciones de vida muy precarias para la clase trabajadora. Mientras que, la nobleza terrateniente sostenía un alto nivel de vida que se sustentaba en la explotación de los campesinos y en el préstamo de dinero, especies o servicios laborales a sus siervos sobre los que tenían poder de vida o muerte.

El sistema funcionaba de la siguiente manera: las familias de campesinos integraban la comunidad aldeana que controlaba la distribución y uso de las tierras. La tierra pertenecía de *iure*² a la comunidad y las familias recibían las parcelas por un determinado tiempo y luego eran redistribuidas. Estas eran asignadas por el mir o consejo de la aldea, quienes regulaban la explotación de la tierra y controlaban el cumplimiento de las obligaciones de cada familia. Este tipo de organización, según Béjar (2011), dejaba escaso margen al individualismo pero también los protegía de los cobros excesivos que pudieran hacer los miembros de la nobleza o del Estado.

Sin embargo, este sistema generaba tensiones políticas en el territorio y el campesinado emprendía con frecuencia acciones violentas contra los terratenientes y los agentes estatales. Esto generaba inestabilidad en el orden social. Por eso mismo, en 1861, el zar Alejandro II dispuso la liberación de los siervos ya que consideraba que era mejor promover el cambio desde arriba. En el edicto de liberación se tomaron las siguientes medidas: se liberó a los campesinos de la subordinación directa de la nobleza latifundista, recibieron para su uso una porción de tierra -pero no en propiedad privada- lo que los mantuvo sujeto a la tierra, y en el caso de los siervos, el edicto los obligó a pagar por su libertad -llamados pagos de redención-. El cobro del pago estaba a cargo del *mir* y los campesinos no podían irse de la aldea sin saldar su cuenta.

Este sistema generaba una fragmentación de las tierras y no habilitaba la concentración de las tierras en manos de propietarios dispuestos a introducir mejoras para obtener ganancias. En este sentido, Béjar (2011:74)

2 *Iure* es una expresión latina que significa “por derecho”.

sostiene que “la liberación de los siervos no dio lugar al surgimiento de propietarios rurales interesados en el aumento y la comercialización de los productos agrarios”. El edicto de Alejandro II llevó a un declive económico de la nobleza ya que solo una minoría introdujo cambios que le permitieron transicionar a una agricultura capitalista y orientada al mercado. En 1870, Francia e Inglaterra le habían impuesto límites al avance del Imperio Ruso en los Balcanes y esto indujo a la monarquía a promover el desarrollo industrial. La industria rusa era una de las más modernas ya que más del 50% de los trabajadores estaban en empresas que empleaban a más de quinientos trabajadores (Béjar, 2011). Pese a eso, eran habituales las huelgas a gran escala y las demandas excedían los económicos e incluía demandas políticas.

El giro a la modernización de la Rusia zarista estuvo comandado en gran medida por el Estado. Pero, la nobleza y los zares “se empeñaron en resguardar el orden social y político del antiguo régimen, orden sobre el que reposaba su inmenso poder” (Béjar, 2011: 75). Los zares que fueron sucediéndose a través del tiempo tuvieron actitudes disímiles en cuanto al accionar político. Alejandro II (1855-1881) promovió el edicto de emancipación de los siervos y decretó una serie de medidas que tenían como objetivo organizar el sistema judicial, mejorar las condiciones de vida de la población - a través de la creación de gobiernos locales-, y posibilitar el ingreso de nuevos estratos sociales a la universidad. Alejandro II murió en 1881 como resultado de un ataque terrorista. Eso produjo una represión brutal y los dos zares que lo sucedieron, Alejandro III (1881-1894) y Nicolás II (1894-1917) se atrincheraron con el objeto de conservar sus poderes. La monarquía clausuró la posibilidad de reformas y se propuso resguardar - incluso restaurar- las tradiciones de la Antigua Rusia. Esto fue un caldo de cultivo del derrumbe del régimen a través de la revolución.

3.2 Gestación y desarrollo de la Revolución Rusa

3.2.1 El rol de los intelectuales

Los intelectuales, sectores de la élite educada rusa, tuvieron un importante papel en el proceso de gestación de la revolución. Estos intelectuales observaban la brecha que existía entre Rusia y Europa occidental y eso los motivó a acercarse al pueblo para llevar adelante “una misión para regenerar Rusia, que estaba atrapada entre el despotismo del gobierno y la ignorancia y miseria de las masas” (Béjar, 2011:76). Este grupo, llamados por Béjar (2011), los populistas no conformaron un partido político ni

elaboraron un conjunto coherente de doctrina pero sí dieron vida a un movimiento radical en las décadas de 1830 y 1840. Sostenían que para superar el atraso ruso era necesaria y clave la liberación del mir de la opresión ejercida por los terratenientes y la monarquía. Rechazaban la vía del capitalismo como paso anterior al socialismo porque no creían que el progreso social o económico estaba inexorablemente ligado a la revolución industrial.

Estos jóvenes se trasladaron a las aldeas para hablar con los campesinos y el zarismo los reprimió duramente. Sin embargo, en el congreso de 1879, los populistas se dividieron en dos grupos: un grupo abandonó la idea de la Revolución campesina para asumir el terrorismo, y el otro rechazó el uso de la violencia. El primer grupo asesinó al zar Alejandro II en 1881 e intentaron realizar lo mismo con Alejandro III en 1887. Por estas acciones fueron condenados a muerte.

El segundo grupo, que no había estado de acuerdo con el asesinato político, revisaron en el exilio sus ideas sobre el rol revolucionario del campesinado y a principios de la década de 1880 adhirieron al marxismo y fundaron el grupo Emancipación del Trabajo que tenía como objetivo organizar a la clase obrera.

Para la década de 1890 en Rusia se habían formado grupos marxistas como producto del rechazo de un sector de los intelectuales radicales a la vía terrorista. Asimismo, como producto de la rápida industrialización de esos años, la clase obrera creció vertiginosamente. En 1898, se produjo la creación del Partido Socialdemócrata Ruso de los Trabajadores que tenía como fin organizar la lucha sindical y política de la clase obrera. En 1903, este partido se dividió en dos sectores: por un lado, los mencheviques liderados por Julij Martov y, por otro lado, los bolcheviques, que eran liderados por Lenin y representaba la mayoría. Ambos sectores sostenían ideas y sensibilidades que estaban marcadas por los contrastes que se profundizaron a partir de la crisis revolucionaria de 1905 (Béjar, 2011). Los mencheviques adherían a los postulados más ortodoxos del marxismo y tenían una visión más pesimista ya que consideraban que la revolución socialista no tendría lugar hasta que la revolución democrática burguesa hubiera realizado los cambios políticos, económicos y sociales. A partir de este diagnóstico es que se mostraban dispuestos a colaborar con la burguesía liberal en su lucha contra el antiguo régimen. Los bolcheviques no se mostraron dispuestos a concertar con otras fuerzas. Según Béjar (2011) los mencheviques representaban más acabadamente los idearios de Marx, mientras que los bolcheviques se acercaban al ideario populista.

3.2.2 El ciclo revolucionario 1905-1917

En 1905, en el marco de la crisis provocada por la derrota en la guerra contra Japón, se desarrolló la primera conmoción revolucionaria. Esto sucedió el 9 de enero de 1905, llamado “El Domingo sangriento” cuando una manifestación que pedía pan fue violentamente reprimida por el régimen.

Esto generó un clima de tensión, a mediados de octubre, por ejemplo, se desarrolló una huelga general en San Petersburgo que condujo a la creación del primer Soviet - un consejo integrado por delegados de los trabajadores elegidos en las fábricas. A estas huelgas se sumaron representantes de los partidos revolucionarios y Trotsky uno de los líderes de la tradición menchevique. Sumado a las movilizaciones de los obreros, se desarrollaron levantamientos de campesinos que atacaban propiedades de los grandes señores. El conflicto social hizo que los liberales presionaran a la autocracia zarista para que propiciaran un régimen constitucional. En este contexto la monarquía firmó la paz y concedió reformas.

Como consecuencia de ello, en octubre Nicolás II anunció la creación de la Duma, un parlamento electivo nacional. Sin embargo, pasado el pánico de 1905, Nicolás II intentó reafirmarse como autócrata ya que el gobierno continuó envuelto en una atmósfera de creciente corrupción y decadencia. Béjar (2011) afirma que el ciclo que va de 1905 a 1917 se caracterizó por una progresiva decadencia del cuerpo legislativo, ya que estos se convirtieron en simples órganos consultivos sujetos a la voluntad del monarca. Por esto mismo, la Revolución liberal se agotó mucho antes de ponerse en marcha.

La Primera Guerra Mundial generó que se potenciara en las debilidades del imperio ruso. Los sacrificios impuestos por el proceso bélico, sumados a la ineficiencia del gobierno, condujeron al zarismo a una crisis que en esta ocasión desembocó en su caída. En 1917 hubo dos revoluciones: la primera sucedió en febrero y la segunda en octubre. La revolución de febrero de 1917 llevó a pensar que Rusia seguiría el camino de Europa occidental, es decir, la eliminación del absolutismo para llevar adelante un cambio social y político que iba a ser conducido por la burguesía. Sin embargo, la acción de los bolcheviques clausuró este camino.

En febrero 1917 cuando las masas llevaron adelante protestas sociales, nadie visualizó un movimiento revolucionario. “La crisis social fue considerada una protesta popular no solo por el Zar, la corte y la oposición liberal, sino por los propios partidos revolucionarios” (Béjar, 2011: 80). El cuerpo legislativo, las Dumas, pidieron al Zar su renuncia con el objeto de

formar un gobierno provisional que convocaría a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, las masas que se habían movilizadas retuvieron el poder y conformaron los soviets, un organismo fiel y próximo a los intereses y necesidades de los trabajadores. Los bolcheviques pugnaron por la caída del zarismo, con la consigna de Lenin “Todo el poder a los soviets”. Esta crisis social generó una dualidad de poderes que se sumó al esfuerzo bélico que venía realizando Rusia. Según Béjar (2011) esto provocó un vacío de poder que llevó a Lenin a tomar el gobierno. La toma del palacio fue anunciada pero el gobierno fue incapaz de organizar una defensa. Al interior del socialismo generó divisiones ya que algunos dirigentes no estaban de acuerdo con llevar adelante esta acción.

Entre el 25 y 26 de octubre de 1917, los bolcheviques tomaron un poder que nadie detentaba. Pero, según Béjar (2011), no representó una jornada revolucionaria sino que la construcción del glorioso octubre rojo se hizo de forma posterior.

La conformación del orden posterior a la revolución estuvo marcada por el conflicto entre los mencheviques y los bolcheviques. Mientras los primeros proponían un orden democrático burgués ya que consideraban que Rusia no reunía las condiciones para el socialismo, los segundos estaban embarcados en una oleada revolucionaria impulsados por los horrores de la Gran Guerra.

Inmediatamente después de la revolución, los bolcheviques impulsaron los decretos de paz y el reparto de tierras. Sin embargo, el partido gobernante estuvo lejos de ser el más votado ya que la mayoría de los campesinos apoyó a los social-revolucionarios (mencheviques). La Asamblea Constituyente se reunió en enero de 1918 pero sólo sesionó durante unas horas ya que Lenin lo descalificó y reconoció a los soviets como una forma de democracia superior.

3.2.3. Gobierno de bolcheviques

Como una de las primeras medidas los bolcheviques respondieron inmediatamente a las demandas de paz y tierra. El decreto sobre la Tierra, que fue aprobado en noviembre de 1917, abolió la propiedad privada de las grandes unidades y entregó su control a los comités agrarios locales y a los soviets de distrito. Generó una ocupación desordenada de los grandes latifundios por las familias campesinas. Esta medida tenía como objetivo ganar apoyo en el medio rural donde los bolcheviques no contaban con fuerzas propias. Esto provocó una mirada positiva en la izquierda de los

social-revolucionarios que se incorporaron al consejo de comisarios del pueblo.

Entre las primeras medidas de Lenin estuvo la paz con Alemania para proteger al nuevo régimen, lo que generó resistencias entre lo social-revolucionarios aliados y la izquierda del partido. Leon Trotsky estaba a cargo de las negociaciones, pero se encontraba más cerca de la posición de los social-revolucionarios que de Lenin, pero el avance de los alemanes lo llevó a aceptar en marzo de 1918 el tratado Brest-Litovsk. A partir de eso, los social-revolucionarios rompieron con los bolcheviques.

La paz no duró mucho, ya que, luego del tratado se desencadenó la guerra civil que fue promovida por la resistencia militar de los oficiales del Antiguo Ejército al gobierno bolchevique. Estos contaban con el apoyo de las principales potencias capitalistas. La guerra civil devastó la economía y tuvo profundas secuelas sociales y políticas ya que debilitó el proletariado Industrial, militarizó la vida política y extendió el control del estado a la banca, la industria y el comercio³. Durante este período uno de los mayores desafíos fue asegurar la provisión de alimentos. Para llevar adelante esto, el gobierno reclutó a campesinos pobres que ayudarían a las organizaciones del Estado en la requisita de granos a los campesinos acomodados. A estos se le sumaron los obreros industriales. A quienes se les permitió ir armados. Estas medidas intensificaron el rechazo de los campesinos hacia las cargas impuestas autoritariamente por los bolcheviques. Si bien en un primer momento la presión gubernamental aumentó el volumen de alimentos destinados a la población urbana también se redujo la producción. Por lo tanto entre 1921 y 1922 existieron muertes por falta de alimentos que superaron aquellas producidas por la Primera Guerra Mundial. Velarde Rosso (2017: 91) sostiene que “después de la guerra civil (1918–1921), el país se encontraba destruido y su economía estaba en ruinas. El dinero perdió todo significado y fue reemplazado por un sistema de trueque, el que, combinado con un intento de dirección estatal de la economía, fue dignificado con el título de ‘comunismo de guerra’”

A partir de 1920 la relación de fuerzas en la guerra civil comenzó a ser favorable al gobierno. En este triunfo jugó un papel destacado la cohesión mínima entre los jefes de campo contrarrevolucionario pero sobre todo el rechazo de los campesinos a la restauración del Antiguo Orden. La relación de Lenin con el campesinado había estado marcada por el conflicto,

³ El sistema de ‘comunismo de guerra’ trajo consigo la nacionalización de todas las empresas, con excepción de las más pequeñas. La pérdida de valor del dinero fue conocida oficialmente como suspensión sistemática de la “economía del dinero”. La producción agrícola fue requisada y los trabajadores fueron controlados estrictamente (Velarde Rosso, 2017: 91).

sin embargo los campesinos reconocían que los bolcheviques le habían dado la oportunidad de tomar las tierras.

En marzo de 1921, a estos conflictos se le sumaron los obreros que tenían demandas largamente contenidas y se manifestaron contra el gobierno. Esto hizo que Lenin reconociera la necesidad de dar un giro y anunciara que el comunismo de guerra daría paso a una nueva política económica. Nació así la llamada Nueva Política Económica (NEP), “la política de incautaciones fue reemplazada por un ‘impuesto en especies’ y se les permitió a los campesinos vender el excedente de su producción en el mercado libre. Las empresas privadas fueron liberadas del control gubernamental y el comercio minorista, en su mayoría, regresó a manos particulares y, en consecuencia, se restauró la economía de mercado” (Times Books Ltd., 1996: 236). Estas medidas tuvieron un éxito inmediato, pues la producción industrial y agrícola alcanzó los niveles de 1913 (Velarde Rosso, 2017).

Durante este periodo, otro de los hechos importantes que permitió la permanencia de Lenin en el gobierno fue la existencia la Cheka (Comisión Extraordinaria Rusa para la Supresión de la Contrarrevolución y Sabotaje), creada en 1917 por Lenin para proteger y consolidar la Revolución Comunista (Velarde Rosso, 2017). Mediante el uso del terror, Lenin consolidó el dominio del Partido Comunista en toda la Rusia zarista y pudo fundar oficialmente, el 30 de diciembre de 1922, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

4. El periodo de entreguerras y la economía

En este apartado veremos cómo luego de la desilusión de la guerra fuimos hubo un periodo de crecimiento económico llamado “los locos años veinte”. Además, durante esta década la democracia parecía haberse constituido como el régimen político en Europa occidental. A partir de 1929 este periodo se termina y el mundo experimenta una de las crisis económicas más grandes hasta ese momento y la democracia fluye. En cambio, surgen dos tipos de totalitarismo: el fascismo y el comunismo estalinista.

Béjar (2011) divide las etapas de la posguerra en tres grandes momentos: el primero (1919-1923) de la inmediata posguerra en la que parecía que la revolución victoriosa de Rusia se expandiría hacia el resto de Europa. La segunda (1923-1929) caracterizada por una frágil recuperación económica. Y la última etapa que tiene lugar luego de la crisis de 1929, que, marcada por la crisis, sobrevienen tiempos oscuros con presencia

de líderes carismáticos que desarrollaron experiencias totalitarias y fue el marco en el que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial.

4.1 La economía mundial de la posguerra

El gran derrumbe económico que va a tener lugar en 1929, y va a afectar la década del 30, remite según Béjar (2011) a los cambios que erosionaron los pilares en los que se había sentado la primacía del mercado mundial. En primer lugar, se encuentra el declive de Gran Bretaña, acompañado por el quiebre del patrón oro y por la creciente fragilidad de los lazos forjados por Londres entre las diferentes economías nacionales. En segundo lugar, el ascenso económico de los Estados Unidos como asociados a nuevos factores que no se adecuaron el funcionamiento del orden global.

Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial los gobiernos debieron aumentar sus recursos mediante las reformas impositivas, realizaron gravámenes sobre la renta y sobre el volumen de los negocios que fueron creados en esta época. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes y los países debieron importar mercancías y obtener préstamos de los países más fuertes en el plano Industrial, ya sea de aquellos que estaban alejados del campo de batallas o que eran ricos en materias primas. La guerra benefició económicamente a los proveedores, sobre todo Estados Unidos, que entre 1914 y 1919 se posicionó como el mayor país acreedor. Estados Unidos se convirtió en el principal motor de la reconstrucción de la economía europea y la reactivación del comercio mundial en el mundo de la posguerra. Pero, según Béjar (2011), los gobiernos y la sociedad estadounidense fueron aislacionistas.

Otra de las características de la economía de la posguerra fue que el patrón oro se hizo cada vez más inviable en el nuevo escenario social y económico. Previo a la guerra se había privilegiado la estabilidad exterior a costa de sacrificar la economía interior, pero luego de la Guerra el panorama fue muy diferente. La reactivación de los trabajadores, las fuertes querellas entre Estados derivadas del conflicto mundial, y una organización industrial más estructurada que requería compromisos a largo plazo entre capital y el trabajo obstaculizaron la subordinación de la actividad económica nacional a la estabilidad de la moneda. Pero, los economistas clásicos continuaron defendiendo que la primacía de las leyes de Mercado, basada y asegurada por el Patrón Oro, constituía la única vía para asegurar el crecimiento económico. Esto a costa de crisis periódicas. Según estos

economistas, la reducción salarial, el desempleo y la rebaja de los precios generarían las condiciones para que se incrementase la productividad y se iniciara un nuevo ciclo de crecimiento. Keynes, el economista inglés, no estaba de acuerdo con todos estos sacrificios en pos de los equilibrios del mercado.

La primera mitad de los años 20 estuvo caracterizada por fuertes fluctuaciones económicas. Desde el fin de la guerra en 1919 hasta 1921, la existencia de una demanda contenida y un gasto público sostenido generaron plena ocupación, que lleva acompañada por intensos conflictos sociales. Este corto ciclo de expansión generó inflación, que fue resultado de la puja distributiva, de las limitaciones de los nuevos países europeos para equilibrar la producción y la demanda y del peso de las deudas de la guerra, sobre todo en el caso de Alemania.

Luego de estas fuertes oscilaciones en la segunda mitad de la década la economía se mantuvo estable. Esto fue posible gracias a los acuerdos en torno a la refinanciación de la deuda alemana y el clima de paz. La estabilidad constituida, a partir de 1924, generó que esta época fuera bautizada como “los años felices” (Estados Unidos), “los años locos” (Francia) o “los dorados veinte” (Alemania). En cambio, para el ámbito rural está década fue poco propicia. Luego de la guerra se generó una caída en los precios de los alimentos y las materias primas, asociado al incremento de los bienes industriales. Esto colocó al campesino en una situación precaria y alentó la movilización política.

En octubre de 1929 se produjo el *crac* en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y se cerró el ciclo de crecimiento. Esto dio lugar al inicio de un período en la que la economía capitalista apareció derrumbarse. El precio de las acciones, que había tenido un aumento espectacular en el último año, cayó abruptamente debido a la especulación pero también como expresión de las contradicciones del sistema capitalista. Durante los años 20, el incremento de la productividad no generó un sólido mercado de masas que tuviera como base los aumentos salariales sino el acceso al crédito. Esto condujo a la especulación inmobiliaria y la sobreinversión en el mercado bursátil. La crisis derivada del *crac* de 1929 hizo evidente la distancia entre la economía real y el mercado financiero. Esto produjo la quiebra en cadena de los bancos y la desvalorización de la moneda. Con la Gran Depresión la doctrina liberal fue fuertemente cuestionada y dejó de orientar las decisiones de gran parte de los gobiernos.

4.2 Las economías luego de la Gran Depresión y el cuestionamiento a la doctrina liberal

Los gobiernos de los diferentes países tuvieron desafíos económicos compartidos. Sin embargo, las trayectorias políticas fueron diferentes. En Francia, Gran Bretaña, Suiza, Bélgica y Holanda la democracia liberal continuó vigente⁴. Mientras que, el fascismo triunfó en Italia y Alemania. La democracia social avanzó en Escandinavia y en Estados Unidos a través del New Deal.

El Nazifascismo y la Socialdemocracia cuestionaron los planteos económicos de la ortodoxia liberal y, en ambas experiencias se produjo una activa intervención de los gobiernos en el plano social y económico y la primacía del mercado fue abandonada. En el primer caso, en los regímenes fascistas, el mercado se subordinó a los fines políticos e ideológicos del grupo gobernante. Esto aniquiló la democracia y dio lugar a un nuevo tipo de estado autoritario y a una sociedad disciplinada. En el segundo caso, la dirigencia política socialdemócrata reunió los principios del orden democrático con el reconocimiento de los derechos sociales básicos.

5. Procesos de gobiernos totalitarios: el Fascismo y el Nazismo

Durante el siglo XIX existieron tres grandes familias políticas: el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo. Pero en las dos últimas décadas del siglo XIX emergió una nueva derecha profundamente nacionalista y antisemita que movilizó y ganó adhesión de diferentes grupos sociales en Viena, París y Berlín. El fascismo recogió ideas y actitudes de la derecha radical de fines del siglo XIX, según Béjar (2011), tomó sentimientos de frustración diversos y al mismo tiempo asumió la negación de la primacía de la razón que había sostenido el liberalismo y el socialismo. Sin embargo, no solo se nutrió de las ideas de esta derecha sino que también la brutal experiencia de la guerra y las consecuencias devastadoras en lo político, económico y social fueron elementos constitutivos del florecimiento del fascismo.

El fenómeno fascista tuvo una destacada expansión en el periodo de posguerra pero no fueron más que grupos efímeros. Es decir, el fenómeno fascista prosperó en aquellos países en los que confluyeron una cierta cantidad de elementos. En este sentido, Béjar (2011) sostiene que Italia y Alemania comparten rasgos significativos.

⁴ Para mayor profundización de la experiencia liberal en estos países, se sugiere observar el apartado "Las experiencias liberales" del Capítulo 3 de Béjar (2011).

En primer lugar, ambos países habían tenido un ingreso tardío pero con ritmos acelerados de industrialización. Lo que dio lugar a contradicciones sociales muy profundas y difíciles de manejar. Es decir que apareció una clase obrera altamente concentrada en grandes unidades industriales que convivió con la presencia de sectores preindustriales como los artesanos, los pequeños comerciantes, los terratenientes y los rentistas. Esto dio lugar a una sociedad en la que había una diversidad de demandas de ardua resolución a las cuales era difícil responder.

En segundo lugar, una serie de reformas electorales que se dieron en Italia en 1911 y en Alemania en 1919 produjeron la irrupción de un electorado masivo. Esto socavó la gestión de la política por los notables y las élites no fueron capaces de organizar partidos de masas que estuvieran en condiciones de competir electoralmente con la izquierda.

Por último, Italia y Alemania, aunque estuvieron en bandos opuestos en la guerra, habían sido naciones humilladas en el tratado de Versalles. Los términos en los que habían firmado la paz no los convencían.

Además de las condiciones de surgimiento, es menester reflexionar sobre la forma en que los fascistas recogieron los reclamos de los diferentes sectores de la sociedad y realizaron propuestas. Los fascistas se presentaron como una fuerza antimarxista, antiliberal y antiburguesa. Asimismo, el contexto de posguerra estaba caracterizado por la pérdida de sentido y de desorganización social, los fascistas canalizaron esta energía social a través de las marchas y brindaron un lugar de encuadramiento seguro y disciplinado. Esto se conjugó con la presencia de un líder carismático a quien se le reconocían los atributos necesarios para salir de la crisis. Mussolini y Hitler movilizaron a las masas y suscitaron la emoción en grandes porciones del electorado nacional.

"El fascismo recogió el apoyo de la clase media, de grupos inestables y desarraigados como de la juventud y del campesinado, también logró el reconocimiento de sectores de la clase obrera" (Béjar, 2011: 112). Tanto los fascistas como los nazis llegaron al poder por su capacidad de recoger demandas variadas y porque lograron convencer a los grupos de poder que iban a representar sus intereses.

En un primer momento los elencos gobernantes salieron con los fascistas ya que estaban convencidos de que podían dominarlos y a su vez triunfar sobre la izquierda con el objetivo de preservar el *statu quo*. Además, aunque en un principio los fascistas tuvieron un discurso anticapitalista, este fue rápidamente moderado. Una vez que llegaron al gobierno los líderes carismáticos, Hitler y Mussolini, no cuestionaron al capitalismo

pero sí lo subordinaron según sus objetivos para la realización del glorioso destino de la nación.

Ambos líderes carismáticos revolucionaron el Estado y la sociedad a través de organizaciones paralelas del partido. intervinieron en la educación, organizaron el uso del tiempo libre y se ocuparon de la movilización de las juventudes. todo esto con el fin de crear un hombre nuevo. Esto se logró a través del terror, que fue mucho más central en el nazismo, pero también fue uno de los múltiples instrumentos que pusieron en marcha para lograr la subordinación de la sociedad.

Finalmente el fascismo fue una forma de hacer política y de acumular poder con el objetivo de llegar al gobierno para revolucionar el Estado y la sociedad. Se presentó como una alternativa al liberalismo burgués en un contexto de avance de la izquierda, frente al comunismo se presentó como un opositor violento y como un restaurador del orden social. La experiencia fascista se distingue de los regímenes autoritarios tradicionales porque se enfocó en la movilización de las masas ya que buscaba contar con soldados convencidos. Si bien el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán fueron dos expresiones fascistas, es importante destacar que hubo importantes contrastes entre ambos, en el régimen nazi existió un peso importante el antisemitismo que fue más tardío y menos radical en Italia. En el nazismo hubo una plena conquista del estado y la sociedad lo que provocó una mayor autonomía de Hitler respecto a los grupos de poder.

5.1 El fascismo italiano

En la ciudad de Milán, en un mitin convocado por Benito Mussolini en un local de la plaza San Sepolcro el 23 de marzo de 1919, se constituyó oficialmente el fascismo. El fascismo italiano reunió la retórica del nacionalismo con el discurso del sindicalismo revolucionario y fue apoyado por los futuristas.

El sector del nacionalismo radical ya se había constituido incluso antes de la Primera Guerra Mundial pero alcanzó su más plena expresión luego de la paz de Versalles. El clima social se nutrió de la idea de una “victoria mutilada” que se combinó con una intensa movilización social, una economía con números negativos y gobiernos inestables.

En el período que va de 1919 a 1920 la conflictividad social fue alta. Estos dos años fueron llamados el “bienio rosso” y se caracterizó por la ocupación de algunos latifundios por parte de los campesinos y la ocupación de algunas grandes fábricas por los obreros. Estos estallidos no estaban coordinados y eran espontáneos, es decir, no formaban parte de un plan

revolucionario. Por esta razón, el primer ministro Giovanni Giolitti decidió esperar que estos movimientos se agotaran y no recurrió a la fuerza, lo que finalmente sucedió. Pero la actitud del primer ministro fue observada como una falta de firmeza para enfrentar al radicalismo revolucionario y generó críticas en los industriales y en la clase media que estaba temerosa del caos social. Allí fue que los discursos fascistas pudieron crecer ya que prometieron el uso de la fuerza para liquidar el peligro rojo. El fascismo había crecido hacia 1920.

Giolitti contribuyó al crecimiento del fascismo ya que, con el objetivo de neutralizar el peso de los legisladores socialistas y populares, se alió con Mussolini. En 1921, en las elecciones, “el facismo obtuvo treinta y cinco de las poco más de cien bancas de la lista liberal” (Béjar, 2011: 117). Esto generó que el Duce⁵ dejara de estar en la periferia de la escena política y ganara respetabilidad.

Italia sufría mucha violencia en las calles -que el propio fascismo fomentaba- lo que generaba una creciente debilidad del grupo gobernante. Por esta razón los fascistas decidieron organizar la marcha sobre Roma para ingresar al gobierno, en un contexto en el que no había voluntad política de frenarlos ante esta decisión. Fue de esta forma que Mussolini se puso al frente de un gobierno de coalición integrado por algunos fascistas y una mayoría de dirigentes de otras formaciones políticas en la que no estaba incluida la izquierda. Béjar (2011) afirma que hasta 1925, la monarquía semi-parlamentaria siguió funcionando bajo una cierta apariencia de normalidad. La política económica continuó bajo la ortodoxia liberal y favoreció el libre juego de la iniciativa privada a través de las privatizaciones. Sin embargo se dio curso a las primeras medidas destinadas a fortalecer al partido fascista como por ejemplo la creación del Gran Consejo Fascista como órgano consultivo paralelo al Parlamento Nacional. Pero en 1924 sucedieron dos hechos que posibilitaron el avance de Mussolini sobre las instituciones del estado liberal: una nueva ley electoral y las posteriores elecciones en medio de un ambiente de fraude y coacción. En 1924 el diputado socialista Giacomo Matteotti denunció a Mussolini en el parlamento y fue secuestrado y asesinado. El fascismo fue observado como el responsable de estos hechos y los diputados socialistas, populares y parte de los liberales por primera vez se aliaron contra el fascismo y abandonaron el parlamento en señal de protesta. Finalmente Mussolini pidió al rey que disolviera la cámara y en enero de 1925 asumió la responsabilidad.

⁵ Apelativo propagandístico mediante el cual el líder del fascismo italiano, Benito Mussolini se dio a conocer en la vida política.

Entre 1925 y 1928 sucedieron una serie de acontecimientos que condujeron a la Dictadura. Entre estos acontecimientos podemos nombrar el hecho de que el jefe de gobierno dejó de ser responsable de su gestión ante el parlamento, los partidos políticos fueron disueltos y quedó suprimida la prensa opositora. Además desde 1925 la política económica se orientó cada vez más hacia la intervención estatal y el proteccionismo. Se suprimió el derecho a huelga y los sindicatos fueron sustituidos por corporaciones fascistas obligatorias, se aprobó una legislación de seguridad social con significativos beneficios para los trabajadores. En 1933 se creó el Instituto para la Reconstrucción Italiana (IRI) que convirtió al estado en el principal inversor industrial. A través de la compra de acciones, el IRI nacionalizó muchas de las grandes empresas industriales al borde de la quiebra y controló las empresas de propiedad privada.

Los ciudadanos italianos aceptaron el nuevo régimen debido al relativo bienestar económico, la paz pública y a una política exterior que satisfacía el orgullo nacionalista.

Entre las medidas más importantes de la política exterior italiana podemos nombrar la guerra contra Etiopía, la constitución del eje Berlín-Roma, la intervención en la Guerra Civil Española y el ingreso en la Segunda Guerra Mundial.

En 1940 Mussolini entró tardíamente a la Segunda Guerra, movilizado por su afán de gloria y por la idea de que el triunfo del eje podría posibilitar la creación de un imperio italiano con base en los Balcanes y en África del Norte. Pero, luego de tres años de derrotas consecutivas, en julio de 1943, el rey Víctor Manuel III y el Gran Consejo Fascista aprobaron su destitución y encarcelamiento. Finalmente, Mussolini murió a fines de abril de 1945 ejecutado por partisanos italianos.

5.2 El nazismo en Alemania

Luego de finalizada la guerra en Alemania se sancionó la constitución, en la ciudad de Weimar, que dio lugar a la República de Weimar. Si viene el nuevo régimen republicano dejó intacto Los pilares de la Alemania imperial (la burocracia, los jefes y oficiales del ejército, la magistratura, el cuerpo policial) también reconoció el derecho al voto de todos los hombres y mujeres mayores de 20 años, dispuso la elección directa del presidente y adoptó un sistema de representación proporcional que asegura la presencia de los partidos minoritarios. Esta Constitución fue apoyada por los partidos conocidos como la coalición de Weimar entre los que encontramos a los socialdemócratas, los liberales y los católicos del centro y fue

rechazado por las fuerzas extremas de derecha e izquierda.

Bejar distingue tres periodos de la República de Weimar: una etapa inicial, que duró hasta 1923, carga de tensiones; otra de mayor estabilidad, entre 1924 y 1929; y un tercer momento de crisis que culminó con el ascenso de Adolf Hitler y el nazismo.

Los primeros años de la posguerra fueron críticos para Alemania ya que la economía sufrió bruscas oscilaciones debido al pago de las reparaciones de guerra. El año 1923 fue un año especialmente crítico ya que, por un lado, Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr con el objeto de cobrar las reparaciones de guerra. Por otro lado, el gobierno empezó a emitir moneda con el objeto de atender las necesidades de la población. Esto dio lugar a un escenario de hiperinflación y de crisis económica. En este contexto, se formó un gobierno de coalición que tomó drásticas decisiones para reducir el gasto público y recurrió a un crédito otorgado por Estados Unidos. Esto generó una posición altamente dependiente de Estados Unidos.

Además de los desafíos económicos, en 1919, se había producido un frustrado pero sangriento intento de crear una República soviética en Baviera. Esto dejó profundos temores por lo que el capitán del ejército alemán propuso que se realizarán cursos de adoctrinamiento con el objetivo de asegurar la lealtad de los soldados a los altos mandos. Hitler fue responsable de llevar adelante esta tarea y le encomendaron controlar al Partido Alemán de los Trabajadores. Este partido fue creado hacia fines de 1918 y combinó las ideas del nacionalismo, la defensa de los derechos del trabajador y el antisemitismo. Hitler terminó por volcarse de lleno a la actividad política. En 1920 este partido fue renombrado bajo el nombre de partido nacionalsocialista de los obreros alemanes y presentó un nuevo programa. Este consistió en 25 puntos que articulaban ideas de los nacionalistas extremos con reformas de sesgo socialista. Hitler se había convertido en el orador principal y cada vez más gente acudía a estas reuniones.

En 1923 asume el poder Stresemann y abrió un ciclo de relativa estabilidad de la economía alemana. Pero esto también implicó la ruptura del gobierno central con las autoridades de Baviera ya que observaban que Baviera se había convertido en la protectora de múltiples organizaciones nacionalistas radicalizadas. Como respuesta a esta ruptura de relaciones Hitler promovió un golpe de estado que fue violentamente reprimido por la policía. Hitler fue condenado a cinco años de prisión, aunque solo estuvo recluido nueve meses. Al salir, Hitler reordenó el partido para contar con una fuerza cohesionada.

La crisis de 1929 generó un impacto económico que provocó que el Nazismo pasara al centro de la escena. Contó con el apoyo de sectores medios y populares que reivindicaron este nuevo modo populista de hacer política. Béjar (2011:125) sostiene que “el avance electoral de los nazis a partir de 1930, fue posible, porque, en el marco del desgaste de los principales partidos y de la intensa activación ciudadana, fueron los que mejor supieron interpretar y representar las demandas de justicia social y rehabilitación del orgullo nacional”. El nazismo respondió a un anhelo de renovación nacional y de reforma social.

En 1933, Adolf Hitler asumió el poder de Alemania como resultado de una serie de factores estructurales que impactaron de lleno en la vida política interna de Alemania. Entre las causas que menciona Álvarez (2015) se encuentran las siguientes:

A) El régimen democrático de la República de Weimar tenía que devolver a los países vencedores de la 1ª Guerra Mundial (Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) una fuerte suma de dinero en concepto de reparaciones de guerra de la que no disponía. Esto provocó una gravísima crisis económica y el auge de los partidos conservadores extremos y del marxismo.

B) La economía alemana sufrió las consecuencias de la gran depresión de 1929 y se desarrolló una gran crisis hiperinflacionaria, una suba del desempleo a una tasa del 30% lo que provocó hambre en los alemanes.

C) Las cualidades carismáticas de Hitler permitieron atraer tanto a latifundistas como a industriales.

A mediados de 1933, todos los partidos políticos habían sido prohibidos. En marzo de 1933 se había inaugurado el primer campo de concentración. A partir de 1933, las ideas y actuaciones del nazismo se centraron en la implantación de un gobierno dictatorial que apoyaba a una milicia popular urbana, la militarización del pueblo y los ataques a la democracia, el judaísmo internacional y el comunismo (Álvarez, 2015).

Una vez que se consolidó la posición de Hitler, la dictadura no asumió una organización jerárquica centralizada, sino que el gobierno personalista se combinó con la fragmentación de la trama estatal. Según Béjar (2011) el estado alemán quedó sin ningún organismo central coordinador, con un jefe de gobierno poco dispuesto a dirigir el aparato burocrático. A partir de ese momento, principios de la década de los treinta del siglo pasado el partido nazi y su líder son el centro del Estado.

En sus inicios, la política económica del nazismo fue eficaz ya que a fines de 1933 el número de desempleados se había reducido y en 1936 casi había desaparecido. Además, se mejoraron las condiciones de trabajo y de vivienda. Álvarez (2015: 91) sostiene que “entre 1934 y 1939, la Alemania nazi gozó de excelentes estándares de vida para la clase media y alta, gracias especialmente a la utilización de trabajadores forzados o esclavos judíos y disidentes políticos alemanes que trabajaban, prácticamente gratis, en las principales empresas alemanas y al libre despido de los trabajadores. Además, en 1935, se aumentó la jornada laboral de 60 a 72 horas semanales”. La política económica del Estado nacionalsocialista tuvo como objetivo prioritario la protección y el fomento del Gran Capital Monopolista, y así se manifestó en la mayoría de sus medidas políticas. En este sentido pueden distinguirse dos tipos de medidas: las destinadas a la obtención de mercados para el capital en el interior del país impulsando una política de obras públicas por toda Alemania. Se iniciaron importantes trabajos de comunicación vial (carreteras o Autobahn); en siete años de su gobierno se construyó una red de autopistas nacionales de 12.000 kilómetros que aún hoy en día se utiliza, además de presas hidráulicas, ferrocarriles y edificios majestuosos. Entre 1933 y 1938 se construyeron en Alemania 677.870 edificios que contenían unas 1.458.124 viviendas populares. La segunda tendencia económica nazi era potenciar el comercio exterior y la economía de guerra. El problema central con que se enfrentaba la economía alemana estribaba en las limitaciones de su mercado interior; ello obligó al capital monopolista alemán a orientar sus perspectivas hacia el exterior.

Álvarez (2015) afirma que durante la dictadura nazi la economía alemana creció significativamente y consiguió, en pocos años, estabilizar el marco, reducir significativamente la inflación y acabar con el paro. Sin embargo, estos éxitos económicos se consiguieron sin tener en cuenta los más elementales derechos humanos y sociales, se potenció la economía de guerra (producción de armas, tanques, aviones...) que llevaría, inevitablemente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el régimen nazi, Alemania se embarcó en una política expansionista y adoptó una ideología racista y antisemita.

Ante esta situación, las potencias occidentales, como Francia y el Reino Unido, adoptaron una política de apaciguamiento hacia Alemania, tratando de evitar otro conflicto a través de concesiones territoriales. Sin embargo, estas concesiones no lograron frenar las ambiciones expansionistas de Hitler.

En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó al Reino Unido y Francia a declarar la guerra a Alemania. Esto marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia desde el oeste, utilizando tácticas de guerra relámpago conocidas como *Blitzkrieg*. Utilizando una combinación de fuerzas terrestres, aéreas y blindadas, Alemania logró una rápida victoria sobre las fuerzas polacas, que se vieron superadas y superadas en número.

El Reino Unido y Francia, comprometidos a defender Polonia, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, durante los meses siguientes, hubo una relativa inactividad en el frente occidental, conocido como la “guerra de broma” o “la guerra falsa”, ya que no hubo grandes enfrentamientos militares. Mientras las potencias aliadas se preparaban para un conflicto más amplio, Alemania continuó su expansión. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, asegurando importantes bases estratégicas en el norte de Europa. Luego, en mayo de 1940, lanzaron una ofensiva sorpresa contra los Países Bajos, Bélgica y Francia, derrotando a estas naciones y obligando a Francia a firmar un armisticio.

Después de la derrota de Francia, Hitler planeaba invadir Gran Bretaña. Sin embargo, la Real Fuerza Aérea británica (RAF) logró resistir los ataques aéreos alemanes en la Batalla de Gran Bretaña, que se libró principalmente en el aire entre julio y octubre de 1940. La resistencia británica y la capacidad de la RAF para defender el territorio llevaron a la cancelación de los planes de invasión alemanes.

Mientras tanto, en junio de 1941, Alemania rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética y lanzó una invasión a gran escala conocida como la Operación Barbarroja. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente y obtuvieron importantes victorias iniciales, pero finalmente fueron detenidas y rechazadas por la resistencia soviética y las duras condiciones invernales. La guerra en el frente oriental se convirtió en un conflicto prolongado y brutal.

A pesar de la política de neutralidad inicial, Estados Unidos se unió a la guerra después del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Esto marcó la entrada de Estados Unidos en la guerra y la transformó en un conflicto global. A medida que la guerra se desarrollaba, las potencias aliadas, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y otras naciones, lanzaron ofensivas militares en múltiples frentes.

Finalmente, en 1945, las fuerzas aliadas lograron victorias decisivas, incluyendo la liberación de Francia, la derrota de las fuerzas alemanas en

el frente occidental y la conquista de Berlín por parte del Ejército Rojo soviético. La rendición incondicional de Alemania se produjo el 8 de mayo de 1945, marcando el fin de la guerra en Europa.

La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores en la historia de la humanidad, con un saldo de millones de vidas perdidas y una destrucción generalizada en todo el mundo.

El nazismo llegó a su fin con la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y los eventos posteriores entre las que podemos nombrar las siguientes:

1) Alianza de las potencias aliadas: Las potencias aliadas, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, se unieron para luchar contra las fuerzas del Eje, encabezadas por Alemania. Juntos, llevaron a cabo una serie de campañas militares que condujeron a la liberación de los territorios ocupados por los nazis.

2) Caída de Berlín y muerte de Hitler: En abril de 1945, las tropas soviéticas tomaron Berlín, la capital alemana. Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril de 1945. Con su muerte, el liderazgo nazi se desintegró.

3) Juicios de Núremberg: Después de la guerra, se llevó a cabo una serie de juicios conocidos como los Juicios de Núremberg, en los cuales los líderes nazis fueron procesados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Esto generó la desnazificación y la reconstrucción de Alemania.

6. Bibliografía

- Álvarez, B. C. (2015). El ascenso de Hitler y del partido Nazi al poder en Alemania. *Historia Digital*, 15(26), 56-120.
- Béjar, M. D. (2019). *Historia del siglo XX: Europa, América, Asia, África y Oceanía*. Siglo XXI Editores.
- Hobsbawm, E. J. (1998). *Historia del siglo XX* Buenos Aires, Crítica
- Llopis, M. T. S. (2014). La economía del periodo de entreguerra, 1918-1939. In *Los tiempos cambian: historia de la economía* (pp. 169-196). Tiran lo Blanch.
- Paris, R., & Massano, A. J. (1976). *Los orígenes del fascismo*. Tradução Elisabete Perez, Revisão: Mary Amazonas.
- Times Books Ltd. (1996) *Atlas de historia de la humanidad*. Santiago, 1996.
- Velarde Rosso, J. (2017). Breve revisión a la historia de la Unión Soviética en el centenario de la Revolución Rusa. *Revista Ciencia y Cultura*, 21(38), 85-120.

Los años dorados del capitalismo

Andrea Ariza

1. ¿A qué llamamos años dorados del capitalismo?

Durante los “años dorados” del capitalismo, que abarcan desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, la economía mundial experimentó un crecimiento económico sin precedentes. En gran medida, esto se debió al aumento de la producción en masa, el consumo masivo y el crecimiento de la clase media. A su vez, esto creó un ambiente favorable para la economía mixta, en la que se combinaban elementos del capitalismo y del socialismo.

A finales de los años 70, cuando el crecimiento económico había pasado, muchos analistas históricos comprendieron la importancia de la era de prosperidad económica que habían transitado. Esta etapa fue bautizada como “años gloriosos”, “edad de oro” o “años dorados”. Estos adjetivos intentaban representar lo que había acontecido en el tercer cuarto del siglo XX. Pero también, según Piketty (2014), intentaba caracterizar lo que había sucedido luego de esa fecha, en la que la economía se caracterizaba por un ritmo mucho más lento a su época antecesora. Perren y Padin (2019) sostienen que los años 1950 sirven como punto de partida para observar el pasado y poder reconocer la singularidad de esta época del capitalismo.

Para iniciar el análisis de la época dorada del capitalismo, nos situaremos en Estados Unidos. Según Perren y Padin (2019), los veinticinco años que siguieron a la rendición del *Reich* (7 de mayo de 1945) consistieron en un crecimiento continuado que había comenzado a insinuarse con el segundo *New Deal* a finales de los años treinta y que se volvió una realidad en 1942, cuando la economía norteamericana orientó todos sus esfuerzos a derrotar al Eje. En Europa Occidental, la guerra había dejado una vasta destrucción de la economía y fue por esta razón que los imperios globales se concentraron en recuperar las economías quebradas y contener el avance del comunismo. Y este es uno de los factores que debemos considerar para el análisis del periodo: el crecimiento del bloque capitalista. Durante la década del sesenta, la Unión Soviética había crecido a un ritmo superior a otros países occidentales.

Estas tres situaciones diversas no permitieron observar la enorme bonanza económica que representaron los veinticinco años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Perren y Padin (2019) afirman que

se trató de una fase de súper crecimiento económico en la que la tasa de crecimiento de la economía estadounidense, durante la década del sesenta, superó la barrera del 3% anual. Esto representaba una actuación 50% superior a la media histórica del periodo 1914-1950. En Europa, el crecimiento económico entre 1950 y 1970 fue el doble al correspondiente al periodo de entreguerras. En Japón, las tasas de crecimiento fueron milagrosas y representaron un incremento del 10% anual a lo largo de la década de 1950 y 1960.

El motor del crecimiento económico estuvo en la industria, especialmente en el segmento dedicado a la producción de bienes de capital, de consumo durable y de automotores. Perren y Padin (2019) afirman que la tasa de crecimiento del producto industrial fue superior al conjunto de la economía. Además, en Japón, al calor del montaje de un modelo industrial exportador, también creció el sector secundario a una tasa superior al 13%. En esta década, la producción manufacturera mundial se cuadruplicó y el comercio industrial se multiplicó por diez. Este crecimiento generó que, entre 1950 y 1977, el peso del sector secundario sobre el total de la economía global pasará de ser un 23% a un 30% (Fajnzylber, 1984). En resumen, la industria fue la locomotora que impulsó el crecimiento de un sistema económico que recuperaba su alcance mundial, luego de la tendencia aislacionista de las guerras y las crisis.

Los grupos de países que fueron denominados bajo el nombre *Tercer Mundo*, mostraban un nivel de desarrollo menor a la media. Sin embargo, la demanda de productos primarios generó que estas economías mostraran un nivel ascendente.

Esta fase de crecimiento económico a escala planetaria estuvo atravesada por el desarrollo desigual, pero también, según Perren y Padin (2019), por la contaminación y el deterioro ecológico. Según los autores, el ecocidio dio sus primeros pasos en el periodo comprendido entre los años 1945 y 1973. La ideología del progreso justificaba el daño ambiental en pos del desarrollo. Tal es así que un signo de la época fueron las emisiones de carbono y la multiplicación del consumo energético.

Existía una perspectiva utilitarista de la naturaleza en la que los recursos naturales debían servir al desarrollo económico. Los recursos eran considerados infinitos y esto estaba muy relacionado con el aumento de la productividad, una de las características principales del crecimiento. Esto se observó en la universalización del modelo norteamericano, sobre todo en lo referido a la producción de automóviles (Hobsbawm, 1998). Este modelo fue titulado con el nombre de fordismo, en honor al empresario

estadounidense Henry Ford, y se caracterizaba por la producción industrial en serie.

Europa apostó a la producción masiva de automóviles, que hasta entonces era un patrimonio casi exclusivo de Estados Unidos, Así emprendió la tarea de producción de vehículos populares que se ajustaban al bolsillo de consumidores que veían el incremento de su capacidad de consumo. El modelo productivo fordista fue aplicado en las plantas industriales de la región europea y se originaron nuevos modelos de automóviles tales como el Fiat 600, el 3CV, el Volkswagen tipo 1 -o Escarabajo- y el Seat Panda. Perren y Padin (2019) destacan que lo llamativo de este proceso fue que el modelo fordista fue aplicado en Europa mientras en Estados Unidos este modelo era opacado por el Sloanismo, una nueva propuesta de producción.

El *fordismo*, o la producción en serie de bienes estandarizados, se extendieron a diferentes áreas del ámbito productivo durante las décadas centrales del siglo XX en Estados Unidos. Este tipo de producción generó un aumento súbito de la productividad. Existen dos ejemplos que permiten visualizar los efectos de esta producción en serie. En primer lugar, nos encontramos en el campo de la gastronomía, en la hoy famosa cadena de comidas rápidas *McDonald's*. En 1940, y luego de ocho años de haber creado un restaurante, los hermanos Dick y Mac McDonald decidieron dedicarse solo a producción de comida rápida y limitar el menú a hamburguesas y papas fritas y aplicaron una cadena de montaje para la elaboración de estos alimentos. Esta iniciativa tuvo gran éxito y en 1968, veinte años después de su creación, tenían mil restaurantes. En segundo lugar, observamos la expansión que tuvieron las casas prefabricadas durante los años dorados. En un contexto de suba de los precios de las viviendas, las empresas especializadas en la construcción de casas prefabricadas -que hasta entonces eran móviles- decidieron brindar materiales de mayor calidad y más comodidad y transformar esas viviendas móviles en viviendas estáticas que eran mucho más accesibles que las viviendas de ladrillo. Perren y Padin (2019) afirman que podemos encontrar numerosos ejemplos del modelo de producción fordista, y que la expansión de la frontera fordista intensificó el crecimiento de Estados Unidos lo que provocó un alza consistente en el producto bruto per cápita.

La innovación tecnológica fue otro de los aspectos que contribuyó al crecimiento económico. La época que comprende los años 1959 a 1973, fue un momento especialmente prodigioso en términos de avances tecnológicos, lo que contribuyó a multiplicar los bienes existentes y crear nuevos

productos. Muchos de los avances tecnológicos que se habían utilizado durante la guerra pasaron a ser empleados con fines civiles, por ejemplo el uso de los aviones de propulsión para la aeronavegación comercial, el desarrollo de centrales de energías¹, la comercialización de alimentos envasados², entre otros. Todas estas innovaciones introdujeron sustanciales mejoras en la vida cotidiana de la sociedad. Esta auténtica revolución tecnológica generó una brecha aún mayor entre los países ya que el sector de investigación y desarrollo admitió pocos actores. Por eso mismo, los pensadores y/o políticos de países periféricos entendieron la importancia de adquirir, construir y desarrollar la ciencia y tecnología nacional.

2. Orígenes de la edad dorada

Como bien observamos en el apartado anterior, los “años dorados” consistió en una fase de extraordinario crecimiento con un aumento sostenido de la productividad. Cabe preguntarse cuáles fueron las causas que permitieron el desarrollo de esta fase, cómo logró el sistema capitalista sobrevivir y superar la época de guerras mundiales y crisis económicas, y cuáles fueron los procesos que permitieron el desarrollo y consolidación del socialismo.

Perrén y Padín (2019) proponen que, para responder a estas preguntas, nos enfoquemos en entender los fenómenos que llevaron a la economía mundial a mejorar su productividad. Hobsbawm (1998) afirma que la edad dorada del capitalismo fue el resultado de dos procesos que generaron una multiplicación de consumidores dispuestos a adquirir todo tipo de bienes y servicios. Esos dos procesos son:

- a) La reestructuración del capitalismo
- b) el primer jalón de la globalización

2. a. La reestructuración del capitalismo

El liberalismo, como doctrina económica, se vio cuestionada como resultado de las continuas crisis económicas y esto generó un consenso alrededor de la conveniencia de someter a las fuerzas del mercado a una severa disciplina. Esta disciplina solo sería exitosa si el Estado asumía un rol protagónico.

¹ Estas siguieron los principios de las bombas nucleares que estallaron en Hiroshima y Nagasaki.

² Alimentos que habían nutrido a las tropas de soldados durante las batallas.

La crisis económica que vivía el conjunto de los países centrales llevaba a la conclusión de que el auxilio estatal era un instrumento indispensable para salir de la crisis. La ayuda gubernamental contribuiría a mejorar el mercado de empleo lo que dinamizaría la demanda y llevaría al crecimiento económico. Las crisis sufridas en 1873 y en 1930 eran una prueba de las consecuencias de llevar al extremo los principios del *laissez faire*. Estas experiencias llevaron a pensar que el capitalismo debía ser salvado de sí mismo, tal como sostiene Hobsbawm (1998: 274) “la economía de la empresa privada tenía que ser salvada de sí misma para sobrevivir”.

Esto generó aprendizajes y produjo una reestructuración del capitalismo que llevó a cambios en su fisonomía. Perrén y Padín (2019) sostienen que surgió un arreglo institucional que tomó préstamos de tres fuentes ideológicas:

- Viejo liberalismo: tomó su defensa irrestricta de las libertades individuales y el derecho de la propiedad privada: pilar fundamental del capitalismo.
- Socialdemocracia: rescató dos elementos fundamentales para dejar atrás la inestabilidad y estimular la industria. En primer lugar, el hecho de que las transformaciones deben ser graduales y, en segundo lugar, rescató la importancia de mejorar la vida de los trabajadores, ampliar los derechos sociales y retomar la agenda de reclamos planteadas por los sindicatos en los primeros años del siglo XX.
- Unión Soviética: recuperó la importancia de que el Estado gobierne sobre las principales variables macroeconómicas y planifique el desarrollo de los sectores estratégicos.

Esto dio lugar a un liberalismo embridado, en palabras de David Harvey (2007), un mix particular que compatibiliza la actividad privada y un rol activo del Estado que modera las tendencias autodestructivas del capitalismo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial el legado de Keynes cobró aún mayor protagonismo y se convirtió en una guía para la gestión económica de la mayoría de los países occidentales.

Keynes sostenía que cuando la mano invisible del mercado no contribuía a generar una demanda suficiente para poner en marcha la producción, el Estado debía tomar un rol activo y remediar la situación. Para ello, tenía diversas herramientas tales como la posibilidad de absorber el ahorro empresario a través de bonos públicos que aseguran tasas de interés atractivas, establecer un esquema de impuestos progresivos o alimentar

presupuestos deficitarios (Kicillof, 2007). Es decir, siguiendo la doctrina keynesiana, podía aumentar el gasto público, la inversión y el consumo que llevaría a salir de la situación económica recesiva. Samuelson (2005) afirma que el keynesianismo descubrió un modo de moderar las alzas y bajas del ciclo económico que durante la primera mitad del siglo XX habían resultado indomables.

Esta manera de mirar la economía y el creciente rol que debía tener el Estado llevó a considerar la importancia de combinar el crecimiento económico con un nivel de equidad, por lo que devino sumamente relevante crear climas de armonía entre los empresarios y los trabajadores. Los sindicatos y el Estado tomaron un rol clave a nivel nacional para llevar adelante esta tarea. Estos dos actores tenían como tarea mediar en las relaciones entre capital y trabajo. De esta forma, del clima de enfrentamiento que había caracterizado a la escena económica durante la primera década del siglo XX³ pasamos a una época de negociaciones entre empresas, Estado y sindicatos. Perrén y Padín (2019) afirman que para que el acuerdo básico keynesiano funcione, las demandas de los trabajadores no debían interferir ni reducir el beneficio empresarial y la posibilidad de inversión a escala ampliada. El Estado tenía como función garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los trabajadores y las empresas y desarrollar un esquema de contención para aquellas personas que quedaran desempleadas. Estas dos funciones estatales garantizarían un clima de estabilidad social. Según lo postulado por los keynesianos, una relación virtuosa entre productividad, salario y beneficio generaría un aumento sostenido de la demanda que llevaría al crecimiento económico pero también evitaría la expansión del comunismo y de la Unión Soviética.

2. b. Primera etapa de la globalización

La segunda característica mencionada por Eric Hobsbawm está vinculada a la primera etapa de la globalización. El autor sostiene que el mundo que emergió luego de la guerra poseía nuevas características, entre ellas, una nueva potencia: Estados Unidos. El país del norte poseía un aparato industrial intacto, que no había sufrido las consecuencias de la guerra, detentaba tres cuartas partes de las reservas de oro y centralizaba el grueso del comercio mundial.

Dadas estas características, Estados Unidos tuvo un rol protagónico durante la década de 1940, sólo rivalizado por la Unión Soviética. Esto

le permitió modelar un sistema internacional a su imagen y semejanza. Esta primacía se pudo observar en el hecho de que el dólar se convirtió en la moneda patrón como resultado del acuerdo de Bretton Woods, así el gobierno norteamericano era el emisor de la divisa mundial. Además, dos nuevas instituciones con sede en los Estados Unidos tendrían la tarea de ayudar a otras naciones a recuperarse económicamente: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento luego convertido en Banco Mundial. El FMI se encargaría de financiar desequilibrios económicos transitorios y el Banco Mundial sería una institución clave para la reconstrucción de las economías que habían sido arruinadas por la guerra. Perrén y Padín (2019: 9) sostiene que “los límites de este nuevo orden se redondearon con la creación, en 1947, del GATT, un acuerdo arancelario que, sobre la base de la progresiva eliminación de las políticas de protección que siguieron a las primeras décadas del siglo XX, prestaría las bases del libre comercio”. La formación de este entramado institucional reforzó la hegemonía estadounidense y llevó a que Estados Unidos desempeñara un papel parecido al de Gran Bretaña en el siglo XIX.

Hobsbawm (1998) afirma que el liderazgo que adquirió Estados Unidos no se tradujo en una política comercial agresiva como si lo fue Gran Bretaña en la era del imperio, 1873-1914. Hobsbawm observa que la elevada productividad que tenía Estados Unidos podría haber destruido las producciones locales de muchos países. Las razones de esa no agresividad se encuentran en el contexto de la confrontación entre capitalismo y comunismo llamada “guerra fría”, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. En ese marco, Estados Unidos debió ayudar a sus competidores con el objetivo de evitar el avance de la influencia de la Unión Soviética.

Perrén y Padín (2019) brindan tres ejemplos de esta ayuda de Estados Unidos:

- EEUU giró fondos por un valor de 12 mil millones de dólares de la época, a través del Plan Marshall, para reconstruir Europa Occidental.
- Invirtió 23 mil millones de dólares en gastos militares en Japón, en el contexto de la guerra de Corea en 1950.
- En América Latina, luego de la Revolución Cubana, recorrió un camino parecido ya que entre 1961 y 1970, John F. Kennedy desarrolló un programa de asistencia financiera que se llamó Alianza para el Progreso. Este programa le otorgó a los países de la región un total de 20 mil millones de dólares.

³ La Revolución Rusa ocurrida en 1917 es uno de los mayores ejemplos del clima de enfrentamiento que se vivía en la sociedad por las condiciones de desigualdad que traía aparejado el desarrollo del capitalismo.

Este fue el costo que el país del norte debió pagar para sustentar y consolidar un orden mundial capitalista. En esta etapa la economía mundial se volvió más abierta que en cualquier otro momento del siglo XX. Esta apertura se debió en parte por el conjunto de instituciones que surgieron luego de la segunda guerra, pero también por la política aperturista propiciada por los Estados Unidos. Hobsbawm (1998: 272) señala que “entre 1900 y 1930 el comercio mundial había crecido a una tasa del 2% anual, entre 1945 y 1970 ese incremento se multiplicó por cuatro”. Perrén y Padín (2019) sostienen que, como en la era del capital en el corazón del siglo XIX, había una circulación de factores productivos. En el periodo comprendido entre 1848 y 1873, existieron flujos migratorios internacionales que permitieron a países como Estados Unidos robustecer su mercado interno (Hobsbawm, 1998). En los *años dorados*, en cambio, hubo una retracción de estos flujos migratorios internacionales pero se produjeron movimientos migratorios del campo a las ciudades. Las economías mixtas fueron impulsadas por trabajadores que provenían de áreas rurales que, por la tecnificación del campo, fueron expulsados de esas áreas. Conkin (2008) menciona que en la década de 1940 más de 5 millones de estadounidenses se desplazaron del campo a la ciudad y un 10% se trasladó de un Estado a otro.

Sin embargo, pese a la multiplicación de los consumidores en todo el mundo, el sistema económico surgido en 1950 fue internacional más que transnacional. Es decir, el grueso de las producciones nacionales se dirigía al mercado doméstico, aunque las naciones intercambiaban bienes y servicios. Perrén y Padín (2019) afirman que las economías mixtas, surgidas a partir de la doctrina keynesiana, funcionaban más cómodamente dentro de los límites nacionales ya que, al interior de sus fronteras, era donde se implementaban políticas de administración de la demanda y se negociaban salarios y beneficios que permitían un aumento progresivo de la productividad. Lo que se comercializaba en el mercado exterior era un excedente. Marglín y Schor (1990: 3) declaran que “en el punto más alto de la edad de oro, los Estados Unidos tan solo exportaban el 8% de su PBI, y Japón, pese a su voluntad exportadora, tan solo un poco más”.

Perrén y Padín (2019) distinguen tres aspectos, o elementos transnacionales, que nos advierten que para un conjunto de actores las fronteras nacionales empezaban a ser problemáticas:

- El primer elemento se relaciona a las actividades offshore en paraísos fiscales. El crecimiento de la actividad económica también produjo un incremento en la presión impositiva sobre las empresas y personajes

que obtenían mayores ingresos. Por ejemplo, mencionan que los contribuyentes de Francia, Inglaterra y Alemania debían enfrentar una carga que equivalía a un tercio del PBI, mientras que en Estados Unidos era superior a un cuarto. Como mecanismo para escapar a esta presión fiscal, empezaron a abrir cuentas en paraísos fiscales, caracterizados por aplicar un régimen tributario favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. Este tipo de mecanismos fue especialmente favorable a países como las Islas Caimán, las Bahamas, la Seychelles o las Bermudas.

- El segundo elemento está vinculado a las empresas multinacionales y el creciente peso que empezaban a tener. La escala de sus operaciones cada vez era mayor, por ejemplo, Hobsbawm (1998) muestra que las ventas de las 200 mayores firmas representaban en 1960, el 17% del PBI mundial. En el caso de las empresas automotrices esto era mayor, el volumen de ventas de Ford superó el PBI de Noruega, un país mediano. También esto se observaba en el funcionamiento, en 1970, el 25% del total del comercio mundial se realizaba entre filiales de una misma empresa multinacional. Esto llevó a una facilidad para trasladar activos, financieros y no financieros en muchos casos con carácter especulativo. Lo que produjo que la relación entre multinacionales y los países sea más compleja, ya que los intereses de las multinacionales podían no coincidir con el país en el que estaba asentada.

- El tercer elemento está fuertemente vinculado con el anterior y tiene que ver con el hecho de que las multinacionales demostraron cierta tendencia a independizarse de los Estados a medida que se descentralizaba la producción. La división internacional del trabajo contemplaba países productores de bienes primarios y países manufactureros no dejó de representar la economía mundial pero fue objeto de una profunda reformulación. Esto sucedió porque, debido a la transformación en las comunicaciones y los transportes, las multinacionales establecieron fábricas o plantas en los países periféricos con el objetivo de reducir costos salariales. Esto puso en cuestión los acuerdos básicos keynesianos y los sindicatos perdieron capacidad de negociación. “La cadena de producción ahora ya no atravesaba hangares gigantescos en un solo lugar, sino el mundo entero” (Hobsbawm, 1998: 283). Los productos manufacturados podrían ser el resultado de ensamblajes de distintos países lo que exhibió un comportamiento multi-territorializado. Esto ya se empezó a ver en los años 60, y cuando esta tendencia maduró, las exportaciones industriales del tercer mundo se duplicaron (Frobel, Heinrichs y Kreye, 1986).

3. El ocaso de los años dorados

Las economías mixtas parecían ser imparables, sin embargo llegó su ocaso. Entre las primeras causas que explican la caída de este modelo económico es el desgaste sufrido por la principal potencia, Estados Unidos. Las consecuencias de la guerra de Vietnam produjeron un crecimiento del gasto público y del déficit fiscal. El superávit comercial que tenía Estados Unidos le permitió transitar de forma tranquila los primeros cinco años de la década de 1960, aunque su nivel de exportaciones era un poco inferior a las importaciones.

Perrén y Padín (2019) sostienen que Estados Unidos constituyó un orden mundial que tenía como pilar el desarrollo de sus potenciales competidores. Sin embargo, ese desarrollo puso en riesgo la performance económica del país del norte y con eso también la estabilidad del mundo de la posguerra. En el año 1971, Estados Unidos observó la pérdida del liderazgo industrial en manos de Alemania y Japón y se enfrentaba a una inflación doméstica del 6%. Esto provocó tensión sobre el tipo de cambio y el gobierno de Estados Unidos no pudo garantizar la paridad de (USD35= onza de oro), por lo que el presidente Nixon declaró la inconvertibilidad de la divisa norteamericana. Esto implicó el fin de los acuerdos de Bretton Woods que durante veinticinco años rubricó el comercio internacional.

Además de los factores monetarios, hubo también factores demográficos y sociales. Durante la primera etapa de expansión y constitución del modelo económico, la abundancia de mano de obra como resultado de la migración fue uno de los motores fundamentales. Sin embargo, los índices de crecimiento demográfico no acompañaron el ritmo de crecimiento económico, el PBI creció a un mayor ritmo que la fuerza laboral. Esto generó una escasez relativa de mano de obra. Además, apareció una nueva generación de trabajadores que no suscribían a los acuerdos keynesianos y, por lo tanto, las negociaciones entre las empresas, el Estado y los sindicatos perdieron valor y el conflicto social fue parte de la nueva cotidianidad. Entre los acontecimientos que sirven de ejemplo de esta afirmación se encuentra el mayo francés, el Cordobazo en Argentina, la masacre de Tlatelolco en México y la ola de huelgas en el Viejo Continente. Este resurgimiento del conflicto vertical entre empresarios y trabajadores generaba presión sobre el modelo productivo y sobre los índices de productividad. Hacia fines de la década de 1970 se produjo una cadena de situaciones (presión salarial, caída de tasas de ganancias) que produjo el fin del crecimiento económico.

Brenner (1988) menciona, además, que hubo conflictos entre empresas industriales de distintos orígenes, es decir, se dieron también conflictos horizontales. Las compañías estadounidenses tuvieron, durante la etapa inmediata de la posguerra, el monopolio de la producción manufacturera. Sin embargo, Alemania y Japón tuvieron una recuperación veloz lo que generó conflictos con las empresas norteamericanas ya que producían los mismos bienes. Este conflicto horizontal generó un exceso de oferta que se tradujo en la reducción de los precios de los bienes y, como resultado, un decrecimiento de la tasa de beneficios de las empresas. Para intentar revertir esta situación, las empresas apostaron a la innovación tecnológica que terminó generando una sobreinversión que agudizó la crisis de las grandes corporaciones.

Durante la década de 1970, las limitaciones de la economía mixta se hicieron evidentes. La crisis del petróleo de 1973, que consistió en un alza generalizada del valor del barril, y el aumento del desempleo y la inflación señalaron el inicio de un período de estancamiento económico y cambio político en los países capitalistas occidentales. En consecuencia, la economía mixta se enfrentó a una creciente presión y crítica, y muchos países comenzaron a adoptar políticas neoliberales que redujeron el papel del Estado en la economía y promovieron la libre competencia y el libre mercado.

Bibliografía

- Conkin, P. (2008). *A Revolution Down on the Farm: The Transformation of American Agriculture since 1929*. Lexington: University Press of Kentucky.
- Costanzo Caso, C. y Storti, L. (2013). *La marea despliega su mirada*. En: Quintar, J. (Coord.). *Tras las huellas de Prospero. Industria y pensamiento económico en el siglo XIX*. Neuquén: EDUCO.
- Harvey, D. (1998). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid. Akal.
- Hobsbawm, E. (1998). *Historia del siglo XX*. Buenos Aires, Crítica.
- Hobsbawm, E. (1998). *La era del capital (1848-1873)*. Buenos Aires, Crítica.
- Kicillof, Axel (2007). *Fundamentos de la Teoría General. Las consecuencias teóricas de Lord Keynes*. Buenos Aires, Eudeba.
- Perren, J. y Padín, N. (2019). "Los años dorados del capitalismo. Génesis, desarrollo y crisis de la economía mixta (1950-1973)" en *Historia Regional*, sección historia, ISP N° 3, Villa Constitución, Año XXXII, N° 40, enero-junio 2019, pp. 1-13.

- Samuelson, P. (2005). *Economía*. México: Mc Graw-Hill.
- Schwarz, B. (1997). *Estados Unidos y la dirección del mundo*. Nueva Sociedad, 148, Marzo-Abril.
- Zambón, H. y Giuliani, A. (2011). *Introducción al pensamiento económico*. Neuquén: EDUCO.

El surgimiento del peronismo y sus dos primeros gobiernos. Un análisis de las transformaciones económicas y políticas.

Gastón Kneeteman

El surgimiento del peronismo en la Argentina atraviesa todas las líneas disciplinares de los trabajos académicos. No sólo puede considerarse como la temática central en el análisis de autores y autoras de las más diversas posiciones político-ideológicas, sino que también se constituyó como el problema científico fundante de la sociología, primero, y de la ciencia política, después. La antropología social y luego la etnografía (extendida como método a otras disciplinas) también tuvieron al peronismo como eje central de sus investigaciones. Entonces, en su gran mayoría, las ciencias sociales y humanas se originaron (localmente) para “explicar al peronismo”; más allá de la intención de científicos y científicas, esto le otorgó al movimiento variadas herramientas que posibilitaron múltiples resignificaciones a lo largo de la historia.

El análisis del contexto de posguerra. El contexto internacional en el surgimiento del peronismo

Resulta imprescindible destacar aquí que Bretton Woods fue una conferencia celebrada en 1944 en la localidad de ese mismo nombre, ubicada en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, que dio lugar a la creación de instituciones financieras internacionales, incluido el FMI. Dicha conferencia también estableció un sistema de tipos de cambio fijos en relación con el dólar estadounidense, conocido como el Sistema de Bretton Woods. Esta situación demuestra claramente el planteo inicial de Rapoport (2020) acerca de la hegemonía estadounidense en la posguerra: la centralidad de EE.UU. se entiende claramente si pensamos, siguiendo a Hobsbawm (1999), que –después de la Segunda Guerra Mundial– gran parte de Europa estaba en ruinas. El conflicto había dejado una devastación masiva en términos de infraestructura, viviendas y recursos económicos, lo que generó una urgente necesidad de reconstrucción económica.

El historiador inglés destaca, en el trabajo antes citado, la importancia del Plan Marshall para reconstruir Europa, y también señala su principal característica: fue un programa de ayuda económica masiva proporcionado por los Estados Unidos a países de aquel continente arrasados por la guerra. Dicho plan, que se implementó en la década de 1940, inyectó capital y recursos en la economía europea, lo que ayudó de manera significativa en la

reconstrucción y recuperación de la región. Sin embargo, al mismo tiempo implicó el dominio estadounidense en la porción “occidental” europea¹.

Cuadro 4.1. Ayuda norteamericana a Europa Occidental (en millones de dólares)

Año	Ayuda militar	Donaciones	Préstamos de largo plazo	Total	% del total de exportaciones
1947	43	672	3.737	4.452	24
1948	254	2.866	1.213	4.333	22
1949	170	3.951	503	4.624	26
1950	463	2.775	180	3.418	19
1951	1.112	2.317	84	3.513	11
1952	2.151	1.453	453	4.057	9
1953	3.435	1.138	172	4.745	6
1954	2.313	1.018	105	3.436	5
1955	1.593	800	74	2.467	4
Total	11.534	16.990	6.521	35.045	13

Fuente: Gilles, Philippe. *Crises et cycles économiques*, París, 1995

Una cuestión elemental a tener en cuenta es que la Europa de la posguerra, en muchos aspectos, se había organizado antes de concluido el conflicto bélico. Así, durante la conferencia de Yalta se discutieron cuestiones relacionadas con el fin de la guerra y la reorganización de Europa tras la conflagración. La Conferencia de Yalta tuvo lugar en febrero de 1945, y los protagonistas fueron los líderes de las tres grandes potencias de los Aliados: Roosevelt, Churchill y Stalin. Allí se distribuyó económica y políticamente el territorio y se cimentó el camino para la Guerra Fría, con la división de Alemania en dos estados, la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia, y la rivalidad ideológica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta tensión geopolítica influyó en la economía europea, ya que los países se vieron atrapados en una lucha por la influencia y los recursos.

Cuadro 4.2. Participación de América Latina en las Exportaciones Mundiales y Regionales (en porcentaje) (1946-1955)

	% exportaciones mundiales	Participación en el total de exportaciones de América Latina			
	Total América Latina	Argentina	Brasil	México	Cuba
1946	13,5	25,5	21,2	6,9	11,6
1948	12,1	24,5	18,2	5,7	11,2
1950	10,7	18,4	21,2	8,9	10,4
1955	8,9	11,8	18,0	9,9	7,7

Fuente: Bulmer-Thomas, Victor, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge, 1994

¹ Fuente: Todos los cuadros presentados en el texto corresponden al trabajo de Mario Rapoport (2020).

Tal como plantea Hobsbawm, la posguerra permitió el comienzo de la integración europea como un intento de evitar futuros conflictos en la región. Ejemplo de ello son la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951 y, posteriormente, la formación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, que sentaron las bases para una mayor cooperación económica y política entre los países de ese continente. Es importante no perder de vista que, a pesar de los desafíos iniciales, Europa experimentó un período de recuperación y crecimiento económico durante la posguerra. El rol central de EE.UU. en la inversión extranjera, el aumento de la productividad y la expansión de la industria contribuyó a la reconstrucción y a la mejora de las condiciones económicas, que también mejoraron sustantivamente en los primeros años de posguerra en las regiones donde la Unión Soviética desplegaba su influencia. Los acuerdos militares funcionaron como “garantes” de lo mencionado.

Cuadro 4.3. Niveles de producto bruto interno por países seleccionados (1945-1955) (en millones de dólares de 1990)

Año	EE.UU.	R. Unido	Francia	Alemania	Canadá	Japón	Argentina	Brasil
1945	1.646.690	331.347	101.189	194.682	63.832	98.711	67.042	62.487
1946	1.305.889	316.978	153.859	115.619	82.972	107.259	73.029	69.079
1947	1.287.205	312.260	166.740	129.836	86.644	115.807	81.136	71.521
1948	1.335.896	322.125	178.906	153.772	88.232	133.040	85.641	77.001
1949	1.341.076	334.135	203.237	179.159	90.151	141.932	84.478	81.945
1950	1.457.624	344.859	218.409	213.976	96.800	156.546	85.524	86.909
1951	1.601.107	355.153	231.862	235.011	102.292	176.054	88.886	91.059
1952	1.669.482	354.509	238.017	256.626	109.736	196.458	84.333	96.480
1953	1.731.641	368.450	244.887	279.256	114.863	210.934	88.866	101.126
1954	1.719.727	383.462	256.766	300.726	114.069	222.859	92.528	107.816
1955	1.816.591	397.402	271.506	336.848	124.722	242.022	99.125	115.720

Elaboración propia.

Fuente: Maddison, Angus. *L'économie mondiale 1820-1992. Analyse et statistiques*, París, 1995

El sociólogo Juan Carlos Torre (1989) destaca cómo en la década de 1940, América Latina, al igual que otras regiones del mundo, lidiaba con las secuelas de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y las crisis económicas y sociales resultantes. Torre también señaló la importancia de los movimientos sociales y sindicales en América Latina. Dichos movimientos buscaban mejoras en las condiciones laborales y sociales, lo que llevó a una creciente conciencia política y demandas de cambio. Los antecedentes para el caso argentino se enmarcaron dentro de las tradiciones anarquistas y socialistas entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Peronismo, primer gobierno y legitimación

Torre (1989) menciona una serie de actores sociales, cuya preeminencia es ineludible al momento de analizar la potencia del peronismo en sus inicios: en primer lugar, los trabajadores urbanos, especialmente aquellos vinculados a la industria, quienes jugaron un papel central en el surgimiento del movimiento. Los sindicatos y sus líderes también desempeñaron un papel crucial en la movilización y organización de estos trabajadores: estos grupos fueron centrales en las zonas donde el plan de sustitución de importaciones, comenzado por los gobiernos conservadores, concentraba la actividad industrial. En este sentido, debemos tener en cuenta el rol de las mujeres: el peronismo también logró atraerlas en número significativo. Ellas encontraron en la figura de Eva Perón una representación de sus intereses y derechos, y se organizaron en el Movimiento Peronista Femenino. Esta “rama” del movimiento, a partir de figuras como las “delegadas censistas”, fue vital para la organización de la estructura del movimiento, especialmente en las provincias.

Cuando alejamos el foco de los grandes centros urbanos, otros actores imprescindibles son los sindicatos de servicios y los trabajadores rurales, quienes también jugaron un rol central a partir de la percepción que en Perón encontraban protección frente a condiciones laborales paupérrimas, que se arrastraban desde tiempo atrás.

Finalmente, y de regreso con la lupa puesta en las ciudades, se debe destacar que –al menos inicialmente– el peronismo también logró concitar el apoyo de sectores medios urbanos. La inclusión social y las políticas de bienestar fueron fundamentales en ellos, aunque también podemos mencionar cuestiones mayormente ligadas a los valores políticos, como las relacionadas a ciertas posiciones “antiimperialistas”, vinculadas a las posiciones del radicalismo yrigoyenista, que en sus comienzos aportó a peronismo una cantidad significativa de cuadros dirigenciales. Así, en relación con los sectores medios, en el primer peronismo veremos: 1) profesionales como médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos especializados que encontraron en el peronismo un movimiento que promovía la industrialización y el desarrollo económico, algo que beneficiaba a sus ocupaciones y trayectorias profesionales; 2) pequeños comerciantes y dueños de pequeñas empresas se beneficiaban de las medidas de protección a la economía nacional y de la promoción del consumo interno; y 3) empleados administrativos, que observaban mejoras en las condiciones laborales y salariales. También podríamos sumar a esta lista al personal de la educación y pequeños productores rurales. Al margen de lo señalado, es importante tener

presente que este apoyo no fue homogéneo, y que ciertos sectores de las clases medias urbanas permanecieron escépticos, e incluso se opusieron al peronismo desde sus inicios.

Por otro lado, uno de los principales planteos de Torre es que el peronismo no puede entenderse únicamente como el resultado de un liderazgo carismático individual, sino que debe analizarse en un contexto más amplio de cambios sociales y económicos. Torre sostiene, en el sentido de lo dicho, que el peronismo se originó en un momento de transformación profunda en la sociedad argentina, marcado por la industrialización, la urbanización y el cambio en las relaciones de clases. Dichos cambios y tensiones se desplazaron en las diferentes formas institucionales y posibilitaron una acción hegemónica desde una perspectiva electoral que, al tornar innecesaria la negociación política entre los sectores sociales y económicos, acentuó los conflictos en el mediano plazo.

Adamovsky (2012) contextualiza el proceso constitucional de 1949 desde diferentes aspectos. Ante todo, considera la movilización y la participación popular durante el proceso constitucional. Entiende el rol central de los movimientos sindicales y demás actores adherentes para procurar legitimar su proyecto constitucional a través de la participación de las bases populares. En términos de proyecto, para este historiador es importante entender que la Constitución de 1949 buscó reflejar la búsqueda de justicia social, la nacionalización de la economía y la promoción de los derechos laborales. Es aquí que, como ejercicio, debemos retomar las dinámicas políticas y sociales a largo plazo; esbozo esto en términos de los conflictos de la hegemonía electoral, que mencionamos antes.

Es importante tener en cuenta que, durante su gobierno, Perón implementó políticas destinadas a promover y reorganizar las fuerzas armadas. Esto incluyó ascensos en el escalafón militar, mejoras en las condiciones de vida de los militares y una mayor inversión en las capacidades militares del país. No obstante, durante sus dos primeros gobiernos, aunque Perón mantuvo una relación estrecha con las fuerzas armadas, también buscó mantener sobre ellas un control civil. Más allá de la cooperación inicial que se destaca en los trabajos de Torre y Adamovsky ya citados, hacia el final del primer mandato de Perón surgieron tensiones y conflictos que culminaron en su derrocamiento en 1955.

La política económica peronista. la construcción de la bibliografía especializada

Los primeros gobiernos peronistas implementaron una serie de medidas macroeconómicas con el objetivo de promover el crecimiento económico, la industrialización y la inclusión social. En los párrafos que siguen destacaremos algunas de las principales medidas del período:

Para comenzar, el peronismo promovió una estrategia de industrialización basada en la sustitución de importaciones. Esto implicó la implementación de aranceles y barreras comerciales para proteger la industria nacional y fomentar la producción interna de bienes que previamente eran importados. Por otro lado, al mismo tiempo se llevaron a cabo políticas de control de precios y salarios para mantener la estabilidad económica y evitar aumentos excesivos en el costo de vida: esto incluyó la regulación de precios de bienes esenciales y la negociación de acuerdos salariales con los sindicatos. En esta instancia, también es necesario rescatar que se llevaron a cabo importantes nacionalizaciones de empresas en sectores clave de la economía, como el petróleo y los ferrocarriles, lo que permitió al gobierno ejercer un mayor control sobre sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.

Cuadro 4.4. Oferta y Demanda Globales (en millones de pesos de 1990)

Año	PBI	PBI % crecimiento	Consumo	Inversión
1946	50.035	8,9	37.698	11.007
1947	55.600	11,1	42.451	17.470
1948	58.679	5,5	44.505	17.464
1949	57.888	-1,3	44.660	14.667
1950	58.599	1,2	45.466	14.735
1951	60.423	3,1	46.000	15.530
1952	56.411	-6,6	43.811	13.448
1953	59.499	5,4	44.649	13.143
1954	62.072	4,4	46.525	14.325
1955	64.661	4,2	49.794	15.427
Promedio 1946-1955		3,6		

Fuente: CEPAL (1958)

Otros dos aspectos que nos interesa señalar. En primer lugar, se realizó una fuerte inversión en infraestructura, incluyendo la construcción de carreteras, represas y obras públicas en general; también se fomentó el desarrollo de la industria pesada, como la siderurgia y la metalurgia, con el objetivo de impulsar la producción industrial. En segundo lugar, el gobierno peronista recurrió al endeudamiento externo para financiar proyectos de desarrollo económico. Se buscaron préstamos de organismos interna-

cionales y se establecieron acuerdos financieros con países extranjeros. Sin embargo, con relación a este último punto, es importante destacar que Perón se negó a que la Argentina ingresara al Fondo Monetario Internacional (cuya creación es coincidente con los comienzos de los gobiernos peronistas).

El Primer Plan Quinquenal (1947-1951) impulsó la obra pública: se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de puentes y obras de electrificación. Esto no sólo mejoró la conectividad del país, sino que también generó empleo y estimuló la actividad económica. Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina fue intervenido y su política monetaria estuvo subordinada a los objetivos del Plan Quinquenal, que buscaba generar estabilidad en el país, tanto a nivel político como social. Esto implicó la consolidación del poder del gobierno de Perón y la promoción de políticas que beneficiaran a las clases trabajadoras. El plan, fundaba su lógica en la promoción de políticas laborales que otorgaban derechos a los trabajadores, como el reconocimiento de sindicatos y la implementación de beneficios sociales. De esta forma, se estableció el salario mínimo y se promovió la jornada laboral de ocho horas. Asimismo, se crearon programas de bienestar social –como la Fundación Eva Perón– que proporcionaban ayuda y asistencia a sectores vulnerables de la sociedad, incluyendo subsidios, viviendas y servicios de salud.

Con respecto a lo expresado en el párrafo anterior, debemos agregar que, además de ciertos derechos laborales –como el establecimiento de salarios mínimos y condiciones de trabajo justas– se implementaron políticas de protección social, como la creación del Instituto Nacional de Previsión Social (INSP) y la expansión de la seguridad social. Al mismo tiempo, la transformación social que proponía el peronismo, y que el plan quinquenal posibilitó, fomentaba la educación pública y gratuita. En este marco se construyeron escuelas y se establecieron becas para estudiantes; también se apoyó la producción cultural y se promovió el acceso a la cultura a través de distintas iniciativas.

Las medidas macroeconómicas mencionadas reflejan la orientación de los primeros gobiernos peronistas hacia un modelo de desarrollo económico basado en la industrialización, la inclusión social y la participación activa del Estado en la economía. Sin embargo, la política monetaria y fiscal, que incluyó un aumento del gasto público y la emisión de dinero para financiar proyectos de desarrollo, si bien contribuyó al crecimiento económico también generó presiones inflacionarias.

Política de ingresos: empleo y justicia social

En este apartado se tratarán los aspectos de la política social relacionado con la política de ingresos destinados a los sectores populares. En tal sentido, destacaremos ingresos directos e indirectos dirigidos a los trabajadores. Se estableció, por ejemplo, la negociación colectiva y derechos sindicales: se promovió la organización sindical y se otorgó a los sindicatos un rol preponderante en la negociación de salarios y condiciones laborales, lo que fortaleció la capacidad de los trabajadores en favor de sus intereses. Además, se promulgó el Estatuto del Peón, que estableció salarios mínimos y condiciones laborales básicas para los trabajadores rurales. También se extendieron derechos laborales, como el descanso semanal y el aguinaldo (un sueldo extra anual). Finalmente, en esta instancia nos interesa mencionar que se implementaron políticas destinadas a fomentar la participación de los trabajadores en los beneficios y las ganancias de las empresas. Esto podía llevarse a cabo a través de la distribución de dividendos o la creación de fondos de participación.

Cuadro 4.11. Participación de los asalariados en el ingreso nacional (en porcentaje del PBI)

Año	Remuneración del trabajo en el ingreso nacional			
	Según SAE	Según BCRA	Según CEPAL	Según Diéguez y Petrecolla
1945	46,7			
1946	46,8		40,1	
1947	47,9		39,5	
1948	52,4		43,5	
1949	59,4		49,0	
1950	60,9		49,6	47,5
1951		51,9	45,2	45,2
1952		49,2	50,5	47,8
1953		51,8	48,9	47,6
1954		53,2	49,9	49,0
1955		49,8	47,0	46,4

Nota: Para las columnas 2 y 4, se trata de sueldos y salarios más ingresos de asalariados pasivos. Para las columnas 1 y 3, se trata de sueldos y salarios más aportes patronales jubilatorios.

Fuentes: Secretaría de Asuntos Económicos, Producto e Ingreso de la República Argentina en el período 1935-54, Buenos Aires, 1955. Banco Central de la República Argentina, 1975. CEPAL, 1958. Diéguez, Héctor y Petrecolla, Alberto "La distribución del ingreso y el sistema previsional en la Argentina: 1950-1972", *Desarrollo Económico*, N° 55, Buenos Aires, 1974

En referencia a los puntos enunciados al principio de este apartado sobre la política de ingresos, nos interesa agregar la participación en la administración de empresas: esto se observó en algunas industrias, donde se impulsó la participación de los trabajadores en la gestión y administración. El mecanismo usual fueron los llamados "consejos de empresa" o "comités de participación".

En consonancia con lo dicho, se originaron programas de formación y capacitación para los trabajadores con el objetivo de mejorar sus habilida-

des y aumentar la productividad. También se establecieron incentivos para fomentar la eficiencia y la calidad en el trabajo.

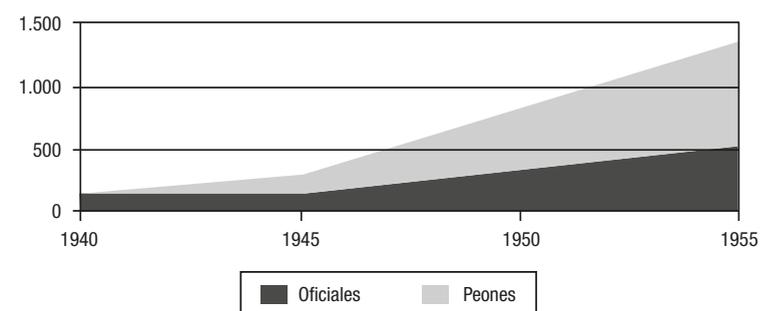
Cuadro 4.12. Índice de Salarios industriales y costo de vida (base 1945=100)

Año	Índice de salarios Industriales nominales	Índice móvil anual de salarios industriales	Costo de vida	Índice de salarios reales
1945	100,0	114,5	100,0	100,0
1946	124,5	124,5	117,1	106,3
1947	176,9	142,0	131,4	134,6
1948	247,6	139,9	148,5	166,7
1949	340,4	137,4	197,1	172,7
1950	408,7	120,0	245,7	166,3
1951	519,0	126,9	337,1	153,9
1952	638,8	123,0	465,7	137,2
1953	715,8	112,0	485,7	147,4
1954	794,4	110,9	502,9	157,9
1955	882,5	111,0	565,7	156,0

Fuentes: Villarruel, José César, "El Estado, las clases sociales y la política de ingresos en los gobiernos peronistas, 1945-1955", en Rapoport, Mario (comp), *Economía e historia, Contribuciones a la historia económica argentina*, Buenos Aires, 1988

Otra característica de la redistribución del ingreso durante el período fue su mayor impacto sobre las categorías de menores ingresos. El incremento de las remuneraciones a los trabajadores, permitió un aumento en la calidad de vida y le brindó a la política económica un contenido social relativamente avanzado en relación con los demás países subdesarrollados. Un eje central en la política de ingresos del peronismo fue la concreción de sueldos que excedieran la lógica de subsistencia; garantizando, de este modo, la posibilidad de acceder a bienes culturales y recreativos a través del salario.

Cuadro 4.2. Índice de Salarios de oficiales y peones (base 1943=100)



Fuente: OECEI (1966)

En nuestro comentario anterior señalamos que la política de ingresos excedió largamente las mejoras salariales. En este sentido, tal como mencionamos, la creación del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) es un claro ejemplo. El INPS fue creado para proporcionar seguridad social a los trabajadores. A través de este organismo se establecieron pensiones, jubilaciones y otros beneficios para ellos y sus familias. A lo dicho debemos agregar las políticas de vivienda y créditos para trabajadores, programas destinados a facilitar el acceso a la casa propia; de la misma forma, se otorgaron créditos accesibles para la adquisición o construcción de viviendas. Es importante destacar que las diversas políticas de ingreso mejoraron cuantitativa y cualitativamente la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, y es de esta forma que los modelos económico y político convergen en el primer peronismo.

La política agrícola-ganadera de Perón estuvo ciertamente enmarcada por el enfrentamiento del presidente con las figuras e instituciones más encumbradas de la economía primaria. Es por ello que el gobierno, implementó una serie de políticas destinadas a promover la actividad agrícola, pero básicamente enfocada en mejorar las condiciones de los pequeños y medianos agricultores. En este sentido, se instauró una regulación con precios mínimos garantizados para productos agrícolas, lo que protegía a los agricultores de las fluctuaciones del mercado y les aseguraba un ingreso mínimo por sus cosechas. De la misma forma, en el marco del primer plan quinquenal se crea en 1946 la Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que funcionó bajo la órbita del Ministerio de Agricultura desde su creación.

Otras acciones destacadas fueron: 1) promover la creación de agroindustrias para agregar valor a la producción agrícola. Esto incluyó el apoyo a la creación de cooperativas y la promoción de la industrialización de productos agrarios; 2) la creación de la Junta Nacional de Granos, entidad que buscaba regular y fiscalizar el comercio de granos y asegurar precios justos para los agricultores; 3) La Ley de Arrendamientos Rurales, pensada para proteger a los arrendatarios agrícolas de prácticas abusivas y asegurarles condiciones justas en los contratos de arrendamiento de tierras; 4) Políticas de redistribución de tierras, desarrolladas a partir de programas de expropiación y redistribución de tierras, con el objetivo de proporcionar tierras a pequeños agricultores y comunidades indígenas; y 5) Apoyo a la producción ganadera, desarrollado a partir de políticas para fomentar la cría y producción de ganado, incluyendo incentivos y subsidios para

mejorar la calidad de los animales.

La política industrial del peronismo se sustentó en financiar el desarrollo a partir de la diferencia obtenida por los ingresos de las exportaciones agrícolas. A partir de esa definición se pudieron tomar más medidas que, de manera concatenada, posibilitaron la expansión y/o el surgimiento de empresas públicas o privadas. Se establecieron aranceles protectores para la industria nacional, lo que implicaba la imposición de barreras arancelarias a la importación de productos similares o competidores de la producción local. Por otro lado, se fortaleció el proceso de sustitución de importaciones: una estrategia que buscaba reducir la dependencia de productos extranjeros, al promover la producción interna de bienes que previamente eran importados. Finalmente, la nacionalización y estatización de empresas clave que eran consideradas estratégicas, como los ferrocarriles y la industria del acero, entre otras, resultó esencial para sostener en un principio el crecimiento industrial.

Otras medidas que complementaron a las mencionadas también fueron de gran importancia. En este sentido, es importante destacar que se otorgaron créditos a tasas preferenciales y se ofrecieron incentivos fiscales para estimular la inversión en la industria. Asimismo, se implementaron políticas para fomentar el desarrollo y crecimiento de las pymes, reconociendo su importancia en la generación de empleo y dinamización de la economía. Se fortalecieron o crearon empresas estatales y se promovieron iniciativas destinadas a impulsar la innovación y la adopción de tecnologías avanzadas en la industria. Estas medidas se apoyaban en las políticas de salarios y condiciones laborales que dotaban a los trabajadores de la posi-

Cuadro 4.15. Exportaciones agrarias (en miles de toneladas)

Período	Maíz	Trigo	Lino
1945-1946	572	2.358	135
1946-1947	2.200	1.387	37
1947-1948	2.366	2.284	—
1948-1949	2.534	2.174	—
1949-1950	1.063	1.847	—
1950-1951	794	2.767	139
1951-1952	298	2.455	164
1952-1953	652	63	26
1953-1954	1.083	2.527	10
1954-1955	2.185	2.943	11
1955-1956	962	3.617	—

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería

bilidad de consumir los productos que se fabricaban a nivel local.

El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) fue una entidad clave en la política económica del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Fundado en 1946, tuvo un rol fundamental en el manejo y la comercialización de productos agrícolas, principalmente cereales y oleaginosas. Esencialmente, el IAPI fue un intermediario entre los productores agrícolas y el mercado internacional: a través del instituto, el gobierno adquiría cereales y otros productos agrícolas a precios garantizados a los productores, y luego los exportaba al mercado internacional.

Como señala Rapoport (2020, pág. 351) “Con respecto a las ventas externas, el IAPI negociaba directamente con representantes de las entidades estatales de los gobiernos extranjeros procurando obtener las mejores condiciones para la Argentina. No obstante, siempre existieron ciertas cantidades de cereales que se comerciaban mediante canales privados. En estos casos, las empresas exportadoras adquirirían al IAPI los granos a los precios fijados por la institución y luego los embarcaban con destino a los mercados consumidores del exterior. (...) El IAPI intervino en la comercialización de productos de acuerdo con las necesidades coyunturales por las que atravesaba el país. Por esta razón, desde el 17 de marzo de 1947 fueron excluidos de su fiscalización ciertos rubros como las legumbres secas y las cebollas, que pasaron a ser negociados libremente en el mercado. De manera paralela, con la apertura de nuevos mercados y el control de las importaciones de materias primas, maquinarias e implementos diversos, rodados y máquinas agrícolas, cuyos valores habían aumentado en la inmediata posguerra, el IAPI procuraba obtener mejores precios tanto para el sector industrial como para el agrícola (...)”

Al transformarse en el único comprador de los bienes esenciales para la economía argentina, combinó su operatoria comercial con los convenios y tratados internacionales que en aquellos años comenzó a suscribir el gobierno nacional, especialmente con otros países latinoamericanos. de primera necesidad. En ese sentido, las utilidades obtenidas por el instituto fueron invertidas para subvencionar los precios del azúcar, la harina, el aceite comestible y las papas con la intención de mantener el poder adquisitivo de los asalariados²².

Al desagregar las posibilidades que el IAPI brindaba a la política económica del gobierno, debemos considerar que este organismo establecía precios mínimos garantizados para productos agrícolas, lo que brindaba a los agricultores una seguridad sobre el valor de sus cosechas. Vale agregar,

también, que tenía el monopolio de la exportación de granos y oleaginosas, lo que le otorgaba un control significativo sobre los ingresos por exportaciones agrícolas. Por otra parte, el IAPI promovía la industrialización de productos agrícolas, al incentivar la creación de agroindustrias y brindar apoyo para la transformación de materias primas, al tiempo que representaba al gobierno argentino en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con productos agrícolas.

Como dijimos, todo esto se dio en el marco de un instituto que se encargaba de la compra, almacenamiento y posterior venta de productos agrícolas, asegurando un mercado estable para los agricultores. La creación del IAPI fue una medida central en la política económica del primer gobierno de Perón, ya que buscaba proteger los intereses de los productores agrícolas y controlar la exportación de productos clave para la economía argentina.

La acción política de Juan Perón en su segundo gobierno (1952-1955)

El segundo mandato de Juan Domingo Perón como presidente de la Argentina comenzó en 1952, y estuvo marcado por una serie de crisis y desafíos. A pesar de los logros económicos de su primer período, la economía comenzó a enfrentar problemas: se aceleró la inflación y el aumento en el gasto público generó preocupación sobre la sostenibilidad económica. Esta situación implicó un freno a la expansión del consumo y, por lo tanto, se registró un aumento en los conflictos laborales y las huelgas, ya que los sindicatos presionaban por mejoras salariales. Perón, que tenía una fuerte base de apoyo en los sindicatos, debió lidiar con la creciente presión de los trabajadores que querían obtener concesiones. A esto debemos sumar la importancia política del fallecimiento de Eva Perón, un hecho que significó una tragedia personal para el presidente y para todo el movimiento peronista.

A los puntos arriba mencionados debemos agregar que la oposición política a Perón se mantuvo activa y crítica: incluso, la polarización y la violencia políticas aumentaron en este período. En este lapso, además, se produjo un conflicto entre Perón y la Iglesia católica. Hubo tensiones debido a las políticas educativas y sociales del gobierno peronista: la Iglesia las consideraba como un desafío a su influencia en la sociedad. El clasismo de cuantiosos grupos sociales se conjugaba con el malestar de algunos sectores de las Fuerzas Armadas y la división dentro del propio Ejército. La crisis política y militar se profundizó, con intentos de golpe militar y tensiones dentro de las FF.AA. A pesar de estas crisis y desafíos, Perón logró mantenerse en el poder hasta 1955, cuando finalmente fue derrocado por

2 Novick, Susana, *IAPI: auge y decadencia*, Buenos Aires, 1986, pág. 58.

un golpe militar. Su segundo mandato estuvo marcado por una creciente polarización política y por diversos conflictos internos que llevarían al derrocamiento de su gobierno.

A partir de 1952 surgieron tensiones entre el gobierno y algunos sectores sindicales debido a varios motivos: a medida que crecía la economía, los trabajadores comenzaron a exigir salarios más altos y mejores condiciones laborales. Esto generó presiones sobre el gobierno para responder a las demandas, lo que a veces resultaba difícil de conciliar con las necesidades económicas y las finanzas públicas. Por otro lado, dentro del movimiento sindical surgieron divergencias respecto de las formas de abordar las negociaciones y los reclamos. Algunos sindicatos adoptaron una postura más radical y confrontativa, mientras que otros optaron por un enfoque más moderado y colaborativo. Estas diferencias contribuyeron a generar tensiones tanto dentro de los sindicatos como entre éstos y el gobierno. A este panorama hay que sumar el hecho de que hacia el segundo gobierno la expansión económica había llegado a un límite, lo que afectó el poder adquisitivo de los trabajadores y, a su vez, generó presiones adicionales al gobierno para abordar la situación.

Para comprender la dimensión que había cobrado la sindicalización y su identificación con el peronismo debemos ponderar que la implementación de políticas de sustitución de importaciones y la expansión de la industria nacional generaron cambios en la composición de la fuerza laboral y en la estructura económica del país. Esto llevó a tensiones y desafíos en la adaptación de los sindicatos a estas transformaciones, y es importante tener en cuenta que la organización sindical conformó una parte central de la organización territorial y la potencia política del peronismo. Por otro lado, en absoluta consonancia, tras las primeras instancias organizativas del sindicalismo peronista surgieron distintas facciones y líderes con intereses diversos y agendas propias. Esta competencia por el liderazgo y la representatividad dentro del movimiento sindical también contribuyó a las tensiones. En este sentido, vale recordar que, a medida que la influencia de los sindicatos crecía, también aumentaba la competencia por puestos en organismos estatales y empresas nacionalizadas, generando mayores conflictos entre diferentes grupos sindicales que buscaban asegurar sus intereses y su representación.

El gobierno y su relación con los grupos de empresarios

Hablar de grandes grupos económicos, de los principales empresarios hacia 1946, nos exige comenzar a entender el rol de los terratenientes al

momento de la llegada de Juan Perón al poder. Primordialmente, por las implicancias simbólicas que el peronismo adquiere en la disputa política, al posibilitar con sus acciones el reconocimiento social de los sectores plebeyos. Si bien la organización del peronismo se constituyó en los grandes centros urbanos a partir de posibilitar la representación de amplios sectores de la población que se encontraban fuera de la vista de los partidos actuantes hacia principios de la década de 1940, el conflicto con la Sociedad Rural Argentina (SRA) permitió al peronismo construir un adversario que posibilitaría comprender los motivos profundos de la estigmatización de los sectores populares.

Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, la relación entre la Sociedad Rural Argentina y el gobierno estuvo marcada por fuertes conflictos debido a las políticas económicas y agrarias implementadas. La SRA se opuso desde el principio a las políticas agrarias de Perón, que incluían medidas como el aumento de impuestos a la exportación de productos agropecuarios y la intervención estatal en el mercado de granos. Recordemos que el mercado de granos, a través del IAPI, estaba regulado por el Estado, lo que significó una fuerte intervención estatal en la comercialización de productos agrícolas. Por otro lado, se llevaron adelante políticas de expropiación de tierras que afectaron directamente a grandes propiedades rurales. La SRA organizó numerosas protestas y movilizaciones en rechazo a las medidas del gobierno y desarrolló una fuerte oposición que se unió a la de otros partidos políticos. Para sintetizar el rol de los principales grupos empresariales durante los gobiernos de Perón, es importante comprender que, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina tuvo un papel significativo: la relación estuvo marcada por una combinación de cooperación y conflictos, dependiendo de diferentes factores y etapas. Durante los primeros años de la administración, la UIA mostró cierto grado de apoyo y cooperación, en parte gracias a la implementación de políticas que favorecían la expansión de la industria nacional, lo cual beneficiaba a los miembros de la "Unión". En este sentido, se establecieron acuerdos y políticas que buscaron proteger la industria local, como la sustitución de importaciones y la nacionalización de sectores como el petróleo y los ferrocarriles. Esta situación se vio favorecida por la representación (de la UIA) en organismos de planificación económica y la formulación de políticas económicas y sectoriales, lo que permitió al sector tener voz en decisiones relevantes para su desarrollo.

Más allá de la cooperación inicial, a medida que avanzaba el segundo mandato de Perón surgieron tensiones entre el gobierno y la UIA, en parte

generadas por la inflación y las políticas económicas que, según los empresarios industriales, generaban incertidumbre. Por otro lado, un dato significativo fue la posición reaccionaria que éstos adoptaron ante la creciente influencia del sindicalismo y las tensiones entre ambos. Al somero análisis presentado sobre la UIA, consideramos necesario sumarle una breve síntesis acerca de la Confederación Económica Argentina (CEA) para comprender más detalladamente la relación del gobierno con diferentes grupos empresariales. La CEA fue una organización empresarial que representaba a pequeñas y medianas empresas en la Argentina, y cuya relación con los primeros gobiernos peronistas estuvo marcada por una combinación de cooperación y conflictos, al igual que con la UIA. En los primeros años, la relación con la CEA fue tensa: algunos sectores mostraron resistencia a las políticas peronistas, especialmente a la intervención estatal en la economía y al aumento del poder sindical. Pero más allá de las tensiones iniciales, hubo momentos en los que esta organización y la administración central lograron acuerdos y cooperaron en temas de mutuo interés; por ejemplo, negociaron para establecer acuerdos laborales y salariales.

Tal como se mencionó, la CEA representaba principalmente a pequeñas y medianas empresas: como uno de sus objetivos era promover políticas que beneficiaran al sector y las variadas políticas impulsadas por el peronismo buscaban beneficiarlo, eso permitió limar las asperezas iniciales con cierta rapidez. Finalmente, tanto la UIA como la CEA expresaron su preocupación sobre la inflación y sobre otras políticas económicas que inquietaban a los empresarios, pues incrementaban la intervención estatal en la economía.

Radicales, socialistas y demócratas: los partidos de la oposición

Luego del golpe de Estado frustrado de 1951 que había intentado derrocar a Juan Domingo Perón, la oposición política en la Argentina adoptó diversas estrategias para enfrentar al gobierno. Así, los conflictos oficialismo-oposición recrudecieron. La UCR y el Partido Socialista formaron parte de las elecciones de 1952 e intentaron mantener la representación parlamentaria. Los partidos opositores que contaban con representación parlamentaria buscaron influir en la legislación y debatir políticas propuestas por el gobierno. Aunque la mayoría en el Congreso era abrumadora, la oposición utilizó ese espacio para expresar sus puntos de vista y cuestionar medidas gubernamentales; también organizó movilizaciones y protestas para expresar su descontento y presionar al gobierno, con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos.

Cabe recordar que la oposición “civil” al peronismo, organizada en torno a posicionamientos clasistas, desempeñó un papel crucial en la oposición política. Grupos tales como sindicatos, organizaciones estudiantiles, gremios profesionales y asociaciones civiles se unieron para promover objetivos políticos y sociales compartidos.

Por otro lado, algunos partidos políticos opositores buscaron establecer alianzas con sectores de las Fuerzas Armadas como parte de sus estrategias para enfrentar al gobierno. Dichas alianzas se formaron en el contexto de la creciente polarización política y social del período: la oposición partidaria, básicamente —aunque no sólo— el radicalismo, consideró que establecer alianzas con ciertos sectores de las FF.AA. podía ser una forma de fortalecer su posición. El camino descrito no era de una sola vía: es importante mencionar que algunos militares retirados o en situación de retiro participaron activamente en la oposición política, expresando su descontento con el gobierno y buscando apoyo entre los partidos políticos opositores. También vale señalar que estas alianzas y colaboraciones fueron dinámicas y variaron entre diferentes partidos y grupos de oposición. Por cierto, la relación entre la oposición y los sectores militares también estuvo sujeta a cambios y fluctuaciones como parte de los acontecimientos políticos y sociales de la época. En relación a esto, debemos mencionar tres fuerzas políticas que acordaron con militares activos o retirados: 1) La Unión Cívica Radical fue uno de los principales partidos políticos opositores al gobierno: en algunos momentos, líderes de la UCR procuraron colaborar con sectores militares descontentos con el peronismo; 2) El Partido Demócrata Cristiano (PDC) también buscó establecer alianzas con fracciones de las Fuerzas Armadas como parte de su estrategia de oposición al gobierno; 3) El Partido Socialista (PS): en algunos casos, líderes socialistas buscaron acercarse a sectores militares que compartieran su descontento con la administración.

Estos son, de manera central, los tres partidos tradicionales que articularon fuerzas con sectores militares para derrocar al peronismo en distintos momentos. También resulta pertinente mencionar que hubo partidos provinciales y movimientos locales que buscaron aliarse con sectores militares, especialmente en regiones donde la oposición tenía relativa potencia en términos sociales. Por último, insistimos en que estas alianzas y colaboraciones fueron dinámicas y variaron en el tiempo. No todos los líderes y miembros de estos partidos estaban de acuerdo con aliarse a sectores de las FF.AA., y las estrategias se modificaban con relación a los eventos políticos y las transformaciones contextuales que ellos mismos provocaban.

Reformulaciones en la política económica (1952-1955)

En el período aquí analizado, algunos de los ejes centrales de la política inaugurada en 1946 seguían vigentes. Se mantuvieron tanto el énfasis industrialista como una relativa expansión del gasto público, básicamente porque se privilegió el sostenimiento de la política de desarrollo social. Si bien la integración socioeconómica del peronismo no retrocedió, claramente encontró barreras para proseguir su desarrollo, al menos para mantener la velocidad de sus comienzos. Mario Rapoport (2020), sostiene que, durante este periodo, la economía argentina experimentó una alta tasa de inflación. Esto se debió en parte a políticas monetarias expansivas y a la relativa efectividad que mostraron los controles sobre los precios y salarios. De igual forma, les asigna un rol sustancial a las dificultades para mantener el equilibrio fiscal. Los gastos del Estado seguían siendo elevados, especialmente en áreas como el desarrollo social y los subsidios a diversas industrias. Situación que se observó a partir del crecimiento de las restricciones en el comercio exterior, incrementando el déficit, punto sobre el que volveremos.

Cuadro 4.28. Evolución de los precios (en porcentaje)

Año	Inflación minorista	Inflación mayorista	Depreciación cambiaria
1943	1,1	9,4	-3,6
1944	0,3	8,9	-1,5
1945	19,9	8,5	0,3
1946	17,6	15,9	1,5
1947	13,6	3,6	10,7
1948	13,1	15,3	54,1
1949	31,0	23,1	67,8
1950	15,6	20,4	36,5
1951	36,7	49,0	48,5
1952	38,8	31,2	-3,4
1953	4,0	11,6	-1,7
1954	3,8	3,1	12,1
1955	12,3	8,9	20,5
1956	13,4	26,0	16,6

Fuente: Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas. *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, 1996

“A los problemas en el orden externo se sumaba el del déficit presupuestario motivado por el gasto público originado en el ambicioso programa de obras públicas. Asimismo, la incorporación al Estado nacional de las empresas nacionalizadas y la creación de otras nuevas aumentaron la demanda de trabajadores, empleados y administradores, en parte debido a los requerimientos naturales de organismos cuyo tamaño se incrementaba;

pero también porque el empleo público se convirtió, como en épocas anteriores, en un instrumento de acción política. De esta manera, la demanda laboral se mantuvo a elevados niveles, tanto en la estructura del Estado nacional, las provincias y los municipios como en los nuevos organismos y empresas del Estado”³.

De forma sintética, podemos apreciar que los límites a la expansión económica y a la celeridad con la que se llevaba adelante la distribución se situaron en la dependencia de las exportaciones agropecuarias. La economía argentina estaba fuertemente basada en el envío a Europa de productos primarios, principalmente carne y cereales. Esto la dejaba vulnerable a fluctuaciones en los precios internacionales de estos productos. Lo que se evidenció a medida que se aceleró la recuperación europea. Por otro lado, la expansión industrial no pudo sostener el ritmo; pues los recursos y los saldos de importaciones y exportaciones se vieron resentidos, lo que limitó el acceso a tecnologías y bienes de capital, disminuyendo la capacidad de modernización de la industria local. Finalmente, en los términos del trabajo de Rapoport y en esta breve reseña, es importante destacar que el proceso industrial no alcanzó, por los problemas mencionados un nivel de diversificación que potenciar los diferentes rubros de la industria y el país siguió dependiendo algunos sectores claves en términos estructurales de la economía y sustentando la política de empleo en áreas de poco grado de tecnificación.

Política agraria del segundo gobierno

En este punto se dio otro de los cambios sustanciales en la economía. Siguiendo a Rapoport, centralmente los cambios realizados por el gobierno a partir de algunos signos de agotamiento en el plan económico. Para sostener el ritmo de las exportaciones y generar las divisas que apalancaran el proceso de industrialización y la consecuente expansión económica, de la administración implementó una serie de cambios: 1) Se promovieron políticas destinadas a apoyar a los pequeños agricultores y fomentar la agricultura familiar, con el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales y proporcionando asistencia técnica; 2) Se incentivó la diversificación de la producción agrícola y se promovió la instalación de agroindustrias para agregar valor a los productos del campo; 3) Aunque no se llevó a cabo una reforma agraria radical en el sentido de expropiar grandes extensiones de tierra, se implementaron medidas que buscaban una redistribución más

³ Rapoport, Mario (2020), *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*, Buenos Aires, Crítica.

equitativa de la tierra y fomentar la producción en pequeña escala; y 4) Se promovieron políticas de crédito agrícola a tasas preferenciales para facilitar el acceso de los agricultores a capital.

Estas son algunas de las medidas que planteó el gobierno para sostener los ingresos de divisas provenientes del sector agropecuario. Dichos cambios en la política agraria de la Argentina durante el segundo mandato de Perón reflejaron un intento de equilibrar los intereses de los grandes productores agropecuarios con aquellos de los más pequeños, además de impulsar la modernización y diversificación del rubro agrícola. Sin embargo, es importante observar que la implementación y efectividad de estas políticas no tuvieron el efecto deseado, al menos hasta promediar el segundo mandato, instancia en la cual tuvo lugar el golpe de Estado.

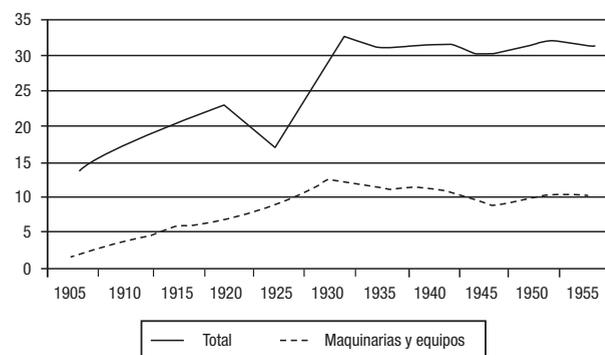
Cuadro 4.29. Evolución de la ganadería y del consumo de carnes (1935-1954)

Período	Cant. de cabezas faenadas p/consumo interno	Porcentaje de cabezas faenadas p/exportación	Porcentaje de cabezas faenadas	Consumo per cápita (kg por habitante)
1935-1939	7.643.131	70,3	29,7	77,9
1940-1944	7.595.750	68,7	31,3	70,9
1945-1949	8.518.128	79,1	20,9	84,5
1950-1954	8.738.160	86,5	13,5	90,8

Elaboración propia.

Fuente: Azcuy Ameghino, Eduardo, "De la reestructuración al estancamiento: la historia olvidada de la industria procesadora de carne vacuna, (1958-1989)", Cuadernos de PIEA-IHES, N°7, diciembre de 1998

Cuadro 4.5. Stock de capital en el sector agropecuario (en millones de pesos de 1950)



Fuente: CEPAL (1958)

El Plan de Estabilización de 1952

Este punto constituye un eje central para el análisis del comienzo del segundo mandato de Perón. La Ley de Estabilización Económica y Re-

forma del Régimen Cambiario, también conocida como Ley de Estabilización, fue promulgada al comenzar el segundo mandato. Esta ley tenía como objetivo principal estabilizar la economía del país, que —como dijimos— estaba experimentando una alta inflación y desequilibrios macroeconómicos. Entre las principales medidas que incluyó la ley se encuentran: 1) Regulación de los precios y salarios, con el fin de controlar la inflación y evitar aumentos excesivos en los costos; 2) Se implementaron restricciones a la compra y venta de divisas extranjeras, lo que limitó la capacidad de los individuos y empresas para adquirir moneda extranjera; 3) Se creó la Comisión Nacional de Precios, establecida para supervisar y controlar los precios de productos y servicios; y 4) Se creó el Instituto Nacional de Reaseguros, que tenía como objetivo regular el mercado de seguros, con la meta de brindar estabilidad al sector financiero.

La Ley de Estabilización tuvo un impacto significativo en la economía, e inicialmente logró contener la inflación y estabilizar la moneda. El sector externo comenzó a recuperarse, sobre todo en lo relativo a las exportaciones. Por otro lado, la adhesión al gobierno por parte de los sindicatos simplificó la instauración de las medidas, más allá de que efectivamente se llevaron a cabo algunas huelgas. Sin embargo, el aumento de las importaciones derivó nuevamente en déficit comercial.

Cuadro 4.30. Comercio exterior y términos del intercambio (1935-1955)
(en millones de dólares para el comercio exterior)

Años	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Precios de exp.	Precios de imp.	Términos del intercambio
1953	1.125,1	795,1	330,0	301,3	315,6	92,5
1954	1.026,6	979,0	47,6	255,5	296,3	86,2
1955	928,5	1.172,5	-243,9	236,6	298,5	88,3

Fuentes: Banco Central de la República Argentina; CEPAL (1958)

En el contexto descrito se articularon las medidas del Segundo Plan Quinquenal, que tuvo como objetivo principal continuar con la industrialización del país y promover el crecimiento económico. Su objetivo principal: el fomento de la industria pesada, promoviendo la inversión y el desarrollo, incluyendo la siderurgia, la petroquímica y la maquinaria pesada. Esto implicó la construcción de nuevas plantas industriales y la modernización de las existentes. Por otra parte, se destinaron recursos a la construcción de infraestructura clave, como carreteras, represas, puentes y obras hidroeléctricas, con el fin de mejorar la conectividad y el acceso a recursos energéticos. Otra medida significativa estuvo ligada a la producción y el

desarrollo de la industria automotriz, con el objetivo de satisfacer la demanda interna y reducir la dependencia de importaciones de vehículos.

A lo expresado en el párrafo anterior, debemos sumarle el desarrollo de la industria química y petroquímica para impulsar la producción de insumos básicos y productos derivados del sector, y también la implementación de medidas tendientes a fomentar la industrialización de productos agroalimentarios como la carne y los lácteos, con el objetivo de agregar valor a la producción primaria. Otros aspectos importantes del plan eran los relacionados a la nacionalización de servicios públicos estratégicos, sectores donde se profundizaron medidas que ya se habían anticipado en el primer mandato, como la energía eléctrica y el gas, con el objetivo de tener un mayor control estatal. Reconocer las diferentes medidas permite sostener el énfasis en la industrialización y el desarrollo económico durante las dos primeras gestiones peronistas.

“El gobierno trató de proyectar, al mismo tiempo, otras medidas de carácter más permanente que le permitieran resolver el trasfondo estructural de la crisis. Tal fue el intento planteado en el Segundo Plan Quinquenal que en líneas generales se proponía:

- Mantener el equilibrio de precios y salarios, y estimular el desarrollo económico general.
- Un programa de inversiones estatales y privadas destinado a resolver las necesidades básicas del país en lo referente a materias primas, energía y transporte, y bienes de capital.
- Proseguir la política de sustitución de importaciones.
- Fomentar el incremento de la productividad agrícola-ganadera,
- Conceder un papel complementario al capital y al crédito extranjero como factores de cooperación y estímulo al desarrollo económico.
- Aumentar la capacidad de importación del país a partir de una decidida política de exportaciones que generara las divisas necesarias.
- Coordinar la participación de empresarios y trabajadores en la planificación y ejecución de la política económica del país, determinar el papel de la empresa privada frente al intervencionismo estatal, consolidar el cooperativismo y frenar la intermediación artificial en las actividades primarias”⁴.

La modificación de los patrones de inversión externa procuró modificarse a partir de la Ley de Inversiones Extranjeras, que tuvo como objetivo regular y promover la inversión de empresas de otras nacionalidades en el país. Dicha ley buscaba atraer capital extranjero para impulsar el desarrollo

4 Cf. Malgesini, G. y Álvarez, N., tomo 2 (1984). En Rapoport *ibid*.

económico y aportar a los esfuerzos estatales para retornar al camino de la expansión económica; en tal sentido, se ofrecieron incentivos y garantías a los inversores internacionales, estableciendo un marco legal que otorgaba estabilidad y “seguridad jurídica” a las inversiones, incluyendo protección contra expropiaciones y garantías de repatriación de capitales.

Cuadro 4.31. Autorizaciones anuales de radicación de capitales extranjeros bajo la ley 14.222 (clasificados por origen de los capitales y por actividad) (en miles de dólares)

	1954	1955
<i>Origen de los capitales</i>		
Estados Unidos	195,5	8.903,6
Alemania	650,6	954,1
Francia	214,5	168,1
Italia	848,6	
Venezuela	220,9	
Fondos argentinos en el exterior	40,0	
Totales	2.171,1	10.025,8
<i>Actividades</i>		
Petróleo, extracción	220,9	
Esp. medicinales, veterinaria	214,5	
Petroquímica		706,4
Otros productos químicos y plásticos	850,2	375,9
Vidrio y materiales para la construcción		109,6
Metalurgia	838,6	202,8
Automotriz y tractores		8.061,8
Maquinaria agrícola		402,1
Manufacturas varias		183,1
Totales	2.124,2	10.041,7

Fuente: Altimir, Oscar; Santamaría, Horacio y Sourrouille, Juan, “Los instrumentos de promoción industrial en la posguerra”, *Desarrollo Económico*, N°22-23, julio-diciembre de 1966

A las medidas mencionadas en nuestro primer comentario del presente apartado, debemos agregarle la sumatoria del Banco Central de la República Argentina como agente fiduciario, lo que significaba que tenía un rol de intermediario en la administración de los fondos provenientes de inversionistas extranjeros. Por otro lado, se establecieron beneficios fiscales tales como exenciones o reducciones de impuestos para las empresas que venían a radicar filiales en el país.

No obstante, lo expuesto, hay tres puntos centrales que debemos destacar y a partir de los cuales podemos reconocer la forma en que el segundo gobierno de Perón resguardaba los intereses estatales. En primer lugar, la ley incluía disposiciones para evitar la concentración excesiva del poder económico en manos de empresas extranjeras. En segundo término, la ley facultaba al Estado argentino a participar en empresas extranjeras, aunque la participación no podía superar el 50% del capital accionario; por último,

se establecieron restricciones en ciertos sectores considerados estratégicos para la economía del país, como la minería y la energía, para proteger los intereses nacionales.

Trabajo y productividad en la política económica del segundo mandato

El Primer Congreso de Organización y Relaciones del Trabajo fue un evento significativo en el contexto de las políticas laborales durante el segundo gobierno. Algunos de los puntos clave fueron la participación y representación de los sindicatos en el ámbito laboral y político, procurando fortalecer la presencia sindical en el proceso de toma de decisiones. También se abordaron allí temas relativos a los derechos laborales: condiciones de trabajo, salarios, horas laborales y beneficios sociales, entre otros. La intención explícita fue discutir estrategias para el desarrollo de un ambiente de trabajo más “armonioso y productivo”.

Lo que puede observarse es que el Congreso de Organización y Relaciones del Trabajo no ofreció al gobierno la respuesta que esperaba, al mostrar ciertos límites a la intención de un pacto que las partes estuviesen de acuerdo en cumplir. Elementos tales como la formación y capacitación de los trabajadores para mejorar la productividad y la calidad del trabajo, o los derechos y regulaciones en torno de la huelga y la resolución de conflictos laborales eran parte significativa de los debates. Sin embargo, no alcanzaba para buscar una forma precisa de estabilizar la puja distributiva, cuyo identificador más certero era observable en la compulsa entre precios y salarios.

Como hemos explicado, el Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo no rindió los frutos esperados, y ello demandó que el gobierno diera un paso algo más arriesgado e imperativo: el Congreso Nacional de la Productividad. Este evento fue convocado de manera conjunta por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica (CGE), aunque claramente demandado por el gobierno. Este Congreso se desarrolló en marzo de 1955, y allí se propuso discutir la forma de racionalizar la producción con el objetivo de elevar la productividad de los trabajadores. En términos concretos, la preocupación que se exponía discursivamente era el cumplimiento de las metas que ya habían sido planteadas en el Segundo Plan Quinquenal.

A modo de conclusión

Muchas de las posiciones presentadas se centran en la construcción histórico-económica. Queremos, también, exhibir de manera sintética, dos lecturas diferentes respecto de lo que significó el ingreso del peronismo a la vida política del país.

En primer lugar, la exposición de Ricardo Sidicaro (2002) en su libro *Los tres peronismos*. En este clásico trabajo, y con relación a los dos primeros mandatos de Perón, el autor plantea un recorrido críticamente detallado del período. Allí, Sidicaro analiza cómo el peronismo surgió como un movimiento político en la década de 1940 y cómo su líder logró consolidar una amplia base de apoyo entre los trabajadores y diversos sectores sociales. En relación con lo último, se examina el papel del carisma en la forma de liderazgo y como manera de consolidar el apoyo popular, explorando de qué forma Perón pudo generar una fuerte conexión emocional con la población.

En el análisis de este sociólogo argentino, la relación de fidelidad –a partir del lazo emocional– no podría explicarse sin las transformaciones socio-económicas que promocionan el acceso a los derechos laborales en el marco del desarrollo industrial, la nacionalización de sectores clave de la economía y las políticas de beneficios sociales. Todas estas fueron acciones sostenidas a partir de la forma particular en que se cultivó la relación entre Perón, Eva Perón y los sindicatos. En la elaboración interpretativa de Sidicaro, las modificaciones en la estructura social y en las formas políticas del peronismo deben entenderse como una acción estatal que cuestionó el predominio de los principales actores socioeconómicos, protagonistas de las definiciones y el control de la vida política hasta mediados de la década del 40. El peronismo, entonces, posibilitó la participación y visibilización de los trabajadores, primordialmente –aunque no únicamente– industriales de los grandes conglomerados urbanos. Esto se relaciona, entonces, con el segundo autor que queremos citar en estas palabras finales: Daniel James.

En su libro *Resistencia e integración*. El peronismo y la clase trabajadora argentina, James analiza la compleja relación entre el peronismo y la clase trabajadora. Destaca que este movimiento representó un fenómeno político y social único en la historia argentina, que logró movilizar y politizar a una amplia base de trabajadores y sectores populares. Este historiador británico argumenta que, a diferencia de otras corrientes políticas, el peronismo no sólo obtuvo el apoyo de la clase trabajadora, sino que también

transformó su identidad y conciencia política. En este sentido, contrariamente a las peyorativas y estigmatizantes interpretaciones que imaginan a un sujeto trabajador acrítico, James resalta que el peronismo no se limitó a un simple intercambio de beneficios económicos, sino que generó una redefinición de la relación entre el Estado, los sindicatos y los trabajadores. Para ello, examina la dinámica interna del movimiento peronista, destacando cómo las bases sindicales adquieren un papel central en la estructura política y social del país. El trabajo de James en la bibliografía sobre peronismo justifica que pueden realizar las tareas mencionadas, al tiempo que analiza las tensiones y conflictos dentro del propio movimiento. James también enumera los desafíos que enfrentaron los trabajadores en la lucha por sus derechos, al igual que resalta la importancia de la resistencia y movilización de la clase trabajadora durante este periodo, y la manera en que este movimiento logró integrar a los trabajadores en un proyecto político más amplio. En síntesis, plantea que el peronismo no sólo representó un fenómeno político, sino que también tuvo un impacto profundo en la identidad y organización de la clase trabajadora. Clase que, a su vez, tuvo un papel central en la construcción del movimiento peronista.

Bibliografía:

- Adamovsky, Ezequiel (2012), *Historia de las clases populares en Argentina (1880-2003)* Buenos Aires, Sudamericana.
- Hobsbawn, Eric (1999), *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica.
- James, Daniel (2019), *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Torre, Juan Carlos (1989), “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”, en *Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales*, IDES, Vol. 28.
- Sidicaro, Ricardo (2002), *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Rapoport, Mario (2020), “Los gobiernos peronistas (1946-1955)”. En *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*, Buenos Aires, Crítica.

Estado, economía y sociedad en la argentina entre 1966 y 1983. Balances y alternativas

Adrián G. Zarrilli y J. Javier Balsa

1. El Estado burocrático autoritario. Alternativas militares en el campo político

El golpe de Estado de 1966 recibe el apoyo de varios sectores de la sociedad: grandes y pequeños empresarios, la mayoría de los partidos políticos y hasta grupos de izquierda, quienes consideran necesario reorganizar el Estado. La primera etapa de gobierno se caracteriza por un “shock autoritario”, cuando se designa como presidente de la Nación al general Juan Carlos Onganía, quien se mantiene en el cargo hasta 1970, cuando es depuesto por la Junta de comandantes en jefe. Las medidas inmediatas del onganiano consisten en disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los partidos políticos, con la confiscación de sus bienes; se limita a cinco el número de ministerios; son separados de sus funciones los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general de la Nación y se crea una forma de Estado Mayor de la Presidencia, integrado por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica. Se inicia el llamado proceso de la “Revolución Argentina”, basado en tres ideas fuerza: orden, jerarquía y moralidad.

En el Acta de la Revolución Argentina (28 de junio de 1966), se dice:

[...] la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culminación de muchos otros errores de los que le precedieron en las últimas décadas, de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuadas a las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo generalizados, la apatía y la pérdida del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida económico-financiera, la quiebra del principio de autoridad y una ausencia del orden y la disciplina que se traducen en bondas perturbaciones sociales y en un notorio desconocimiento del derecho y de la justicia...

Para ello se resuelve:

- 1) Constituir la Junta Revolucionaria con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político y militar de la República.*
- 2) Destituir de sus cargos al presidente y vicepresidente de la República, y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias.*

3) *Disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales.*

4) *Separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación.*

5) *Disolver todos los partidos políticos.*

9) *Designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación.*

11) *Ofrecer el cargo de presidente de la República al señor teniente general Juan Carlos Onganía...* (Verbitsky, 1988, pp. 98-99)

Se afirma que las causas de las intervenciones militares son políticas y no tienen que ver con las características sociales o de organización de los militares sino con la estructura política e institucional de la sociedad. En estas sociedades la política carece de autonomía, complejidad, coherencia y adaptabilidad. Todo tipo de fuerzas y grupos tienden a dedicarse a la política en general. Los países que tienen ejércitos políticos también tienen un clero, universidades, burocracias, sindicatos y corporaciones políticas. Este tipo de sociedades son caracterizadas como “pretorianas”, entendiéndose por tales:

[...] a aquellas sociedades donde todas estas fuerzas sociales participan de la política. No depende de la naturaleza del grupo (militar) que interviene sino en la falta o debilidad de instituciones políticas efectivas en la sociedad. En un sistema social pretoriano las fuerzas se enfrentan desnudas, no se reconocen ni aceptan instituciones políticas, ni cuerpos de dirigentes políticos profesionales, como intermediarios legítimos para moderar los conflictos entre grupos, y lo que es igualmente importante, no existe acuerdo entre los grupos en cuanto a cuáles son los medios legítimos y autorizados de solucionar dichos conflictos. (Huntington, 1968.)

Se origina lo que se ha definido como el Estado burocrático autoritario (EBA), que es un tipo históricamente específico de Estado capitalista. El EBA es el resultado de la atemorizada reacción de la burguesía frente a un proceso acaecido en sociedades dependientes pero altamente industrializadas que, impulsado por una creciente activación popular, parece amenazar los parámetros capitalistas y las afiliaciones internacionales de estos países. El EBA es un Estado capitalista autoritario; su base social es la gran burguesía. En él tienen un peso decisivo las organizaciones coactivas, pues se trata de un sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado para lograr la consolidación de la dominación social. Su régimen no formalizado implica el cierre de los canales democráticos

de acceso al gobierno y, junto con ellos, de los criterios de representación popular o de clase. Dicho acceso queda limitado a quienes ocupan la cúpula de las grandes organizaciones, especialmente, a las Fuerzas Armadas y las grandes empresas (O'Donnell, 1982).

Por un lado, la inestabilidad política se relaciona con la estructura de poder básica de la sociedad. Más allá de la estructura formal, donde la Argentina se presenta como una democracia representativa, con partidos políticos de cierta trayectoria y antigüedad (Radical, Socialista o Demócrata Progresista) existe otra Argentina compuesta por diversas instituciones formales de carácter no político (Iglesia, Fuerzas Armadas, sindicatos) hacia las que se derivan las decisiones políticas importantes.

La llamada Revolución Argentina se presenta entonces como un intento por superar esa inestabilidad crónica. Con este nuevo gobierno, el Estado cuenta con la fuerza suficiente como para imponerse a una sociedad inmersa en una crisis de dominación, y para conseguir un efecto buscado dicta un Estatuto de la Revolución Argentina y supedita a él la Constitución Nacional.

Entre algunas de las cuestiones que preocupan al nuevo gobierno se encuentra el comunismo, que comienza a ser reprimido principalmente en la Universidad, considerada como un foco de las ideas subversivas y por consiguiente intervenida. El 29 de julio de 1966 la policía irrumpe en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, golpeando a alumnos y profesores; este hecho, conocido como “la noche de los bastones largos”, provoca la renuncia y el exilio de muchos integrantes del cuerpo docente. Su lugar es ocupado por los grupos tradicionalistas, clericales y autoritarios que predominan antes de 1955.

A su vez, las medidas de ajuste liberal tomadas por el gobierno afectan a sectores que resultan profundamente perjudicados con las mismas. Es el sector rural el que se ve jaqueado por las restricciones a la exportación. Los sectores empresariales nacionales se quejan por la falta de protección y por la desnacionalización. En Tucumán, Chaco y Misiones se siente la crisis al suprimirse las protecciones tradicionales. También los sectores medios y fundamentalmente los trabajadores se ven perjudicados con estas medidas.

Este ensayo de las Fuerzas Armadas es presentado como un intento por llevar adelante un proyecto de país donde el Ejército se lanza a un proceso de modernización económica para superar, por una fuga hacia adelante desarrollista, la exclusión política de sectores mayoritarios que traba la expansión del gran capital nacional y extranjero. Se trata de una si-

tuación excepcional que da origen a un régimen militar en sentido estricto (Rouquié, 1982).

Éste es el momento de la intervención militar. Como se ha expuesto, en una sociedad pretoriana radical, la intervención militar es, habitualmente, una respuesta a la intensificación del conflicto social. Un conflicto del que participan varios grupos y partidos, y que va unido a la declinación de la efectividad y legitimidad de las instituciones políticas existentes. Esa intervención sirve, entonces, para detener la rápida movilización de las fuerzas sociales en la política y en la calle. La intervención militar señala el final de una secuencia de violencia política (Huntington, 1968).

La naturaleza de la táctica política que emplean los militares refleja la coherencia de organización frente a otras fuerzas sociales que pueden presionar sobre el gobierno. El “medio final” de presionar a la autoridad consiste en eliminarla de su puesto como tal. La forma más directa para lograr ese fin es, en un sistema pretoriano, el golpe de Estado militar. Mientras todos los grupos sociales se dedican a sus propios modos de acción directa, resulta claro que el método militar es el más destacado y eficaz. En la sociedad pretoriana, la intervención militar en política no constituye una desviación aislada respecto de una pauta pacífica y normal. No es otra cosa que un hilo en un complejo esquema de técnicas de acción directa empleado por diversos grupos de clase media en pugna.

En el EBA la base social es la gran burguesía; tienen en él un peso decisivo las organizaciones coactivas, pues se trata de un sistema de exclusión política de un sector popular activado para lograr la consolidación de la dominación social. Esto explica la intervención militar; la violencia social del momento requiere que las organizaciones coactivas asuman un papel preponderante. En el caso específico de la Revolución Argentina, se les pide que enfrenten la amenaza que implicaban la movilización política y social de los sectores populares, no porque significara un avance hacia la desaparición de la clase dominante, sino porque conllevaba una fuerte resistencia hacia su acumulación que podía derivar en una crisis mayor (O'Donnell, 1982).

Subyace la incapacidad de absorber a un movimiento político y a sindicatos que tienen su centro de gravedad en una clase obrera que parece pronta a desbordar los límites en que sus dirigentes quieren encerrarla. Ésta es la amenaza difusa e inminente. En este sentido, el enemigo son los sectores medios y populares que constituyen la base social del sindicalismo, del peronismo y de esas organizaciones de base que no responden a la burocracia sindical conocida, es decir, “el clasismo”. Y se les teme,

particularmente (Rouquié, 1982), en las elecciones o en las huelgas, ambas expresiones de derechos y funciones normales en un sistema pluralista legítimo¹.

La importancia de este dato radica en que el enemigo surge definido en forma distinta; no es necesario que desee tomar el poder o que intente cambiar el modo de producción capitalista, sólo debe resistirse a las normas y procedimientos propios de las fábricas: cambios en los horarios, en los salarios, en la participación en las ganancias; son suficientes para demostrar la debilidad de los capitalistas argentinos para controlar el proceso productivo y para que éstos se sientan amenazados y requirieran del Estado una presencia ordenadora (Cavarozzi, 1983).

En un mensaje enviado al Congreso de la Juventud Peronista realizado en Montevideo, en febrero de 1967, Juan Perón escribía:

Es indudable que el instinto popular ha descubierto la maniobra, y el desprestigio del Gobierno Militar, como el de sus hombres, ha comenzado aceleradamente. Por eso también, lo que inicialmente pudo ser una esperanza se ha transformado en una desilusión que ha ido aumentando simultáneamente con el deterioro gubernamental. Este desgaste paulatino e indetenible se ha visto acrecentado con los distintos problemas provocados en el orden social, ya sea con el atropello a la Universidad, a los portuarios, a los ferroviarios o a los azucareros. [...]

Por manso que sea un pueblo que ha asistido a una depredación continuada del país en manos de sus enemigos, como ha sucedido en estos once años de pesadilla, no puede sino reaccionar violentamente ante el anuncio de que ahora será nuevamente él quien ha de pagar con sacrificios y dolores los desaguizados cometidos por los que usurparon el Poder del pueblo y lo mantuvieron mediante el fraude o la violencia. [...]

[...] El verdadero responsable será el Ejército, que deberá cargar con las culpas de los hechos de los problemas que el Gobierno Militar pueda provocar con su respaldo. La Institución ha firmado un cheque en blanco y ahora, o toma las medidas necesarias para impedir que se siga así, o será ulteriormente responsable de cuanto pueda ocurrir en el futuro.

Es que los hombres de la ‘Revolución Argentina’ no han llegado a percibir

1 El 45: “Te acordás de la Plaza de Mayo/ cuando el que te dije salía al balcón,/ tanto cambió todo que el sol de la infancia/ de golpe y porrazo se nos/ alunó./ Te acordás, hermana, qué tiempos de seca.../ Cuando un pobre peso daba el estirón/ y al pagarnos toda una edad de rabonas/ valía más vida que un millón de hoy./ Te acordás, muy lejos/ Un olor a espanto nos/ enloqueció,/ Era de Hiroshima hermana, que desde donde/ tantas chicas/ Tenían quince años como vos y yo.” La poeta y cantautora María Elena Walsh compuso este tango en 1967. Ella misma se encargó de difundirlo y grabarlo en 1968 con la orquesta de Oscar Cardozo Ocampo. Gobello, José. *Letras de tango. Selección (1897-1981)*, Buenos Aires, Centro Editor de Cultura Argentina, 1999, p. 290.

que las tareas de gobierno están siempre orientadas hacia dos finalidades esenciales: la grandeza de la Nación y la felicidad de su Pueblo. [...] (Perón, Juan D. Latinoamérica, ahora o nunca, Buenos Aires, Ediciones Síntesis, 1973, pp. 64-65.)

Frente a este comportamiento, durante 1968 surge la CGT de los Argentinos, liderada por el gráfico Raimundo Ongaro, opositor a un acercamiento con el gobierno, que realiza protestas medianamente controladas por el gobierno. Sin embargo, esta emergencia reúne a dos grupos de dirigentes hasta ese momento enfrentados: el tradicional grupo vanderista y los llamados “participacionistas”. Onganía, que a poco de asumir inaugura “la teoría de los tiempos” (económico, social y político, sucesivamente), apoya a estos grupos y considera que una vez concluida la reestructuración económica es posible iniciar el “tiempo social”.

En el número 7, del diario de la CGT de los Argentinos (13 de junio de 1968), se publicaba:

La Paz de Onganía

“Damos gracias a Dios por la paz que reina en nuestra patria”.

Las palabras del presidente Onganía revelan su dramática falta de capacidad para percibir la violencia subterránea que domina la vida nacional.

Tal vez impresionado por los primeros signos exteriores de esa violencia, el general Onganía decreta la paz y se toma la tremenda libertad de hablar en nombre de ella. El pueblo argentino no ha elegido al general Onganía. El general Onganía llega a la presidencia de la República por el camino de la violencia armada, con los ataques en la calle, quebrando los últimos restos formales de paz que había en el país. El general Onganía no ha puesto el poder obtenido por la violencia al servicio del pueblo, sino contra el pueblo. El consentimiento relativo que puede tener al principio ya no existe. Por los procedimientos normales y democráticos de elección, el general Onganía tal vez no ganaría hoy siquiera una intendencia en el pueblito más chico del país.

El gobierno del general Onganía no es lo opuesto a la violencia que pretende reprobado: es la violencia misma. No es la paz, es la imposición de la paz a un pueblo intimidado por las armas. Es más bien la ocupación que sucede a la guerra y forma parte de la guerra.

Pero el general Onganía da gracias a Dios por la paz que reina en nuestra patria.

(El Diario de la CGT de los Argentinos. N°1, Página/12-UNQ, Bernal, 1997, p. 54.)

Pero el descontento social llega a su límite el 29 de mayo de 1969 cuando estalla un movimiento de protesta en la ciudad de Córdoba, “el cordobazo”, liderado por estudiantes universitarios y obreros, principalmente de las industrias automotrices que se encuentran en dicha ciudad. La represión del Ejército provoca más de una veintena de muertos y más de quinientos heridos. Este hecho inicia una serie de protestas que caracteriza a un nuevo activismo sindical, cuyos reclamos no se limitan a un aumento salarial, sino también a las condiciones de trabajo. Este nuevo movimiento inaugura una era de violencia que incluye la ocupación de plantas industriales, la toma de rehenes y una importante movilización de la sociedad. No sólo los trabajadores asalariados participan en estas huelgas, también lo hacen los trabajadores no agremiados, los sectores medios representados por los maestros, los profesores, los empleados públicos, los funcionarios judiciales y hasta los pequeños comerciantes e industriales, quienes toman partido frente a la situación. También se suman los grandes productores rurales y los sectores nacionales de empresarios a estas manifestaciones, que se inscriben como una respuesta al marco de autoritarismo del poder nacional (Bras, 1984).

Una particularidad va naciendo hacia fines de la década del sesenta: es una expresión religiosa cada vez más politizada, denominada Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, que militan en las zonas más pobres (por ejemplo, villas de emergencia o zonas rurales empobrecidas), e impulsan reclamos y protestas que en algunas ocasiones llegan a las huelgas de hambre.

Las reacciones encuentran un punto de atracción en el peronismo que se encuentra proscripto y es tomado como un espacio de concentración y movilización. Es desde dentro del peronismo y desde diferentes fracciones de la izquierda que surgen distintos grupos de lucha: las Fuerzas Armadas Peronistas, izquierda peronista identificada con las ideas de John W. Cooke; los “Descamisados”; las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), integradas por grupos foquistas liderados por Roberto Quieto, que luego se integran a Montoneros; las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), rama armada del Partido Comunista-Leninista; los Montoneros que crean en 1967 Fernando Abal Medina, Carlos Ramus y Mario Firmenich, con jóvenes militantes de la Acción Católica Argentina y de la ex organización nacionalista Tacuara; y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, fundado por Luis Pujals y Mario Santucho. Es el grupo Montoneros el que formaliza su carta de presentación con el secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, en mayo de 1970 (Gillespie, 1997).

Si bien existen diferencias entre estas organizaciones, todas aspiran a transformar la movilización espontánea de la sociedad en un alzamiento generalizado; todas, además, tienen como base de apoyo las ideas de izquierda, la experiencia cubana, y valoran la violencia como justificativo de un medio de lucha.

En 1970, los Montoneros manifestaban:

[...] El régimen se vio obligado a cambiar de guardia y al “nacionalista” Onganía sucedió el “liberal” Levingston para buscar una apertura política que resuelva el problema irresoluble que viene arrastrando hace quince años. [...] la contradicción peronismo-antiperonismo hace utópica toda posibilidad integracionista, porque o no hay elecciones mientras el general Perón viva, o hay elecciones sin Perón. [...] Por ser conscientes de esta encrucijada histórica es que hemos elegido el camino de la resistencia armada para abrir paso al acceso de los trabajadores al poder. No nos guía ninguna intención de jugar a la guerra y si tomamos las armas es a pesar nuestro. No somos nosotros los que inventamos la violencia, sino que la violencia es cotidiana, propia del sistema. [...]

Detrás nuestro no hay ningún cerebro maquiavélico como pretende el gorilaje, ningún general oportunista, ninguna potencia extranjera, detrás nuestro sólo puede estar el pueblo y el general Perón. [...]

A todos nos corresponde esta gran responsabilidad, a los trabajadores, estudiantes, a los intelectuales, los profesionales, los curas y a los militares patriotas que individualmente quieran sumarse, porque juntos debemos emprender esta segunda guerra de la independencia nacional por una Patria Justa, Libre y Soberana. ¡Perón o Muerte!, ¡Viva la Patria!

Montoneros. (Baschetti, Roberto, compilador. Documentos (1970-1973). De la guerrilla peronista al gobierno popular, Editorial de la Campana, Buenos Aires, 1995, pp. 100-104.)

El gobierno presenta los hechos como producto de una “fuerza extremista organizada”. La respuesta de Onganía es buscada a través de una solución económica, al reemplazar a Krieger Vasena, y en una apertura más decidida a la cuestión social, particularmente acercándose a la CGT y sus dirigentes “participacionistas”. Sin embargo, la activación de los grupos sindicales hace imposible aplacar su acción. Frente a esta imposibilidad, los efectos de “el cordobazo” y del asesinato del dirigente metalúrgico Augusto T. Vandor (el 30 de junio de 1969), los militares reemplazan a Onganía por el agregado militar en Washington, Roberto Marcelo Levingston, quien propone la formación de nuevos partidos políticos y hasta un movimiento

nacional que asumiera la continuidad de la transformación y que diera al país la posibilidad de acceder a la democracia en unos cuatro o cinco años.

Tanto el sindicalismo como los partidos políticos se convierten en mediadores frente a la posibilidad de un cambio político, pero principalmente como respuesta a una emergencia social que exige al gobierno una salida política. Sin embargo, en medio de la violencia sindical y la conformación de la “Hora del Pueblo” (en noviembre de 1970), los militares interpretan que Levingston es incapaz de preparar este cambio y lo reemplazan por el general Alejandro Lanusse, quien aparece como el mejor candidato para conducir el proceso de retirada de las fuerzas armadas del gobierno. Se modifica el Estatuto de la Revolución Argentina y el gobierno deja de ser compartido (Calello y Parceró, 1984).

En marzo de 1971 el general Alejandro A. Lanusse y su ministro del Interior, Arturo Mor Roig, anuncian el restablecimiento de la actividad política y la convocatoria a próximas elecciones. De esta manera, intentan reconstruir el poder y legitimar al Estado. Mientras tanto, algunos sectores estatales y las Fuerzas Armadas comienzan una represión ilegal que implica el secuestro, tortura y asesinato de militantes, siendo el caso más resonante el de un grupo de guerrilleros en Trelew en agosto de 1972.

Por otra parte, estos asuntos y la situación económica no benefician la imagen del gobierno: inflación, caída del salario, fuga de divisas y desempleo agravan el estado general económico financiero y social del país. La preocupación reside en tratar de gestionar una candidatura de transición en manos del general Lanusse que se refiere cada vez más al “proceso de institucionalización”. En 1972 el Partido Justicialista obtiene la personería política, comienzan las negociaciones con Perón, se propone el Gran Acuerdo Nacional y finalmente se llega a conformar una alianza electoral: el Frente Justicialista de Liberación que presenta su fórmula presidencial encabezada por Héctor Cámpora (delegado personal de Perón) y Vicente Solano Lima de la línea conservadora. El lema de la campaña electoral es “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, y de esta manera se entiende la representación política real que tendría la fórmula.

2. El retorno del populismo y la fragilidad de la democracia

Pocos meses antes del fin de 1972 el retorno de Perón es inconcebible. Sin embargo, una serie de medidas suprime casi todas las restricciones y permite que se realicen comicios libres. Las elecciones son ganadas por la coalición justicialista, que alcanza el 50 por ciento de los votos. El resultado no es sorprendente, pero excede lo que el gobierno e incluso los jefes

de la coalición esperan, sobre todo si se considera que la candidatura de Perón está prohibida y la de su sustituto es muy débil. En nueve de los 24 distritos electorales, los candidatos del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) sobrepasan el 50 por ciento de los votos, lo que evita la realización de una segunda vuelta (Di Tella, 1986).

Esta elección permite comprobar que el caudal electoral del peronismo está compuesto nuevamente por dos grupos muy disímiles entre sí. En los centros urbanos prevalece el electorado obrero, ordenado detrás de las organizaciones sindicales. En las provincias menos urbanizadas los sindicatos no tienen tanto peso; prevalece en cambio la jefatura personalizada del caudillo local, posibilitando hasta cierto punto un manejo del electorado no del todo distinto del que practican los caudillos conservadores en el pasado. Tal dicotomía refleja el desarrollo inicial del peronismo, basado en la absorción, entre otros grupos, del electorado progresista urbano y del conservador rural (Cavarozzi, 1983).

Las elecciones son celebradas como un gran paso hacia el logro de una solución política. Las dudas que existen sobre la disposición de los militares a entregar el gobierno se disipan, pues han llegado demasiado lejos, poniendo en marcha un proceso que ya no se puede revertir. La actitud general es de reconciliación, pero se exige claramente una suerte de participación directa en el poder. Se crea un verdadero clima de entusiasmo, como una súbita explosión de demandas sofocadas por largo tiempo. Se proponen toda suerte de proyectos y surge la idea de que una vez en el poder las fuerzas populares superarían los obstáculos. Se propaga una actitud que por momentos es festiva, inconsciente, irresponsable y muchas veces provocativa. Parece que por fin llega una solución política que es digna de ser probada.

En este contexto se designa un nuevo comandante en jefe del ejército. Los grupos más decididos proponen nombrar a un coronel cercano al nuevo gobierno, lo que significa el retiro de toda la plana mayor de la fuerza. Pero, finalmente, se sigue el orden de precedencia militar y se nombra al general Jorge Carcagno, del grupo “azul”, que desde el principio resulta un claro defensor de la idea de zanjar diferencias entre el Ejército y las nuevas corrientes políticas:

Elecciones presidenciales, 11 de marzo de 1973 (en %)

Principales Distritos electorales	Frejuli (Cámpora)	UCR (Balbín)	Alianza Popular Federalista (Manrique)	Alianza Popular Revolucionaria (Alende)
Capital Federal	37,0	23,8	18,5	14,4
Buenos Aires	52,3	19,7	12,9	10,2
Córdoba	44,9	36,4	9,9	3,3
Corrientes	46,5	11,9	—	4,1
Entre Ríos	52,8	30,3	5,1	3,7
Santa Fe	49,2	15,4	29,1	3,3
Total del país	49,6	21,3	14,9	7,4

Fuente: Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral.

[...] el ejército de mi país se presenta hoy... reconociendo como principios básicos inalienables el de la no intervención, el de la autodeterminación de los pueblos y el del escrupuloso respeto a las individualidades de cada país en un contexto en el que carecen de sentido las diferencias ideológicas... La imagen de los ejércitos como guardias pretorianos de un orden político, económico y social injusto es en extremo pernicioso para la salud de los pueblos, para el logro de sus aspiraciones, para la confirmación del ser nacional y para su proyección continental.
(La Opinión, 6/9/73)

Resulta claro que, para un sector del Ejército, la subversión echa raíces como consecuencia de la falta de legitimidad de los gobiernos anteriores y de la existencia de injusticias sociales y económicas:

Al identificar subversión como respuesta a un orden social injusto, las FFAA... advierten que la erradicación por la fuerza de este tipo de subversión se torna imposible, y del empleo del poder militar contra ella, se deriva un distanciamiento cada vez mayor entre el pueblo y el ejército que forma parte de ese pueblo.
(La Opinión, 6/7/1973.)

Se realiza el “Operativo Dorrego”, en el curso del cual los conscriptos cooperan con la Juventud Peronista y miembros de la organización Montoneros en el programa de acción civil (Gillespie, 1997).

El gobierno de Cámpora, como consecuencia de su corta permanencia en el poder, toma pocas medidas. Entre las más importantes se cuentan las designaciones de muchos funcionarios de inclinación izquierdista. Probablemente, en aquel momento, pocos piensan que personas como Raúl Bidegain, Ricardo Obregón Cano y Martínez Baca, gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, respectivamente, tienen tendencia alguna hacia la izquierda, y otro tanto puede decirse de Jorge Taiana, ministro de Educación. Pero de ningún modo puede definirse al programa del nuevo gobierno como izquierdista; más bien tíbiamente nacionalista y distribucionista. No se trata de un programa socialista, pues no contempla un aumento del sector de propiedad pública; pero es notoriamente intervencionista, porque se basa en la acción estatal y demuestra en general una suerte de desconfianza respecto de los mecanismos del mercado (Di Tella, 1986).

Uno de los elementos esenciales de este plan es el llamado “pacto social”. Constituye un aspecto central de la ideología peronista. En suma, el pacto supone un acuerdo sobre la manera de distribuir el ingreso nacional entre los trabajadores, representados por los sindicatos y los sectores empresarios. Esta idea tiene algunas connotaciones corporativistas, particularmente por la necesidad de imponer a cada sector una representación única. Más importante es, desde el ángulo peronista, el concepto de que las distintas clases sociales pueden convenir una solución armoniosa. El estímulo gubernamental es visto como una función esencial del Estado, y si éste se halla en manos de una coalición dotada de las características del Justicialismo, el éxito es considerado posible (Horowicz, 1985).

Pero la experiencia de Cámpora está condenada desde el principio, puesto que sólo representa las opiniones e intereses de una porción minoritaria del movimiento, que había tenido muy poca influencia en el pasado y, según se demostró después, cuenta con apoyo electoral bastante escaso. La fricción natural entre un líder personalista como Perón, y un presidente peronista se intensifica por la nueva orientación política que adopta Cámpora. Se torna así inevitable el conflicto con la circunstancial coalición formada por la pequeña y mediana empresa, los sindicatos y el ala derecha que domina el círculo íntimo de Perón. Se trata de una alianza típicamente peronista, la misma que ha caracterizado a su primer gobierno, colocando a los grupos juveniles universitarios en su tradicional papel opositor. Perón, partidario de esta coalición, impone en julio de 1973 la renuncia de Cámpora (De Riz, 1986).

La presidencia es confiada transitoriamente a Raúl Lastiri, presidente

de la Cámara de Diputados y miembro del grupo derechista liderado por José López Rega, para lo cual se deja de lado, mediante un artificio legal, la precedencia constitucional que tiene el presidente del Senado, por considerarlo ideológicamente sospechoso. De acuerdo con la Constitución se programan para septiembre de ese año nuevas elecciones, en las Perón finalmente puede ser candidato. La decisión crucial es la designación por parte de Perón de su esposa “Isabel”, María Estela Martínez de Perón, como candidata a la vicepresidencia. Ella está profundamente comprometida con el ala derecha del partido, hecho que habría de manifestarse de manera clara en los posteriores conflictos de su presidencia (Gillespie, 1997).

Desde su retorno, Perón procura presentarse como un viejo estadista que se halla por encima de los pequeños problemas; habla de reconciliación nacional y presiona sobre sus partidarios para que cedan frente a las demandas de sus aliados políticos. Pero el nombramiento de Isabel, si bien no es totalmente inesperado, da la impresión de que retorna a algunas de las prácticas muy personalistas y arbitrarias que tanto le habían costado antes en términos de respetabilidad y aceptación pública.

El FREJULI con Perón como candidato presidencial obtiene el 65,1 por ciento de los votos, y de este modo excede por mucho los resultados antes alcanzados por el Frente. La cifra del 50 por ciento es superada en todos los distritos donde se sufraga, con la excepción de Buenos Aires (Di Tella, 1986). Esta vez Perón se presenta como defensor del sistema. Es electo para poner fin al anterior experimento de “izquierda” y con claro mandato de terminar con la subversión. Ya desde el acceso de Lastiri a la presidencia de la Nación, y más todavía después de la elección de Perón, el anterior movimiento hacia uno de los extremos es drásticamente revertido. Los gobernadores de las provincias de Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Cruz son destituidos, mientras que el gobernador de Buenos Aires es obligado a renunciar. A su vez, muchos funcionarios que sustentan opiniones izquierdistas son destituidos de sus cargos. Igual suerte corre el Comandante en Jefe del Ejército, que es reemplazado por un candidato apolítico, cuyo nombramiento se ajusta a la jerarquía militar tradicional. La marea izquierdista que barre el país cede ya en todos los frentes.

Los grupos juveniles oscilan entre cierta apariencia de aceptar las nuevas reglas del juego y una actitud de enfrentamiento abierto y de apoyo a las actividades violentas. Su idea de conservar una rama legal, llamada primero Juventud Peronista (JP) y después Partido Peronista Auténtico y, al mismo tiempo, mantener lealtad hacia la organización Montoneros,

constituye una proposición totalmente inaceptable para el gobierno. Luego de la amnistía y la legalización de las organizaciones armadas en 1973, y ante una suerte de tregua temporaria, los Montoneros recomienzan sus actividades después del enfrentamiento de Ezeiza. Muy poco antes de asumir Perón, matan al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci -sucesor de Vandor-, uno de los principales dirigentes sindicales y el que más influye para obtener el apoyo de los gremios para sostener la política económica del gobierno. El episodio constituye una clara provocación al presidente de la Nación, quien anuncia, todavía con moderación pero pre- anunciando los hechos por venir, que:

El asesinato del secretario general de la CGT no es sino la culminación de una descomposición política que los hechos han venido acumulando a lo largo de una enconada lucha, que influyó a algunos sectores de nuestra juventud, quizá en momentos justificados, pero que hoy amenaza con tomar caminos que divergen totalmente de los intereses esenciales de la república.
(*La Nación*, 4/10/73.)

Éstos y otros sucesos violentos (algunos de ellos llevados adelante por el ERP) producen, en este período, un ascenso progresivo del ala derecha del movimiento, representada por Isabel, y en particular por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Son ellos quienes adquieren creciente influencia, si bien no alcanzan el control completo de la situación hasta la muerte de Perón. Con todo, les es posible emplear métodos de fuerza; pueden eliminar a parte de la oposición, pero exasperan a los grupos de izquierda y les dan pretextos para actuar de la misma manera. Es otro ejemplo de que el empleo de la fuerza permite alcanzar algún objetivo a corto plazo, con el riesgo de comprometer objetivos a largo término, mucho más importantes, como el de la legitimidad (Cavarozzi, 1983).

Uno de los elementos fundamentales que le sigue faltando al Partido Justicialista es un sector político orgánico. Este vacío se llena con una precaria alianza entre el ala derechista, el sector de la pequeña empresa y sindicatos, es decir, la misma coalición que determina la caída de Cámpora y la elección de Perón. En vez de contar con una rama política orgánica, el movimiento debe confiar en esa alianza, y si bien esto contribuye a mantener una estructura de poder pluralista, lo torna muy inestable, debido a que cada uno de los grupos tiene considerable fuerza propia, pero se mantienen muy divididos entre ellos. Entonces, la ausencia de una máquina bien aceitada capaz de arbitrar sus relaciones se hace sentir de manera

particularmente intensa.

El gobierno padece los efectos de las tensiones y desgastes normales. Corta sus lazos con la izquierda; está en muy malas relaciones con el sector agrícola y en relaciones difíciles con el sector del empresariado industrial. Cuenta con fuerte apoyo de los sectores sindicales, aunque siente los efectos de algún malestar en sus bases. El factor nuevo e inesperado que viene a sumarse a este cuadro de situación es la acción de los grupos armados, que sigue en aumento, aunque no ha llegado a constituir aún el problema decisivo que representaría después. Resulta claro que en este punto la solución política ha fracasado, los movimientos armados no han depuesto las armas aunque el gobierno ha sido democráticamente elegido y contaba con fuerte apoyo popular (De Riz, 1986).

Hacia fines de la presidencia de Perón sobrevienen algunos acontecimientos de suma importancia. El primero se produce con motivo de la multitudinaria manifestación efectuada para celebrar el 1° de mayo. La Juventud Peronista y los Montoneros se congregan en columnas propias en la Plaza de Mayo, cantando consignas contra Isabel. Perón reacciona violentamente, y los condena en los términos más enérgicos; elogiando, en cambio, a los sindicatos y a la CGT:

El gobierno está empeñado en la liberación del país no solamente del colonialismo sino también de estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan afuera.

Hoy resulta que algunos pretenden tener más méritos que los lucharon durante 20 años. No me equivoqué en la calidad de la organización sindical que se mantiene a través de 20 años pese a esos estúpidos que gritan.

Estas organizaciones y estos dirigentes sabios y prudentes han mantenido su fuerza orgánica y han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que todavía haya sonado la hora del escarmiento.

(Discurso de Perón citado por Di Tella, 1986.)

La disputa es pública y sumamente grave. Los grupos juveniles se van de la emblemática Plaza de Mayo dejando vacía la mitad de ella. Es la primera oportunidad en que manifiestan abiertamente su posición al "líder". La solución política del problema de las organizaciones armadas de izquierda fracasa y Perón y su partido se enfrentan resueltamente con ellas. La figura del líder sale algo deteriorada de ese primer rechazo público, y para el 12 de junio de 1974 se organiza otra manifestación. Esta vez a cargo de los sindicatos, quienes tratan de demostrar así que su capacidad

de movilización no es inferior a la de las flamantes organizaciones políticas que acompañan al peronismo. Esta manifestación, la última a la que asiste Perón, obtiene considerable éxito, y le da la oportunidad de reiterar un llamamiento al orden, elogiado y criticando ásperamente a sus propios partidarios por su falta de disciplina.

Perón muere el 1 de julio de 1974, y su muerte intensifica la incertidumbre sobre el futuro. Su presencia había ejercido un papel de arbitraje, que había permitido mantener la cohesión de una alianza excepcionalmente amplia y heterogénea. Su deceso no sólo hace posible que afloren de nuevo las tensiones reprimidas, sino que, además, determina la aparición de otras, peculiares de esta nueva situación carente de liderazgo. En ese contexto, Isabel, con pleno apoyo de López Rega y bajo su poderosa influencia, trata de conducir el gobierno y lleva adelante, en forma sorprendentemente enérgica, un programa de derecha, de línea muy autoritaria, que alarma incluso a las fuerzas tradicionales: “El vuelco aparente hacia la derecha en el campo político tiene sus peligros si la reacción hacia la subversión se vuelve irrazonable y se pierde la noción de equilibrio” (La Nación, 10/11/74).

Este cambio de política es tan decisivo para explicar la intensidad de los conflictos que siguieron, particularmente dentro del peronismo, como lo es la pérdida de un líder; el cuestionamiento a la autoridad presidencial es mucho mayor de lo que sería en otras circunstancias. El nuevo programa supone otro tipo de alianza social y no puede menos que romper el precario equilibrio existente entre los varios sectores que aún apoyan al gobierno e impone un reordenamiento de fuerzas. Los sindicatos, los pequeños empresarios y los partidos minoritarios que han aportado su apoyo al gobierno dan un paso atrás, a la vez que se enfrían las relaciones con los radicales y se tienden nuevas líneas hacia los militares y hacia el sector empresarial más poderoso. El nuevo programa rompe con una larga tradición peronista y se dirige a grupos que, como los militares y las grandes empresas extranjeras, habían confrontado -en otras ocasiones- dicha tradición (Torre, 1983).

Cinco son los objetivos básicos de la nueva política de Isabel: 1) acabar con la subversión, mediante el empleo de grupos civiles paramilitares; 2) eliminar la infiltración izquierdista en la educación en general y en la Universidad de Buenos Aires en particular; 3) poner fin a las políticas económicas antiempresarias, relativamente nacionalistas y reformistas, con un vuelco hacia la economía de mercado, los capitales extranjeros, y restableciendo la disciplina industrial; 4) someter de los dirigentes sindicales;

5) comprometer a los militares en el abandono de la neutralidad política, apoyando tácitamente las medidas a adoptar.

Este programa bien puede ser identificado con los de los sectores tradicionales conservadores. Los objetivos pueden ser compartidos por grupos de centro-derecha, pero los métodos empleados, las connotaciones profascistas y la intensidad de las medidas suscitan objeciones, incluso en algunos de esos grupos. El problema central consiste en la lucha que, dentro de la coalición gubernamental, libran los sindicatos y el ala derecha, encabezada por la presidenta de la Nación. Durante los últimos meses de 1974 y los primeros de 1975 se asiste a un creciente enfrentamiento entre ambos sectores.

A comienzos de 1975 la situación económica exterior empeora, y complica los problemas derivados del aislamiento político del gobierno. En marzo, una devaluación precipita demandas salariales, dando la impresión de que el pacto social había llegado a su fin. El ala derecha estima entonces que es el momento de llevar hasta sus últimas consecuencias el programa económico original y designa a Celestino Rodrigo como nuevo titular de Economía, cuando -con anterioridad- la derecha había obstaculizado, en forma contradictoria, algunas de las políticas moderadas propuestas por Alfredo Gómez Morales. En los albores del 75 es apoyado un programa drástico, que desemboca en “el rodrigazo” (Canitrot, 1975).

A su vez los dirigentes sindicales se sienten insultados y amenazados, y comprenden que deben luchar por la supervivencia. No es sólo cuestión de poner fin a una política adversa, se trata también de sobrevivir como líderes autónomos dignos de crédito o ser sustituidos por dirigentes nombrados por círculos gubernamentales. La CGT llama a una huelga nacional para el 7 y 8 de julio. La estrategia sindical consiste en organizar movilizaciones de masas mientras se exige un exorbitante aumento salarial, creándole al gobierno una situación imposible. Estas acciones resultan explosivas y conducen a la destitución de López Rega y de Rodrigo, en un contexto de alta inflación y desorden social (Torre, 1983).

Para entonces el gobierno está perdiendo la mayor parte de su apoyo. La Presidente no es más que una figura decorativa, con un aparente poder sindical, sólo controlado por la débil ala política del partido, pero conserva aún su posición formal en el poder. El poder incontrolado de los sindicatos, sus exageradas demandas y su conducta en muchos casos poco responsable, contribuyen de manera significativa al clima que desemboca en el golpe. A esta altura de los hechos, el gobierno es perjudicado tanto por sus aliados como por sus enemigos.

Después de dos sucesivas licencias presidenciales el gobierno queda dividido, llevando las cosas a un punto muerto resultado del empate de fuerzas, lo que hace que poco a poco se llegue a una situación anárquica, sin una autoridad clara. Aprovechando esta situación, algunos grupos opositores empiezan a proclamar públicamente la posibilidad de una “revolución”, y algunos sectores económicos preparan a la opinión pública para ese acontecimiento. Dos “lock-outs” declarados por el sector agropecuario ayudan a crear un ambiente propicio a tal fin. Muchos grupos comienzan a conducirse en vistas a esa coyuntura, tornándose sumamente rígidos y agresivos en sus exigencias (Torre, 1983). El gobierno se encuentra atrapado en una situación cada vez más difícil. La cúspide está dividida entre el grupo más moderado y el ala derecha. Los sindicatos se enfrentan a la Presidente y sus exageradas ambiciones carcomen la alianza con los sectores políticos moderados. Las esperanzas suscitadas al principio por el nuevo programa económico se transforman en decepción.

Los militares se muestran ansiosos por actuar y formulan varias advertencias al gobierno, precipitando un clima pregolpista. En enero la Presidente trata de obtener apoyo militar, sugiriendo una reforma que siguiera las líneas de una “bordaberrización” del gobierno, esto es, preservar una fachada civil legal, y a la vez permitir la intervención militar directa en la designación de quienes cubrirán los cargos más importantes.

Rechazada la oferta (derivada de la muy mala reputación del gobierno), el movimiento militar encuentra al partido dividido y en pugna con su jefatura, incapaz de ofrecer lucha y nada dispuesto a ella; con una oposición incapaz de articular soluciones, con un nivel de violencia creciente, el golpe no tiene oposición. En estos términos se pone fin a los tres años y medio de la segunda experiencia populista argentina.

Una Junta Militar derroca a la presidente María Estela Martínez de Perón. La Proclama del golpe de Estado establecía:

Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada, en forma irrefutable, la imposibilidad de recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro.

Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración.

Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía; a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional; a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en

la adopción de medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentará a la subversión; a la carencia de soluciones para problemas básicos de la Nación cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos; a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo; a la especulación y la corrupción generalizada, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe; las Fuerzas Armadas en cumplimiento de una obligación irrenunciable han asumido la conducción del Estado.

Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias que puede tener sobre el destino de la Nación toda, una actitud distinta a la adoptada.

Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder. Es una decisión por la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno, rechaza por consiguiente, la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia. (Verbitsky, 1988, pp. 142-144)

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio E. Massera y el brigadier Orlando Agosti, se hacen cargo del poder, dictan los instrumentos legales del llamado Proceso de Reorganización Nacional y designan presidente de la Nación a Videla. Comienza una etapa política sangrienta y oscura para la historia argentina. Clausurados los espacios donde los individuos pueden identificarse en colectivos más amplios, cada uno queda indefenso ante un Estado que administra a su gusto la justicia y tendrá la sociedad inmovilizada y sin reacción que impone la cultura del miedo (Cavarozzi, 1983).

Un último inadvertido mandamiento cumplió el “Proceso” militar: la derrota del peronismo. Se trató de un objetivo al que, curiosamente, la cúpula militar había renunciado por inviable. En ese sentido, pero sólo en ese sentido, el “Proceso” asume la tradición de la Libertadora, del mismo modo que asume todas las tradiciones reaccionarias de la historia argentina entera. [...]

El cuarto peronismo es el de la derrota, el de la disgregación, el de los que todavía aguardan que la crisis del capitalismo dependiente se resuelva en los marcos del capitalismo dependiente. [...]

Entre 1880 y 1930, entre 1930 y 1976, la sociedad argentina eludió con más o menos eficacia toda transformación revolucionaria. El conservatismo cerril de la sociedad agraria triunfó de punta a punta, mutó los soportes sociales y políticos sobre los que se constituyó pero, aun así, el perfil se mantuvo esencialmente idéntico. (Horowicz, Alejandro. Los cuatro peronismos. Historia de una metamorfosis trágica, Planeta, Buenos Aires, 1991, p. 360)

3. La crisis económica argentina: de la dictadura de Onganía a la crisis de la deuda

Mientras tanto, ¿qué ocurre con la economía argentina? Al comienzo de su mandato la política económica de Onganía no difiere demasiado de la de Illia. Su primer ministro de Economía, Jorge Salimei, y el presidente del Banco Central, Felipe Tami, son católicos con ideas corporativistas y pronto llevan a los empresarios, quienes han visto con beneplácito el derrocamiento de Illia, a prestar apoyo al gobierno de facto. Salimei toma dos medidas que pronto motivan su alejamiento del cargo: 1) interviene los grandes ingenios azucareros para promover la diversificación económica del noroeste y quitar espacio a la guerrilla; y 2) intenta racionalizar las actividades del puerto de Buenos Aires. A fines de 1966, se impone un cambio total de gabinete. Ocupa el ministerio de Economía Adalberto Krieger Vasena y el péndulo vuelve a inclinarse hacia el liberalismo.

El programa de 1967 difiere en aspectos importantes del enfoque ortodoxo propio del período 1962-1963. Se parte del supuesto de que la inflación es eminentemente de costos y se ponen en marcha un conjunto de medidas tendientes a contenerlos. Se congelan los salarios, se asume el compromiso de no devaluar (pero no se cumple), se suspenden los convenios colectivos de trabajo y se mantienen fijas las tarifas de los servicios públicos.

En ese contexto la CGT se divide entre los que apoyan al gobierno y elaboran una salida política cercana a Onganía (CGT Azopardo) y el sector más combativo (CGT de los Argentinos), quienes plantean su posición frente al gobierno de Onganía y los dirigentes gremiales cercanos al onganiano; tal como lo expresa el periódico de la CGT de los Argentinos (Callelo y Parceró, 1984).

El último día de enero, la dictadura militar pone en marcha el operativo que, según sus planes, ha de permitirle contar con la CGT adicta.

Cuarenta y cuatro dirigentes acudieron a la Casa Rosada, tras estampar su firma al pie de un documento elevado al general Onganía y al doctor Krieger

Vasena, que sonriente ocupaba un sillón a su lado.

Unidos en la final claudicaron están allí el que entregó la ley de despido y el descubridor de la tachuela en la silla; un enviado de Taccone y otro de Cavalli el obsecuente Peralta y el astuto Lolobaberry.

Para esta flor y nata del colaboracionismo, el general Onganía no es ya el usurpador del poder, representante de la oligarquía entreguista: es el “excelentísimo señor presidente”. Tampoco Krieger Vasena es ya el congelador de los salarios, el interventor de gremios, el agente de la National Lead y los monopolios eléctricos: es el “excelentísimo ministro de Economía y Trabajo”.

Tímido y llorón el papelucho presentado por estos voceros de una nueva corriente de opinión, que es tan vieja como el primer fratricidio que cuenta la Biblia, se burla de los trabajadores a quienes atribuye un “aporte desinteresado real” a una recuperación económica que nadie ha visto, y que en cuanto política extorsiva y explotadora es unánimemente resistida.

Procuran, así, hacer cómplices a los trabajadores de una traición en la que sólo ellos son protagonistas. Nuestro aporte a las arcas de los patrones monopolistas ha sido tan desinteresado como el que hace la víctima del asalto al asaltante... (“La CGT de Onganía”, núm. 38, 6 de febrero de 1969. El Diario de la CGT de los Argentinos 3, Página/12-UNQ, Bernal, 1997, p. 68).

La política fiscal busca el equilibrio mediante un fuerte aumento de impuestos y cargas sociales que implican una traslación de precios al sector público. Por otra parte, las altas tasas de interés en el mercado financiero interno, la perspectiva de estabilidad del tipo de cambio y la aparente solidez del gobierno militar estimulan la entrada de capitales externos de corto plazo entre 1967-1968. Además, después de 1968, el gobierno sigue una deliberada política de expansión del crédito interno al sector privado; a su vez, y debido a circunstancias coyunturales, la tasa de inflación es del 9 por ciento en 1969, contra el 30 por ciento dos años antes (Arnaudo, 1987).

La política tributaria de Krieger Vasena tiene aspectos innovadores: baja los aranceles de las importaciones esenciales de materias primas y maquinarias a fin de alentar la modernización agropecuaria e industrial; pero a la vez suprime los impuestos a las ventas de la maquinaria nacional para ayudarla a competir. Intenta fomentar el ahorro y la inversión, se incrementa el mínimo no imponible de los impuestos a los ingresos a las ganancias de capital, mientras se elevan otros tributos como el impuesto a las ventas, las tarifas de los servicios públicos y las retenciones a las exportaciones.

Intenta además reducir la nómina de los salarios públicos (centrándose en ferrocarriles y puertos) y ataca la inflación merced a la constricción tanto de los salarios como de los precios. Con Onganía, la política pública retorna a una mayor libertad de comercio a fin de forzar a la industria nacional a que se transforme en más eficiente. Este esquema parece funcionar, particularmente cuando se explicita el propósito de Onganía de respaldar firmemente a su ministro; despreocupado de su popularidad, no escatima en el uso de la fuerza contra las protestas sociales.

Con estas medidas y un significativo costo social, la recesión de 1966 es rápidamente superada. En 1968 el PBI crece 4,3 por ciento y en 1969, 7,9 por ciento. La inversión bruta fija aumenta 35 por ciento entre 1966 y 1970 y el consumo privado 14 por ciento. Este crecimiento se logra sin inflación, sin contraer la oferta monetaria, canalizando el crédito a las industrias prioritarias según el plan trazado. Pero como consecuencia de este avance productivo se asiste a la bancarrota de muchas empresas pequeñas, y se presencia una cifra récord de quebrantos comerciales.

En cuanto al sector agropecuario, el régimen militar liderado por Onganía les hace crear falsas esperanzas a los ruralistas, en especial cuando Krieger Vasena deroga la ley de arriendos rurales y permite a los terratenientes elevar sus cánones y los habilita para desalojar a sus arrendatarios.

PBI e inversión (en pesos de 1996)

Años	PBI	Inversión
1966	134.857	26.314
1967	139.793	28.179
1968	147.238	31.944
1969	161.388	39.755
1970	171.755	43.737
1971	179.912	49.649
1972	185.201	51.065
1973	193.480	49.983
1974	206.522	52.139
1975	207.758	54.512
1976	208.835	59.252
1977	224.339	72.199
1978	218.915	62.781
1979	235.903	69.551
1980	240.003	76.826

Fuente: Gerchunoff y Llach, 1998.

Además, los alienta con la devaluación del peso en casi la mitad de su valor y con la modificación de las leyes tributarias. No obstante, el gobierno pierde la adhesión de los productores agrarios cuando reimplanta las

retenciones y rehúsa bajar los derechos de importación a la maquinaria agrícola, los pesticidas y los fertilizantes, mientras propone un impuesto del 1,6 ciento sobre el valor estimado a las tierras improductivas. Los productores rurales se transforman en fuertes críticos del gobierno. La agricultura y sus industrias conexas constituyen, pues, un sector negativo, dentro del cuadro económico favorable que se da durante la gestión de Krieger Vasena (Lewis, 1993).

A mediados de 1969, y como producto de los gravísimos acontecimientos políticos que vive el país (centrados en la ciudad de Córdoba pero con resonancias en toda la nación) se echa por tierra la aparente estabilidad del régimen militar. Con su habitual agudeza política, Perón comprende mejor que nadie la significación de “el cordobazo”. Le escribe a Rogelio Frigerio:

Estos sucesos señalan el comienzo del fin y no tengo la más mínima duda de que continuarán hasta paralizar toda la acción de gobierno. Éste será el fin de la dictadura, y aunque no me engaño en cuanto a lo que va a seguirle, las cosas se irán descomponiendo en varias etapas hasta alcanzar su solución lógica (Perón a Frigerio, 18/6/1969)

Esta situación modifica el encuadre político que respalda el programa económico de marzo de 1967. Pero la crisis no sólo tiene una raíz política, sino también económica, con contradicciones que se observan claramente hacia fines de 1970. La experiencia del gobierno militar de Onganía concluye con una nueva crisis en la balanza de pagos, la reactivación de las presiones inflacionarias y la ruptura de la política de ingresos. Los sectores perjudicados por esa política (trabajadores y grupos empresarios) enfrentan los aspectos coyunturales de esa política y la concepción de país que lleva implícita. Se suma más tarde la oposición del sector ganadero. Se produce entonces una ruptura en el interior del bloque liberal.²

2 Perón, en carta a Raimundo J. Ongaro, de 12 de septiembre de 1969, escribía: “Mi querido compañero y amigo: [...] Cuando los pueblos reaccionan, como ha reaccionado ya el nuestro, es deber de todo dirigente estar con él. En tales circunstancias mantenerse en la inactividad, es perder el derecho de conducirlo. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que los sucesos circunstanciales sólo pueden producir éxitos también circunstanciales. Los éxitos permanentes y consolidados sólo se pueden lograr por una acción de conjunto y permanente y, si bien las acciones esporádicas deben ser convenientemente aprovechadas, en caso alguno deben arrastrarnos a proceder fuera de lo que es la necesidad orgánica funcional. [...] “Con lo que está pasando en el país, pienso que está llegando la hora de la ‘Guerra Revolucionaria’, de la que Brasil y Uruguay nos están dando el ejemplo, pero para ello es necesario alcanzar una organización casi perfecta. Esta modalidad de la lucha popular, que no es original ni nueva, es la guerra de guerrillas llevada a los centros urbanos y realizada allí con toda clase de recursos en procura de desgastar al poder para imponer una decisión incruenta si es posible y si no violenta. [...] Juan Perón.” (Perón, Juan Domingo. *Correspondencia* 2, op. cit, pp. 115-116)

En el plano financiero la evolución económico-social del país en la década del sesenta plantea la necesidad de adecuar las normas bancarias a las nuevas exigencias. La creciente participación que asume el sector industrial en la formación del producto bruto pone de relieve la insuficiencia del crédito a mediano y largo plazo para atender sus requerimientos de desarrollo. Si bien el crecimiento del país sigue descansando, en parte, en la magnitud de la producción y de las exportaciones agropecuarias, las innovaciones tecnológicas son cada vez más costosas y deben suministrarse a la industria nacional para colocarla en un nivel más competitivo. De ahí que el nacimiento y la expansión de nuevas ramas industriales, al enfrentarse con pocas posibilidades para satisfacer sus necesidades de crédito dentro del circuito bancario, engendren canales paralelos a los bancos, únicos intermediarios hasta entonces en el mercado de dinero (Arnaudo, 1987).

Es por estos motivos que se produce el ordenamiento de entidades financieras por medio de la Ley 18.061, sancionada el 17 de enero de 1969. Constituye ésta la primera etapa para captar -a través de un sistema coordinado- los ahorros internos y externos, y derivar los fondos así reunidos hacia una inversión adecuada. La nueva ley se adapta a la realidad económica del país, proponiéndole unificar el mercado financiero y brindando a la vez la interconexión entre los distintos sectores. El sistema se propone captar fondos necesarios para incorporar los avances tecnológicos al sector privado y ampliar la infraestructura social en el sector público (Zarrilli, 1997).

Como su título lo indica, esta ley está destinada a regir las actividades de todas las instituciones que actúan como intermediarias entre la oferta la demanda de dinero; por lo tanto sus disposiciones no sólo comprenden a los bancos típicos y de depósitos y descuentos, sino también a los bancos de inversión, de carácter hipotecario y además, a compañías financieras, cooperativas de crédito y sociedades de crédito para el consumo; pero sin modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Con el cambio de gobierno y la asunción del general Roberto Marcelo Levingston elegido por los militares para suceder en el cargo al general Juan Carlos Onganía, la Junta Militar parece querer establecer un equilibrio en su gabinete entre los liberales y los nacionalistas. La gestión económica queda en gran medida en manos de Carlos Moyano Llerena, ministro de Economía y su sucesor en el cargo, Aldo Ferrer, ambos identificados con un pensamiento económico cercano al nacionalismo, con un importante papel reservado al Estado, buscando el fortalecimiento de las exportaciones.

En marzo de 1971 el general Alejandro Agustín Lanusse reemplaza al general Levingston en la primera magistratura del país. Ferrer permanece en el cargo, pero en mayo decide renunciar sin que la resolución afecte demasiado las nuevas medidas oficiales. El gobierno intenta establecer un programa populista que atenúe el descontento de las masas. El gasto público aumenta más aún y la oferta monetaria llega a un índice mensual promedio de aumento del 5 por ciento. A fines de 1972 la inflación alcanza el 90 por ciento, y en febrero del año siguiente, el 100 por ciento. Frente a ese aumento en la espiral del costo de vida, la respuesta del Ejecutivo consiste en imponer controles de precios a la mayoría de los artículos de consumo y prohibir casi todas las importaciones, con el fin de ahorrar las menguantes divisas del país y fomentar la industria nacional. La combinación de estas medidas retrae todavía más la oferta de bienes, pero también promueve un renovado ímpetu a la inflación. Frente a la inminencia del cambio político, la fuga de capitales, la inflación, la falta de crédito y el aumento de la desocupación, muchos argentinos admiten el fracaso de la economía impuesta por los militares, y se percibe cierto optimismo por la llegada del peronismo al poder (Lewis, 1993).

El 25 de mayo de 1973 asume el poder un nuevo gobierno encabezado por Héctor J. Cámpora, surgido de los comicios realizados el 11 de marzo de ese año. Como consecuencia de la campaña electoral y de la orientación del espectro político hacia posiciones extremas, surge una fuerte expectativa acerca de la índole del futuro programa económico y la identidad de los grupos políticos que han de llevarlo a cabo. El nuevo programa económico es lanzado con cierta espectacularidad y presentado como revolucionario, lo cual obedece al deseo de evitar un enfrentamiento con los sectores de izquierda, que han sido dejados de lado en esa área de gobierno. En palabras del ministro de Economía José B. Gelbard, es un programa “al servicio de la causa popular, transformándolo en un instrumento adecuado para la lucha anti-imperialista” (Di Tella, 1986).

El nuevo programa se basa en el “Acta de Compromiso Nacional” acordada entre la CGE, la CGT y el ministerio de Economía, a comienzos del nuevo gobierno (en mayo de 1973). Se funda, por una parte, en un conjunto de medidas de reforma estructural y, por otra, en un plan de estabilización. El programa reformista es lanzado en el momento en que la adopción de posiciones extremas en política alcanza su punto culminante, y si bien su explicación está a cargo de un grupo que se encuentra en pugna con Cámpora, se lo ve como un signo más de ese clima político radicalizado. Los sectores tradicionales lo reciben con recelo (más por

cuestiones referidas al panorama político) y la oposición radical considera que el programa cumple el acuerdo concluido con los peronistas.

En líneas generales puede afirmarse que “el programa era fuertemente intervencionista, moderadamente nacionalista y distribucionista” (Di Tella, 1986). El Estado avanza sobre aspectos amplios. Se presenta un plan trienal como instrumento principal de las nuevas políticas, que en lo referente al crédito acentúa drásticamente su tradicional control; en el caso del comercio de exportación debe hacerse cargo del manejo de los cereales y de la carne, y en lo concerniente al comercio mayorista y minorista establece precios máximos y márgenes de ganancia para los comerciantes minoristas. Pero tal como había sucedido con otras experiencias similares, el plan no representa más que una declaración de propósitos y poco se vincula con la acción gubernativa.

Las disposiciones de carácter económico se relacionan con el sector agropecuario, con el uso de la tierra e intervención del Estado en las exportaciones agropecuarias; con el sector industrial, protección industrial, desarrollo de la pequeña empresa, e inversiones extranjeras; con las exportaciones industriales y el comercio con el bloque socialista; con reformas financieras y fiscales; con la organización del sector estatal y con los controles de precios y ganancias. Un panorama heterogéneo y complejo.

En lo referido a la reforma financiera, tiene mayor alcance que las reformas intentadas en otros campos y repite en gran medida la del año 1946, aunque las diferencias son importantes y producen efectos opuestos (Arnaudo, 1987). El principal objetivo de la nueva ley consiste en dar al Banco Central mayor poder directo en la determinación del volumen total del crédito y el dinero en circulación. En el anterior sistema de reserva fraccional, el crédito que los bancos pueden conceder es determinado por el Banco Central sobre la base de los depósitos recibidos, es decir, a través del encaje requerido, que varía de acuerdo con el tipo de depósito y el propósito, área o tipo de crédito por concederse. Así, con fecha 14 de junio de 1973 (a pocos días del cambio de las autoridades) el Poder Ejecutivo eleva al Congreso Nacional un proyecto de ley “... por el que se nacionalizan y se otorga la garantía de la Nación a los depósitos bancarios. Se contará con un instrumento idóneo y flexible para concurrir en apoyo de los sectores prioritarios de la economía y de las regiones menos desarrolladas” (Aisenstein, 1974).

La idea desarrollada en la ley, es la de romper por completo la relación entre los depósitos efectuados por el público en el sistema bancario y el total del crédito otorgado a la comunidad. La función de crear dinero,

compartida entre el sistema bancario y el Banco Central, es transferida por completo al segundo, que pasa a tener facultades absolutas y directas para determinar la oferta de dinero. La ley especifica que las entidades bancarias reciben depósitos por cuenta del Banco Central, el que a su vez otorga líneas de crédito a cada uno de los bancos. Éstos conceden créditos a su propio riesgo, pero a nombre del Banco Central. El criterio con el cual el Banco Central dispone los créditos de cada banco depende de la cantidad de depósitos reunidos por cada uno de ellos y del sector, área y propósito para los cuales se solicita el crédito (Zarrilli, 1997).

Desde el punto de vista de la eficiencia, la situación empeora notablemente. Se explica, en parte, por la inflación desatada, que dificulta el manejo normal del sistema. De todos modos, si éste encuentra serios defensores teóricos en 1946, no ocurre lo mismo en 1973, cuando la intervención de la banca central es admitida en forma creciente en todo el mundo y hubiera sido factible, incluso, un régimen de efectivo de hasta 100 por ciento y liberaciones condicionales, con los mismos efectos de la nacionalización y sin la necesidad de su engorroso y complejo mecanismo. Lo cierto es que, en 1975, la situación es tan difícil que hasta deben “desnacionalizarse” por ley algunos depósitos; pero nada de esto puede ser bien interpretado sin la ubicación histórica dentro del momento de crisis política por el que atraviesa el país (Arnaudo, 1987).

El programa de reformas del gobierno peronista pronto es eclipsado por el Plan de Estabilización y por el pacto social que forma parte de éste. Controlar la inflación preocupa más a la mayoría de las personas y al gobierno que las reformas estructurales a las que se ve distantes de la realidad. Inmediatamente después de asumir el poder, el gobierno lanza un drástico programa de estabilización con una idea básica: inducir (o imponer), bajo los auspicios del Estado, un acuerdo acerca de la distribución del ingreso (es decir, sobre precios relativos y salarios) entre los asalariados y los empresarios, representados por la CGT y la CGE, respectivamente. Esta política de pacto social se inscribe en la tradición peronista de la “cooperación entre las clases” (Di Tella, 1986) y es llevada a cabo mediante una rigurosa congelación de precios y salarios, mientras que las disposiciones de carácter fiscal y monetario quedan bastante al margen de las preocupaciones gubernativas. El sistema registra un importante éxito inicial, basado en un cierto poder de arbitraje del gobierno, en que muchas firmas efectúan aumentos de precios por anticipado en medio de las favorables condiciones de la situación económica internacional.

A fines de 1973 se empieza a tornar claro que los precios relativos en vigencia desde el momento de la congelación están lejos de configurar un conjunto capaz de asegurar un funcionamiento económico sin sobresaltos. En consecuencia, se decide flexibilizar los precios, aunque el principal problema es el alcance y los medios para llevar a cabo ese ajuste. Pero la congelación de precios y salarios -capaz inicialmente de disminuir las expectativas inflacionarias- es mantenida durante demasiado tiempo. Aun cuando la situación externa se invierte negativamente, el gobierno, en vez de adoptar una política de precios flexibles y una política monetaria restrictiva, hace lo contrario. La congelación llevada más allá de lo razonable deteriora la rentabilidad del sector empresario y el nivel de inversiones. Finalmente se produce la escasez general (especialmente de moneda extranjera), sumada a la reversión de la situación internacional.

Mientras el panorama económico se deteriora poco a poco, la situación política corre igual suerte. En julio de 1974 la muerte de Perón, como se expresó, determina una disminución significativa de la capacidad de arbitraje del gobierno. Un problema que se complica, además, por la derechización extrema del gobierno de Isabel Perón, dominada por su ministro de Bienestar Social, José López Rega. Este grupo intenta imponer una línea económica ortodoxa, que procura, entre otras cosas, doblegar el poder de los sindicatos (Di Tella, 1986).

En 1974 los términos del intercambio empeoran en la proporción de un tercio como consecuencia de la combinación de mayores precios, tanto de exportación como de importación, lo que por un lado intensifica importantes presiones inflacionarias (12 por ciento en el último trimestre del año 74) y por otro crea un fuerte déficit comercial en la segunda mitad de 1974. Frente a esta situación, el único camino planteado como posible es el de la “flexibilización y la restricción financiera” (Di Tella, 1986). Se pone en marcha, entonces, un riguroso programa de disminución del presupuesto del gobierno, reduciendo gastos de personal y algunos programas sociales (especialmente de viviendas). Se despierta una fuerte oposición. Pero las medidas adoptadas, si bien son necesarias, se implementan con mucha demora y con demasiada moderación; inclusive las disposiciones referidas a precios y salarios. Pronto se hace necesario tomar medidas drásticas y bruscas, que causan el golpe final al gobierno.

El problema va en aumento, y deriva en conflictos y pujas económicas (externas e internas); se suma a esta coyuntura la delicada situación política; son constantes los enfrentamientos entre las distintas fracciones del partido gobernante. La devaluación de marzo de 1975 y los aumentos

de salarios del mismo mes crean nuevas presiones inflacionarias. Estos hechos asociados a rumores de cambios políticos, provocan una especulación desestabilizadora en el medio cambiario, acrecentado la brecha entre las tasas del mercado negro y el oficial.

El nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo (miembro del ala derecha del peronismo), es el encargado de operar el cambio, basado en la liberación de precios, devaluación hasta niveles realistas, mejoras en los precios agropecuarios, estimulación de la inversión privada, aumento de los servicios públicos, reducción del déficit fiscal, propuesta de bajos salarios y control de los sindicatos; es decir, elementos económicos vinculados a una visión liberal ortodoxa, pero que no tienen en claro el papel asignado a la oferta de dinero, ya que se contempla reducir el déficit pero aumentar el crédito al sector privado (Canitrot, 1975).

El gobierno devalúa la moneda de 15 a 30 pesos por dólar, lo que establece una tasa cambiaria tres veces superior a la de febrero de 1975, los precios de bienes públicos aumentan más del 100 por ciento; el aumento de la inflación pasa del 74,2 por ciento en los doce meses anteriores a mayo de 1975, a 95 por ciento en los doce siguientes (en junio-agosto el alza es del 102 por ciento). Pero las medidas tomadas por el gobierno, y las reacciones provocadas, deben ser entendidas como parte de una lucha generalizada entre las facciones del partido gobernante, es decir, entre el sector que ocupa el gobierno y los sindicatos. Se libra una lucha por el poder y el dominio político en torno del reajuste de los precios y sus consecuencias sobre las transferencias de ingresos (De Riz, 1986).

Precios y tipo de cambio

Años	Inflación al consumidor	Depreciación cambiaria
1966	31.9	-0.7
1967	29.2	40.1
1968	16.2	-1.2
1969	7.6	4.8
1970	13.6	10.0
1971	34.7	59.1
1972	58.5	87.7
1973	60.3	-2.0
1974	24.4	43.9
1975	182.4	344.1
1976	444.0	257.2
1977	176.0	64.1
1978	171.4	91.0
1979	—	—
1980	100.8	38.6

Fuente: Gerchunoff y Llach, 1998.

Las principales causas de la situación a principios de 1976 pueden resumirse por: una drástica expansión del crédito del Banco Central para financiar el déficit fiscal, una contracción de la oferta por la caída de la productividad, expectativas dominantes en los agentes económicos y mantenimiento del gasto monetario frente a la contracción de la oferta.

La economía se acerca a una situación de caos y parálisis, oscilando entre la hiperinflación y la recesión; y los sindicatos pasan a ocupar el centro del espacio político, mientras la convulsión del período provoca la caída del ala derecha del partido. Se dejan sentir persistentes rumores de movimientos políticos en el Ejército, acrecentando las posibilidades de un golpe militar.

El golpe militar de 1976 produce un corte en la historia argentina al promover y consolidar profundos cambios políticos, sociales y económicos. [...] La conducción económica de la dictadura recurrió a la reducción de los aranceles que gravaban los bienes importados, a la subvaluación del dólar y a la manipulación de las tasas de interés a través del sistema financiero que, junto con el Estado, pasó a ser el principal reasignador de los recursos internos y externos, dando lugar (mediante estos últimos) a la conformación de una deuda externa sin precedentes. [...] La reducción de la industria y la distribución regresiva del ingreso modificaron fuertemente las pautas de consumo, incrementando la demanda asociada a los sectores enriquecidos.

A partir de 1980, la redefinición del Estado y la redistribución del ingreso, convergentes con altas tasas de interés y reducción arancelaria, produjeron otros efectos de la política económica. [...] La crisis evidenció el alcance asimétrico de las oportunidades entre sectores y grupos. El sector asalariado resultó empobrecido y limitado crecientemente en sus niveles de participación. [...] (Mancebo, Marta. "El nuevo bloque de poder y el nuevo modelo de dominación (1976- 1996)", en Nochteff, Hugo (editor). La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente, Eudeba-FLACSO, Buenos Aires, 1998, pp. 173 y 175-176.)

4. Crisis de la deuda y estancamiento de la economía

El fracaso económico hiere profundamente la autoridad del gobierno de Isabel Perón, quien pierde la lucha contra los gremios. Su capacidad de arbitraje, que siempre ha sido débil, desaparece en la práctica, tornándose imposible para las autoridades manejar o moderar las luchas intrasectoriales. Frente a estas condiciones, se considera poco realista cualquier tentativa por acabar con la inflación. En el primer trimestre de 1976 los peligros

de una recesión profunda parecen quedar atrás. Sin embargo, ese giro de la economía no es del todo visible, debido a la coexistencia de condiciones recesivas y fuertes presiones inflacionarias. Las expectativas de desestabilización política avanzan (Di Tella, 1986). La pérdida de autoridad del gobierno, la conducta anárquica de los miembros de la coalición y el muy alto nivel del aumento de precios crean una sensación de caos y desastre. La oposición tanto económica como política, salvo excepciones, cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El clima político necesario para el golpe militar está creado y se concreta, finalmente, el 24 de marzo de 1976.

El programa económico del gobierno militar es, en esas circunstancias, un intento radical de transformación del esquema de funcionamiento de la economía argentina vigente desde 1930. La condición definitoria es la aplicación de la política de protección a la industria, mediante la imposición de altas barreras arancelarias. Durante su vigencia, el sistema económico argentino puede considerarse dividido en dos grandes sectores de comportamiento diferenciado: por un lado, un grupo productor de bienes exportables -el sector agropecuario pampeano-, y por otro un sector vinculado al mercado interno, compuesto por la industria y los servicios. La construcción de esta estructura económica semicerrada responde al objetivo de acelerar el proceso de industrialización. Entre 1930 y 1976, salvadas todas las diferencias entre los sucesivos gobiernos, la industrialización constituye el propósito común y permanente, y sirve como patrón referencial de eficiencia de la política económica. La protección arancelaria, el privilegio fiscal, y el crédito subsidiado son, a ese fin, los principales instrumentos de esta política. Su función es la de operar mecanismos de transferencia forzosa de recursos de ahorro hacia el sector industrial. En ese sentido también actúa el Estado a través de sus presupuestos de ingresos y gastos (Sebastián, 1988).

El proyecto económico aplicado a partir de 1976 se propone como objetivo la liberalización de los mercados. Condena, invocando razones de eficiencia y equidad, los instrumentos previamente utilizados y se propone, en cambio, la apertura de la economía, la libre operación de los mercados de capitales y la eliminación de los privilegios fiscales, dándose implícitamente por terminada la industrialización como objetivo de la política económica. Este plan económico es parte de un proyecto político superior adoptado por las fuerzas armadas, como solución de largo plazo a la situación de crisis social a la que se llega en la primera mitad de los años setenta. Y más allá de la represión y la voluntad de perpetuarse en el poder todo el tiempo que considera necesario, el gobierno militar plantea

la tarea de modificar radicalmente las estructuras de relaciones sociales e instituciones en las que, a su entender, reside la causa primera de la crisis (Canitrot, 1981).

Otro objetivo de las fuerzas armadas es el disciplinamiento social; el mismo es aplicable al conjunto de las relaciones sociales, pero con un significado específico en lo que se refiere a la clase trabajadora: su reubicación política e institucional, en la posición subordinada que les es inherente en lo económico. En términos político-institucionales, este objetivo requiere el debilitamiento de las organizaciones obreras, no sólo mediante la regulación jurídica de sus actividades, sino también por vía de la represión directa y de una reforma económica que suprime las condiciones funcionales que tienden a alentar su desarrollo (Zarrilli, 1997).

El plan económico se elabora atendiendo a ese proyecto político. Su noción constitutiva es considerar el sistema económico de libre mercado, como condición necesaria para la existencia de una sociedad disciplinada, ya que, para el grupo encaramado en el poder, sin la reforma política-económica la Argentina es ingobernable bajo el sistema democrático representativo. La estrategia principal adoptada por la conducción económica encabezada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, para instaurar una economía de libre mercado es la apertura del mercado interno a la competencia externa. Hace efectiva esta apertura mediante dos tipos de medidas: 1) la reducción de aranceles a la importación y 2) el descenso del tipo de cambio de paridad de la moneda argentina con respecto a las extranjeras (Jozami, Paz, y Villarreal, 1985).

Las resoluciones se justifican en términos de la defensa del consumidor

Variación del número de obreros ocupados: 1976-1978 (%)

Años	Alimentos y bebidas	Industria química	Industria metálica	Industria cemento	Maquinaria y equipos	Papel y cartón	Otras industrias
1976	-3,1	1,7	3,2	5,8	-9,1	4,6	6,5
1977	-1,2	-3,6	1,3	-0,9	7,8	-2,5	-6,9
1978	-8,4	-9,5	-7,5	0,5	-16,1	-4,6	-5,2
1976-78	-12,3	-11,1	-3,1	5,3	-29,6	-2,7	-6,1

Fuente: *El Economista*, 28 de marzo de 1980

y de la ineficiencia inherente a toda actividad protegida; pero las razones últimas son tanto de orden económico como político. La política de apertura es un instrumento para disciplinar el mercado de trabajo y la conducta de la clase trabajadora; pero lo peculiar de este procedimiento, es que para disciplinar a la clase obrera es necesario hacerlo también con la clase em-

presaria. Con la apertura del mercado interno, se proyecta la desaparición del convenio colectivo de trabajo y del poder sindical, pero junto con ellos, también, del sistema de privilegios por medio del cual las empresas se benefician en nombre de la industrialización (Canitrot, 1981).

El programa económico de abril de 1976 se propone elevar la eficiencia del sistema productivo, restablecer el papel hegemónico del mercado en la asignación de recursos y la distribución del ingreso, así como restringir la participación del Estado en el proceso económico. Esta estrategia de largo plazo intenta, como objetivos simultáneos frenar la inflación y restablecer el equilibrio de los pagos externos. De este modo, aquel programa no constituye sólo una respuesta de emergencia para enfrentar la crítica situación de principios de 1976; propone sobre todo una salida económica de largo plazo y un determinado modelo de inserción de la economía argentina en el sistema internacional (Ferrer, 1987). De esta manera, el núcleo de la política económica se define en dos grandes líneas: la apertura de la economía y la liberalización del mercado de capitales. El sistema bancario, al iniciarse el gobierno de las Fuerzas Armadas, se encuentra estrictamente controlado con tasas de interés fijadas por el Banco Central y restricciones bancarias. La liberalización del mercado de capitales se hace necesaria y se efectúa a través de una serie de medidas parciales. Las decisiones más importantes se efectúan con el anuncio de la "Reforma Financiera", de junio de 1977.

El sistema de economía semicerrada prevaleciente entre 1930 y 1976 es acompañado por el control estatal del mercado de capitales. Los diversos esquemas institucionales aplicados conservan tres características básicas: 1) la clausura del mercado a los movimientos de capitales hacia el exterior; 2) la fijación de tasas de interés oficiales en el sistema bancario; y 3) el racionamiento del crédito. Estas características resultan de la utilización del sistema bancario como uno de los mecanismos de transferencia forzada de ingresos requerida por la estrategia de industrialización (Canitrot, 1981).

La Ley de Entidades Financieras de 1977 introduce cambios importantes en el sistema financiero; paralelamente, incorpora importantes medidas por medio de resoluciones del Banco Central. Los principales cambios producidos por esta reforma financiera son: 1) libertad de tasas de interés; 2) eliminación de restricciones tanto a la entrada en el sector bancario como a la apertura de sucursales; 3) cuenta de regulación monetaria y 4) régimen de garantía de depósitos (Fernández, 1983)³.

³ Véase Calcagno, Alfredo Eric. La perversa deuda argentina. Radiografía de dos deudas perversas con víctimas muy diferentes: la de Eréndira con su abuela desalmada y la de Argentina con la banca internacional,

Vale decir que la reforma del sistema financiero está orientada a incentivar la competencia eliminando restricciones al crecimiento del sistema financiero, liberando tasas de interés y neutralizando las distorsiones del proceso inflacionario que afecta tanto a operaciones dentro de una institución como a instituciones de naturaleza diferente. En palabras de sus autores, el nuevo sistema financiero debe ser “apto, competitivo y solvente”. La competencia de instituciones homogéneas entre sí, dentro de un mercado único (para todo el país) y en un ambiente de regulación mínima habría de conducir a una posición más eficiente y, en consecuencia, a la disminución de los costos de intermediación financiera (Arnaudo, 1987).

El sistema financiero se hace más complejo. Los depósitos bancarios crecen en términos reales 16 por ciento en 1978; 35 por ciento en 1979; y 19 por ciento en 1980; es decir, en el período de tres años que va desde fines de 1977 hasta fines de 1980 (año en que comienza la crisis del financiero) los depósitos o pasivos bancarios aumentan 76 por ciento. Un proceso similar se observa en el endeudamiento externo, que crece significativamente en el mismo período; sin embargo, a diferencia del primero, este fenómeno está íntimamente relacionado con la evolución del sistema financiero internacional (Arnaudo, 1987).

Frente a la crisis, el ordenamiento financiero representa una corrección positiva, ya que el control que teóricamente debe ejercer el Banco Central es desbordado desde 1975. Los bancos no son, a partir de entonces, más que proveedores de fondos baratos a una clientela seleccionada, para que ésta pueda colocarlos en el mercado de corto plazo a altas tasas de interés nominales. Desde esa visión la reforma financiera es un acto de realismo, que suprime las distorsiones institucionales del mercado.

Pero más allá de sus propósitos correctivos coyunturales, la reforma del sistema financiero es una decisión política integrada al proyecto de largo plazo de la conducción económica. Frente al objetivo de hacer del mercado el medio idóneo de disciplinamiento social, la reforma financiera es el complemento indispensable de la apertura de la economía.

El derrotero histórico de la élite económica, durante el proceso aperturista del gobierno militar de 1976-1983, vuelve a sufrir nuevas y decisivas modificaciones en su composición. Luego de la crisis de la deuda, las empresas estatales, financieramente debilitadas, comienzan a perder peso en la estructura de la cúpula, y son las grandes empresas privadas locales y las transnacionales las que predominan. Esta composición se consolida durante la apertura democrática, y son las empresas locales, las que por su

increíble capacidad de “lobby”, logran conformar un núcleo selecto en la cúpula empresarial (Feldman y Sommer, 1986).

Los autores que abordan el tema coinciden en señalar que el grupo de empresas que estudian -tanto las de capital nacional como las de capital extranjero- se consolidan como fracción dominante de la burguesía a partir de 1976. Sin embargo, reconocen que muchas de ellas comienzan su proceso de crecimiento en una etapa previa (1958-1976) en donde obtienen, por un lado, el control oligopólico de los mercados, debido a su vinculación con las empresas extranjeras, y por otro, gracias a la gestión económica llevada a cabo por el Estado, se convierten en beneficiarias de diferentes prerrogativas que les permiten incrementar su acumulación. Así, por ejemplo, por ser exclusivas proveedoras y/o licitatorias de empresas públicas y organismos estatales, reciben exenciones impositivas y obtienen fuertes promociones para desarrollar emprendimientos de gran envergadura.

La expansión financiera producida a partir de 1977 facilita el acceso al crédito, aunque a elevado costo, lo que en algunos casos satura la capacidad de endeudamiento de muchas empresas que, como deudoras dudosas, aumentan considerablemente la vulnerabilidad de las entidades financieras más expuestas al riesgo. Esta situación alcanza su mayor grado de significación al producirse la crisis de 1980, cuando se pone en evidencia la notoria sensibilidad del mercado financiero argentino ante presiones negativas, relacionadas fundamentalmente con la insolvencia de deudores, oscilaciones en el tipo de cambio, y fraudes financieros (García Vizcano, 1974-75). El desequilibrio económico-financiero provocado por las políticas del gobierno militar induce a mayores niveles de endeudamiento empresarial que -por falta de una evaluación realista de las políticas en curso o la imposibilidad de ajustarse a ellas- no comprimen sus niveles de actividad. De allí surge una demanda creciente de crédito para cubrir la brecha financiera y no para expandir el capital real de trabajo y las inversiones de activo fijo. Sobre este desequilibrio se inserta el brusco aumento de la tasa de interés real y nominal (estando éstas también sujetas a fuertes cambios coyunturales), que alcanzan en el período niveles sin precedentes y terminan por llevar a la quiebra a buena parte del sistema productivo argentino. El sector público queda sometido también a políticas que profundizan su desequilibrio. Cambia la orientación del financiamiento público que pasa a ser atendido por el crédito internacional. El endeudamiento externo de las empresas públicas -como ejemplo de lo antedicho- no sirve para la expansión de las inversiones reales, sino al objetivo de aumentar la toma de

Editorial Legasa, Buenos Aires, 1986.

créditos internacionales (Vitelli, 1988).

La crisis de 1980 deriva en la liquidación del Banco de Intercambio Regional (BIR) que ocupa entonces el tercer lugar en el ranking de depósitos, y la intervención de otras tres entidades por parte del Banco Central. Esta situación provoca un importante desplazamiento de los ahorristas hacia los bancos oficiales mientras se eleva al 100 por ciento la garantía de los depósitos (Arnaudo, 1987). Se inicia el comienzo del fin para las autoridades militares en el terreno económico (Fernández, 1983).

5. La disgregación del “modelo de solidaridad social”

Hacia fines de 1980, se completa -al menos en el nivel de los instrumentos legales- la implementación del proyecto de los sectores que ocupan el poder a partir de 1976, referido a la redistribución de recursos a través de la intermediación estatal. Se legaliza la totalidad de las reformas más importantes introducidas en el sistema tributario y en la seguridad social; mientras se concretan las políticas pasibles de incidir sobre el nivel del gasto público en servicios sociales, y sobre la oferta de estos últimos y las formas de acceso y utilización por parte de los diversos estratos sociales de la población.

En el área de la tributación, varias de las medidas adoptadas incrementan la regresividad de la estructura impositiva. Durante 1976-1980 se producen exenciones impositivas de importancia; se exime del pago de impuestos a los ingresos personales, derivados de utilidades distribuidas por las empresas, para sumarse a exenciones ya vigentes relativas a las rentas provenientes de colocaciones financieras y de dividendos en acciones. Estas reformas redujeron aún más la ya ínfima participación de los gravámenes directos al ingreso personal en la recaudación tributaria argentina. Se facilita una traslación de impuestos hacia los precios de los bienes finales en mayor medida que lo habitual. Por último, en 1980, en el marco de la reforma financiera, se extiende el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los bienes de consumo popular, hasta entonces exentos de gravámenes (Schvarzer, 1986).

En el área de la seguridad social se decretan aumentos en los aportes personales directos a los asalariados. Ya a principios de 1976, por medio de un decreto del gobierno de Isabel Perón, se eleva el aporte personal de los asalariados al sistema previsional al 11 por ciento de la remuneración. Desde 1980 se eliminan las contribuciones patronales al sistema previsional, y se las reemplaza por ingresos equivalentes provenientes de impuestos coparticipables. En el caso de las obras sociales, a partir de 1976 se per-

mite el cobro parcial directo a los afiliados por las prestaciones médicas, totalmente gratuitas hasta ese momento (Jozami, Paz y Villarreal, 1985).

Masa salarial y participación de los asalariados en el consumo privado, 1970-1983

Años	(I) 1970=100	(II) %
1970	100	18.9
1971	106	18.6
1972	94	15.6
1973	126	20.1
1974	167	24.2
1975	126	18.8
1976	94	15.3
1977	86	13.7
1978	94	17.0
1979	108	17.5
1980	—	—
1981	116	17.9
1982	100	15.6
1983	109	17.6

(I) Masa salarial neta de aportes a la seguridad social, precios constantes (deflactados por el índice de precios al consumidor).

(II) Participación del sector asalariado privado “formal” (neto de aportes a la seguridad social) en el consumo privado (precios corrientes)

Fuente: Marshall, 1988. p. 152

En cuanto al gasto público en servicios sociales, entre los cambios producidos después de 1976, puede recordarse que a partir de 1979 se implementó un sistema de arancelamiento de las prestaciones médico-hospitalarias, con el objetivo de restringir el acceso gratuito a los servicios estatales de salud.⁴

Por otra parte, la asignación del presupuesto no es favorable a algunos gastos sociales, como educación y atención médica, lo que se evidencia en la contracción de la participación en ese rubro del total de las erogaciones estatales. Por último, la eliminación en 1980 de las contribuciones patronales al Fondo Nacional de la Vivienda, al cambiar las estructuras de sus ingresos (de recursos propios y específicos a recursos de rentas generales), se traduce en una reducción de los fondos disponibles para ese fin, con

4 El gobierno militar también adoptó medidas en el área de trabajo para combatir el accionar subversivo, he aquí una breve reseña:

“a. Tanto las empresas privadas como las estatales adoptaron medidas tendientes a contrarrestar la actividad disociadora de la subversión, pudiendo mencionarse las siguientes: “1) Cesantía de los elementos detectados y/o considerados perturbadores (Prevía investigación de los organismos específicos estatales y/o propios de las empresas). “2) Campaña de esclarecimiento para desvirtuar las manifestaciones de las organizaciones subversivas francamente opuestas a los intereses nacionales y/o patronales. “3) Neutralización o disolución de los ‘Frentes’ (Sindicales Gremiales-Fabriles) pertenecientes a cada una de las estructuras de las distintas BB DD TT. “4) Restablecimiento de las estructuras sindicales orientándolas hacia sus cometidos y objetivos exclusivamente gremiales. “5) Normalización paulatina de la actividad sindical. “6) Normalización empresarial.

“b. Intervención de asociaciones: la ley faculta al Ministerio de Trabajo a efectuar intervenciones en las asociaciones profesionales de trabajadores. Esta potestad ha sido ejercida en los supuestos de corrupción, desorden y en todos aquellos gremios en que se logró detectar la penetración de los elementos subversivos”. (“El terrorismo en la Argentina”, Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires, 1979, p. 398).

el consiguiente fuerte impacto sobre el ritmo de construcción de nuevas viviendas en 1981-1982 (Marshall, 1988).

En síntesis, en 1981 se producen las reformas que, por su naturaleza, son capaces de afectar negativamente el nivel de vida de los trabajadores, sumándose al impacto negativo de la política salarial. Estas medidas reducen el ingreso disponible y su real poder adquisitivo, así como el acceso gratuito a algunas prestaciones. En esta perspectiva, los años 1976-1983 no muestran una ruptura, sino una agudización de las tendencias negativas de largo plazo iniciadas en la década del sesenta, aunque es innegable que en algunos aspectos cruciales (tales como la dotación y equipamiento de hospitales y escuelas) se agravan considerablemente los déficits con posterioridad a 1976 (Mesyngier, 1998).

Indicadores de la estructura social por regiones, 1980

Regiones	% PEA "urbana"/ PEA total	Por ciento sobre la PEA "urbana" de									
		PEA terc.	Sector empresarial			Sector microempresarial			Cuenta propia		Sector público
			Total	Clase media asalar.	Clase obrera asalar.	Total	Clase media asalar.	Clase obrera asalar.	Clase media	Clase obrera	
Total del País	88,0	56,4	35,0	13,4	19,6	14,2	4,7	6	8,7	9,5	21,5
Cap. Fed.	99,2	66,8	39,7	24,1	11,2	14,8	5,8	4	11,2	6,5	19,4
19 Partidos Gran Bs. As.	95,6	51,4	45,1	14,5	28,7	13,9	4,2	6,3	7,6	10,8	16,2
Reg. Pamp.	84,9	57,9	30,4	11,2	17,4	16	5	6,9	9,4	10,4	22,3
Resto Bs. As., Cba., Sta Fe	85,6	57,5	31,1	11,3	17,9	16,3	5	7	9,2	10,6	21,8
E. Ríos/La Pampa	78,1	61,8	24,0	10,1	12,4	15,3	5,3	6,6	10,6	8,3	27,3
Región Cuyana	78,5	58,2	31,3	11,7	17,7	13,4	4,6	5,8	8,7	10,1	26,4
Región Noroeste	77,4	56,9	27,3	9,0	17,1	10,5	3,8	4,9	8,4	9	30,4
Región Nordeste	68,7	55,5	25,5	8,2	16	12,8	4,1	6,2	8	8,4	27,2
Región Comahue	82,0	58,0	29,2	9,2	18,6	14,6	5	6,4	6,5	8,1	28,7
Región Patagónica	88,7	52,4	34,2	9,2	23,6	10,7	3,8	12,7	4,8	6,2	35,2

Fuente: Torrado. 1992 p. 386

El accionar del gobierno militar en materia de políticas sociales está guiado por: el principio de subsidiariedad del Estado y el de descentralización de las prestaciones desde el gobierno nacional hacia los gobiernos locales. El principal efecto de la aplicación del primero de dichos principios en el área de la salud es el intento de transferir al sector privado la oferta de prestaciones para los trabajadores asalariados (quienes supuestamente están en condiciones de solventarlas), reservándose al sector público la asistencia a los estratos en situación "crítica"; de ahí, por ejemplo, el sistema de arancelamiento que se introduce en los hospitales públicos. Otro de los efectos es la fijación de un tope máximo de ingresos a la población beneficiaria de viviendas construidas por el Estado. Por último, en el sector educación

Gasto social del gobierno nacional (en educación, salud y vivienda) en relación con el PBI (a costa de factores) y con el Presupuesto Nacional, 1930-1979

Periodos	% Gasto social en el					% Inversión social en inversión total del Gobierno Nacional (6)
	PBI a precios			Presupuesto Nacional		
	Constantes (a) (1)	Corrientes (2)	(3)	(4)	(5)	
1930-43	2,5	2,6		17,7		
1944-55	3,6	2,7		14,8		
1956-57	2,4	1,7		9,8		13,6
1958-62	2,7	2,1		10,7		23,5
1963-66	2,5	2,1		11,9		22,3
1967-73	—		2,4 (b)		19,4 (b)	13,0
1974-75	—		2,5 (b)		22,6 (b)	
1976-79	—		0,9 (b)		15,4 (b)	

Fuente: Torrado. 1992 p. 279

se implementa por omisión el mismo principio, al permitir la creciente insatisfacción de la demanda dirigida hacia el sector público. Por su parte, la voluntad de descentralización, que se concreta en la transferencia de escuelas y hospitales de jurisdicción nacional en el ámbito local y en una mayor intervención de las administraciones locales sobre los proyectos de vivienda, no siempre se acompaña de los recursos indispensables para impedir su progresivo deterioro.

Si se analiza el impacto redistributivo del gasto estatal en servicios sociales (Marshall, 1988) se advierte que, hasta fines de la década de 1960, a pesar de su rezago en relación con la demanda, dicho gasto tiene un impacto positivo respecto de los tramos de ingresos más desfavorecidos. Por el contrario, la situación vigente hasta 1970 se altera después de 1976: la reducción relativa en el gasto social, junto con el aumento de la regresividad del sistema impositivo (ya extremadamente regresivo al comenzar el gobierno militar) como consecuencia del incremento relativo de la tributación indirecta, afecta negativamente el ya escaso impacto redistributivo.

Con estas medidas comienza una etapa de redefinición de la estructura social argentina. En la concepción de las Fuerzas Armadas, para lograr el ansiado disciplinamiento político e institucional de la clase obrera, más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política, la estrategia más eficiente debe consistir en una modificación drástica de las condiciones económicas que han alentado históricamente el desarrollo de esa clase, es decir una modificación profunda del modelo económico y de las políticas de solidaridad social.

Lecturas

- Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas, Ariel, Buenos Aires, 1998, caps. VII y VIII.
- O'Donnell, Guillermo. El Estado burocrático autoritario, Editorial Belgrano, 1982, caps. II, III, IV, V, VI.
- Portantiero, Juan Carlos. "Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)", en Ansaldi, Waldo y Moreno, José Luis, Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Cántaro, Buenos Aires, 1989.

Lecturas recomendadas

- Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina II, 1943-1973, Emecé, Buenos Aires, 1982, t. II, caps. 5, 6 y 7.
- Di Tella, Guido. Perón-Perón, 1973-76, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, caps. III y IV.
- Arnaudo, Aldo. Cincuenta años de política financiera argentina (1934-1983), El Ateneo, Buenos Aires, 1987, caps. 6, 7 y 8.
- Bekerman, Marta. "Los flujos de capital hacia América Latina y la reestructuración de las economías centrales", en Desarrollo Económico 111, vol. 28, octubre-diciembre de 1988.
- De Riz, Liliana. Retorno y derrumbe, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986.
- Marshall, Adriana. Políticas sociales. El modelo neoliberal, Legasa, Buenos Aires, 1988, caps. III y VI.

Lecturas complementarias sugeridas

- Hilb, Claudia y Lutzky, Daniel. La nueva izquierda argentina, 1860-1980, CEAL, Buenos Aires, 1983.
- O'Donnell, Guillermo. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos Aires, 1997, pp. 31-69.
- Schvarzer, Jorge. La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina, Planeta, Buenos Aires, 1996, caps. 8 y 9.
- Torrado, Susana. Estructura social en la Argentina. 1945-1983, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1992, cap. III.
- Torre, Juan Carlos. Los sindicatos en el poder (1973-1976), CEAL, Buenos Aires, 1983.

La dictadura cívico-militar y su legado económico y social

Horacio Rovelli (Especial para sitio LADE-RE)

"No es acordando con el FMI que se diseña un proyecto nacional".

La Argentina es un país complejo, donde nada es como aparenta, pero con sus contradicciones y enfrentamientos de 1943 a 1974 crecía a tasas sostenidas, generaba empleo e iba formando un tejido social e industrial importante. En 1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres. Se había generado un modelo de sustitución de importaciones que había aprendido de sí mismo y para 1970 se había comenzado a lograr compensar las importaciones industriales (MOI-Manufacturas de Origen Industrial) con la venta de casimires, caños sin costura, acero, y en 1973 se obligó a las empresas automotrices a vender vehículos y repuestos al mundo socialista. Por lo que el modelo no solo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial.

En 1969, año del Cordobazo, vino por primera vez al país el sociólogo norteamericano James Petra, se sorprendió que se construyeran en la Argentina locomotoras, autos, camiones, tractores, grúas y demás equipos, que la división electrónica de FATE creara la máquina de calcular "cifra", que la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hiciera la primera computadora, etc. Se reúne con el por ese entonces presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Elbio Cohelo y le pregunta: "...porque si tienen una mano de obra calificada y capacidad de industrialización, no se deciden a desarrollar la industria, la respuesta fue, por eso, los trabajadores son muchos, son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil- contestó - Pero, ¿por qué no lo intentan? -Porque podemos perder".

En un marco internacional que tras la crisis del petróleo (en 1971 sube el valor del barril de U\$S 8.- a U\$S 24.-) se crea la "Trilateral Commission", fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller que aglutinaba a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista de la época, los EEUU, Europa y Japón. La Comisión Trilateral forma parte del Grupo Bilderberg y el Council on Foreign Relations, y tuvo en Henry Kissinger, primero asesor de seguridad internacional y luego Secretario de Asuntos Internacionales de Nixon, su hombre de confianza en el gobierno de los EEUU, con rol

1 Economista, profesor y miembro del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Nota publicada el 25-03-2021 en iade.org.ar.

destacado en la coordinación de los golpes militares de Augusto Pinochet y de Jorge Videla en Chile y Argentina respectivamente, como lo demuestran los mismos cables de la embajada y de los embajadores norteamericanos en nuestros países con Kissinger, como lo dio a conocer el mismo EEUU, pero 30 años más tarde.

La Trilateral Commission pregonaba el libre comercio y sostenía que los Estados debían reducir su participación y dejar que los mercados definan lo que debe producir la economía mundial, eufemismo en que las grandes corporaciones penetran por su mayor conocimiento técnico y economía de escala en todos los países, conformando cadenas globales de valor que los tiene a ellos como centro y los demás deben subordinarse. Es lo que formalmente se denominó “La lógica del capital monopolista” quienes se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas (petróleo, acero, cemento), las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Sumados al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación), a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales.

Paralelamente ya en 1972 Richard Nixon y Henry Kissinger habían ido a visitar a un viejo Mao Zedong y al primer ministro de China, Zhou Enlai, para ofrecerle la instalación de empresas norteamericanas de uso intensivo de mano de obra en ese país. Ese acuerdo no solo extendió el poder del capitalismo y su lógica de maximizar ganancias a costa de todo y de todos, sino que implicó abaratar los salarios y desindustrializar al resto de las naciones que tenían industria, entre ellos nosotros, que teníamos a Molinos Río de la Plata y a Ford Pacheco con 5.000 trabajadores. IKA-Renault en su planta de Santa Isabel y FIAT Concord, ambas en la provincia de Córdoba con 10.000 empleados cada una, etc. El giro a la derecha en lo político e ideológico de la población fue diseñado por la falta de trabajo.

El golpe del 24 de marzo de 1976

Para eso era necesario desplazar al equipo del ministro Gelbard y llegar hasta el “Rodrigazo” mediante, al liberalismo más abyecto. El “Rodrigazo” se hace tras una profunda devaluación de nuestra moneda, el dólar paso de valer \$ 10 a \$ 26 el 4 de junio de 1975, el plan inspirado y guiado por Ricardo Mansueto Zinn, hombre del Grupo FIAT (y miembro del “grupo Azcuénaga” que fueron los que elaboraron el plan económico de Martínez

de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL - MACRI) que fue Vice Ministro de Celestino Rodrigo en junio de 1975, quién en agosto del año 1976 publicara un libro titulado “La Segunda Fundación de la República y en él va a sostener: “...cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro”.

El nombre del grupo de los golpista se debe a la mansión en Azcuénaga 1.673-CABA propiedad de la familia Blaquier-Arrieta (dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy), donde se reunían para conspirar con los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy (Primero Jefe de la Policía Federal nombrado por Isabel Perón y luego ministro del interior de Videla), Alcides López Aufranc, Federico de Alzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perrioux y Hugo Miatello (Jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973 gestión de Lanusse), junto a Mario Cadenas Madariaga (dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas -CRA y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz), Horacio García Belsunce (FIAT), Guillermo Zubarán (Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun (principal accionista de la cadena de supermercados La Anónima, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, el Banco General de Negocios, el Banco Argentino de Comercio y parte de Austral Líneas Aéreas, y Juan Etchebarne (Presidente de la Comisión Nacional de Valores con Martínez de Hoz). Todos ellos ocuparon lugares destacados de la dictadura y a su vez eran conspicuos miembros del CEA (Consejo Empresario Argentino).

El CEA fue creado en el seno de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) en 1967 en apoyo al ministro de la dictadura de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, su presidente antes del 24 de marzo de 1976, fue José Alfredo Martínez de Hoz y como tal propició el acuerdo “APEGE” que hizo el *lock out* (paro patronal) en febrero de ese año como antesala del golpe militar. Desde el año 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como se la conoce hoy, presidida por un hombre ligado a la embajada de los EEUU y como tal principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero sus principales directivos y Vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó)

Si bien el golpe militar se desarrolló con muy poca resistencia directa (si quite de colaboración, boicot a la producción, etc.) lo cierto es que la re-

presión se centró en los trabajadores y fundamentalmente en las Comisiones Gremiales Internas de las empresas, quienes eran el principal objetivo militar, de allí la intervención de las FFAA en las fábricas, convirtiéndose muchas de ellas en campos de concentración y centro de detención clandestina.

La desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura, la declaración de estado de sitios, la quema de libros, el cierre de cuanto periódico o boletín ose cuestionar la dictadura, etc. fueron la práctica constantes, conducido por asesinos e inescrupulosos, que fueron capaces, como el marino Alfredo Astiz de pegarle un tiro de 9 mm a una niña de 16 años (confundiéndola con una guerrillera) en la espalda dejándola parálitica (y luego asesinaron para que no se supiera el error, que el valiente padre de la niña desenmascaró) y se rindió y los oficiales se rindieron sin disparar un tiro frente a los ingleses en Malvinas.

La dictadura militar cambió los paradigmas de la sociedad. La derrota sobre el campo popular se reflejó en la falta de organización y en propuestas nacionales y populares, siendo la sociedad permeable a los valores de las clases dominantes, que es el verdadero logro ideológico de la dictadura. Se piensa y se encuentra soluciones que son compatibles con los intereses de las grandes empresas y de los acreedores, que pretenden que la Argentina sea un mero proveedor de materia prima y alimentos, y que deje en el desamparo a más de la mitad de su población.

El plan económico de la dictadura militar respaldado en las fuerzas armadas y el control militar de la Nación, fue de una estructura muy sencilla y se instrumentó en tres medidas básicas, que son las mismas que repitieron el plan de convertibilidad de Menem-Cavallo y el de Macri-Cambiemos.

a) Retrasar el tipo de cambio (Ejecutado por Martínez de Hoz en una “tabita” cambiaria que prefijaba el valor del dólar muy menor al del crecimiento de los precios)

b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para arancelarias (desprotección aduanera)

c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar

De esa manera propiciaba el ingreso de capitales especulativos atraídos por tasas de interés que eran mayor que el crecimiento de los precios y muy superior a la evolución cambiaria, a su vez que se encarecía el crédito a las empresas y a las personas, siendo confiscatorio de su capital, generando una brutal transferencia de la producción y del consumo al favor del sector financiero. La burguesía local pedía préstamos en el exterior (en dólares) a bajas tasas y compraban títulos públicos o acciones o depósitos a plazo

fijo en pesos, ganando la diferencia y luego se volvían al dólar retirando la renta. Renta que se abonó con más endeudamiento externo y cuando no se pudo pagar ni los intereses de la deuda (default de 1989), se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, FFCC, SEGBA, Gas del Estado, se privatizaron las rutas, puertos y hasta el sistema previsional, etc.

Se retrasa el tipo de cambio hasta que por la presión vuela por el aire como sucedió en 1982 tras la Guerra de Malvinas, en 1989 con el fin del gobierno de Alfonsín, en el año 2001 con el fin del plan de convertibilidad y el gobierno de De la Rúa, y en abril de 2018 cuando los principales bancos colocadores de títulos de deuda argentina en el mundo en la gestión de Cambiemos, decidieron pasarse al dólar y éste en tres meses pasó de valer de \$ 20 a \$ 40.-

Tras esa debacle, juega un papel destacado el FMI como orientador de la política económica de todos los gobiernos que deben subordinarse a sus recomendaciones en interminables acuerdos stand by y de condicionamientos, más ahora que ellos mismos se extralimitaron y le concedieron al gobierno de Macri unos 45.000 millones de dólares que, lo único que sirvió fue para convertir en dólares las ganancias de las grandes empresas y fugarlas del país.

La historia, hoy

Hace 45 años que se llevó adelante el plan de desindustrialización y, a la vez, de subordinación económica por deuda y de primarización de la economía argentina y, sólo fue revertido en el gobierno de los Kirchner.

En primer lugar, la Argentina no tiene un problema de restricción externa, no es que no podemos crecer porque faltan divisas; al contrario, las divisas deberían sobrar, de hecho en el año 2020 las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en el año pasado. Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda que el BCRA les autorizó pagar y que en conjunto fue por 6.200 millones de dólares. Es más: le permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, y todo ello por cumplir con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz. La corrida cambiaria no debería existir

si el BCRA priorizará la defensa de nuestra moneda cuyo primer paso es “acrecentar las reservas internacionales”.

En segundo lugar debería trabajarse en un mayor control y supervisión del comercio exterior y sin embargo se publicó el Decreto 949/20 el 26 de noviembre de 2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata. Incluso se propone en dicho Decreto que se emplee el canal Punta Indio y salida y entrada por el Puerto de Montevideo, cuando el acuerdo celebrado en 2015 en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, se decidió que todas las exportaciones que vinieran por el Paraná desembocaran en el canal Magdalena, bajo control nacional.

Y en tercer término se debe modificar la Ley 27.541 de Emergencia Económica que puso como límite de la alícuota de los Derechos de Exportación (Retenciones) para la soja el 33% (actualmente es el 30%) y para todo el resto de los productos que exportamos el 15% (en los granos es actualmente el 12% y en la industria es el 5%), cuando la soja incrementó su precio en el Mercado de Chicago, siempre comparando marzo de 2021 con marzo de 2020, en un 46% en dólares, el maíz lo hizo en un 38% y el trigo en un 33% en dólares, a lo que debe sumarse que el gobierno nacional devaluó el tipo de cambio comercial en un 59,6% en el período indicado, de \$ 60,75 a \$ 97 pesos. Es más, se debería ampliar dicha ley 27.541 para que se declare la Emergencia Cambiaria que fue derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos, luego de casi 53 años de vigencia desde que la impuso el Decreto 2581/1964 en la Presidencia del Dr. Arturo Illia, con diez años de interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001.

En medio de una pandemia que no se sabe cuándo y cómo termina, si termina, tampoco se sabe si se va a contar con un mínimo de vacunas para la población de mayor riesgo ante el invierno que se avecina, en ese marco, el ministro de economía viaja a los EEUU para reunirse con los poseedores de títulos de deuda del país (bonistas), entre quienes se encuentran los permanentes acreedores Greylock Capital Management, BlackRock, PIMCO, Ashmore, Fidelity, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, etc. además de representantes del HSBC, Bank of America y el Lazard, los

tres bancos que intervinieron en la colocación de la deuda Argentina. Y también se reunió con el FMI y el Banco Mundial.

Allí les dijo que la Argentina puede llegar a crecer un 7% este año y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional 2021 que se estimaba en el 4,5% del PIB, será menor e incluso cercano al 3%, cuando en el año 2020 el déficit fiscal final fue del 8% del PIB unos \$ 2,3 Billones equivalente a 26.000 millones de dólares.

En primer lugar, no parece que así sea con los números fiscales del primer bimestre del año, donde el déficit fiscal total suma \$ 67.347 millones y es una suma mayor a todo el gasto de capital del período

En segundo término, se debe priorizar el mercado interno y que los acreedores esperen y para ello, es imprescindible realizar un sideral cambio en las cuentas públicas. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que implica mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el mercado local. Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra pública (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las transferencias (gasto social, subsidio al transporte y la energía en las provincias más pobres).

Las 13.000 personas que deben realizar el “Aporte Solidario” no solo se demoran en abonarlo, sino que hay quienes se han presentado ante la justicia para no realizar su pago. Pero peor es con los derechos de exportación, que no solo no se los eleva cuando el precio en dólar de la mayoría de los productos subió en dólares y se incrementó aún más las exportaciones de alimentos, siendo récord la de la carne en general y la de carne con hueso en particular (que es la que consumimos fuertemente en el mercado interno: asado, vacío, falda, entraña, etc.) superando las 900.000 toneladas en el año 2020, destinando al mercado interno 2.200.000 toneladas que implicó que se tenga el consumo per cápita más bajo de carne vacuna de los últimos 100 años (50,1 kg por habitante).

En tercer agregado, del lado del gasto de la Administración Nacional, el 40% del mismo son pagos de jubilaciones y pensiones, cuando en su más amplia mayoría los supuestos beneficiarios después de trabajar toda la vida, perciben el haber mínimo o cerca del mínimo (en torno a los \$ 22.000.- mensuales para marzo 2021), y los salarios de la administración pública también se han retrasado por la inflación, más los servicios de salud, educación y asistencia social que se debe seguir ejecutando.

Si no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el Estado no garantiza que la economía crezca un 7% anual y,

es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad.

El único camino que se debe transitar es el que diseñó Néstor Kirchner, defender el mercado interno, el trabajo nacional y nuestra soberanía política. La deuda externa en general y con el FMI en particular nos subordina a los mercados internacionales y nos obliga a vender productos primarios. A nuestro país no lo beneficia exportar 39 millones de toneladas de maíz como se hizo el año pasado y que el precio promedio de la carne en el mercado argentino crezca un 75% como sostuvo el IPCVA (Instituto Promotor de Carne Vacuna Argentina). Lo que debe hacerse es garantizar el abastecimiento de maíz para el mercado interno y a un precio accesible a los productores y al consumo.

No es acordando con el FMI que se diseña un proyecto nacional (que es el legado intelectual de la dictadura), sino que teniendo un proyecto nacional se puede acordar con acreedores y grandes empresas locales y trasnacionales.

La herencia de la dictadura militar

Mario Rapoport

A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local.

En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales. En esta cuestión fue de vital importancia la reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos.

El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales. El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas.

Una segunda etapa comenzó en diciembre de 1978, con la aplicación de la “tablita cambiaria”, que consistía en devaluaciones programadas inferiores a la inflación. Estas apreciaron el peso, agravaron el cierre de las industrias nacionales, imposibilitadas de competir con los productos importados, e impulsaron una gran salida de divisas, a causa de los déficit comerciales y de servicios, como los intereses pagados al capital extranjero y el turismo al exterior. Esos déficit se cubrieron con ingresos de capitales y crearon la enorme deuda externa que ya en 1981 produjo una primera crisis de graves consecuencias por la elevación de las tasas de interés internacionales.

De todas las medidas económicas tomadas en aquella época, el país heredó varias que no han sido hasta ahora modificadas, algunas de las cuales, incluso, se profundizaron en los años '90. Las dos principales son la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, sancionada en 1977, y la Ley de inver-

siones extranjeras N° 21.382, ambas nacidas como decretos de la dictadura militar. La primera de ellas comenzó a regir desde la aplicación de otra medida que autorizaba al Banco Central a restituir a las entidades financieras la facultad de captar depósitos por cuenta propia y fijar las tasas de interés activas y pasivas, sobre la base de la garantía de los depósitos otorgada a esas entidades. La Ley N° 21.526 establecía un nuevo régimen según el cual el Banco Central tendría la facultad de superintendencia mientras se valoraba la libre competencia como el medio idóneo para lograr un sistema más eficiente.

Los efectos de estos cambios con la legislación que los profundizó durante el menemismo produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas sobre la producción, en consonancia con la necesidad de los países centrales y las grandes corporaciones de colocar sus superávits de liquidez y obtener mayores rentabilidades aprovechando las diferencias entre las tasas de interés locales y las internacionales.

También, como señala un trabajo reciente del Cefid/ar, dio como resultado una notable extranjerización de los bancos, la concentración de los depósitos en los bancos privados –pero sobre todo en los extranjeros–, un sistema crediticio determinado por el mercado sin ninguna orientación pública, el predominio en la asignación de créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para el desarrollo.

Esta ley constituyó sin duda una de las causas principales que provocaron la crisis del 2001 y, aunque los cambios económicos posteriores introdujeron modificaciones regulatorias que morigeraron sus consecuencias, los rasgos estructurales del sistema permanecen incólumes, especialmente la estructura crediticia. Sólo la acción de la banca pública es la que ha permitido suplir en parte estos problemas, pero todavía se hace necesaria una nueva ley que suplante la anterior.

En cuanto a la ley de inversiones extranjeras, produjo una liberalización de la entrada de capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones extranjeras y a las nacionales. Esto acentuó el proceso de desindustrialización, porque ese capital no se ubicó en sectores industriales y, además, como la ley no obligaba a la reinversión de utilidades no se tradujo en una radicación local de las ganancias empresariales.

El gobierno de Menem liberalizó aún más esta norma al establecer que los inversores pueden colocar sus capitales sin aprobación previa y repatriar sus utilidades en cualquier momento. Una consecuencia posterior fue la aceptación de la intervención de instituciones internacionales como el

Ciadi, que obliga a resolver los conflictos derivados de ese tipo de inversiones en juzgados del exterior, transgrediendo principios cardinales de la política exterior argentina, como las doctrinas Calvo y Drago.

Esta ley debe igualmente modificarse. Para ello existe un proyecto de los diputados Basteiro y Rivas en la cual se establecen nuevas normas regulatorias que restringen, por un lado, la radicación de capital extranjero a áreas claves de la actividad productiva, de los servicios y de la seguridad nacional y, por otro, establecen la necesidad de integrar esas inversiones a un plan estratégico de desarrollo industrial diversificado, priorizando el empleo de personal de nacionalidad argentina y determinando condiciones más estrictas para la repatriación de capitales.

Para culminar, la herencia de la dictadura no termina allí; paradójicamente una de las resoluciones que tomó Martínez de Hoz, porque afectaba sus propios intereses, fue la supresión del impuesto a la herencia, una decisión que ahora acaba de revertirse en parte en la provincia de Buenos Aires.

El país ha avanzado enormemente de un modelo rentístico financiero en lo económico y de exclusión en lo social a un modelo productivo e inclusivo, pero eso no se refleja todavía en el cambio de instituciones creadas durante la dictadura militar, una realidad que hay que reparar con urgencia, porque si las políticas son diferentes la persistencia de las instituciones constituye un palenque donde puede aferrarse de nuevo el fantasma del neoliberalismo.

Artículo publicado en Página/12 - 25 de marzo de 2014.

Documentos revelan rol clave de civiles en leyes económicas de la dictadura

Franco Mizrahi y Gerardo Aranguren

La Ley de Inversiones Extranjeras y la denominada Ley Acindar fueron impulsadas por Martínez de Hoz y Klein, pese al desacuerdo de un sector de las FF. AA. Repatriación de utilidades e igual trato que empresas nacionales. A 38 años del golpe de Estado de 1976, los archivos hallados en noviembre en el edificio Cóndor a los que tuvo acceso Tiempo Argentino detallan de manera novedosa el rol de las grandes empresas y de los sectores civiles en la confección de las políticas económicas de la dictadura. Dos documentos paradigmáticos que reflejan esta relación, cual viejos fotogramas de una película de terror, son el debate en torno a la Ley de Inversiones Extranjeras –aún vigente– y el salvataje de grandes compañías que estaban al borde de la quiebra, conocido como Ley Acindar. En la víspera de un nuevo aniversario de la asonada militar, el análisis de este material que se hará público hoy junto al resto de los archivos en un acto en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, se vuelve imprescindible.

“Con estos documentos va quedando claro el análisis de todo el período dictatorial: la ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras son las estructuras que habilitan el cambio del patrón de acumulación que pasó de un mercado internista y protegido, a un modelo neoliberal, aperturista, con mayor inversión extranjera privilegiada, que constituyó un nuevo modelo de producción basado en la valorización financiera: no importan tanto los bienes sino la circulación del dinero, que habilitará nuevas inversiones”, explicó a este diario Walter Bosisio, investigador de la oficina de coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Verdad y Justicia de la CNV que trabajó en el análisis de los documentos encontrados por el Ministerio de Defensa.

El 13 de agosto de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla decretó la ley 21.382 por la cual estableció que “los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país (...) tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes, acuerdan a los inversores nacionales”.

La norma, conocida como Ley de Inversiones Extranjeras, fue escrita e impulsada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein, con el objetivo de habilitar la llegada de grandes capitales extranjeros al país, que contaron con las mismas condiciones que las empresas nacionales para el acceso a créditos públicos y otros beneficios, como

la posibilidad de repatriar con bajos impuestos las utilidades obtenidas en la Argentina.

La reglamentación de esta ley se produjo en los primeros meses de 1977 y debió pasar por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), un órgano de la dictadura creado para remplazar al Congreso. La versión taquigráfica de esos debates internos y las posturas encontradas entre el sector civil encabezado por Martínez de Hoz y los militares quedaron retratados en los documentos hallados en el edificio de la Fuerza Aérea.

Allí se revela la exposición de Klein en la CAL, en la que el funcionario hace una defensa cerrada de la ley ante los integrantes de la Comisión, presidida por el vicealmirante retirado de la Armada Antonio Vañek (condenado por el plan sistemático de robo de bebés), el contraalmirante Leopoldo Suárez del Cerro y el coronel Ernesto José Tacchi, del Ejército, entre otros.

Ante las consultas, Klein destacó en varias oportunidades la necesidad de transmitir “seguridad jurídica” a las empresas extranjeras: “La autoridad de aplicación no va a hacer discriminación, no se va a aliar con el capital nacional para disminuir la proporción que tengan los accionistas extranjeros en sociedades locales. Hace al principio de seguridad jurídica a la que tienen derecho los inversores extranjeros para mantener sus posiciones relativas en los capitales de las empresas”, sostuvo.

Las diferencias políticas en torno a la aplicación de la ley entre el sector civil encabezado por Martínez de Hoz y algunos sectores militares quedó explicitada en otro de los documentos hallados por el Ministerio de Defensa: una propuesta nacionalista de la Fuerza Aérea que no fue tenida en cuenta en la que condiciona la llegada de capitales extranjeros a que “produzcan beneficios económicos al país”.

La ley de Inversiones extranjeras terminó con la ley de residencia de capital extranjero del año 1973, con una orientación a la protección de la producción nacional y del mercado interno. “La ley borró esa herencia peronista y produjo una profunda transformación: gran parte de los sectores Pymes se desarmaron, hubo una profunda redistribución de la riqueza. La torta, que estaba casi 50% y 50%, pasó a manos del capital nacional y extranjero. Cambiar una normativa de ese estilo también dio una señal internacional para legitimar el proceso”, explicó Bosisio.

Ley Acindar, otra medida paradigmática de la dictadura

En agosto de 1981, luego de dos bruscas devaluaciones, la Junta Militar comenzó a trabajar un proyecto de ley para saciar las demandas de las grandes empresas que cotizaban en Bolsa, estaban endeudadas en dólares y corrían riesgo de quiebra formal. Según se desprende de la carpeta PEN 126, encontrada en la sede de la Fuerza Aérea, entre las firmas que se beneficiarían con el salvataje se encontraban: Acindar, Pérez Companc, Astra, Ledesma, Dálmine, Alpargatas, Molinos Río de la Plata, San Pablo, Techint y Bunge y Born, entre otros.

“La propuesta principal implicaba alterar las bases contables, dibujar los números, en criollo”, explicó Bosisio. Básicamente, la idea primordial constaba en distribuir el pasivo en tres ejercicios, es decir, otorgarle “a las empresas tres años de gracia”, según el documento.

“Lo que se busca es evitar que ciertas empresas que no habían previsto devaluaciones (...) pierdan todo su patrimonio al contabilizar la pérdida que les ocasiona el devaluar todas sus deudas”, explicaba entonces Carlos Manuel García, asesor del ministro de Economía a la CAL. Mientras esto sucedía, los asalariados perdían un equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI.

La elección de la medida adecuada para salvar a unas 200 firmas endeudadas en dólares motivó un acalorado debate que acredita la injerencia de los actores civiles y empresarios en las decisiones dictatoriales. El teniente coronel Alberto Sampietro, conocedor del poder que ostentaban las grandes empresas, interrogó de manera directa en la CAL a los funcionarios del Ministerio de Economía: “¿El proyecto (de salvataje) obedece a una iniciativa del área de que ustedes forman parte o a propuestas de sectores empresarios?”. “A una iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia y de la Subsecretaría de Hacienda, surgida de manifestaciones que distintos sectores nos han hecho llegar, tal como una nota de la Bolsa de Comercio en la que se nos decía que el 50% de las empresas en actividad entrarían en liquidación si no se tomaba algún tipo de medida”, respondió el asesor García.

El 20 de agosto de 1981, en una reunión en la CAL, el presidente de la CNV, Alfredo Etchebarne, sintetizó en una frase el poder de los sectores empresarios durante el terrorismo de Estado: “En realidad, yo creo que esta ley tiene nombre y apellido: Acindar.”

La transición democrática en la Argentina (1983-1999)

Rosario López Marsano

Desde el 20 de diciembre de 2001, la sociedad argentina atravesó una crisis de dominación social¹ tan profunda como inédita. En el corto lapso que media entre la renuncia de Fernando de la Rúa y el nombramiento del presidente de Eduardo Duhalde por parte de la Asamblea Legislativa el 31 de diciembre del mismo año, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño juraron en forma sucesiva como presidentes de la Nación. En ese contexto, la crisis de representación, que se insinuara con fortaleza en los comicios de octubre de 2001, se profundizó. Hoy, más que nunca, las bases sobre las que se estructuró tanto el régimen como el sistema político que caracterizó el proceso de nuestra transición democrática se hallan fuertemente cuestionadas.

Por ello, este artículo es un intento de bucear en los rasgos centrales que caracterizaron la experiencia democrática argentina entre 1983 y 1999. En ese tiempo, los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem debieron hacer frente a dos desafíos que asomaban como condición *sine qua non* para lograr la consolidación del sistema: por un lado, la promoción del crecimiento y la estabilidad económicos; por otro, la normalización de las relaciones con los militares. Ambos rasgos constituían en ese marco una pesada herencia derivada de más de siete años de dictadura militar en cuya crisis es posible rastrear las condiciones de posibilidad para la transición democrática. La solución de ambos desafíos requería tanto de la reconstrucción del sistema político como de una garantía de gobernabilidad sobre la base de una nueva hegemonía.

Sin embargo, a lo largo de nuestro período de referencia sólo podemos reconocer seis años concretos de hegemonía que van desde la puesta en práctica del Plan de Convertibilidad en abril de 1991 a la salida del gobierno de su mentor Domingo Felipe Cavallo. Como veremos más adelante, varios son los factores que explican el fracaso alfonsinista para la construcción de su proyecto hegemónico de “tercer movimiento histórico”. Asimismo, parte de estas causas nos permitirán transitar el incierto camino de los dos primeros años de la gestión menemista hasta la “estabilización

¹ Siguiendo a Guillermo O'Donnell (1982), nos encontramos frente a este tipo de crisis cuando los fundamentos de la organización de la sociedad, de las relaciones sociales que constituyen a las clases y sus formas de articulación son puestas en tela de juicio. En el contexto descripto, lo que peligra en definitiva es la reproducción de las relaciones centrales que caracterizaron el capitalismo argentino a lo largo del proceso de transición democrática.

forzosa” mediante la cual el superministro Antonio Erman González le allanó el camino a la dupla Menem-Cavallo. Desde entonces hasta el inicio de la crisis de la hegemonía menemista, la alianza de intereses entre los grupos privatizados y el capital financiero logró ejercer una dirección política y cultural sobre el conjunto de la sociedad argentina.

No obstante, a partir de diciembre de 1997 la crisis comenzó a asomar en forma cada vez más progresiva. Frente a ella, la alianza entre la UCR y el Frente País Solidario (FREPASO) se presentó como una alternativa viable de solución, posibilitando el acceso de Fernando de la Rúa a la primera magistratura de la República en diciembre de 1999. Aunque el análisis de su gobierno excede los límites de este trabajo, se debe aclarar que, a lo largo del mismo, la crisis, lejos de encontrar una solución, se profundizó. En ese marco, la “nueva alianza” que De la Rúa y su entorno habían cerrado con Cavallo y su partido Acción por la República a comienzos de 2001 sucumbió trágicamente aquel 20 de diciembre.

Crisis de la dictadura argentina: los partidos políticos y la campaña electoral

El año 1983 fue el del inicio de la transición democrática en la Argentina. El país venía de atravesar una etapa dominada por la más negra de las dictaduras militares de su historia. El tristemente autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” constituía en ese marco un caso típico de “derrumbe” o “ruptura” (Landi, 1988; Waisbord, 1995). Ese quiebre no era otra cosa que el resultado del colapso del régimen autoritario tras la derrota de Malvinas en junio de 1982. La ocupación de las islas Malvinas el 2 de abril de aquel año por parte de la dictadura militar encabezada por Leopoldo Galtieri buscaba enarbolar una causa nacional con el objeto de lograr apoyos para un gobierno a todas luces ilegítimo. Basta recordar que tres días antes, el 30 de marzo de 1982, la CGT había convocado exitosamente a una movilización nacional contra la dictadura militar. Dos escenarios diferentes se montaron en la Plaza de Mayo en un espacio de cuatro días: la represión del 30 de marzo y la “fiesta” del 2 de abril. Sin embargo, la fiesta naufragó rápidamente. En junio de ese mismo año, la rendición de las tropas argentinas en Malvinas fue el desenlace lógico de una guerra imposible. Sin embargo, ese desenlace no era el esperado por la opinión pública argentina, engañada durante dos meses por los medios de comunicación en el marco de la censura de prensa implantada por el régimen militar. Abruptamente, el velo que por años tapara la legitimidad del gobierno acababa de caer. A los reclamos por el desastre militar se suma-

ban otros que giraban en torno a la falta de libertad de prensa y, por ende, de acceso a la información. La dictadura se debilitaba dejando asomar el debate interno en las Fuerzas Armadas en torno a las responsabilidades de cada arma en el campo de batalla y haciendo evidentes los conflictos. Distintas expresiones de la sociedad civil fueron unificándose en torno a una serie de reclamos que apuntaban hacia la democratización y al respeto de los derechos humanos. En ese contexto el fortalecimiento de la posición política y social al régimen limitó el poder de maniobra del sucesor de Galtieri, Reynaldo Bignone, para una salida concertada.

Los puntos centrales de la concertación para la institucionalización del país planteados por presidente de facto Bignone giraban en torno a la “clausura del pasado” y el rol que le cabrea las fuerzas armadas en el futuro gobierno constitucional. Sin embargo, la posición de la sociedad civil a los condicionamientos que los militares pretendieron imponerle marcó tanto el rumbo como el ritmo de la restauración democrática argentina. Fue ese el contexto en que adquirieron protagonismo tanto los partidos políticos como los organismos defensores de los derechos humanos. Durante el segundo semestre de 1982 los partidos políticos se dedicaron a reconstruir sus estructuras en lugar de volcarse de lleno a la campaña electoral. Era lógico: tras un largo periodo de ausencia total de prácticas democráticas resultaba necesaria la reconstrucción de esas poderosas maquinarias electorales. Este proceso se vio acompañado por una progresiva desarticulación de la multipartidaria, que venía operando como agrupamiento de las principales fuerzas políticas nacionales desde julio de 1981 en respuesta al “llamado al diálogo” iniciado por los militares durante la presidencia del dictador Roberto Viola.

En el nuevo escenario montado tras el trágico desenlace de la guerra cada partido político buscó su posicionamiento frente al gobierno y el electorado. En cada caso concreto, esas posturas estuvieron marcadas tanto por la lucha por el liderazgo partidario como por la oposición asumida frente al juzgamiento de los responsables por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Desde diciembre de 1982 diversas expresiones de la sociedad civil ganaron la calle. La ciudadanía respondió masivamente a las campañas de afiliación a las que se vieron obligados los partidos políticos para obtener la personería jurídica. A partir de ese proceso la actividad partidaria cobró un nuevo impulso. En el horizonte se dibujaba con precisión la consolidación de un sistema político bipartidista en el ámbito nacional. Los dos partidos mayoritarios

fueron asimismo secundados por terceras fuerzas políticas que solo insinuaban una tibia fortaleza en los grandes centros urbanos.

En el radicalismo, dos líneas internas se disputaban el liderazgo partidario. Raúl Alfonsín, del Movimiento de Renovación y Cambio, se ubicó primero en la línea de largada, protagonizando la primera campaña política moderna. Su mayor virtud fue lanzar en forma conjunta la campaña nacional y la de las internas partidarias haciendo uso de su habilidad de hablar a dos públicos al mismo tiempo. Aun antes de su triunfo en las primarias, logró fijar la agenda de campaña contraponiendo continuamente el autoritarismo a la democracia. Frente a esto, la Línea Nacional de la UCR liderada por Carlos Contín se vio obligada a dar un paso al costado. A mediados 1983, Alfonsín fue designado presidente del partido radical y candidato a las elecciones de octubre por esa fuerza política. La situación en el peronismo en cambio era, sin duda, más compleja. Tras la sangría provocada por la dictadura, la conducción del movimiento había quedado en manos de los sectores más moderados. Las disputas por el liderazgo partidario intentaron dirimir entre varias corrientes internas. En primer lugar, el Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO), junto con las CGT Brasil liderada por Saúl Ubaldini, impulsaban la candidatura de Antonio Cafiero. En segundo término, la CGT Azopardo, comandada por Jorge Triaca, apoyaba la postulación de Ángel Robledo. Finalmente, Intransigencia y Movilización Peronista, agrupación que intentaba reunir a los sectores identificados con la izquierda del movimiento, proponía la candidatura del caudillo catamarqueño Vicente Saadi. Sin embargo, frente a la falta de hegemonía real de alguno de los grupos en disputa, la imagen de independiente moderado esgrimida por Ítalo Luder fue asomando a la superficie como la alternativa más coherente. Finalmente, en el marco de un congreso interno en el que la representatividad estuvo fuertemente cuestionada, el Consejo Nacional Justicialista lo consagró como su candidato para las elecciones generales de octubre.

El triunfo de Alfonsín en los comicios de ese año marcó la primera derrota peronista en toda su historia. Frente a esta pérdida de la mayoría, sin que mediase ningún tipo de proscripción sobre el movimiento político nacido en 1945, se ensayaron diversas interpretaciones. Algunas referían a los cambios sufridos por la estructura social de la Argentina a partir de la estrategia de la dictadura (Villarreal, 1985). Otras lecturas, centradas específicamente en la relación existente entre los partidos políticos y sus estrategias comunicacionales, hicieron hincapié en el desorden reinante en el Partido Justicialista en aquel momento, aunado a una falta de vi-

sión de sus dirigentes acerca de la importancia que comenzaban a adquirir las campañas políticas modernas (Cordeu, Mercado y Sosa, 1985; Landi, 1988; Waisbord, 1995). Sin lugar a dudas, podríamos afirmar que ambos elementos estuvieron presentes en esa derrota en forma articulada. En definitiva, los cambios provocados en la estructura social vernácula mediante la estrategia dictatorial que combinó a un tiempo la puesta en marcha de un programa neoliberal con altas dosis de terrorismo de Estado dejaron su huella en la cultura política de los argentinos. Este cambio cultural se vio reflejado tanto en el resultado eleccionario como en el nuevo tipo de relación que se tejió desde entonces, y en forma cada vez más intensa, entre partidos políticos y medios de comunicación en tanto elementos centrales del régimen político de acceso al poder.

La relación entre economía y política durante la transición democrática

Tanto la política implementada por la última dictadura como los cambios operados en el capitalismo central desde fines de los 70 influyeron de modo decisivo sobre el comportamiento de la economía argentina durante la transición democrática. En tal sentido, el Proceso de Reorganización Nacional logró, entre 1976 y 1983, quebrar las bases y relaciones sociales, institucionales y productivas que habían sustentado la economía argentina a lo largo de casi toda su época de industrialización y, sobre todo, en el período iniciado en la posguerra, durante el cual la industria fue el eje ordenador de la economía. En ese contexto, el éxito de la política de disciplinamiento y reorganización social puesto en marcha por la dictadura, y en la que se combinaron la acción del Estado terrorista y el plan económico de José Martínez de Hoz, tuvo dos clases de efectos. Por un lado, contribuyó tanto a la desarticulación de la sociedad civil como al debilitamiento de las organizaciones intermedias, de los partidos políticos y del Estado. Por otro, permitió el fortalecimiento del capital concentrado, la prevalencia del capital financiero sobre el productivo, la concentración económica, la reducción de los costos salariales para los empresarios y el aumento de la deuda externa.

Esta transformación radical de la sociedad argentina condicionó de manera decisiva el sendero de la economía desde 1983. A partir de entonces, la puesta en marcha del plan del ministro de Economía, Bernardo Grinspun, llevó a una primera y efímera confrontación entre los sectores de poder económico y el gobierno de Alfonsín. Sin embargo, tras la declaración de la “economía de guerra” y la consecuente llegada de Juan

Vital Sourrouille a la cartera de Economía empezó a transitar el proceso de “pacto” con el capital concentrado que continuó hasta convertirse en un “acuerdo”. Este “acuerdo” tuvo su punto de arranque en julio de 1989 cuando, en medio de una crisis hiperinflacionaria, el presidente Menem le entregó el ministerio de Economía al grupo Bunge y Born. Los resultados en el corto plazo no fueron los esperados. Ante el agravamiento de la crisis el ministro Néstor Rapanelli fue reemplazado por Erman González, quien fue el encargado de estabilizar la crisis en el sector monetario a partir del Plan Bonex a principios de 1990. Sus medidas allanaron el camino para el ingreso de Cavallo al ministerio y para la consecuente reforma estructural implícita en el ya citado Plan de Convertibilidad. Finalmente, el “acuerdo” había sido sellado (Nochteff, 1999).

La política económica del alfonsinismo

Cuando Bernardo Grinspun se hizo cargo de la cartera de Economía en los albores de la transición democrática, intentó revertir la delicada situación heredada de la dictadura militar. Con un programa económico tendiente a incentivar la producción industrial, buscó reactivar el mercado de trabajo mediante la generación de empleo. Sin embargo, la escasa capacidad de maniobra con que contaba el equipo económico frente a los organismos de crédito internacionales, que le imponían condiciones cada vez más gravosas en el marco de la crisis de la deuda externa, limitó las iniciativas económicas tanto del sector público como del privado. Los hechos forzaron la salida de Grinspun y su reemplazo por Sourrouille en enero de 1985. El nuevo ministro fue el encargado de poner en práctica una serie de planes de ajuste con el fin de estabilizar la economía. Esta era la base esencial para el inicio del “pacto” con el capital concentrado. La primera medida fue el lanzamiento del Plan Austral, aplicado entre 1985 y 1988, que tuvo en los inicios algunos éxitos relativos. Sin embargo, no logró sortear la persistencia inflacionaria, los bajos niveles de salario e inversión y las complicadas posibilidades para el desarrollo económico en las que se combinaban las caídas de los precios internacionales para las exportaciones agropecuarias con el peso de la deuda externa. Frente al agravamiento de la crisis, el equipo económico ensayó un nuevo paquete de medidas, que a partir de 1988 fue conocido como Plan Primavera, que contó con el apoyo de los “capitanes de la industria”, principales beneficiarios de la estatización de la deuda en 1982, y de la Cámara Argentina de Comercio. De la vereda de enfrente se pararon otros sectores industriales ligados al mercado interno y a las economías regionales, por un lado, y las entidades

representativas de los intereses agropecuarios, por el otro. Los dos elementos centrales del Plan Primavera fueron la devaluación y el manejo de la pauta cambiaria. Ambos componentes permitieron crear condiciones de posibilidad para que los grandes grupos empresariales se lanzasen a la especulación financiera. Esto desencadenó a principios de 1989 una fuerte crisis hiperinflacionaria que profundizó el proceso de transferencia de ingresos entre sectores de la sociedad argentina iniciados hacia 1975 con el “Rodrigazo”. Frente a la concentración del poder económico en los grupos dolarizados, la agudización de la crisis y la recesión productiva arrojaron a millones de argentinos al hambre y la desesperación. A 15 días de las elecciones nacionales, que le dieran en el triunfo al binomio justicialista Carlos Menem-Eduardo Duhalde, gran cantidad de trabajadores y desocupados sin dirección orgánica iniciaron saqueos a supermercados en diversos puntos del país. La respuesta gubernamental fue la declaración del estado de sitio y la represión. Ni siquiera los reemplazos de Sourrouille en la cartera economía —fue reemplazado sucesivamente por Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez— le permitieron a Alfonsín recuperar el control de la situación. Finalmente, seis meses antes la fecha estipulada, el 9 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumió la primera magistratura de la República.

La solución menemista al problema del crecimiento y la estabilidad económica: neoliberalismo y reforma del Estado

Para ensayar una lectura posible del triunfo menemista, así como también del margen de maniobra con que contó el nuevo presidente para probar diversas estrategias hasta dar con el “rumbo de la estabilidad”, es necesario tener en cuenta fundamentalmente el descrédito que acompañó la salida anticipada del radicalismo del poder. En ese contexto, cobran especial significado los efectos sociales y políticos negativos derivados de la crisis hiperinflacionaria desatada en febrero de 1989. Los mismos se amalgamaron sobre un malhumor social generalizado con origen en los reiterados cortes de energía a los que se vio sometida la población desde enero. Este problema desnudó frente a la opinión pública la profunda crisis en la que se hallaba el Estado empresarial. Si bien ésta era de larga data, hasta el momento no se había expresado con tanta precisión. En cierto sentido, sobre esa crisis del Estado empresarial se montará posteriormente toda la ofensiva neoliberal para justificar el proceso de privatizaciones al que apuntaba el Plan de Convertibilidad. Sin embargo, un rastreo en el pasado nos permite ver la presencia de discursos privatizadores y antiestatistas en

los objetivos del plan de reestructuración de la dictadura militar. Incluso estuvieron presentes en las propuestas del exministro de Obras Públicas de Alfonsín, Rodolfo Terragno. Si bien es cierto que las condiciones de posibilidad para avanzar en ese sentido no estuvieron dadas antes de 1991, es necesario tener en cuenta que empezaron a cobrar fuerzas a principios de 1989.

Durante la primera mitad de la década del 90, el gobierno de Menem avanzó en la implementación de políticas neoliberales, que tenían como eje central la reforma del Estado y el desmantelamiento del sector público. En ese contexto, a partir de abril de 1991, la dupla Menem-Cavallo logró poner en marcha el Plan de Convertibilidad. Su objetivo central era crear, a partir de la apertura y la desregulación de la economía, condiciones de posibilidad favorables para el ingreso de capitales. Esto implicaba, además del avance sobre el Estado, la estabilización monetaria y el control inflacionario. Desde entonces el plan se desarrolló según los pasos previstos. Esto supuso tanto un desmantelamiento progresivo de la estructura estatal como el consecuente avance del sector privado sobre áreas fundamentales de decisión, en consonancia con las imposiciones de los organismos de créditos internacionales. Así, a fin de obtener una renegociación en el pago de los intereses de la deuda externa, se procedió a firmar un nuevo acuerdo stand by con el FMI y se propició el ingreso de la Argentina al Plan Brady. Según las predicciones, las medidas adoptadas contribuirían a reducir el déficit fiscal y estimular la inversión privada, y ello provocaría una reactivación en el mercado de trabajo. Sin embargo, a fines de 1994 comenzó a registrarse un marcado aumento de la tasa de desempleo. Esa tendencia continuó hasta llegar a más del 18% para mediados del año siguiente. En ese escenario se desarrolló la campaña electoral para los comicios del 14 de mayo de 1995 cuyo eje central fue, obviamente, la cuestión del desempleo. Los argumentos del gobierno buscaban explicar “el efecto no deseado del plan” como un resultado inesperado producido por factores coyunturales. Entre éstos destacaba en el llamado “efecto tequila”, la mayor cantidad de gente que presionaba sobre los mercados laborales y la inmigración de países vecinos. Frente a ello, la oposición intentaba señalar que el aumento del desempleo era en realidad un “efecto previsto” en la reorganización del capitalismo argentino iniciada en 1976. En su crítica a los argumentos oficiales, los dirigentes opositores buscaban demostrar que, mediante el desempleo, se lograba disminuir la participación de los asalariados en la distribución del ingreso nacional. Este punto era esencial en el marco de una reforma que apuntaba la reducción del costo laboral.

Sin embargo, una porción mayoritaria de la ciudadanía argentina volvió a extender un cheque en blanco al oficialismo a partir de la reelección del presidente Menem por un nuevo período de cuatro años². Este nuevo éxito del oficialismo venía a confirmar una tendencia electoral favorable al Partido Justicialista que venía desarrollándose sin fisuras desde la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad. En definitiva, el gobierno seguía garantizando la hegemonía. Hacia el segundo semestre de 1997, la crisis económica empezó a confundirse con el inicio de una crisis hegemónica. En ese contexto la dupla Menem-Cavallo se fractura y el ministro es reemplazado por Roque Fernández. El nuevo titular de Economía procurará la última ofensiva sobre el sector público y la profundización de la ortodoxia neoliberal. En estas circunstancias, la ratificación del rumbo no demostró ser la estrategia más propicia para el futuro político del oficialismo. Así, en diciembre de 1999, con el fin de la era Menem se iniciaba el breve e incierto gobierno de la Alianza, que inauguraría teóricamente la postransición democrática.

La relación entre política y sociedad durante la transición democrática

La nueva transición democrática era radicalmente distinta de la de 1973. A partir de 1983, la restauración del régimen político democrático se basó en la construcción y la consolidación de un sistema bipartidista. En ese contexto la UCR liderada por Alfonsín triunfó por primera vez en la historia sobre un peronismo no proscrito y obligó a este último tanto a ensayar una autocrítica como a jugar el rol de opositor. Por ello, en 1984 amplios sectores del justicialismo se abocaron a una reestructuración interna, que cobró cuerpo en el Movimiento de Renovación Peronista que, desde entonces y hasta el triunfo de Cafiero en las elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires en 1987, debió librar una dura batalla contra la ortodoxia partidaria a cuyos miembros calificaron como los “mariscales de la derrota” (Cordeu, Mercado y Sosa, 1985). No sólo la situación política era contrastante entre ambas transiciones. Las diferencias podían asimismo percibirse en las características que en ese marco adquirió la

² En las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1995 el binomio Carlos Menem-Carlos Ruckauf logró cosechar más del 50% de los votos, permitiendo la reelección presidencial. En segundo término, se ubicó con más del 30% la fórmula José Octavio Bordón-Carlos Álvarez, salida de la alianza constituida por el Frente Grande y el Frepaso. En ese contexto, el Frepaso logró capitalizar el voto opositor al modelo a través de un discurso ético que se basaba tanto en las críticas a la corrupción menemista como en un intento de distanciamiento del acuerdo político sellado por Menem y Alfonsín en el llamado “Pacto de Olivos”. En ese marco situacional, el candidato presidencial de la UCR Horacio Massaccesi fue relegado a un lejano tercer puesto en los comicios nacionales.

movilización popular, no sólo en lo que se refiere a sus protagonistas sino también con relación a los tipos de reclamos sociales, la cultura política, la militancia y, finalmente, los paradigmas por los que corría el debate intelectual en una y otra ocasión.

Como apuntamos oportunamente, la nueva democracia argentina enfrentaba un importante número de desafíos. El primero y fundamental fue, sin lugar a duda, la reconstrucción y la consolidación del estado de derecho sobre la base de un sistema político capaz de garantizar la gobernabilidad. Este aspecto era en ese marco una condición necesaria para intentar una solución a los principales problemas heredados de la dictadura militar que requerían de la construcción de una nueva hegemonía. Con relación a ello, a lo largo del apartado anterior nos ocupamos específicamente de la cuestión del crecimiento y la estabilidad económica. A continuación, analizaremos en detalles diversos aspectos sobre los que se estructura la política durante la transición democrática.

El sistema político. Uno de los rasgos salientes del sistema político argentino ha sido históricamente su carácter presidencialista. Como garantía de buen funcionamiento, este tipo de sistemas requiere que el presidente cuente en principio con mayoría partidaria en la Legislatura. Sin embargo, la sola existencia de tal mayoría partidaria no constituye garantía suficiente para lograr un apoyo incondicional del Poder Legislativo a las iniciativas presidenciales; por ello es fundamental contar además con un alto grado de disciplina partidaria a fin de conseguirlo. Ambos elementos solo se articulan en forma viable en el marco de un sistema de dos partidos dominantes.

Entre 1983 y 1999 una serie de factores institucionales y partidarios impactaron de modo desigual sobre el funcionamiento del sistema presidencialista argentino. Así, mientras ciertos rasgos contribuyeron de forma positiva a la consolidación del poder presidencial, otros tendieron a empañar su naturaleza democrática (Jones, 2002). Esto requiere tanto de un análisis de las características que adquirió el sistema de partidos durante la transición democrática como una evaluación del funcionamiento efectivo de los principios de republicanism y federalismo expresados en la Constitución Nacional.

Por lo menos hasta la reforma constitucional de 1994, uno de los rasgos centrales que caracterizó a nuestro sistema político fue la consolidación del bipartidismo. Esta particularidad guardaba un marcado contraste con el pasado. El bipartidismo se apoyó básicamente en la combinación

de cinco elementos: 1) colegio electoral en la elección presidencial; 2) un ciclo electoral en el que se alternan elecciones ejecutivas y legislativas; 3) elección de senadores por la regla de pluralidad de sufragios por parte de las legislaturas provinciales; 4) elección de diputados por distrito con una magnitud efectiva relativamente baja, y 5) elección de gobernadores, en casi todos los casos, al mismo tiempo que se votaban los diputados nacionales.

Esta nueva tendencia se hizo evidente en casi todas las elecciones en las que se puso en juego la renovación de cargos ejecutivos. Durante los primeros 10 años de la transición democrática la alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios fue casi un hecho. Detrás de ellos, las terceras fuerzas políticas tanto de centro derecha como de centro izquierda venían experimentando un similar derrotero medido en términos de consenso. Tanto la Unión de Centro Democrático como el Partido Intransigente lograron por algún tiempo atraer cerca del 10% de los votos en distritos como la Capital Federal. Sin embargo, por lo menos hasta la firma del Pacto de Olivos en noviembre de 1993, nunca lograron proyectarse por encima del 2% en una elección presidencial. En cierto sentido, no exageraríamos si afirmásemos que nunca antes de la firma del criticado pacto entre Menem y Alfonsín las terceras fuerzas políticas lograron poner en jaque el bipartidismo que caracteriza la primera década de la transición; tanto es así que en ese lapso ambas expresiones políticas fueron cooptadas por los dos partidos mayoritarios.

Es cierto que debemos bucear en el Pacto de Olivos para hallar la clave de la debacle de la UCR en las elecciones presidenciales de 1995. De todos modos, no es menos cierto que ese pacto represente en cierto sentido el ejemplo más palmario de la lógica de un sistema bipartidista cuyos líderes acabaron por rubricar en forma conjunta en la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, el rechazo que el pacto generó en una parte importante de la sociedad explica el triunfo del Frente Grande en las elecciones para convencionales constituyentes. Asimismo, le da sentido al cómodo segundo puesto obtenido por el Frepaso en los comicios que confirmaron al entonces presidente Menem por un nuevo período de cuatro años. En ese contexto, el colapso de la UCR y el crecimiento de una tercera fuerza política apestaba, por primera vez en la transición democrática argentina, un duro golpe a un sistema que garantizaba la alternancia en el poder de dos partidos dominantes. Esta tendencia puede observarse también en los cambios operados en la composición de la Legislatura a lo largo de todo nuestro período de referencia. En ese lapso, el porcentaje de escaños

obtenidos por la UCR en ambas cámaras acusó un marcado descenso. En cambio, el Partido Justicialista logró un importante incremento, sobre todo a partir de 1989. En ese contexto, la brecha que hasta ahí separaba la UCR del Frepaso se acorta. Más allá de ello, conviene no desestimar la fortaleza que aún en plena crisis el radicalismo pudo finalmente esgrimir frente al Frepaso en virtud de su proyección en el ámbito nacional. Sobre esta base, en 1997 los integrantes de ambas fuerzas políticas sellaron la alianza que, desde entonces y hasta el triunfo de Fernando de la Rúa en los comicios generales de 1999, se convirtió en el principal referente de la oposición al menemismo.

La nueva relación entre poder y comunicación, o los nuevos derroteros de la cultura política

En América Latina en general la irrupción del marketing en la política es un fenómeno relativamente reciente. En ese proceso confluyen con fuerza dos causas de fondo. En primer término, la progresiva liquidación de las dictaduras militares en la región. En segundo término, el amplio desarrollo de las tecnologías comunicacionales aplicadas a la política. Democracia estable y cambio tecnológico parecen ser los dos rasgos salientes a tener en cuenta. La Argentina no escapa a este esquema. Desde el inicio de la transición democrática, entrados los años 80, cada campaña electoral representó un nuevo ejemplo de incorporación de nuevas técnicas y géneros comunicacionales a la política. La consolidación del sistema democrático representativo supone desde entonces contiendas electorales periódicas. En ese contexto, la publicidad de carácter político partidario adquiere especial importancia. Del mismo modo, a lo largo de nuestro período de referencia, la revolución dada en las prácticas de comunicación política coincide con un novedoso escenario político-cultural, dominado por un sistema de medios de comunicación liderados por la televisión. El marketing político constituye desde entonces otro ingrediente fundamental de la comunicación política argentina. Su objetivo principal es, a grandes rasgos, el diseño de campañas preelectorales centrada en los medios más que en las relaciones interpersonales. Tal afirmación nos obliga a tener en cuenta una serie de supuestos políticos culturales, propios de la nueva cultura política argentina, que dan sentido a la centralidad de las técnicas de comunicación política en las campañas modernas.

No sólo es necesaria, entonces, la existencia de un sistema democrático consolidado. Hay otras dos condiciones necesarias para la aplicación del marketing en la política. Por un lado, el fin de las lealtades político-par-

tidarias que determinaban el voto. Por otro, esa especie de síntesis entre debilidad y fortaleza que, a un mismo tiempo, sustentan a lo largo de la etapa los partidos políticos argentinos. Éstos han demostrado ser fuertes en virtud del rol asumido durante el proceso de selección de los candidatos que se disputarán finalmente el acceso al poder. Sin embargo, muy a pesar de constituirse en el principal mecanismo del régimen político vigente, adolecen de una debilidad estructural, que radica en su imposibilidad de resolver por sí mismos las tareas comunicacionales de la búsqueda de votos. Ambas premisas nos colocan en definitiva frente a una inclusión del campo político en el campo comunicacional, dado que el segundo resulta más amplio que el primero en dos niveles: por un lado, su amplitud se halla directamente relacionada con el hecho de ser más inclusivo en el sentido cuantitativo de cobertura; por otro, su mayor amplitud tiene a su vez un sentido cultural.

Entre 1983 y 1999 la relación entre poder y comunicación en la Argentina se ha consolidado. En ese contexto, las campañas políticas modernas, con vistas a procesos eleccionarios, constituyen sin lugar a duda uno de los temas centrales de la comunicación política y, en tal sentido, guardan una íntima relación con diversas instancias de los estudios sobre opinión pública. También es claro que, a lo largo de nuestro período de referencia, las mismas contrastan claramente con los ejemplos del pasado. Si consideramos que 1983 fue como una especie de año bisagra en la cultura política argentina, y echamos una mirada al proceso eleccionario con el que se inició la transición a la democracia en el país, podemos observar una pérdida de lealtad del electorado a los lemas partidarios. Ese año, el grito de “liberación o dependencia”, símbolo de la cultura peronista, había perecido ante la prédica democrática del candidato radical que finalmente obtuvo el 52% de los votos en las elecciones nacionales del 30 de octubre. Sin embargo, 1989 fue una especie de llamada de atención a la clase política argentina. El fracaso del “tercer movimiento histórico” como nueva identidad política de los argentinos quedó de manifiesto con el importante apoyo ciudadano con el que contó el proyecto de “revolución productiva” con el que Menem llegó a la casa de gobierno. En tal sentido mientras que 1983 marcó el fin de la hegemonía electoral del peronismo y, por ende, su capacidad de comunicarse con el electorado casi sin necesidad de mediaciones, 1989 en cambio fue una demostración clara de que el triunfo electoral de la UCR al comienzo del proceso de transición democrática no significaba la creación de una nueva identidad en el electorado. En aquel

contexto, la ciudadanía argentina no permaneció inmune a la recesión económica y sus consecuencias al momento de elegir.

Aquel 14 de mayo, con poco más del 47% de los votos, la fórmula justicialista Carlos Menem-Eduardo Duhalde se imponía sobre los candidatos del partido oficialista. A pesar de sus esfuerzos, el candidato radical Eduardo Angeloz no logró despegar su imagen de un gobierno seriamente cuestionado. En menos de dos meses, la agudización de la crisis de gobernabilidad se vio reflejada en la profundización de esa especie de “gran pánico social” que venía manifestándose crudamente desde principios de año. Sin más posibilidades, Alfonsín se vio obligado, como ya dijimos, a la entrega adelantada del poder. Es interesante tener en cuenta que en ese contexto de gran pánico social se había desarrollado la campaña electoral. A lo largo de ella, el candidato finalmente triunfante había prometido declarar la moratoria de la deuda externa y reactivar la economía mediante un salarizado. No obstante ello, una vez en el poder optó, como vimos, por una política económica y social que se hallaba esencialmente en las antípodas. Sin embargo, fue precisamente en ese contexto de crisis galopante cuando estuvieron dadas las condiciones para el anuncio de un cambio de rumbo que le granjeó al presidente el apoyo de las principales fuerzas liberales de centro derecha, las que tradicionalmente habían representado a la más cruda oposición al peronismo. Es dable destacar que este viraje ideológico de Menem no solo provocó reacomodamientos en el sistema político; también fue acompañado por un proceso de cambio actitudinal de la ciudadanía respecto de “lo público” y “lo privado”.

Así, con arreglo a un discurso antiestatista y privatizador, el oficialismo logró captar la voluntad política de la mayoría que, por lo menos entre 1991 y 1995, legitimó con su voto el programa neoliberal de transformación. Sin embargo, a partir del inicio de su segundo mandato, la alianza hegemónica que sustentaba al menemismo empezó a resquebrajarse. A lo largo de 1997, el aceleramiento de la crisis económica y social empezaba a parecerse a una crisis de hegemonía. En ese contexto, la oposición se organizaba y se preparaba a disputar el poder.

Por último, es necesario reflexionar acerca de los virajes culturales experimentados en el seno de los partidos mayoritarios a lo largo de la etapa. En este sentido, sobre los cambios operados de la cultura política se amalgamaron varios factores que explican la desaparición de diferencias fundamentales entre la UCR y el Partido Justicialista. Ambos partidos han tendido a fusionarse en torno una suerte de “discurso único” que caracteriza en cierto modo a las agrupaciones políticas que Heriberto Muraro

(1991, 1997) ha dado en llamar del tipo “toma todo”. Estos partidos son los que tienden a incorporar en sus programas demandas de lo más variadas, sumamente genéricas y poco originales, y que a su vez tienen la característica de repetirse en diversas agrupaciones políticas que componen ese universo. Esta característica cobra especial importancia a partir de la construcción de la hegemonía menemista y sigue presente a lo largo de la presidencia de Fernando de la Rúa. En cierto modo, podríamos concluir que estos rasgos de carácter político-comunicacional, compartidos por las dos expresiones políticas mayoritarias durante la transición democrática argentina, contribuyeron asimismo a la consolidación del sistema bipartidista que hemos analizado en el apartado anterior.

Del liderazgo democrático al liderazgo carismático, o el difícil camino hacia la hegemonía³

Tanto la consolidación de liderazgo de Alfonsín dentro de su propio partido como la proyección que logró por fuera de la UCR le garantizaron al radicalismo una aplastante victoria en los comicios generales de 1983. El liderazgo democrático alfonsinista se basó concretamente en un discurso con eje en el estado de derecho y la Constitución Nacional. Planteaba una crítica profunda a las corporaciones de tradición autoritaria. Una vez en el gobierno y con el firme propósito de ser fiel al mandato de una sociedad movilizadora y atraída por su liderazgo, Alfonsín se dispuso a cumplir su programa sin que mediara para ello un diagnóstico preciso sobre las condiciones de posibilidad para su puesta en práctica. En ese contexto, el destino del mandamiento social reformista encarado por el alfonsinismo fue sucumbiendo lenta pero progresivamente. Si bien en un comienzo pudo capitalizar a su favor la crisis interna del derrotado peronismo, el triunfo del movimiento conocido como la renovación peronista permitió no solo el desplazamiento de “los mariscales de la derrota” de la dirección del Partido Justicialista sino también la consolidación de una oposición ajustada a las reglas del juego democrático. A partir de ahí, el triunfo del renovado justicialismo en las elecciones legislativas y de gobernadores de 1987 marcó un punto de inflexión en el liderazgo democrático alfonsinista. En ese resultado se condensaron varios factores que dan cuenta del fracaso del intento oficialista de embestir contra el poder corporativo de sindicatos, empresarios y militares, en ese orden.

³ A lo largo de este apartado haremos referencias a diversos aspectos adquiridos por la dinámica política durante el proceso de la transición democrática siguiendo a Vicente Palermo y Marcos Novaro (1996).

Tres fueron entonces los límites que condicionaron el poder de maniobra de Alfonsín desde los inicios de la transición. En primer lugar, el fracaso de la ley de reforma sindical, más conocida con el nombre de ley Mucci, cuya sanción fue trabada en el Senado en marzo de 1984. En segundo término, el ya citado colapso del programa de reactivación económica planteado por el ministro Grinspun en 1985. Finalmente, la crisis militar de Semana Santa en abril de 1987. Podemos decir entonces que la combinación de estos tres elementos influyó de manera decisiva en el fracaso del intento de formación del “tercer movimiento histórico” en tanto continuación superadora de los grandes movimientos populares de la Argentina del siglo XX, y pilar fundamental del liderazgo alfonsinista.

En la construcción del tercer movimiento histórico confluyeron dos de las principales corrientes internas del partido gobernante: la Junta Coordinadora Nacional y el Movimiento de Renovación y Cambio. Ambas corrientes, que se habían aliado incondicionalmente detrás del liderazgo democrático de Alfonsín en los inicios de la transición democrática, no tardaron en fusionarse. Esta fusión, sin embargo, acabó naufragando hacia 1985 en el mismo ejercicio del poder⁴. Desde entonces, producto del incipiente proceso renovador, el rol de la oposición peronista se fue consolidando hasta llegar al demoleedor resultado eleccionario de 1987. A partir de entonces, la nueva imagen democrática del justicialismo empezó a calar hondo en las preferencias del electorado. En ese contexto, y por primera vez en toda su historia, el Partido Justicialista se dispuso a definir las candidaturas para los comicios generales de 1989 en una elección interna que, finalmente, habilitó a Carlos Menem a disputar con éxito la presidencia de la República⁵.

El origen del liderazgo carismático menemista se cristalizó precisamente en el inesperado resultado obtenido por Menem en la elección interna. Desde entonces, gracias a su estilo político personalista y sin deudas ha-

4 Es necesario aclarar que, en los orígenes del alfonsinismo, el estilo político de la Coordinadora contribuyó de manera decisiva a la renovación de la tradición sobre la base de la cual el radicalismo hasta entonces había concebido el ejercicio de la práctica política. Sin embargo, al fragor de la lucha por el poder, los jóvenes líderes de la Junta Coordinadora Nacional (Enrique “Coti” Nosiglia, Marcelo Stubrin, Luis “Changuí” Cáceres, Federico Storani, Jesús Rodríguez y Leopoldo Moreau) comenzaron a diferenciarse de sus aliados del Movimiento de Renovación y Cambio volcándose a la negociación con otras corrientes internas a fin de disputar espacios de poder. Esa disputa fue ejercida tanto en el interior del partido como del gobierno.

5 La interna del justicialismo tuvo lugar el 8 de julio de 1988. En ella se enfrentaron el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, quien contaba con el apoyo de la mayor parte de la dirección partidaria, y el gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Este último había participado inicialmente del Movimiento de Renovación hacia 1985. Sin embargo, frente al nuevo escenario político partidario emergente en el momento de las internas y sin contar con apoyos importantes en el mencionado aparato, Menem optó por tejer una alianza con todos aquellos dirigentes y agrupaciones que habían quedado al margen de la línea renovadora.

cia la cúpula partidaria del justicialismo, se consolidó. Esta característica encontró un marco propicio en el contexto de “gran pánico social” de 1989. En función de ello podemos afirmar que ambos elementos se amalgamaron aquel 14 de mayo otorgándole el triunfo a la fórmula justicialista compuesta por Carlos Menem y Eduardo Duhalde. El liderazgo carismático menemista fue en ese contexto garantía esencial para la ejecución de la política transformadora que requería sin duda una reconstrucción hegemónica.

Portador y vocero de “una política audaz”, el presidente Menem fue diseñando en los primeros tiempos de su mandato una estrategia de construcción hegemónica mediante el empleo del método de ensayo y error. En ese marco, la persistencia de la crisis económica era como una espada de Damocles sobre su cabeza que hasta 1991 lo colocó varias veces al borde del naufragio. Por ello, afirmamos que el tipo de liderazgo carismático encarnado en el presidente Menem fue fundamental para sortear los efectos negativos de la crisis económica mientras seguía buscando el sendero que le permitiera alcanzar la hegemonía.

Fiel a su estilo personalista, se colocó en el rol del político actual y decidido, superador de la vieja política y único garante para el cambio estructural que necesitaba la Argentina en esas circunstancias. A puro pragmatismo, no solo aprovechó la crisis que atravesaba tanto el campo político como su propio partido, sino que la profundizó. Su personalismo resultó fundamental a la hora de acotar el poder de los sindicatos y el margen de maniobra de su propio partido. Asimismo, logró emprender la reforma estructural en condiciones de hegemonía real y con anuencia de una parte importante de la población. En ese contexto el radicalismo tendió a estabilizarse en su piso histórico real tras el boom alfonsinista. Mientras tanto, en el campo de las denominadas “terceras fuerzas políticas” los reacomodamientos se hicieron palpables. A poco de iniciarse el gobierno menemista, la Unión de Centro Democrático, que en 1989 había alcanzado su techo electoral, fue atraída por el menemismo y desde entonces comenzó el proceso de cooptación de sus principales referentes.

En 1991 se produce una ruptura en el interior del gobierno. Un grupo de legisladores liderados por el entonces diputado Carlos “Chacho” Álvarez se separó del bloque de diputados peronistas y constituyeron el denominado “Grupo de los Ocho”. Varios dirigentes renovadores se sumaron a la iniciativa. Para la estructura partidaria, encarnaron una fuerte crítica al rumbo elegido por el gobierno. Esto los acercó a otros partidos con los que confluyeron finalmente en la coalición llamada Frente Grande.

El frente que se constituyó no tardó en convertirse desde entonces en el principal referente de la oposición del gobierno, que terminó finalmente consolidada a partir de su triunfo en las elecciones para convencionales constituyentes que emprenderían en 1994 la reforma de la Constitución Nacional. Ese triunfo del Frente fue logrado en un contexto de gran descrédito para el radicalismo tras la firma del cuestionado Pacto de Olivos. A partir de entonces, la UCR fue desplazada a un lejano tercer lugar en las elecciones de 1995 donde los candidatos del Frepaso, José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez, se alzaron con el segundo puesto con poco más del 29% de los votos. Allí se abrió el debate en torno a la salud del sistema bipartidista. De todos modos, frente al menemismo, logró una suerte de recomposición en la Alianza. En este intento de coalición confluyeron a un tiempo dos elementos fundamentales: por un lado, el prestigio adquirido recientemente por el Frepaso; por otro, la necesidad de lograr una “proyección política nacional” que, en ese momento, sólo el aparato del radicalismo le podía proveer.

La democracia entre la subordinación militar y la lucha política por los derechos humanos⁶

En 1983, el horror de los crímenes del terrorismo de Estado puso en el centro de la escena la cuestión de los derechos humanos. El reclamo por el esclarecimiento de los crímenes del Estado terrorista fue central en las movilizaciones del fin de la dictadura y se convirtió, en cierto sentido, en el aglutinante de diversos reclamos sociales. Lógicamente ocupó un lugar prioritario en la agenda del gobierno de Alfonsín. Desde su ascenso a la presidencia, el proceso abarca tres etapas: 1) la creación de la CONADEP⁷ y la estrategia del autojuzgamiento militar⁸ que se desarrollaron en forma paralela; 2) el juicio a las juntas militares (realizados entre abril y diciembre de 1985) que culminó en la condena de varios de sus miembros, y 3) una etapa de repliegue en la ofensiva gubernamental por las dificultades

6 A lo largo de este apartado haremos referencia a diversos aspectos de la relación existente entre la lucha política por los derechos humanos y la subordinación del poder militar durante la transición democrática tomando como base el trabajo de Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (1995).

7 Fue creada por decisión de Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Integrada por un nutrido grupo de notables, tenía como misión contribuir al esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la vigencia del Estado terrorista que caracterizara la última dictadura militar. A lo largo de 10 meses la citada comisión recibió y recopiló denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante los llamados “años de plomo”. Fue disuelta tras la presentación de su informe al presidente de la República el 2 de septiembre de 1984.

8 Esta estrategia fracasó tanto por las presiones de los organismos defensores de los derechos humanos, que pugnaban por la constitución de una comisión bicameral, como por la propia negativa de los militares a autojuzgarse, emanada del dictamen del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Frente a ello, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal asume la responsabilidad del juicio de las juntas militares.

derivadas de los reiterados episodios de insubordinación militar. Durante ese lapso fueron sancionadas las leyes de Punto Final, que propugnaba la fijación de una fecha tope para la presentación de las causas asociadas a la represión ilegal, y de Obediencia Debida, que permitía establecer distintos niveles de responsabilidad entre los participantes de la represión ilegal. Esta última fue parte de la negociación política por la crisis de Semana Santa en 1987, al cabo de la cual se produjo una ruptura horizontal en la cadena de mandos del Ejército. La ruptura se derivaba del reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el teniente general José Dante Caridi al frente de la comandancia en jefe del arma. Caridi también era miembro del generalato cuestionado por “los carapintadas”, como se denominó a los participantes de este levantamiento. A su vez, la prisión del teniente Aldo Rico –quien había liderado la sublevación de 1987– agudizó la crisis institucional del Ejército. Esta situación presionó sobre el gobierno de Alfonsín quien, antes de abandonar el poder, tuvo que soportar otros dos levantamientos carapintadas. El primero fue en Monte Caseros, Corrientes, en enero de 1988. El segundo fue en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, en diciembre del mismo año. Tras este último el movimiento carapintada se partió dejando lugar al fortalecimiento de la “cúpula militar”, que se consolidó tras protagonizar una represión violenta y ejemplificadora contra el reducido grupo de guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que atacó al cuartel de La Tablada, provincia Buenos Aires, en enero de 1989.

Este sobrevuelo sobre las relaciones entre la lucha política por los derechos humanos y los problemas derivados de la crisis militar apunta a ubicar hacia 1985 el inicio de la desmovilización. Fue al promediar el gobierno radical cuando la “primavera” democrática y participativa de los primeros años posteriores a la dictadura dio paso a una reducción de la confianza y las expectativas de los primeros tiempos. El desencanto se inició con los problemas económicos que terminaron desplazando la cuestión de los derechos humanos del lugar central que venía ocupando en la escena política desde 1982. Sobre una sociedad cada vez más fraccionada y desmovilizada caló hondo la teoría de los dos demonios. El paradigma sobre el que se basó el debate en los inicios de la transición democrática giraba en torno a la oposición del autoritarismo a la democracia. Desde ahí, la sociedad argentina volvió sobre su pasado. Las preguntas por las causas del autoritarismo de la dictadura remitieron al debate sobre la violencia política en los años 70. Las respuestas ensayadas por la teoría de los dos demonios, a nuestro juicio de carácter fuertemente ideológico, sirvie-

ron por un tiempo para enterrar la violencia de “ambos demonios” en el pasado. En ese contexto, la democracia asomaba como la solución de esas contradicciones. La importancia social adquirida por esta teoría echaba así un manto de olvido sobre un tema central de la historia argentina entre 1955 y 1976. Así la violencia como expresión del pasado acabó enterrada en el arcón de la historia. Sin embargo, cuando una violencia de signo diferente reapareció a principios de 1989 expresándose en la continuidad de las insubordinaciones militares, el ataque guerrillero a La Tablada y la serie de enfrentamientos violentos y saqueos en diferentes regiones del país, la opinión pública miró hacia ese pasado que creía enterrado. Desde el prisma de los dos demonios volvió a resurgir el miedo. Frente a la ingobernabilidad, muchos optaron por el cambio encarnado en la figura de Carlos Menem.

Haciendo gala de su pragmatismo, Menem puso manos a la obra para lograr la subordinación del poder militar. En el lapso que media entre la firma del primer y el segundo indulto a los responsables del terrorismo de Estado y representantes guerrilleros⁹, el presidente logró resolver el problema “carapintada”¹⁰, última condición necesaria para la subordinación del poder militar al poder político. Desde entonces, el destino de los principales jefes del movimiento militar iniciado en 1987 se bifurcó. Mientras el ex coronel Mohamed Alí Seineldín fue enviado a prisión por su participación en el último levantamiento, el ex coronel Aldo Rico se lanzó al poco tiempo a la arena política con el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN). Este movimiento, de tradición autoritaria y con base en una mezcla de nacionalismo y populismo, logró crecer como tercera fuerza política hasta 1994. Desde entonces, en virtud de acuerdos alcanzados con el “duhaldismo”, acabó cooptado por la estructura del justicialismo bonaerense.

Sociedad y Estado durante la transición democrática

No caben dudas de que las condiciones objetivas de la crisis del Estado de bienestar en la Argentina venían expresándose con claridad desde mediados de la década de 1970. Sin embargo, la mayor parte de la sociedad se hallaba muy lejos de percibir las en toda su dimensión crítica. En cierto

⁹ El primer indulto presidencial, el 8 de octubre de 1989, favoreció a un nutrido número de procesados y condenados. El segundo indulto, dictado a fines de diciembre del siguiente año, alcanzó a los miembros de las dos primeras juntas militares y a los principales dirigentes de la organización guerrillera Montoneros.

¹⁰ Tras el primer indulto, el Estado Mayor del ejército tomó la decisión de castigar a los jefes carapintadas. Frente a ello, el coronel Mohamed Ali Seineldín inició un nuevo levantamiento en diciembre de 1990, sofocado con éxito por un poder militar que, a partir de ello, con el logro del segundo indulto, se subordinó el poder político.

sentido, sólo a partir de la recuperación democrática los problemas de legitimidad típicos de las sociedades modernas emergieron a la superficie con claridad desnudando la profundidad de la crisis por la que atravesaba el Estado argentino (Barbeito y Lo Vuolo, 1995).

Partiendo de un diagnóstico falaz sobre la crisis económica argentina, el gobierno de Alfonsín avanzó en forma apresurada, dando pasos en falso y sin contemplar el verdadero impacto de los desfases fiscales sobre las políticas públicas. Hasta 1985 la “inercia” que caracterizó su estrategia para la resolución de los conflictos emergentes en la materia descansó sobre las instituciones y las prácticas políticas tradicionales. Desde entonces, el cambio de rumbo iniciado no pudo dar cuenta de sus primeros logros en un contexto en que la oposición política fue poniendo trabas para el cambio. Esta situación fue minando lentamente el tipo de liderazgo democrático encarnado por Alfonsín en los inicios de la transición. En 1989 la crisis hiperinflacionaria acabó fagocitándolo. A partir de allí, las condiciones de posibilidad para la transformación destructiva de las políticas públicas sustentadas en las instituciones de un Estado de bienestar en crisis estaban dadas. En esa situación, sobre la base de un liderazgo carismático, el presidente Menem pudo avanzar sin problemas en las reformas neoliberales.

Una evaluación del impacto de estas reformas sobre las políticas públicas de educación, salud y vivienda, así como sobre el mercado de trabajo, cobra a lo largo de nuestro período de referencia una importancia fundamental. A continuación, pasaremos a considerarlas.

Educación. Si partimos del diagnóstico de crisis del Estado de bienestar en los albores de la transición democrática, son varios los indicadores con los que contamos para evaluar el deterioro de los servicios educativos dependientes del ámbito público. Por un lado, la caída del costo por alumno que, a lo largo de la etapa, se tradujo en una tendencia al equiparamiento del gasto entre los distintos niveles del sistema. Por otro, una discontinuidad en el ciclo lectivo con origen en los conflictos laborales, que acabaron redundando en una tendencia al acortamiento del mismo. Finalmente, el abandono de la inversión en infraestructura y equipamiento que contribuyó, junto con los otros indicadores, a profundizar las desigualdades socioeconómicas dentro de la sociedad argentina. Desde esta perspectiva, tales desigualdades se reflejan tanto en la no incorporación a la escuela de los sectores más pauperizados como en el desgranamiento y la deserción de la que son protagonistas. Asimismo, se traducen en una marcada estratificación de las alternativas escolares que impactan de manera decisiva en

los niveles de rendimiento. Si a esto le sumamos la clara desvinculación existente entre los diversos niveles que componen el sistema educativo, podemos evaluar el impacto negativo que esto genera en el proceso del paso de uno a otro que, entre los sectores de menores ingresos, acaba por traducirse en la tendencia al abandono. Finalmente, dada la importancia que le cabe a la educación en el momento de definir las condiciones de posibilidad de acceso al mercado laboral de los distintos grupos que componen la sociedad, nos encontramos frente a una situación en la que las distorsiones y las inequidades se retroalimentan (Barbeito y Lo Vuolo, 1995).

A lo largo de la etapa alfonsinista los intentos de revalorizar los principios de gratuidad, universalidad y laicismo en el sistema educativo vigentes en la Constitución Nacional fueron una expresión clara de una política tendiente a satisfacer una serie de demandas reprimidas en la materia durante la dictadura. Esto se expresó con claridad en la eliminación de una serie de restricciones institucionales de acceso al sistema, lo que acabó produciendo un importante salto en la matrícula, sobre todo en el nivel de educación superior. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, esto se relaciona con dos tipos de medidas. Por un lado, la posibilidad de incorporación a la universidad de todos aquellos alumnos que habían aprobado sus exámenes de ingreso durante la dictadura pero que habían quedado fuera en virtud del sistema de cupos vigentes. Por otro lado, la implementación del Ciclo Básico Común (CBC), ideado como un mecanismo de ingreso irrestricto de la universidad, cuya función fundamental sería la de eliminar las desigualdades generadas en el nivel de educación media en lo que a conocimiento se refiere. Sin embargo, tanto la rigidez de la oferta con origen en los problemas presupuestarios como la fragmentación institucional del sistema donde convivían intereses contrapuestos dieron por tierra con el intento alfonsinista de lograr una reforma del sistema educativo sobre la base de un consenso democrático. En ese contexto, el Congreso Pedagógico fracasó por la superposición de tres factores: en primer lugar, la falta de participación; en segundo término, fallas en la organización; finalmente, la intransigencia de diferentes intereses sectoriales. Este fracaso no sólo profundizó la crisis del sistema educativo, sino que contribuyó a un mismo tiempo a que se acentuara el deterioro de los servicios junto a la falta de coordinación y de desintegración institucional. En ese marco crítico, el camino para las reformas menemistas quedó allanado. Desde entonces, fue más que claro el avance de los grupos que pretendían controlar la estructura educativa en virtud de sus intereses sectoriales. A

partir de 1989, con la designación al frente de la cartera de educación de diversos representantes de los intereses de la educación privada, se comenzó a avanzar en el desmantelamiento del sistema de educación pública. En ese contexto, se combinaron específicamente tres medidas: por un lado, el ahogo presupuestario; por otro, la transferencia de los establecimientos nacionales a otras jurisdicciones sin que mediase una clara asignación presupuestaria ni una coordinación política al respecto; finalmente, una serie de propuestas de arancelamiento y de restricción del ingreso al sistema de educación superior. Estos factores cobraron toda su fuerza en 1992 a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación.

Salud. Una evaluación de la función que cumplen las políticas sociales en materia de salud posee una relación directa con los objetivos en que se expresan. En tal sentido, no es lo mismo optar por un sistema universal de salud sostenido sobre una prestación primaria básica de acceso universal y gratuito, que elegir un sistema basado en cuerpos autónomos de seguros prepagos. Una brecha separa, asimismo, los sistemas que ponen el énfasis en los aspectos curativos de aquellos que priorizan básicamente la prevención de enfermedades. En los inicios de la transición democrática, mientras el sistema universal de salud se hallaba en crisis, el de cuerpos autónomos de seguros prepagos se encontraba bastante poco desarrollado. En ese contexto, el eje del sistema de salud argentino se basaba más que nada en las obras sociales. Este sistema, básicamente cerrado, se organiza en torno de los sindicatos y debe su financiamiento a un impuesto sobre el salario, cuyo último destinatario acaba siendo el sector privado al que recurren la mayor parte de las obras sociales para contratar los servicios. A lo largo de la historia, su crecimiento heterogéneo mostró notables disparidades, que se expresaron tanto en los niveles de cobertura como en la complejidad de las prestaciones reconocidas. Ambos aspectos redundaron, sin duda, en una clara estratificación dentro del sistema (Barbeito y Lo Vuolo, 1995).

Al comienzo de la gestión alfonsinista, el sistema prevaleciente en materia de salud arrojaba claros indicadores de crisis. Por un lado, se segmentaba en función de la condición económica de la población, factor que dejaba importantes sectores sin cobertura. Por otro lado, presentaba diferencias sustantivas en lo que a la calidad de los servicios se refiere dentro del propio sistema y con relación al nivel de ingreso de las distintas obras sociales. En ese contexto, la baja del gasto se expresaba tanto en el deterioro de la formación científico-técnica de los agentes del sistema como en el

abandono de los enfermos crónicos y de la atención primaria. Asimismo, contribuía a la proletarización del cuerpo médico profesional. En forma paralela, la crisis del sector público reflejaba dramáticamente la caída de la inversión en el área. No obstante, el sector debía afrontar, en forma cada vez más creciente, la demanda derivada de la crisis del sistema prevalente. Frente a esta delicada situación, el proyecto de seguro nacional de salud enviado por el presidente Alfonsín al Congreso Nacional en 1985 fue un intento de resolver una parte importante de estos problemas. Sin embargo, la oposición de distintos grupos de interés dificultó su tratamiento. Sobre el final de su mandato, el proyecto que finalmente se aprobó sufrió modificaciones que alteraron de manera sustantiva su espíritu original. Así, cuando Carlos Menem se hizo cargo de la Presidencia el sistema vigente mantenía las principales características de un ordenamiento fragmentado y meritocrático. Desde entonces, se profundizó la ineficacia del sistema en dos direcciones: por un lado, fue incapaz de responder a las demandas de los sectores con mejor ubicación dentro del mismo; por otro, contribuyó a desandar el camino que el país había alcanzado tanto en el control de enfermedades endémicas como de la mortalidad infantil. Este contexto de deslegitimidad creciente contribuyó aquí también al avance de los intereses privados sobre el sector. Así, en virtud de un largo proceso de capitalización que se estructuró sobre la base de la demanda cautiva de las obras sociales, pudieron hacer efectiva su pretensión de captar a los sectores de mayor ingreso.

Vivienda. A diferencia de las políticas públicas de educación y salud, las políticas ligadas a la vivienda nunca se desarrollaron sobre la base de una lógica de acceso legalmente universal y financiado por rentas generales. El camino asumido por el Estado en la materia se bifurcó en forma progresiva entre el rol asumido por el Banco Hipotecario Nacional y la operatoria fiscal ejecutada desde la administración pública. Cada una de ellas abrevó en diferentes fuentes de financiamiento. Así, mientras el Banco Hipotecario tendió a cubrir a los sectores de ingresos medios con el financiamiento tanto de obras nuevas como de ampliaciones y refacciones, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) se instrumentó mediante la contratación del sector privado para la construcción de viviendas multifamiliares destinada a los sectores de menores ingresos (Barbeito y Lo Vuolo, 1995).

En virtud de la situación objetiva descripta, ambos mecanismos se hallan en crisis en los inicios de la transición democrática. Si a esto le sumamos que históricamente tanto los métodos de selección de beneficiarios

como el tipo y el costo de las construcciones realizadas no contemplaron la atención de los sectores marginales, podemos darnos una idea de la dimensión crítica de la situación heredada. Uno de los principales indicadores en la materia lo constituye el hecho de que para 1990 casi el 7% de la población de los partidos distribuidos en el primero y el segundo anillo del conurbano bonaerense tendió a concentrarse en villas miseria. Esta situación, a lo largo de la etapa, fue mostrando en forma progresiva una tendencia al alza. Según cifras del Censo Nacional de Población de 1991 la tendencia creció hasta abarcar los partidos que conforman el tercer anillo suburbano. Así pues, es posible afirmar que el carácter excluyente de los ajustes económicos se reflejó tanto en la reducción de los programas de vivienda como en la caída de inversión en saneamiento básico. Las condiciones de posibilidad de acceso al crédito privado derivadas del programa estabilizador de 1991 sólo favorecieron a los sectores de ingresos medios y altos. Muchos de ellos contribuyeron en los últimos años al desarrollo de un proceso de construcciones ajustado a la medida de sus necesidades sobre la base de barrios cerrados y *countries* especialmente en la zona norte y, en menor medida, en el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires, que constituyen verdaderas fortalezas emplazadas paradójicamente en el medio de la miseria.

Trabajo. A lo largo de la transición democrática la aplicación de programas neoliberales contribuyó a la profundización de la crisis en el mercado de trabajo. Sus efectos negativos se reflejaron con claridad en el aumento de la tasa de desocupación, que se manifestó con inusual firmeza a partir de 1989. El breve descenso experimentado entre 1991 y 1993 fue simplemente un espejismo. A partir de entonces, la tendencia al alza se puso de manifiesto en forma exponencial. Si a esto le sumamos el número de personas en condición de subocupación, las cifras tienden a duplicarse dramáticamente. Esta situación tuvo un impacto considerable en el sistema de relaciones laborales que acabó por deteriorar paso a paso tanto el poder de negociación de los trabajadores como de sus organizaciones sindicales frente al Estado y a los sectores empresariales.

Esta tendencia no fue más que la profundización de una realidad heredada de la dictadura militar. En consonancia con su política de apertura económica, los militares habían procurado la suspensión de las negociaciones colectivas de trabajo a partir de 1976. El gobierno radical las mantuvo en suspenso hasta 1988 con el objetivo de estabilizar la economía. En

forma paralela, los empresarios alcanzaron a establecer en forma progresiva la negociación por empresa.

A partir del gobierno de Menem, los sectores hegemónicos lograron impulsar reformas que contribuyeron de hecho a la legalización de situaciones con existencia previa en el mercado laboral. Tal fue el caso de la disminución de los costos por despidos, la generalización de los contratos de empleo temporarios, más conocidos como “contratos basura”. La ley de accidentes de trabajo de 1991 y la ley de empleo de 1993 contribuyeron de modo decisivo al proceso de flexibilización de la fuerza de trabajo que el alfonsinismo había intentado ensayar sin éxito durante su gestión (Palomino, 1993). Al respecto, no caben dudas de que una explicación del fracaso alfonsinista debe buscarse en su imposibilidad de encontrar una fórmula de negociación con los sindicatos peronistas. Este fue uno de los tantos puntos en los que Carlos Menem lo superó. A partir de su llegada del gobierno, las posiciones de la dirigencia sindical en torno de sus políticas tendieron a bifurcarse. Así, mientras que en el seno de una CGT cada vez más oficialista comenzaba a distinguirse una corriente disidente interna, encarnada en el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), proclive al viejo estilo vandorista de “golpear y negociar”, de la vereda de enfrente, y en una postura decididamente combativa, el recientemente fundado Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) mantuvo a lo largo de todo el período el estilo combativo que desde sus orígenes lo convirtió sin claudicaciones en uno de los principales referentes de la oposición.

El neoliberalismo menemista y la profundización de la crisis estatal

Ricardo Sidicaro

El agotamiento de un estilo de relación entre el Estado y la sociedad fue planteado en 1989 desde diferentes perspectivas que, si bien no coincidían totalmente, abrieron paso a las reformas estatales iniciadas por el sucesor de Alfonsín. El consenso logrado en la población obvió la discusión de las medidas a adoptar y los portavoces de los principales actores socioeconómicos celebraron el *vox populi, vox Dei*, al que siempre habían rechazado por irracional y populista. Los partidos políticos acompañaron ese clima de ideas, sin expresar mayores convicciones, pues el intervencionismo del estado en lo social y lo económico era parte del sentido común de sus dirigentes y de sus adherentes más comprometidos, que, no está de más recordarlo, cultivaban expectativas de alcanzar puestos y salarios en algún nivel de las tan vilipendiadas administraciones públicas.

Además, muy pronto se hizo notorio que los pequeños partidos que durante años habían hecho de la crítica al Estado su principal propuesta doctrinaria tampoco tenían concepciones claras sobre cómo dar al mercado la primacía pregonada. Las principales corporaciones empresarias festejaron la victoria ideológica, pero en la medida en que sus demandas de menor intervención estatal sólo constituían un programa general y difuso de rechazo a las regulaciones, llegaron a la nueva etapa sin perspectivas definidas. El milagro de la conversión de Menem pareció sorprender a los antiguos pregoneros de las virtudes del mercado. Sin subterfugios, Juan Carlos de Pablo describió la tenue frontera entre la política y la economía “¿Por qué fuimos a la hiper? *Porque creíamos que venía Menem*. En efecto, las finanzas públicas de comienzo de 1989 no eran muy diferentes de las de los años anteriores; pero a medida que las encuestas de opinión ratificaban más y más las chances del candidato justicialista, los argentinos huíamos en igual medida de los australes, lo cual deterioraba más la situación económica y aumentaba entonces las posibilidades de triunfo de Carlos Menem, generando nuevas vueltas de tuerca en la espiral acumulativa” (de Pablo, 1994: 17).

De la identidad peronista tradicional a la gestión neoliberal

Desde su fundación el peronismo se presentó con una fuerza política preocupada por lograr mayor equidad social y, dada sus relaciones con el sindicalismo, se asoció la mejora de la situación social y económica de los sectores asalariados y de la población de menores recursos. Las argumentaciones sobre la sociedad y las soluciones de sus problemas se formularon hasta 1989 a partir del supuesto de la existencia de una división tajante entre los intereses de la mayoría de los integrantes de la población, en su lenguaje el “pueblo” o los trabajadores, que se hallaban enfrentados a minorías económicas, designados como el “capital” o la “oligarquía”, vinculados a los intereses de potencias extranjeras. El recuerdo y los avances en materia de equidad social realizados en su primer diseño de gobierno y las posteriores luchas y movilizaciones por reclamos salariales, le permitió a los peronistas recrear la idea de un adversario social nativo aliado a “empresas o gobiernos foráneos”. Frente a estos enemigos, realizaban convocatorias políticas exitosas para preservar la decisión de sus apoyos estables y conseguir nuevos. El “otro” social, localizado en las cúspides del poder económico, fue considerado instigador y beneficiario de los golpes militares en 1955 y 1976. El antagonista político en el imaginario peronista era el radicalismo, y si bien la beligerancia varió en intensidad de acuerdo a las coyunturas, la UCR fue su competidor electoral permanente.

Para los peronistas, la definición del *nosotros* no se vio alterada durante buena parte de su historia. Se consideraban la expresión del *pueblo* y de la *nación*, y como era evidente que no los apoyaba la totalidad de los votantes, la aritmética electoral estuvo presente en la formación de frentes con otros partidos que podían asegurar el umbral de sufragios para alcanzar las mayorías.

El gobierno de Menem llevó adelante una gran ruptura con la tradición peronista. Para realizar el cambio de posiciones doctrinarias no existieron mayores discusiones públicas en su partido, pero tampoco se registraron en sus filas adhesiones al proyecto de desarticulación de las instituciones del intervencionismo estatal. Las prácticas de los altos funcionarios del gobierno menemista se ajustaron al programa neoliberal, que se encuadran en lo que históricamente era la propuesta del “otro” social. Al respecto, Gerardo Aboy Carles sostiene que “al romper con la política de reforma social e igualación que era uno de los componentes del peronismo, el menemismo acaba con el principio de unidad que había amalgamado los sectores populares en solidaridades colectivas a través de un sistema de alteridades, el enfrentamiento peronismo - antiperonismo” (2001:307).

El abandono de las orientaciones tradicionales fue justificado de maneras distintas por los funcionarios menemistas más destacados, pero la ideología neoliberal, de hecho, careció de voceros con trayectorias partidarias reconocidas. Los gobernadores peronistas provinciales no se mostraron, en general, propensos a cambiar las ideas económicas y sociales del movimiento político al que pertenecían.

El sindicalismo se encontró frente a los dilemas que surgían del proyecto menemista. Por sus bases sociales, por su tradición, por los intereses de sus propias organizaciones, los dirigentes gremiales peronistas se hallaban asociados desde hacía décadas al intervencionismo estatal. La apertura de la economía con el aumento de los índices de desocupación, la desregulación de las relaciones laborales, la precarización del empleo, los denominados contratos “basura”, los retrocesos del poder adquisitivo de los asalariados, las privatizaciones de empresas públicas, y, en general, todo el efecto simbólico que tenían las pérdidas de conquistas logradas durante sus anteriores gestiones peronistas, generaron creciente malestar social y el debilitamiento de los sindicatos.

La disminución del número de sindicalistas en las representaciones parlamentarias del peronismo fue uno de los indicadores más elocuentes de su retroceso y de la desconfianza con la que se seguía su evolución desde el gobierno (Gutiérrez, 2001). La posición gremial contribuyó a aplazar la sanción o el tratamiento de leyes cuya finalidad era profundizar la desregulación laboral o hacerle perder el manejo de las obras sociales. En esas actitudes de rechazo la política oficial debieron coincidir con muchos legisladores cuyas orientaciones eran erráticas, y que evitaban rupturas públicas y permanentes con el gobierno y se mantenían en la disciplina de sus bloques parlamentarios (Jones, 2001). Puede afirmarse que con muchos sindicalistas ocurrió algo similar y eludieron los costos de oponerse al neoliberalismo, postergando sus críticas públicas para futuras coyunturas.

Al terminar la década presidencial de Menem las críticas del denominado “modelo” eran más habituales y claras en el partido oficialista que en los candidatos de la coalición opositora. Luego de la derrota de 1999, se les abrió a todos los dirigentes peronistas la posibilidad de diferenciarse de modo público del proyecto de liberalización y de desregulación de la economía y de las relaciones laborales que habían, por las más diferentes causas, llevado el gobierno. Si la preocupación por la carrera política fue para muchos un factor clave para moderar las objeciones al gobierno de Menem, esa meta la buscaron luego criticando las consecuencias del “modelo”.

La década menemista: neoliberalismo y globalización

Primero con ciertas ambigüedades y luego con total decisión, el gobierno presidido por Menem asumió como propio el programa neoliberal. La apertura de la economía, la desregulación y las privatizaciones de las empresas públicas, fueron los ejes de la etapa inicial que incluye la hiperinflación de 1990. En la transición nos faltaron medidas tan pocos liberales como la confiscación de ahorros bancarios privados contra la entrega de bonos estatales. Pero esos “percances” no impidieron que el proyecto se estabilizara y ganara adhesiones y esperanzas anunciando la superación de los viejos problemas. Al establecer las nuevas reglas del juego se omitía recordar que la gran mayoría de los grandes empresarios participantes había adquirido un sistema de predisposiciones o hábitos en las etapas anteriores. Las contradicciones previsibles entre las burocracias, con sus formas de actuar propias del “viejo” Estado y sus condiciones para aplicar las políticas neoliberales, un tema que genera buenas preguntas en las Ciencias Sociales (Evans, 1996) tampoco entraban en las reflexiones sobre la transición al neoliberalismo.

De los distintos aspectos relacionados con la puesta en práctica del proyecto neoliberal sólo destacaremos algunos para ejemplificar efectos producidos por las falencias del Estado. La apertura importadora de la economía al comercio mundial, en apariencia la más simple de todas las iniciativas, se encontró muy pronto con las consecuencias de la crisis estatal. El deficiente funcionamiento del control aduanero impedía el cobro estricto de los impuestos y tasas que debían aplicarse a las importaciones que entraban en competencia con la producción nacional. Sin capacidades técnicas frente a las acciones de *dumping* internacional o las más prosaicas subfacturaciones; la globalización comercial quedó, en buena medida, librada a una dinámica burocrática ajena a los objetivos modernizadores. Los industriales perjudicados protestaron reiteradamente frente a las anomalías de la integración al comercio mundial sin las garantías mínimas de aparatos estatales eficientes (Rial, 2001: 89-99). Denuncias realizadas en el período mostraron que el tema aduanero no era sólo de fallas en los aforos y tarifas sino que la desorganización estatal daba lugar a la violación sistemática de las leyes y a la generalización de prácticas de corrupción.

La desregulación de la economía fue el resultado de un proceso en el que operaban simultáneamente muchos actores y que no podría entenderse como el producto de las opciones tomadas exclusiva y libremente en el seno del gobierno. La lucha por la captura de decisiones públicas, componente siempre presente en las políticas de los estados modernos,

fue en el caso analizado más directa y abierta en virtud del escaso margen de negociación del gobierno que confesaba sus necesidades de regular y privatizar aduciendo urgencias “de caja” o para atraer más rápidamente la confianza de los inversores externos.

La apertura de la economía conoció así excepciones a favor de determinadas actividades con actores en mejor posición para influir en defensa de sus intereses, fuesen grandes empresarios de la época anterior o bien nuevos inversionistas. El pragmatismo con el que se trató en algunas oportunidades de justificar las excepciones fue, en realidad, una manera de reconocer las consecuencias de la desigual relación de fuerzas entre un gobierno que manejaba un Estado cada vez más débil y actores socioeconómicos cuya fortalecida acumulación de capital les daba mayor capacidad de imponer decisiones. Esto no significa que se cristalizaran las posiciones de los poderes económicos anteriores al neoliberalismo y que no se registraran modificaciones. Pero, para nuestro tema, es importante destacar que el aparato estatal en crisis que abrió la economía siguió atravesado, en un primer período, por los intereses a los que antes favorecía con contratos y compras, y, que con el neoliberalismo adquirían las empresas públicas o conseguían re-regulaciones (Aspiazu, Gutman y Vispo, 1999; Etchemendy, 2001). Agreguemos que durante el curso de la década que nos ocupa la trama compleja de los intereses de los actores socioeconómicos predominantes conoce un desplazamiento en beneficio de los inversionistas extranjeros, situación que colocó al gobierno ante interlocutores aún con más poder de negociación.

Las privatizaciones de empresas públicas suprimieron mecanismos estatales para orientar actividades económicas y sociales, mientras que los nuevos propietarios, o concesionarios, se convirtieron en poderosos interlocutores de un Estado que casi carecía de instrumentos burocráticos para hacer cumplir las disposiciones que debían regular sus acciones. El caso de Aerolíneas Argentinas fue una demostración clara de la impotencia estatal ante los actores que impusieron sus intereses en el marco del neoliberalismo. En general, la gestión de las empresas públicas había sido criticada por los excesivos costos de sus producciones o servicios, sin que se debatiera seriamente si un Estado que no conseguía hacerlas operar de manera adecuada se encontraría luego de privatizarlas en condiciones para supervisar sus desempeños. La imagen estatal, deteriorada frente a la opinión de buena parte de la sociedad, se encontró afectada en la etapa neoliberal por las múltiples denuncias sobre las irregularidades de los procedimientos que acompañaron las sesiones al sector privado.

Los hechos de corrupción, tal como lo revelan distintos estudios corporativos internacionales, suelen ser frecuentes en las privatizaciones de empresas públicas. Sobre esto sostiene Susan Rose Ackerman: “el proceso de transferir activos a la propiedad privada está plagado de oportunidades de corrupción. Muchos alicientes a la corrupción son comparables a los que surgen en el otorgamiento de contratos y concesiones. En lugar de sobornar a una empresa estatal para obtener contratos y un trato favorable, los que presentan opciones de compra de una empresa pública pueden sobornar a los funcionarios en altos niveles gubernamentales o a los que forman parte de la actividad privatizadora” (2001: 51). En la Argentina, el gobierno menemista cedió a numerosos requerimientos de los compradores al elaborar los pliegos de las licitaciones y eso dejó como consecuencia una asimetría a favor de los compradores acentuada, luego con el mayor debilitamiento estatal. No fue sorprendente que en los entes públicos creados para supervisar a las nuevas empresas se reprodujeran las tradicionales simbiosis con los propietarios o representantes de los negocios privados, situación coherente con la crisis del Estado.

En la medida en que las empresas públicas realizaban más actividades que la producción de bienes o servicios, su privatización dejó al Estado con menos instrumentos para responder a demandas sociales cuyos perfiles no necesariamente eran nítidos. En la mayoría de los razonamientos sobre las mencionadas empresas públicas se habían destacado poco sus aportes a la integración regional, al poblamiento de zonas distantes de los centros urbanos y administrativos, a la promoción del desarrollo cultural, a la creación de empleo en ciudades que dependían básicamente de sus actividades, etcétera. Además, se había desconocido la importancia de las tarifas o precios diferenciales en tanto mecanismos de estímulo o de equidad, manejados para regular o impulsar aspectos económicos o sociales. Esas actividades conexas no se desplegaban de un modo planificado y, naturalmente, no eran evaluadas en términos contables o mercantiles por las empresas. Las privatizaciones quitaron así más mecanismos de acción estatal (Palma y Marquez, 1993; Paura, 1995; Peñalba, 2000).

Entre las manifestaciones de la crisis de las capacidades estatales, la evasión impositiva era desde hacía mucho tiempo considerada como uno de los problemas más graves del país. El tema suele ser materia de críticas éticas pero es una de las mejores ilustraciones de incapacidad estatal y de la debilidad para sancionar las transgresiones a las leyes. El subsecretario de finanzas públicas del gobierno nacional describió en noviembre de 1990 las dificultades operativas de la entidad encargada de las recaudaciones

tributarias diciendo que “del total de los 1200 agentes de la Dirección General Impositiva el 30% se encuentra permanentemente ausente, otro 30% es incapaz y un 20% más no es gente de confianza” (Ámbito Financiero, 8 de noviembre de 1990: página 5). La crisis de las finanzas públicas se mantuvo sin solución durante toda la experiencia del gobierno menemista y se agudizó en la medida en que los importantes capitales extranjeros que llegaron al país manejaron mecanismos más complejos para evadir las obligaciones tributarias.

A comienzos de 1991, con la designación del ministro Domingo Cavallo, la política económica neoliberal se completó con la convertibilidad en la relación *uno a uno del peso con el dólar*, mecanismo que resultó muy eficaz para detener la desvalorización ya crónica de la moneda nacional. En la base de lo que se conoció como “el modelo” se encontraba la continuación del endeudamiento externo, por la vía de la obtención de préstamos y la colocación de títulos emitidos por el Estado en los mercados financieros nacionales e internacionales. La privatización de las empresas públicas sirvió, también, para atraer inversiones extranjeras que se sumaron al flujo general de entrada de capitales que mejoraron algunos indicadores económicos de nivel macro, cuya ponderación positiva se acrecentó en comparación con los periodos precedentes. Para el gobierno menemista, recurrir al endeudamiento externo para emitir moneda nacional y mantener el respaldo en dólares no pareció plantear un problema, pues se consideraba que con la estabilidad alcanzada se abriría un crecimiento sostenido de la economía y así la deuda y sus intereses perderían importancia en términos relativos.

Los sistemas de convertibilidad como el adoptado en 1991 anulan, prácticamente, las capacidades de los estados para contrarrestar con sus políticas monetarias las situaciones o las acciones perjudiciales para los equilibrios de sus economías. Detrás de sus aspectos técnicos simples y de su falta de teorías sofisticadas, la convertibilidad era un problema eminentemente político en el que se resumía la renuncia estatal en el plano de la regulación de la moneda y que, como ocurre con toda relación de fuerza, inevitablemente implicó ceder potestades a otros actores. Lo que para el “hombre de la calle” era el alivio y el fin de la inflación, con sus ventajas inmediatas de retorno del crédito por el consumo y estabilidad de los ahorros, tenía un aspecto no percibido sin un abordaje situado en un nivel más abstracto y cuyas consecuencias escapaban en las visiones inmediatas y cotidianas.

El fetiche de la apariencia de la moneda como “cosa” se manifestó también en los primeros años de convertibilidad en los razonamientos de muchos analistas de la oposición que no formularon las más elementales preguntas sobre el significado del “logro”. La aceptación acrítica se justifica, por cierto, en quienes pensaban desde el mundo de los negocios y la obtención de ganancias privadas. El control del valor de la moneda fue exaltado como un éxito por el neoliberalismo y considerado el comienzo de la inserción en el primer mundo. La gobernabilidad de la economía, incluso según una parte de la oposición, era un logro permanente que no se iba a confundir en las confrontaciones electorales. Las consecuencias de la convertibilidad se presentaron años más tarde, cuando se hizo notoria su fragilidad y su carácter de mecanismo coyuntural. Como sostiene Rubén Lo Vuolo: “la autoridad pública que va perdiendo su moneda no gobierna, sino que se vuelve un mero administrador que usa su fuerza legal para garantizar la gobernabilidad que exige el poder económico para expandirse. La ciudadanía que debe cancelar sus créditos y deudas recíprocos en una sociedad que no tiene moneda soberana, queda sometida al arbitrio de los poderes económicos” (2001: 88).

La vulnerabilidad del régimen de convertibilidad de Menem Cavallo fue observada desde una óptica práctica por quienes preveían los límites del endeudamiento externo sobre el que se basaba el “modelo”. En el año 1993, en un estudio del Consejo Académico de la Unión Industrial Argentina se aseveraba que: “en las primeras etapas (que pueden durar años) de los planes de estabilización con el tipo de cambio fijo no se percibe la escasez sino la abundancia de divisas. Pero esta situación se mantiene únicamente mientras los capitales siguen ingresando, para lo cual la tasa de interés debe mantenerse más alta que la internacional. En otros términos, puede decirse que hay un estrangulamiento externo encubierto por las altas tasas de interés que se haría explícito si la tasa de interés descendiese a nivel internacional y el flujo de capitales se redujera o -en situación extrema- se revirtiera. A medida que avanza, un plan de estabilización del tipo del que estamos analizando suele entrar en una segunda etapa. Las dudas sobre la marcha y las cuentas fiscales y, ante todo, la distorsión de los precios relativos, con el creciente déficit comercial, hacen que se perciba un riesgo cambiario cada vez mayor. Cuando se llega a esta situación, cualquier turbulencia económica política, con independencia de su importancia real, puede llevar a una corrida, o sea, una demanda repentina de dólares” (1999:98)-

Durante la década de 1990 el crecimiento de la deuda externa contribuyó a licuar aún más la capacidad del Estado para tomar decisiones distintas de las impuestas por los poderosos factores que operaban sobre la realidad nacional. La relación entre las políticas de endeudamiento externo y la pérdida de autonomía de las decisiones de los estados nacionales es un tópico que ocupa numerosas páginas en los estudios del mundo en nuestros días. Lo mismo ocurre con las previsibles crisis o colapsos derivados de estas situaciones de creciente dependencia de los capitales financieros, cuya volatilidad no es un accidente sino un rasgo de su naturaleza. De allí que variables tales como el desconocimiento o la ignorancia sobre el tema de los movimientos de capitales y sus consecuencias no pueden ser consideradas como relevantes para explicar la supuesta falta de previsiones a la hora de reflexionar sobre el final lógico y empíricamente anunciado desde mucho antes que suceda.

La vinculación entre las capacidades estatales y las deudas externas fue sintetizada por Guillermo de la Deheza: “Los estados con deudas muy elevadas tienen, además, hipotecada una de sus funciones económicas esenciales: la de hacer frente a los sitios económicos aumentando el gasto público en fases de recesión, para evitarla o reducirla, y gastando menos o recaudando más en épocas de expansión, para evitar que el crecimiento sea excesivo y que su tasa supere la del crecimiento potencial, generando inflación y pérdida de competitividad” (Deheza, 2000: 116). El citado autor señala, también, que los servicios de las crecientes deudas públicas obligan a destinar a intereses sumas cada vez mayores, que se han independizado de las necesidades de los ciclos económicos internos. Volviendo a los antes mencionados conceptos de Weber sobre el lugar de los endeudamientos externos en las relaciones de fuerza entre naciones con desigual poder político económico, puede observarse que las necesidades de los acreedores pasan a determinar los límites de las iniciativas de los países deudores, y, en consecuencia, las decisiones de estos últimos deben “ajustarse” a los dictados y conveniencia de los primeros.

Como ya lo señalamos, los intereses empresarios que impulsaron la instalación del modelo neoliberal lo hicieron como una prolongación de sus antiguas luchas contra el Estado intervencionista y en una situación en la que no eran claras las innovaciones que acompañarían a la nueva inserción internacional. La apertura y la desregulación de la economía crearon un escenario nuevo en el que quedaron sobrepasados los potenciales desempeños de buena parte de los grandes empresarios locales. Los mercados desprotegidos, las privatizaciones de los servicios públicos, el flujo no

controlado del capital financiero y el retiro del aparato estatal, permitieron que actuarán directamente en el país poderosos inversionistas mundiales, respaldados por sus propios estados, y esto redujo los antiguos y casi incuestionados poderes de los grandes propietarios argentinos. Las modificaciones estarían todavía en curso, pero las ventas de empresas nacionales a capitales extranjeros y la implementación de nuevas filiales de ese origen (Basualdo, 1999) muestran la conformación de un novedoso mapa del poder económico, cuyos efectos sobre las relaciones políticas son fácilmente perceptibles.

En un análisis acerca de los efectos de los procesos de globalización sobre las relaciones políticas argentinas (Sidicaro, 2000), desarrollamos una caracterización de las transformaciones producidas en la conformación de los actores socioeconómicos predominantes de la década de 1990 que nos parece pertinente reproducir. En ese texto decíamos: “Zygmunt Bauman propone una aproximación válida para pensar al capital que circula libremente por el mundo, que, por otra parte, ilustra con referencias que resultan familiar con el pasado de nuestro país”. Dice Bauman: “La nueva libertad del capital evoca la de los terratenientes absentistas de antaño, tristemente célebres por descuidar las necesidades de las poblaciones que los alimentaban y por el rencor que ello causaba. El único interés que tenía el terrateniente absentista en su tierra era llevarse el *producto excedente*. Sin duda, existe una similitud, pero la comparación no hace justicia a la liberación de preocupaciones y de responsabilidades de la que goza el capital móvil de fines del siglo XX y que el terrateniente absentista jamás pudo adquirir” (Bauman, 1999:18). La imagen histórica propuesta por Bauman es pertinente al mostrar la exterioridad de los nuevos actores internos/internacionales.

En el caso argentino es interesante destacar cómo esa exterioridad produce efectos sobre la estructura política: 1) Los *empresarios absentistas* no tienen mayores razones para hacerse representar por las diligencias políticas o corporativas vernáculas puesto que sus vínculos con los embajadores-lobbistas o con los gobiernos extranjeros resultan más rápidos y eficaces para negociar con las autoridades del débil Estado local; 2) El libre mercado global permite que los *empresarios absentistas* jueguen con gran asimetría con las condiciones de permanencia en el país, puesto que han convertido su movilidad en un elemento de presión política y en la medida que los gobiernos ceden a sus demandas y crean disconformidad en las poblaciones perjudicadas, se hallan en condiciones más débiles para la siguiente ronda de negociaciones; 3) para los *empresarios absentistas* la con-

tinuidad jurídica es un factor importante para mantener los compromisos que consiguieron, en momentos favorables, de las autoridades estatales. En esos reclamos el pedido de eliminación de la corrupción administrativa (problemas que suelen poner en primer plano en los textos neoinstitucionalistas del Banco Mundial) se encuentran, seguramente, fundados en la convicción de que los grandes empresarios de capital nacional tienen una experiencia prolongada en relacionarse con los manejos imprevistos, jurídicos y “tangenciales” de los gobiernos argentinos. De todos modos, el caso IBM/Banco Nación o los desempeños de los embajadores-lobbistas revelan que las ventajas diferenciales de los empresarios locales no tienen el *know-how* patentado.

Los terratenientes absentistas del pasado argentino eran, en comparación con los empresarios absentistas de la globalización, actores mucho mejor vinculados con el mundo político y con la producción de su legitimidad. Esto era así, no solo por la condición obvia de su nacionalidad, sino, además, por el carácter estable de sus inversiones y por los roles que desempeñaban en otras esferas de la vida social. Algunos partidos políticos buscaban, a nivel municipal y provincial, el apoyo de dichos terratenientes, que deparaba fondos para las campañas proselitistas y, además, un cierto reconocimiento de honorabilidad social transferido desde su posición de élite aristocrática. En la medida en que integraban sistemas familiares extensos y con anclajes tradicionales, ellos y sus círculos de íntimos participaban de actividades filantrópicas, asociativas y culturales que permitían visualizarlos como mucho más que hombres de fortuna. Con el tiempo algunos de sus apellidos dieron la denominación a pueblos, plazas, hospitales, museos, estaciones ferroviarias, colecciones pictóricas, y con la confusión propia de dinero y distinción social, siguen todavía presentes en quienes añoran el esplendor de un pasado argentino que, sin embargo, hoy ya es hasta criticado en los libros escolares.

Los empresarios absentistas que llegan con el libre mercado global se convierten en participantes precarios o inestables de las relaciones de poder argentinas. Salvando las diferencias de escala, al contrario de lo que ocurría con los terratenientes absentistas en sus relaciones con las autoridades municipales o provinciales, el vínculo de los empresarios absentistas con quienes ocupan posiciones de poder político está cargado de sospechas y de presunciones de que tratan de conseguir negocios de dudosa legalidad. Los terratenientes mejoraron la legitimidad política y social de los dirigentes locales. En cambio, los empresarios absentistas deterioran

objetivamente ante la opinión pública a los gobernantes, a los partidos mayoritarios y a las instituciones representativas.

También en la apertura económica neoliberal llegaron los capitales financieros que buscaban altos rendimientos e introducían la incertidumbre propia de su volatilidad. Esos capitales, mucho más que los empresarios absentistas que realizan inversiones directas comparativamente más estables en actividades productivas o de servicios, se convierten en el barómetro de la confianza de los mercados en la acción de las autoridades nacionales. El “voto de los mercados” ha convertido los capitales especulativos, la mayor parte de los casos manejados desde el exterior, en poderosos interlocutores de las dirigencias gubernamentales. De una manera mucho más directa e inmediata que los organismos como el FMI o el Banco Mundial, esos capitales especulativos hacen el seguimiento diario de la política nacional: los riesgos de ceder a los reclamos sociales, de los déficits fiscales, de las medidas que podrían contradecir las orientaciones neoliberales, etcétera, son “castigados con el voto de los mercados”. Las altas dirigencias políticas, al atender esas señales consagran y oficializan la existencia de un oscuro parlamento, ajeno a todas las normas constitucionales. Pero la convicción compartida por dichas dirigencias parece ser que desoír a esos “votantes” desembocaría en el caos económico. La legitimidad de la clase política en su conjunto y de las instituciones democráticas se debilita ante tal reconocimiento casi explícito de la existencia de poderes ajenos al orden legal formal.

La Argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación

Gastón Ángel Varesi

Introducción

El presente artículo analiza las características principales del modelo de acumulación posconvertibilidad en Argentina, 2002-2009, partiendo de su configuración inicial y reflexionando acerca de las tensiones suscitadas en el contexto de crisis mundial.

Con este objetivo realizaremos una aproximación al marco conceptual en el que se asienta el trabajo. A continuación, daremos cuenta de algunos factores que signaron la caída del modelo de Convertibilidad (1991-2001). Luego, señalaremos las políticas fundacionales del modelo actual, observando las variaciones en la correlación de fuerzas entre distintas fracciones de clases en un nivel estructural. Haremos énfasis en el papel del Estado en la gestión de un sistema de transferencias de ingresos entre las fracciones de clase, buscando constituir un nuevo momento conciliatorio. Una vez establecidos los principales aspectos de la dinámica socioeconómica posconvertibilidad, incorporaremos la dimensión de la crisis mundial, observando las políticas anticrisis aplicadas en el ámbito nacional y extraeremos las conclusiones pertinentes.

1. Desafíos conceptuales: modelo de acumulación

Nuestro problema de investigación exige el análisis de tres núcleos conceptuales: modelo de acumulación, políticas económicas y relaciones de fuerzas entre fracciones de clase. La articulación de dichos núcleos se realizará con el *modelo de acumulación* como unidad de análisis principal, en tanto las políticas económicas y las fracciones de clase serán tomadas como subunidades que serán tratadas para explicar el modelo de acumulación.

Un primer desafío presente en nuestro estudio se refiere a la ausencia de una conceptualización explícita y sistemática del *modelo de acumulación* como concepto. Aunque éste se emplea en numerosos trabajos, su vaguedad y polisemia son notorias. Esbozaremos una definición del mismo, mostrando su íntima relación con los otros dos núcleos conceptuales bá-

1 Sociólogo por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Coordinador del equipo de investigación sobre estructura de clase, modelo de acumulación y políticas económicas de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.

sicos. En este camino, parece importante rescatar la definición de Basualdo (2007) sobre un concepto emparentado: *régimen o patrón de acumulación dominante*. Según Basualdo, “se trata de una categoría muy abarcativa que exhibe un significativo nivel de abstracción. No obstante, es necesario analizarlo porque se trata de un instrumento analítico sumamente trascendente al permitir diferenciar los distintos comportamientos económicos que se suceden en el tiempo. Esto es posible debido a que este concepto alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las *variables económicas*, vinculado a una definida *estructura económica*, una peculiar *forma de Estado* y las *luchas entre los bloques sociales existentes*” (Basualdo, 2007: 6, énfasis en el original). Notamos que en esta aproximación aparecen dimensiones relevantes propias de nuestro problema: el Estado, al que nos acercaremos mediante el análisis de la política económica; la lucha entre bloques sociales y la estructura económica, que trataremos a partir del análisis de la correlación de fuerzas entre fracciones de clase en un nivel estructural, según la propuesta teórica gramsciana². Basualdo señala dos factores principales para determinar un régimen de acumulación: “Es preciso indicar que las *variables económicas* para poder constatar la existencia de un patrón de acumulación de capital deben cumplir dos requisitos: la *regularidad* en su evolución y la existencia de un *orden de prelación* entre ellas” (Basualdo, 2007: 6, énfasis en el original). Los criterios de regularidad y orden de prelación (o sea, la relación jerárquica según su relevancia explicativa) entre las variables serán retomados también como guías para el análisis del modelo de acumulación.

Una vez establecidas las similitudes, señalaremos las diferencias constitutivas entre ambos conceptos. En primer lugar, hay una diferencia de escala temporal clave: mientras que el concepto de régimen de acumulación abarca largos períodos (por ejemplo, patrón de acumulación neoliberal, 1976-2001), el modelo de acumulación remite a recortes temporales más breves (modelo de Convertibilidad, 1991-2001). Esto conduce a una segunda distinción: es posible hallar distintos modelos dentro de un mismo régimen de acumulación. Si en un nivel de mayor generalidad es posible encontrar similitudes entre modelos como para pensarlos como parte de un mismo régimen, en un nivel de mayor especificidad veremos diferencias en el plano de la estructura económica, en las políticas y las relaciones entre fracciones de clase. Entonces podemos pensar el modelo de acumulación como un subperíodo del régimen de acumulación. De este modo, el concepto *modelo de acumulación* desciende a niveles de abstracción para

2 Véase Gramsci, 2003.

interpelar el *proceso de acumulación* en un periodo más acotado donde regularidad y prelación pueden ser observadas con mayor especificidad. Además, encontramos una tercera diferencia: el recorte espacial. Mientras que un régimen de acumulación puede cubrir un amplio conjunto de formaciones sociales, el modelo de acumulación se acotará a una sola formación social (en este caso, la Argentina).

2. El fin del modelo de Convertibilidad

El modelo de acumulación actual tuvo su origen en el contexto de crisis integral que marcó el fin del modelo de Convertibilidad. Este modelo había encarnado la forma más acabada de aplicación de las reformas neoliberales como profundización de la ofensiva del capital efectivizada a partir del golpe de Estado de 1976. Estuvo caracterizado por la desregulación, la privatización masiva de empresas públicas y la precarización laboral. Asimismo, poseía cualidades que lo hacían intrínsecamente deuda-dependiente debido a la necesidad de divisas para mantener la paridad \$1-US \$1 del tipo de cambio fijo por ley. El endeudamiento se vinculó al escaso dinamismo de las exportaciones, con apertura comercial y moneda sobrevaluada, y un constante déficit (entre otras causas, por el impacto producido por la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones). Así pues, la vulnerabilidad externa, evidenciada en el desequilibrio de la cuenta corriente, se vio agudizada por la profundización del proceso de fuga de capitales, ligado principalmente a mecanismos de valorización fija.

Ante los crecientes signos de agotamiento del modelo de Convertibilidad, se fue generando una fractura de intereses entre distintos sectores del capital que buscaban mejorar su capacidad de apropiación del excedente con base en dos propuestas divergentes de salida (Basualdo, 2001; Castellani y Szkolnik, 2005; Schorr y Wainer, 2005). Dichas propuestas se relacionaban con las diferentes posiciones³ ocupadas en la estructura y con las estrategias de acumulación de las distintas fracciones. Por un lado, comenzaron a aglutinarse diversos agentes económicos, principalmente ligados al capital productivo y exportador, promoviendo la devaluación para mejorar su competitividad e inserción en el mercado mundial, así como valorizar las ingentes masas de capitales que se mantenían fugadas en el extranjero. Otro núcleo de agentes, vinculados al capital fijo y a las empresas de servicios privatizadas, exigieron la dolarización para mante-

3 La noción de posición será utilizada en dos dimensiones: a) en relación con el lugar ocupado en la estructura económica; y b) en términos de relación de fuerzas (como posición relativa). La articulación de ambas dimensiones nos permitirá pensar la distribución de “cargas” y “beneficios” del modelo de acumulación.

ner el valor de sus activos en dólares y garantizar la perpetuación de los beneficios de la convertibilidad de la moneda, como el envío de remesas dolarizadas al exterior. La capacidad de la propuesta devaluacionista para construir alianzas más amplias (Castellani y Szkolnik, 2005), las limitaciones objetivas del proyecto dolarizador y el desenvolvimiento efectivo de las variables económicas favorecieron la salida devaluacionista.

3. La configuración del modelo Posconvertibilidad

3.1 Las políticas fundacionales

El modelo Posconvertibilidad comenzó a configurarse a partir de seis políticas fundacionales: 1) la devaluación; 2) la aplicación de retenciones a la exportación; 3) la pesificación asimétrica de deuda privada; 4) el salvataje al sector financiero; 5) el default; y 6) el congelamiento de tarifas. Estas políticas instauraron nuevas reglas de juego, delimitando variaciones en el campo de acción de los agentes económicos, los cuales se relacionaron conflictivamente con las mismas y entre sí, en la disputa del excedente económico. Estas políticas fundacionales fueron dando lugar a un nuevo modelo de acumulación, que presentó rupturas y continuidades respecto del modelo de la década de 1990, y se vincularon con cambios particulares en la correlación de fuerzas, definiendo un reparto diferencial de cargas y beneficios. Las transformaciones que señalaremos permiten pensar que comenzó a gestarse una experiencia de *régimen neodesarrollista* en la región.

3.2 La centralidad del capital productivo-exportador

La devaluación generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo que dio lugar a la dinamización de las exportaciones y, a través de su gravamen mediante retenciones, a la recomposición de las cuentas públicas. La recuperación económica conllevó un aumento de la producción manufacturera, impulsada por la dinámica exportadora e incluyendo un fenómeno periférico de sustitución de importaciones producto de la protección generada por la modificación del tipo de cambio. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real, y junto con el congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los elevados precios de los *commodities* y el nuevo tipo de cambio, permitió a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica. Los gobiernos desarrollaron una política activa para mantener el tipo de cambio competitivo y alentar esta vía de expansión económica a partir del crecimiento de las exportaciones, que aumentaron un 121% entre 2002 y 2007.

Las principales actividades exportadoras se encuentran en el complejo de oleaginosas, explicado casi totalmente por las actividades sojeras, que participan de 23,3% del valor total exportado (2005). Si al complejo de oleaginosas se le suman el cerealero, el bovino y el frutihortícola, el conjunto de estas actividades representa 41,7% del valor total exportado. El segundo complejo exportador es el petrolero-petroquímico, con un 19,1% de las exportaciones, centrado en la venta de petróleo y gas. De este modo, observamos que el núcleo dinámico de la economía argentina está representado por agentes productivos orientados a la exportación, basada en la explotación de los recursos naturales, marcando la consolidación de una estructura productiva regresiva, sustentada en la producción de productos primarios y de manufacturas con escaso valor agregado. También la industria automotriz continuó con una fuerte presencia, representando 8,6% de las exportaciones, en el marco de las políticas de promoción a dicho sector que continuaron desde la década de 1990, aunque sus principales actividades están vinculadas a la ensambladura de los automotores y no a la producción de partes de alto valor agregado.

Otro factor a destacar: 52% de las ventas al exterior correspondió a la suma de manufacturas de origen agropecuario y productos primarios que son, asimismo, bienes de consumo masivo de la población. Esto repercutió desfavorablemente en el nivel de inflación⁴ y, por ende, en las condiciones de vida de los sectores populares⁵.

También debemos señalar que, como en el modelo anterior, continuó un perfil altamente concentrado del sector exportador. Así pues, sólo las 25 primeras empresas líderes en exportación explican 62,9% del valor total exportado (Schorr y Wainer, 2005). El dinamismo y concentración de estos agentes nos permiten pensar en una fracción productivo-exportadora del capital como núcleo dinámico del modelo Posconvertibilidad, que tiende a presentar niveles de rentabilidad y ventas superiores al resto de los sectores de la economía. La denominación productivo-exportadora de esta fracción no refiere a que sea únicamente exportadora, sino a que en la configuración del modelo Posconvertibilidad, el impulso que ha cobrado esta orientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que, aunado al superávit fiscal, favorecido mediante

4 Es notoria la tendencia del empresariado a dolarizar el precio de estos productos para equipararlos con los precios de exportación, constituyendo uno de los factores principales del proceso inflacionario que socava el salario real en la posconvertibilidad.

5 Si bien la soja no es un producto de consumo masivo de la población, su crecimiento por encima de los otros cultivos destinados a la alimentación restringe las tierras destinadas a los mismos. Además, el auge sojero ha impulsado aumentos en el precio de la tierra, incrementando los costos para todos los cultivos.

retenciones a las exportaciones, configuran los dos pilares de estabilidad del modelo.

Estos agentes también fueron beneficiados por la pesificación asimétrica de deuda privada, mecanismo establecido durante el gobierno de E. Duhalde (2002-2003) para socializar las deudas del capital. Esta política implicó que los bancos debieran devolver los depósitos en dólares a \$1,40 por cada US \$1, mientras que los deudores con la banca local vieron pesificadas sus deudas en dólares a \$1 por US \$1. Cuando el lobby empresarial logró forzar al gobierno a derogar el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas (US \$100.000), ésta se convirtió en un mecanismo de licuación masiva de las deudas del capital productivo y las privatizadas con la banca local.

En este contexto, el gobierno dispuso un plan de salvataje al sector financiero, destinado a compensar a dicha fracción del capital y a la banca pública por las consecuencias de la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica, y que fueron cubiertas con emisión de nueva deuda pública por un monto total de US \$20.379 millones.

Estas políticas fortalecieron a las principales empresas industriales y agropecuarias, así como a algunas privatizadas, agravando la concentración económica. En términos generales, la concentración económica puede advertirse en el hecho de que las ventas de las 200 empresas más importantes, la cúpula empresarial, que en 1997 representaban 31,6% del PIB, en 2005 se elevaron a 51,3%. Asimismo, es evidente una concentración dentro de la concentración, ya que las primeras 10 empresas de la cúpula crecen y acumulan a ritmos muy superiores al resto (Lozano, Rameri y Raffo, 2007). En el agro tuvo lugar un triple proceso de concentración, cuyas raíces se encuentran en transformaciones técnicas y tecnológicas de largo plazo: 1) Concentración estructural de la tierra, donde sólo 4,2% de las explotaciones agropecuarias (que poseen más de 2500 hectáreas) acapara 62,8% de las hectáreas totales. 2) Concentración del capital, presente tanto en el desdoblamiento creciente entre propietarios (convertidos en rentistas por el aumento de la escala de producción) y contratistas (propietarios de las maquinarias, con o sin tierra), a la que se suma la concentración del capital en la industrialización de granos, controlada en un 80% por sólo seis empresas. 3) Concentración de la organización y gestión del proceso productivo mediante grandes empresas agropecuario-financieras que utilizan la estrategia de armar pools de siembra.

La estructura económica argentina posee un alto grado de concentración y extranjerización, que permite cuestionar la idea de burguesía nacio-

nal, presente tanto en los discursos de los gobiernos de la posconvertibilidad como en los de los grupos que más concentran el capital productivo, para quienes esa burguesía podría establecer una alianza virtuosa con los trabajadores. De las 500 mayores empresas, el 90% de las utilidades se concentra en aquellas que poseen más de 50% de capital extranjero. Ello no implica la desaparición del capital local, sino su subordinación a las lógicas transnacionalizadas de acumulación y al liderazgo de empresas de envergadura global. Las empresas extranjeras no sólo han recompuesto sus ganancias, sino que superan ampliamente las obtenidas en promedio durante el modelo anterior, y a pesar de ello es muy poco lo que dejan en el país⁶. Resulta difícil imaginar una “burguesía nacional” independiente, mercado-internista, “aliada” con la clase trabajadora, cuando sus intereses se encuentran fuertemente transnacionalizados e incluso su composición está extranjerizada.

Por otra parte, la orientación exportadora del capital productivo, lejos de encontrar en el salario un factor fundamental (como consumo en el mercado interno) para la realización del capital, aparece como un costo para la empresa, que busca reducirlo para ganar rentabilidad. Esto puede observarse en el hecho de que una de las claves de la competitividad y las ganancias empresariales en la posconvertibilidad se encuentra en que, en un contexto de aumento de la productividad laboral, la limitada evolución del salario real generó una fuerte reducción del costo laboral: salarios bajos en pesos aún resultan mucho más bajos en dólares, constituyendo un factor de competitividad internacional.

Políticas de ingreso hacia las clases subalternas

El momento de máximo deterioro del tejido social se experimentó en 2002 con los efectos del estallido inflacionario que se perpetuó con aumentos que afectaron principalmente, por la estructura exportadora, los componentes de la canasta básica. Como señalan Costa, Kicillof y Nahón: “la inflación registrada (del 45%) bastó para reducir los ingresos reales de los trabajadores en un tercio en el periodo 2001-2003” (2004: 83), a lo que se sumó la explosión de los índices de desocupación, pobreza e indigencia. En este contexto, los gobiernos de N. Kirchner (2003-2007) y de C. Fernández de Kirchner (desde diciembre 2007) han desplegado determi-

⁶ “Aún hacia 2004, en un contexto de apreciable recuperación de la economía y con una renta de la IED que resultó un 55% superior al promedio observado en la década del 90, las ETs remitieron utilidades por un monto mayor al obtenido en dicho año, y fue sólo en 2005, y con una renta que superó en un 120% al promedio de los 90 a pesar de la pérdida de valor del peso, que las utilidades reinvertidas cambiaron su signo: las ETs dejaron en el país el 9% de la renta obtenida” (Sacroisky, 2006: 41).

nadas acciones tendientes a apuntalar los ingresos mínimos de las clases subalternas y aumentar los salarios reales de modo más significativo en los sectores más dinámicos de la economía. Para lograrlo, se han establecido cuatro mecanismos: a) aumento del salario mínimo; b) impulso a los convenios colectivos; c) aumento y extensión de las jubilaciones mínimas; y d) algunos acuerdos de precios para limitar la inflación.

Sin embargo, el impacto y alcance de estas medidas sobre la clase trabajadora ha sido dispar. Puede percibirse una fractura correspondiente a los distintos tipos de trabajo asalariado. Por un lado, los trabajadores del sector privado, registrados y bajo convenio colectivo, han conseguido aumentos equivalentes o superiores al índice inflacionario, aunque sólo alcanzan al 14,7% de la fuerza laboral (Gambina et al., 2006). Por otro lado, se encuentra la masa de trabajadores informales, cercana al 40%, a los que se les suman los trabajadores estatales, cuyos salarios quedaron sepultados por la inflación y su nivel de vida se deterioró en relación con 2001.

Por otra parte, el perfil más productivo del modelo ha tenido un impacto positivo sobre el empleo, reduciendo significativamente la desocupación: de 23,3% en 2002 a 7,3% en el trimestre 2007-IV. Pese a ello, no se han producido avances significativos en la distribución del ingreso. En materia de distribución funcional, aunque los trabajadores mejoraron sus salarios en relación con 2002, en términos generales quedaron por debajo de su participación de 2001, presentando además una creciente fragmentación salarial.

Se gestó así un modelo de capitalismo “normalizado” que genera inclusión mediante el descenso de la desocupación y mantiene una estructura salarial que garantiza elevadas ganancias al capital concentrado, al mismo tiempo que pone un piso salarial recomponiendo márgenes de legitimidad. A esto se le agrega la recuperación del poder adquisitivo de una minoría de asalariados y el consenso proveniente de la recuperación del consumo. El nuevo modelo ha mostrado capacidad de impulsar el crecimiento del PIB y de proveer niveles de vida relativamente similares a los del modelo de la Convertibilidad, pero vale recordar que incluso en sus mejores momentos ambos modelos representan la consolidación de una Argentina desigual, con una clase trabajadora fragmentada por la dispersión salarial y sus distintas formas de inserción (o no) al mercado laboral.

Deuda pública y capital financiero

Las políticas vinculadas a la deuda pública tuvieron un claro impacto en las relaciones de clase, en tanto una parte considerable de los bonos

en default estaban en poder de los conglomerados financieros que habían visto perjudicadas sus posiciones relativas por la salida devaluacionista y pesificadora y que habían comenzado a ser compensados en 2002 mediante la emisión de nueva deuda.

La salida del default⁷ concretada con el canje de 2005 presentó una quita final del 43,4% sobre el total canjeado. Uno de los elementos más novedosos del canje son las Unidades Ligadas al PIB, cupones que, en las condiciones de crecimiento económico reciente, produjeron ganancias que se multiplicaron año tras año⁸. El segundo elemento relevante es que cerca de 47% de la deuda se encuentra pesificada e indexada a la inflación⁹. La indexación de deuda a la inflación debe ser entendida como una medida que garantiza al capital financiero no perder más posiciones respecto del capital productivo, principal beneficiario del ciclo inflacionario. Al mismo tiempo, representa una doble extracción a las clases subalternas: el traspaso de recursos que implica la inflación y la carga interminable de la deuda pública financiada por una estructura tributaria regresiva.

Aun con la importante quita del canje, queda un calendario de pagos con desembolsos anuales hasta por US \$20.000 millones. La magnitud del endeudamiento es tal que ya en 2007, apenas dos años antes del canje, con los recursos del superávit el Estado únicamente pudo afrontar poco más de un tercio de los pagos, y tuvo que endeudarse con el solo fin de pagar la deuda. El canje y la continuidad del ciclo de endeudamiento representan la cristalización de una nueva transferencia masiva de ingresos de asalariados a capitalistas, ya que recompone las relaciones en la clase dominante a costa del conjunto de la sociedad. Incluso, finalizado el canje, la deuda quedó por encima de los valores de 2001, y continúa creciendo.

Los recursos fiscales destinados a la deuda superan la suma del presupuesto para salud, educación, vivienda y agua potable, es decir, el gasto social que define la calidad de vida de los sectores populares (Lucita, 2005). Los primeros gobiernos de la Posconvertibilidad mantuvieron el ajuste en el gasto primario real¹⁰, derivando estos recursos hacia el pago de deuda.

7 El análisis detallado del enfoque expresado sobre deuda pública puede verse en Varesi, 2008. El default no había afectado a la deuda con organismos financieros internacionales. Éstos fueron asumidos como acreedores privilegiados llegando al cancelamiento por adelantado de la deuda con el FMI.

8 El Estado debió pagar, en materia de las Unidades Ligadas al PIB, \$1242 millones adicionales de deuda en 2006, que se duplicarían en 2007, alcanzando los \$2450 millones.

9 El gobierno mantiene intervenido al INDEC con el fin de manipular el índice de inflación y, de este modo, limitar el impacto de la deuda. Esto tiene consecuencias en la construcción de los indicadores sociales.

10 Según el Ministerio de Economía, el gasto primario real promedio del período 2002-2006 representa \$44.745 millones, comportando un descenso del 15% del período recesivo 1999-2001, de \$52.165 promedio.

Estructura impositiva

Otro aspecto donde las acciones estatales no han mostrado avances significativos es en materia de estructura impositiva. El IVA, impuesto de naturaleza regresiva, explica más de 30% de la recaudación. Es seguido por el impuesto de Ganancias, que hasta la reforma de 2007 afectaba a amplios sectores de trabajadores. Apenas en cuarto lugar, luego del tributo de Seguridad Social, aparecen las retenciones (principal insumo del tributo de Derechos al comercio exterior), que representan un 13% de la recaudación. Este impuesto marca una novedad: por un lado, busca desdoblarse los precios del mercado externo e interno procurando limitar la inflación que afecta principalmente a las clases subalternas; por otro lado, se grava la fracción más dinámica del capital (productivo-exportador), para derivar riqueza, por medio de deuda al capital financiero. Representa un intento de construir gobernabilidad a partir de la compensación de distintos intereses de clase. Por una parte, las retenciones, limitando el proceso inflacionario, acompañan las medidas de apuntalamiento del salario. Por la otra, las retenciones incrementan el superávit primario que será destinado al pago de deuda y que acompañan a otras acciones: tanto las compensaciones a los bancos (en 2002) como la salida del default, que incluye cupones atados al crecimiento y bonos en pesos indexados a la inflación. También debemos señalar que las retenciones serían un factor de creciente diferenciación al interior de la fracción productivo-exportadora, entre quienes aparecen gravados por ellas y quienes quedan exentos y muchas veces son beneficiarios de otras transferencias como subsidios o beneficios impositivos.

Estrategia estatal heterogénea y empresas privatizadas

El fin de la Convertibilidad perjudicó las posiciones relativas de la mayoría de las empresas privatizadas¹¹. Si en 2002 se establecieron las herramientas legales iniciando el congelamiento y renegociación de tarifas, durante el gobierno de N. Kirchner se desplegó una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales diferenciadas: renegociación, reestatización y creación empresarial. Esta estrategia perseguía tres objetivos: 1) dismantlar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevan adelante en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); 2) evitar un “tarifazo”, limitando la inflación y buscando mantener el nuevo esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables; y 3) aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas.

11 Una ampliación de este tema puede ser leída en Varesi, 2009.

Para las renegociaciones, el gobierno ha utilizado la prórroga de los principales contenidos de la Ley de Emergencia Pública que dispuso el congelamiento tarifario y la revisión de contratos y tarifas. Las renegociaciones tendieron a presentar aumentos de entre 15% y 30% (por ejemplo, Edesur, Edenor y Gas Natural Ban); muchos se dirigieron principalmente a los grandes consumidores, y aunque evitaron el tarifazo directo, impactaron en la población por la transferencia parcial del aumento de costos a precios. Si bien en todos los casos el acuerdo implicó el retiro de las demandas del CIADI, a las privatizadas no se les exigieron las inversiones incumplidas.

Las reestatizaciones fueron realizadas por fuera de las figuras legales para empresas estatales, evitando así una serie de controles. Se formaron sociedades anónimas, consignadas bajo la Ley núm. 19.550 que regula y tipifica las sociedades comerciales, con mayoría accionaria estatal. Esto sucedió con el Correo Argentino, AySA, el espacio radioeléctrico, y hubo reestatizaciones parciales como Aeropuertos y el Ferrocarril San Martín. Esta acción estatal parece una clara ruptura con el paradigma de gestión de la década de 1990.

La tercera variante fue la creación empresarial por parte del Estado. Éste fue el caso de Energía Argentina S. A. (Enarsa), creada como parte de la política energética del gobierno para incidir en esta área clave. Sin embargo, Enarsa representa ciertos aspectos de continuidad con las políticas de los años 90, ya que se ha convertido en una herramienta de cuño estatal para la penetración de las corporaciones a la explotación de la cuenca marítima, último reducto de reserva petrolera sin privatizar. Además, ofrece beneficios impositivos para promover, de forma conjunta, la explotación y exploración, tarea incumplida por las empresas privadas del sector que han generado un “saqueo” del recurso (reducción de 60% y 68% de las reservas de petróleo y gas, respectivamente, desde su privatización). Al mismo tiempo, Enarsa permitió recuperar la participación estatal en el sector energético promoviendo también planes de acción junto con otras petroleras estatales latinoamericanas como medio de integración.

Los gobiernos de la Posconvertibilidad, aunque han asumido una postura de mayor financiación frente a las privatizadas, no han propuesto un plan integral de recuperación de los recursos estratégicos. En la actualidad, las privatizadas ocupan una posición subordinada respecto de la década de 1990, época en que representaban sólo 13% de las empresas de la cúpula empresarial, pero explicaban aproximadamente 57% de las ganancias totales de la misma (Azpiazu y Basualdo, 2004). Si bien en el modelo actual

las empresas de servicios públicos privatizadas (a diferencia de las privatizadas productivo-exportadoras) han perdido posiciones al interior de la cúpula empresarial, se ha desplegado una política de subsidios “compensatorios” que alcanzaron los \$6700 millones anuales para el sector transporte y \$9230 millones para el sector energético en 2007.

Conclusiones preliminares

Observamos que en el período 2002-2007 se configuró un nuevo modelo, que procura saldar la crisis de 2001, en el que el Estado emerge como un actor fundamental en la movilización de recursos a través de diversos mecanismos de transferencias. Estos mecanismos, enlazados con los cambios en la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones de clase, buscaron gestar un nuevo momento conciliatorio en la administración de la fase expansiva del ciclo económico. El perfil productivo-exportador del modelo, las nuevas modalidades de intervención estatal, el conjunto de rupturas en materia de variables y políticas económicas, junto con otras como el impulso de la obra pública en infraestructura, sugieren la gestación de un nuevo régimen de acumulación de carácter neodesarrollista.

Crisis mundial y políticas anticrisis

El advenimiento de la crisis mundial: periodización e impactos

En este contexto comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la crisis mundial. Ésta puede ser pensada, en el largo plazo, como corolario del neoliberalismo (Féiz, 2009), producto de las transformaciones estructurales que caracterizaron la ofensiva mundial del capital sobre las clases subalternas a partir de la precarización laboral, la contracción salarial y los procesos privatizadores en el marco de la desregulación y liberalización económica. Estas dinámicas de acumulación condujeron al sobredimensionamiento de las actividades financieras especulativas (Amín, 2008), al tiempo que generaron una crisis de sobreproducción y subconsumo (Borón, 2009). En el mediano plazo, se conjugaron la profundización del endeudamiento público y privado en los EEUU y el impulso de “políticas de la burbuja económica” (Brenner, 2008) junto con el surgimiento de nuevas resistencias y gobiernos alternativos en América Latina, generando trabas a las planificaciones del centro, como en el caso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Gambina, 2009). En el corto plazo, aunque el estallido de la burbuja financiera en los EE.UU. fue el detonador de la crisis, ésta evidencia tensiones más profundas del capitalismo, imponiendo un panorama recesivo a escala mundial que no trasluce sólo una

crisis de dimensiones económicas, sino que se articula con dimensiones energéticas, alimentarias y ecológicas, que hacen pensar en una verdadera crisis de la civilización.

El modelo Posconvertibilidad había emergido en la Argentina en el contexto de las luchas enmarcadas en aquel mediano plazo de la crisis mundial y surgió como respuesta condicionada de normalización capitalista en medio de una profunda crisis integral a escala nacional. Expresa rupturas y continuidades respecto del modelo anterior, el más característico del régimen neoliberal, promoviendo una experiencia neodesarrollista en la región.

La crisis mundial alcanzó a la Argentina en una etapa en que mostraba cinco años de crecimiento a tasas cercanas a 9%. Esta crisis cuenta con la singularidad de que se gestó en los países centrales y fue en los primeros donde se propagó; por el peso de sus economías en el contexto de mundialización del capital, terminó por afectar al conjunto de las economías nacionales, en distinta medida según las particularidades de los modelos de acumulación y su grado de apertura y vinculación a las economías centrales. En lo que respecta a la Argentina, podemos identificar dos mecanismos de propagación principales: el impacto en materia de comercio exterior, ligado a la caída del comercio mundial y los precios de los commodities, y el ajuste en los planes de producción de las empresas.

Según un informe de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP): “Como sucedió en el mundo entero, las exportaciones argentinas descendieron. En el primer trimestre de 2009 se redujeron un 26% respecto del mismo período de 2008” (FISYP, 2009: 4), con fuerte contracción en productos primarios. Se produjo una circunstancia importante para el modelo: “el crecimiento continuo de las exportaciones, desde la devaluación, se quiebra en el tercer trimestre de 2008” (FISYP, 2009: 5). Esta dinámica exportadora se relacionó, junto con la caída de demanda externa en términos de cantidades, con la fuerte vinculación a los vaivenes del precio de los commodities: éste se desplomó desde julio de 2008 hasta febrero de 2009, cuando el índice general de precios de commodities quedó por debajo de su valor de 2005, aunque a partir de ahí pareciera comenzar a revertirse la tendencia¹². El mantenimiento de la reestructuración productiva regresiva y la apertura económica tornaron a la economía argentina subordinada al precio internacional de los commodities, marcando el papel dependiente de su inserción internacional. Como señalamos, el crecimiento de la fracción productivo-exportadora del capital ha tenido

¹² Datos INDEC tomados del FMI.

cardinal importancia en el desarrollo del modelo, en cuanto ha habilitado un considerable superávit comercial y cuyo gravamen a través de retenciones a las exportaciones favoreció la consecución del superávit fiscal. Ambos superávits conforman los dos pilares de estabilidad del modelo, por lo que la contracción del superávit comercial podría provocar tanto la restricción de divisas como un debilitamiento de las cuentas financieras, ambas de relevancia para el sostenimiento del sistema de transferencias de ingresos. Un dato significativo es la disminución del superávit comercial, que según el IEF-CTA¹³, en enero de 2009 “se redujo un 27% respecto al año anterior, por efecto de la caída del volumen de exportaciones (-35.8%), que fue compensada por una mayor caída del volumen de importaciones (-38.4%)” (Lozano, 2009: 6). Esta situación comenzó a revertirse desde abril de 2009, acompasando la variación del precio de los commodities.

El segundo mecanismo refiere al ajuste de planes productivos por parte de las empresas. Este factor podría afectar en dos aspectos fundamentales: a) caída en la inversión; y b) incremento de fuga de capitales; y junto con el deterioro del comercio exterior conllevarían a: c) desaceleración del crecimiento y retracción industrial; y d) aumento del desempleo.

La desaceleración económica se plasmó en la variación anual del PIB, que de 6,9% en el trimestre 2008-III se retrotrajo a 4,1% en el trimestre siguiente, y cayó hasta el 2% en el trimestre 2009-I. Esto se relacionó principalmente con la caída en la producción de bienes cuya variación anual pasó de 3,9%, a -0,7% y alcanzó el -3,2%, respectivamente, para los trimestres mencionados. Este descenso de la producción de bienes tiene su correlato en la industria. El Estimado Mensual Industrial, reflejo de la evolución del sector industrial, muestra que entre septiembre de 2008 y marzo de 2009 la actividad industrial cayó un 6% (FISYP, 2009). En este marco: “Las industrias más afectadas son particularmente las que explicaron y motorizaron el crecimiento de la industria en los años precedentes. Es el caso de la Industria Automotriz, la Industria Textil y la Industria Metal Mecánica Básica” (FISYP, 2009: 6).

Si tenemos en cuenta que, en la posconvertibilidad, la industria se transformó en un importante generador de empleo hasta colocarse como un factor de inclusión y legitimidad del modelo, su contracción no puede dejar de debilitar este papel. Además, la crisis afectó a la construcción, otro dinámico sector empleador; ésta creció entre 2003-2007 a un 22,4% anual pero en 2008 se desaceleró, sólo creció 3%. Como principal impacto, ya en 2007 se frena la creación de nuevos puestos de trabajo, cortando una

tendencia ininterrumpida desde 2003, y en 2008 comienza a elevarse el desempleo hasta 8,8% en el trimestre 2009-II.

La Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) también se contrajo: de representar 23% del PIB en el trimestre 2008-I pasó a 19,1% en el trimestre en 2009-I, momento en que se produjo el pico más fuerte de reducción de la variación anual de las inversiones desde 2002: un -14,2%. Más allá de la coyuntura, podemos observar una tendencia de más largo plazo de desaceleración de la IBIF, ya que su variación interanual se reduce incesantemente desde 2003, mostrando una tendencia a la “huelga de inversiones” que no emerge en la crisis, sino que se profundiza con ésta: 2003: 38,2%; 2004: 34,4%; 2005: 22,7%; 2006: 18,2%; 2007: 13,6%, 2008: 9%, exhibiendo ya valores negativos en su último trimestre. Este factor expresa otra vía de desgaste del modelo Posconvertibilidad, ya que sus políticas tendientes a la normalización capitalista no han logrado promover niveles de inversión privada que permitan prever el sostenimiento a largo plazo del modelo. Si el modelo Posconvertibilidad aparece como una salida hegemónica para el capital en su conjunto, la caída de las inversiones expresa una merma paulatina de su adhesión al mismo.

Otro factor que ilustra la disminución de confianza y apoyo por parte del capital hacia el modelo en el contexto de crisis puede visualizarse en el crecimiento de la fuga de capitales. El IEF-CTA señala que en 2008 ésta alcanzó los US \$23.098 millones, implicando que “la fuga de capitales prácticamente triplicó a la del año anterior” (Lozano, 2009: 5).

El plan anticrisis: políticas e impactos

En este contexto, el gobierno comenzó a desarrollar un extenso plan anticrisis, en el que se destacan tres componentes. El primero comprende acciones estatales que no son presentadas por el gobierno como políticas específicamente anticrisis, pero desempeñan un papel singular en el desarrollo y supervivencia del modelo y tienden a establecer modificaciones en la correlación de fuerzas entre las fracciones de clases; los otros dos componentes son expresados oficialmente como parte del plan anticrisis y constan, por un lado, de un conjunto de políticas orientadas hacia el capital y, por otro, de un paquete de medidas sociales dirigidas específicamente hacia las clases subalternas. Los tres conjuntos de acciones estuvieron encaminados a mantener los pilares de estabilidad del modelo y a suavizar el impacto de la crisis mundial sobre el crecimiento del PIB y el empleo.

Una primera acción que procuró fortalecer las cuentas y moderar el proceso inflacionario fue la Resolución 125, de marzo de 2008, que apli-

13 Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos.

caba un aumento de las retenciones a los principales productos del agro con base en un esquema móvil, cuyos precios internacionales se habían duplicado en un corto plazo, y afectaba en mayor medida a la soja. Este hecho marcó un hito de carácter político en la era posconvertibilidad, ya que fue confrontado contundentemente por las patronales agropecuarias, dando lugar a un conflicto con altos grados de movilización, cortes de ruta y desabastecimiento, que se prolongó hasta la derrota de la 125 en el Parlamento, a mediados de julio del mismo año. Este evento mostró el grado de acumulación de fuerzas realizado por este sector de la fracción productivo-exportadora, anclado en el triple proceso de concentración previamente mencionado, y que fue generando un entrelazamiento de intereses al interior del sector y un creciente poder social que lo llevó no sólo a confrontar con un gobierno característico del modelo que les garantizó ganancias históricas, sino a derrotarlo en la arena política ejerciendo un duro golpe a su capacidad de generar adhesión.

A esto se sumó también la creciente presión de las corporaciones industriales por incrementar la devaluación. El gobierno entonces pondría fin a la relativa estabilidad cambiaria en términos nominales que había rondado los \$3 por dólar, aumentando gradualmente hasta llegar a \$3.83 en agosto de 2009. Con esta acción procuró mantener la competitividad internacional del tipo de cambio para contrarrestar el efecto negativo que la crisis mundial estaba ejerciendo sobre las exportaciones.

Un momento fundamental fue la estatización de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). La creación de las AFJP en la década de 1990 estableció un sistema jubilatorio mixto, donde el capital financiero usufructuaba los fondos de los trabajadores cobrando altas comisiones y provocaba gran parte del déficit fiscal de dicha época, en tanto el Estado dejaba de percibir aportaciones pero seguía pagando jubilaciones. En este contexto, las AFJP se transformaron en acreedores primordiales del Estado, cobrando altas tasas de interés, al punto de que más de 50% de sus fondos estaban invertidos en bonos de deuda pública. Ante el advenimiento de la crisis, los fondos jubilatorios invertidos por las AFJP padecieron una fuerte depreciación, argumento que empleó el gobierno para realizar su estatización. Con esta acción, el Estado transfirió fondos acumulados por \$97.000 millones y recibiría aportaciones anuales calculadas entre \$12.000 y 15.000 millones. Podemos suponer que uno de los objetivos principales de esta medida era fortalecer las cuentas fiscales con el fin de hacer frente a los pagos de la deuda pública que para 2009 aumentarían a US \$20.000 millones. Esta acción estatal fue clave

para mantener el superávit fiscal, uno de los pilares del modelo, ya que en enero de 2009 el superávit primario se redujo en un 40% respecto del mismo mes del año anterior, y sin la aportación adicional de los fondos jubilatorios transferidos al Estado hubiera resultado deficitario. Además, varias medidas anticrisis serían financiadas a partir de los fondos manejados por Anses¹⁴. Pero esta acción también marca un nuevo cambio en la correlación de fuerzas, en tanto los conglomerados financieros serían expropiados de un millonario negocio que habían usufructuado desde la ola de privatizaciones de los 90.

Otro elemento dentro de este primer componente de medidas es el tarifazo. Si antes señalamos que las empresas de servicios privatizadas habían experimentado una considerable disminución de sus rentabilidades, la habilitación de aumentos tarifarios de relevancia, principalmente en materia de transporte, luz, agua y gas, constituyó un nuevo momento compensatorio. En el caso del transporte público, el 1 de enero de 2008 se habilitaron aumentos de un 20% promedio, afectando a trenes, subtes y colectivos. El argumento oficial consistió en que se reducirían los subsidios en \$600 millones; sin embargo, en ese año terminaron aumentándolos en \$3.150 millones. Respecto del gas, en 2008 se habilitaron aumentos de tarifas escalonados que alcanzaron hasta un 400%, con el fin de fijar un fondo para importar gas y realizar obras. Si bien las nuevas tarifas permitieron reducir en un 17% los subsidios al sector energético (gas y electricidad), en el primer semestre de este año comparado con el mismo periodo de 2008, siguió trasladándose a los usuarios la falta de inversión de las empresas. Por su parte, la luz presentó aumentos escalonados de hasta un 200%¹⁵.

Según datos publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el monto de créditos destinados a subsidios en 2009 fue de \$32.700 millones, lo que representó una retracción de 5% con respecto al total de créditos aprobados en 2008. Esto marca un cambio en las acciones estatales, en tanto, la partida de subsidios venía multiplicándose año tras año. En este sentido, se restringió la transferencia directa de recursos estatales, pero se otorgaron aumentos tarifarios que los suplantaban.

14 Administración Nacional de Seguridad Social, controla los fondos del sistema de jubilaciones y pensiones.

15 Según el sindicato del sector, Fetera: "El gobierno nacional invierte más de 15.000 millones de pesos anuales para sostener, en definitiva, las ganancias y las políticas de las empresas energéticas, casi todas extranjeras y exportadoras además de las rentas que obtienen; sin resolver problemas como el de la falta de abastecimiento de gas natural a la mitad de los habitantes argentinos, el de la construcción de generadores con combustibles más baratos o la reducción sustancial del precio interno de los hidrocarburos, que encarece enormemente el valor final del kilowatt" (Fetera, 2009).

Las transferencias directas de recursos estatales al capital fueron complementadas con transferencias indirectas, mediante exenciones impositivas que cobraron forma en leyes de promoción de inversiones. Éste es el caso de la Ley de Promoción de Inversiones 26.360 de 2008, que nos introduce en el núcleo de medidas oficiales como parte del plan anticrisis, orientadas a dar respuestas a las demandas del capital. Esta ley mantiene continuidad con los regímenes anteriores (desde 2004) y promueve la compra de bienes de capital y el desarrollo de infraestructura, reduciendo aranceles de importación y otorgando beneficios impositivos. Los fondos involucrados alcanzan los \$1000 millones anuales, más \$200 millones destinados exclusivamente a Pymes. Sin embargo, Ortiz y Schorr (2009) señalan que estos regímenes de inversión han profundizado la concentración económica, promoviendo una estructura industrial muy sesgada hacia la producción de commodities y la “armadura automotriz” e impidiendo contrarrestar la desintegración industrial de la década de 1990. Según los autores: “se trató de una fenomenal transferencia de recursos públicos hacia Aluar, Techint, Aceitera General Deheza, Repsol-YPF y las terminales automotrices, entre otros capitales oligopólicos; es decir, hacia empresas y conglomerados económicos que conforman el núcleo de los grandes ganadores del “modelo de dólar alto” y, como tales, seguramente hubieran realizado las inversiones” (Ortiz y Schorr 2009: 6).

El plan anticrisis también incluyó un fondo de \$13.200 millones para incentivar el consumo de sectores de ingresos medios y altos a través de créditos para la compra de autos cero kilómetro, utilitarios, camiones y electrodomésticos, así como para prefinanciar exportaciones y capital de trabajo para la industria y el sector agropecuario.

Dentro del grupo de medidas orientadas al capital, se encuentra el blanqueo de capitales. Éste procuró contrarrestar la presión de la fuga de capitales buscando la declaración de los fondos de los residentes locales en el exterior y su inversión en la economía argentina. Para lograrlo se propusieron descuentos tributarios, de modo que quienes participaron en esta medida pagaron entre 1% y 8%, en vez del 35% del impuesto a las Ganancias, según distintas opciones que van desde la inversión productiva hasta la mera declaración del fondo.

Otra medida consistió en una amplia moratoria impositiva que condonó parte de la deuda a pagar y suspendió las acciones penales ya iniciadas contra los evasores. Además, ofreció bajas tasas de interés y un plazo de pago de hasta 120 meses. Esta acción apuntó a que el Estado recaudara en

el corto plazo el 6% de las deudas, como pago necesario para incorporarse al régimen de regularización de impuestos.

Dentro del vasto plan anticrisis, algunas medidas se orientaron a mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora mediante incentivos al capital. Una medida en este sentido implicó que los patrones que registraron o rectificaron la remuneración real o la fecha real de inicio de sus trabajadores, hasta 10 inclusive, obtuvieran la liberación de las infracciones, multas y sanciones. Otra, empalmada con la moratoria tributaria, proporcionó beneficios a quienes regularizaron las aportaciones previsionales de sus trabajadores.

Una acción que, aunque fue inaugurada antes de la crisis se profundizó durante la misma y que procura mantener el nivel de empleo a través del subsidio al capital, es el Programa de Recuperación Productiva (Repro). El programa otorga a empresas en crisis un subsidio mensual por trabajador de hasta \$600, de fondos del ANSES, para completar el salario. El beneficio se da sólo una vez por empresa y hasta por 12 meses. El programa se multiplicó: de 448 establecimientos en 2008 a unos 1492 en junio de 2009, con un alcance creciente: de 22.846 trabajadores a 84.628 en las fechas respectivas, casi cuadruplicando sus fondos. Destinado principalmente a la industria, el financiamiento mostró un sesgo tendiente a la concentración económica, ya que cerca de 41% del total se orientó a grandes empresas con más de 300 asalariados, aunque éstas sólo representaban 3,8% de los establecimientos.

Un capítulo importante del plan fue la obra pública. En diciembre de 2008 el gobierno anunció un masivo plan de obra pública por \$111.000 millones, con la finalidad de generar empleo y hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico. El Plan Obras para Todos los Argentinos previó la distribución de los fondos en tres tipos de emprendimientos: obras de infraestructura vial y de mejoramiento del hábitat social (60% de los fondos), y proyectos para mejorar y ampliar los sectores de energía eléctrica, gas natural y el transporte público de pasajeros, entre otros (40%). Si bien este proyecto tiene un novedoso componente de inversión en las empresas públicas, también constituye una herramienta de fomento al capital más concentrado en mejor capacidad de disputar licitaciones y, en menor medida, a las Pymes. Por otra parte, muchas obras conllevarán beneficios directos para las condiciones de vida de las clases subalternas.

En cuanto a las medidas anticrisis orientadas explícitamente hacia los trabajadores, debemos destacar el aumento del salario mínimo, que pasó

escalonadamente de \$1240 a \$1500 en enero de 2010, con un impacto directo sobre 5,8% de los trabajadores.

Finalmente, podemos señalar el paquete de medidas sociales, que incluyeron un conjunto de iniciativas como aumentos en el presupuesto del Plan Alimentario Nacional, un incremento de 50% en el adicional por hijo y la creación de 1000 cooperativas, cuyo impacto en el empleo se estima en 300.000 puestos, entre otras. Estas medidas se enmarcaron en un aumento de \$2000 millones en las partidas destinadas a programas sociales. Sin embargo, debe observarse el escaso peso relativo de estas medidas en el conjunto del plan anticrisis, que según distintas mediciones representaron entre 1% y 7% de los fondos desembolsados en 2009. El IEF-CTA señaló que el plan anunciado no hizo más que especificar el destino de los fondos, que ya se habían aumentado en el presupuesto nacional de 2009, sin implicar una nueva medida anticrisis (Lozano, 2009).

Conclusiones

El modelo Posconvertibilidad emergió como experiencia neodesarrollista tras la crisis de 2001 a partir de políticas fundacionales (devaluación, retenciones, pesificación asimétrica de deudas, salvataje al sector financiero en default y congelamiento tarifario) que ejercieron modificaciones en las relaciones de fuerzas entre las distintas fracciones de clase, al tiempo que el Estado comenzó a desplegar una serie de acciones “compensatorias” en busca de lograr adhesión y gobernabilidad. Se inició una fase expansiva de acumulación basada en una lógica productivo-exportadora, estructurada a partir de la exportación de materias primas y manufacturas de escaso valor agregado centradas en el procesamiento de los recursos naturales. Si bien se mantuvo la regresividad en materia productiva, el nuevo tipo de cambio impulsó la producción industrial y, junto con el crecimiento de la construcción y de la economía en general, promovió un modelo legitimado con base en la inclusión a través de la recuperación del empleo. Aun así, lejos de impulsarse una significativa redistribución del ingreso, el bajo costo laboral en condiciones de aumento de la productividad constituyó una de las claves fundamentales de la ganancia empresarial.

El surgimiento de la crisis mundial profundizó un cúmulo de tensiones propias del modelo y amenazó con desestabilizarlo mediante distintas vías. En este contexto, el gobierno desplegó un conjunto de activas políticas anticrisis que manifestaron la búsqueda por mantener tanto los pilares de estabilización del modelo Posconvertibilidad (superávit fiscal y comercial) como el statu quo establecido por el mismo. Las insuficientes políticas en

materia de política social y salarial quedan expuestas ante la orientación masiva de recursos al capital por medio de subsidios y exenciones impositivas. Se expresaron algunas variaciones en las relaciones de fuerza al interior de la clase dominante: continuó un papel predominante del capital productivo-exportador, principal beneficiario de las políticas anticrisis, un repunte de las privatizadas a través del tarifazo y un debilitamiento del capital financiero a causa de la estatización de las AFJP. Sin embargo, quedó evidenciada la ausencia de una voluntad política de impulsar una aguda redistribución del ingreso. Se profundizó la función del Estado —característica en la conformación del modelo— como actor fundamental en la implementación de mecanismos de transferencias de ingresos. Se corroboró también que esta función deja a los gobiernos con un importante grado de exposición frente a las fracciones predominantes del capital, aspecto que pudo observarse en la resistencia del agro que, al constituir uno de los sectores más favorecidos del modelo, desató una ofensiva contra el aumento de las retenciones e inflación, provocando una seria derrota política al oficialismo.

El plan anticrisis mostró la voluntad de dar continuidad al perfil productivo-exportador del modelo y articuló iniciativas para mantener los dos pilares de estabilidad que lo sustentan y combatir el desempleo, aunque sin orientaciones redistributivas. Lejos de constatarse un modelo que “alíe” a trabajadores y capitalistas, las ganancias y la productividad quedaron por fuera de la discusión oficial. De este modo, el modelo avanzó profundizando la concentración y extranjerización económicas: el plan anticrisis transfirió cuantiosos recursos al capital y condonó sus faltas en amplias moratorias; aun así, la tendencia a la “huelga de inversiones” y la fuga de capitales se mostraron crecientes. Los salarios siguieron siendo depredados por el proceso inflacionario: la búsqueda de alternativas genuinamente transformadoras se tornan cada día más necesarias en un capitalismo mundial cuya crisis tiende a ser descargada sobre las clases subalternas.

Bibliografía

- Amín, Samir, “¿Debaque financiera, crisis sistémica? Respuestas ilusorias y respuestas necesarias”, 29 de noviembre de 2008, <http://www.fisyp.org.ar/modules/news/article.php?storyid=130>.
- Azpiazu, Daniel y Eduardo Basualdo (2004), “Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo e impactos estructurales”, en J. Petras y H. Veltmeyer (comps.), *Las privatizaciones y la desnacionalización en América Latina*, Buenos Aires, Prometeo.

- Basualdo, Eduardo (2007) "Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía", *Documento n° 1*, Maestría en Economía Política Argentina, Área de Economía y Tecnología de FLACSO.

- Basualdo, Eduardo (2001) *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes-FLACSO-IDEP.

- Borón, Atilio, "De la guerra infinita a la crisis infinita". Ponencia presentada en el XI Encuentro Internacional de Economistas Globalización y problemas del desarrollo, La Habana, 2009.

- Brenner, Robert, "Una crisis devastadora en ciernes", 1 de febrero de 2008, <http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2201>

- Castellani, Ana G. y Mariano Szkolnik, Devaluacionistas y dolarizadores. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2000 (2005), <http://www.argiropolis.com.ar/images/stories/ponencia%20castellani.pdf>

- Costa, Augusto, Axel Kicillof y Cecilia Nahón, "Las consecuencias económicas del Sr. Lavagna. Dilemas de un país devaluado", *Realidad económica*, Buenos Aires, núm. 203, 2004, pp. 70-100.

- Félix, Mariano, "Frente a la economía política del capital, la economía política de la clase trabajadora: Alternativas populares frente a la crisis capitalista en Argentina", Ponencia presentada en el II Encuentro Internacional La economía de los trabajadores: trabajo y autogestión frente a la crisis global, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2009.

- Fetera, Resolución aprobada por el X Congreso Nacional Extraordinario de Fetera, 2009, <http://feteranoaltarifazo.blogspot.com/2009/04/fetera-resolucion-sobre-tari-fas.html>

- FISYP, Informe de coyuntura, primer trimestre 2009, 31 de agosto de 2009, <http://www.fi-yp.org.ar/WEBFISYP/INFCOY.doc>

- Gambina, Julio, América Latina y el Caribe: alternativas frente a la crisis, 1 de mayo de 2009, <http://www.fi-g.ar/WEBFISYP/ALAT09.doc>.

- Gambina, Julio et al., La política económica del gobierno argentino (2003/2006), 2006, www.fi-g.ar/WEBFISYP/GTTNI.doc.

- Gramsci, Antonio, "Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerza", *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003.

- Lozano, Claudio, El cambio de fase en la etapa económica. De la desaceleración al estancamiento, 2009, <http://www.cta.org.ar/base/IMG/>

[doc/El_cambio_en_la_fase_economica_de_la_desaceleracion_al_estancamiento.doc](http://www.cta.org.ar/doc/El_cambio_en_la_fase_economica_de_la_desaceleracion_al_estancamiento.doc).

- Lozano, Claudio y Tomás Raffo, Un paquete social insignificante: cómo anunciar 2 veces lo mismo, 2009, http://www.institutoc-ta.org.ar/IMG/pdf/UN_PAQUETE_SOCIAL_INSIGNIFICANTE.pdf

- Lozano, Claudio, Ana Rameri y Tomás Raffo, Análisis y propuesta frente al presupuesto.

- Lucita, Eduardo, "Nueva reestructuración de la deuda, 1° de marzo de 2005, <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12054> Resolución del default, actores y políticas en el modelo post-convertibilidad, 2002-2007" Periferias, Buenos Aires, núm. 16, 2008, pp. 111-134.

- Ortiz, Ricardo y Martín Schorr, "Crisis internacional y alternativas de reindustrialización en la Argentina", Ponencia presentada en el XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires, 2009.

- Sacroisky, Ariana, La Inversión Extranjera Directa en la post-Convertibilidad, *Documento de trabajo n° 2*, Buenos Aires, CEFID-AR, 2006.

- Schorr, Martín y Andrés Wainer, "Argentina: ¿muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre economía y política en la transición del 'modelo de los noventa' al del 'dólar alto'", *Realidad económica*, Buenos Aires, núm. 211, 2005, pp. 32-65.

- Varesi, Gastón A., "Empresas privatizadas y acciones estatales en el modelo posconvertibilidad, 2002-2007", Ponencia presentada en el XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires, 2009.

- Varesi, Gastón A., "La actualidad de la deuda argentina".

Sobre el equipo autoral

Andrea Ariza

Magíster en Teoría Política y Social, y Licenciada y Profesora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Políticas (IIP) de la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM), y profesora de la materia Historia Económica y Social en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Sus líneas de investigación son: teorías de la democracia, liderazgos, comunicación política, representación política y política de proximidad.

Gastón Kneeteman

Lic. en Sociología (UBA) y Dr. en Antropología Social (IDAES-UNSAM). Se desempeñó como profesor en las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas (UBA) y UMET. Actualmente desarrolla su tarea docente en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En tanto investigador, ocupó diversos roles en centros de investigación de nuestro país y el exterior, entre ellos: IIGG (UBA); CNPq (Brasil); IDH (UNGS); CIE (UNSAM) y CCC “Floreal Gorini”.

Hasta el momento, su trabajo se desarrolla específicamente en el campo de la etnografía política y la epistemología de las ciencias sociales.

Nuestras redes sociales

 @unaboficial

 @unaboficial

 universidad**nacional**guillermobrown

 www.unab.edu.ar



**UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN**

Guerra
REVOLUCIÓN
CRISIS
MODERNIZACIÓN
NEOLIBERALISMO
POLÍTICA ECONÓMICA
Industria
Estado de bienestar
Economía HOMBRE
ESTADO
DEMOCRACIA
Dictadura
ARGENTINA
DESARROLLO
CAPITALISMO
Liberalismo
PRODUCCIÓN

ISBN 978-631-90004-2-9



9 786319 000429